

Thaís Janaina Wenczenovicz
João Vitor Oliveira Celestino
Organizadores

Temática Ambiental e Indígena em Contextos Interdisciplinares



© 2026 Editora Unoesc
Direitos desta edição reservados à Editora Unoesc
É proibida a reprodução desta obra, de toda ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios, sem a permissão expressa da editora.
Fone: (49) 3551-2065 - www.unoesc.edu.br/editora - editora@unoesc.edu.br

Editora Unoesc

Coordenação
Tiago de Matia

Agente administrativa: Simone Dal Moro
Projeto gráfico e capa: Simone Dal Moro
Diagramação: Simone Dal Moro

Esta obra possui apoio da CAPES.

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)

T278 Temática ambiental e indígena em contextos
interdisciplinares. / organizadores Thaís Janaina
Wenczenovicz, João Vitor Oliveira Celestino. –
Joaçaba: Editora Unoesc, 2026.
318 p. ; 23 cm.

ISBN: 978-85-8422-347-3

1. Direitos fundamentais. 2. Indígenas. 3. Meio-
ambiente. I. Wenczenovicz, Thaís Janaina, (org.).
II. Celestino, João Vitor Oliveira, (org.).

Dóris 341.27

Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária Márcia A. Dorini Dal Zotto CRB 14/742

Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc

Reitor
Ricardo Antonio De Marco

Vice-reitores de Campi
Campus de Chapecó
Carlos Eduardo Carvalho
Campus de São Miguel do Oeste
Vitor Carlos D'Agostini
Campus de Videira
Carla Fabiana Cazella

Pró-reitora de Ensino
Jaciney Aparecida Danielli

Pró-reitor de Pesquisa, Pós-
Graduação, Extensão e Inovação
Kurt Schneider

Conselho Editorial

Kurt Schneider
Tiago de Matia
Aline Pertile Remor
Marcos Cordeiro Freitas
Juliano Spuldaro
Ieda Margarete Oro

Robison Tramontina
Thaís Janaina Wenczenovicz
Rodrigo Ceremias
Marconi Januário
Marilda Pasqual Schneider
Camila Rostirola

A revisão linguística é de responsabilidade dos autores.

Thaís Janaina Wenczenovicz
João Vitor Oliveira Celestino
Organizadores

Temática Ambiental e Indígena em Contextos Interdisciplinares



PROLOGO

TEMATICA AMBIENTAL E INDIGENA EN CONTEXTOS INTERDICIPLINARIOS

En Bolivia quienes hemos tenido el honor de trabajar con los hermanos indígenas, muchas veces hemos afirmado una frase que hoy la repetimos con mucho orgullo y dignidad: ***“Los pueblos Indígenas son indiscutiblemente la reserva moral de la humanidad”.***

Son la reserva moral por su visión respetuosa de la madre tierra, por su visión respetuosa de los valores de solidaridad y complementariedad que tanta falta le hace a la humanidad, son la reserva moral por su capacidad de sobrevivir en condiciones adversas y sobre todo porque fueron capaces de enseñarle al mundo que no vivimos de la naturaleza sino vivimos con la naturaleza, abandonando la visión antropocentrista que tanto daño le hizo al planeta tierra.

Por lo tanto, es un tema central y de gran importancia para los países y sus sistemas constitucionales el trazar, apoyar y desarrollar políticas que tiendan al ejercicio pleno de sus derechos, que tiendan a buscar el respeto pleno a su identidad y cultura y que les den a los pueblos indígenas, las Naciones Originarias, como dignamente las conceptualizamos en Bolivia, el lugar privilegiado que les corresponde en el desarrollo social y la vida política de las Naciones.

En América Latina, son aproximadamente 40 millones de personas indígenas que viven en diferentes Naciones Originarias y pueblos que a su vez están diseminados en varios países en mayor o menor grado. Bolivia es el país que más indígenas contempla en su universo demográfico; más de 62 por ciento de nuestra población se autodefinía como indígena originaria campesina. Por ello, hoy nos sentimos profundamente orgullosos de haber aprobado una Constitución el año

2009, que caracteriza por primera vez en la historia a un Estado como Plurinacional Comunitario, tal cual reza el primer artículo de nuestro texto constitucional. El que Bolivia sea hoy un Estado Plurinacional no es un hecho menor; implica una visión transversal de nuestra sociedad donde nuestros hermanos son plenamente reconocidos y son el sujeto principal del tejido social boliviano. En este sentido, la Constitución boliviana bien podría servir de ejemplo para que otras naciones reconozcan y valoren en su vida social, institucional y política la importante presencia de los pueblos indígenas.

La historia de Bolivia, como la de muchos de nuestros países, fue una historia de pena, dominación, exclusión y dolor de las grandes mayorías nacionales, en el caso de nuestro país fundamentalmente indígenas, las cuales fueron injustamente postergadas durante casi 200 años de vida republicana. Finalmente, esta realidad cambió de la mano del primer presidente indígena, quien reescribió la historia de Bolivia, sentando las bases de la igualdad, la prosperidad y el progreso con equidad, que ha hecho de la nación boliviana el país que hoy es.

Una nación que mira con fe y esperanza el futuro, una nación que ha tomado para sí su destino, en definitiva, una nación que cree en sí misma. Todo de la mano de los indígenas en el poder, algo que esperemos no cambie jamás para bien de nuestra patria. Los indígenas gobernaron y volverán a gobernar Bolivia, más allá del racismo y la discriminación que aún existen en nuestra América.

Esto demuestra que las cosas para los pueblos indígenas han empezado a cambiar para bien, en países como el nuestro, que incluso por mandato constitucional ahora se denomina “Estado Plurinacional de Bolivia”. La plurinacionalidad no es solo un nombre; al interior de nuestra institucionalidad, existen varios órganos que tienen la misión de desarrollar esta característica fundamental del Estado. A más de ello,

la representación indígena al interior de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional está incluso sobrevaluada para priorizar la presencia de nuestros hermanos indígenas en la representación parlamentaria, como debe ser, y de estas políticas hay tantos ejemplos que les cansará.

Por ello, hoy nos toca preguntarnos qué estamos haciendo como sociedades organizadas en favor de ellos, en favor de la juventud indígena, qué futuro le espera al interior de nuestras naciones, qué hacemos para incorporarlos a la vida social, política e institucional de nuestros Estados y, sobre todo, respetarlos cuando ejercen el poder, algo que quizá tampoco hicimos en el pasado. Esta valiosa producción intelectual adquiere significativa relevancia y puede servir muy bien para lograr ese cometido.

Uno de los cambios más importantes de la Constitución Política del Estado de 2009, fue la construcción de un Estado Plurinacional comunitario e intercultural que reconoce la existencia anterior a la colonia de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su importancia en la vida política, económica, jurídica y cultural del país. Por lo que reconocer a Bolivia como un Estado Plurinacional no significa solo cambiar o incorporar nuevos conceptos jurídicos; significa verdaderamente reconocer que los pueblos indígenas originarios campesinos estuvieron siempre presentes y que forman parte esencial de la historia de identidad y la construcción del país.

Es por ello el valor de esta obra, porque contribuye al estudio de la temática ambiental e indígena desde una perspectiva interdisciplinaria, al reunir investigaciones que desde diferentes enfoques permiten comprender la complejidad de los desafíos que enfrentan los pueblos originarios, las mujeres, las comunidades y el medio ambiente. Cada capítulo aporta una perspectiva propia sobre la necesidad de construir sociedades más justas, inclusivas y respetuosas de la diversidad y del

medio ambiente, con una mirada hacia la dignidad humana, la identidad, el territorio, la justicia y la construcción de un futuro sostenible.

Las referencias a la identidad indígena resultan claves para empezar a analizar la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. La interculturalidad y el pluralismo jurídico son las bases indiscutibles para lograr la tan anhelada inclusión de los pueblos indígenas en la vida política, jurídica e institucional del Estado. La lucha por los derechos de la mujer indígena, adicional a las luchas de género a nivel mundial, cobra particular importancia ya que son las mujeres indígenas las que llevan la carga más fuerte de la discriminación y marginalidad, entre otros temas hacen que la obra sea de particular importancia para el desarrollo de los pueblos indígenas en Brasil y en América Latina.

Mis mas profunda felicitación y valoración a todas las autoras y autores de este valioso libro, porque sin duda es una obra que nos invita no solo a reflexionar, sino también a asumir responsabilidades y a pensar en el futuro desde una mirada más sensible y comprometida con los pueblos y la naturaleza.

Héctor Enrique Arce Zaconeta
Abogado, Diplomático, Magíster en materia
Constitucional, Doctor PhD en Derechos Humanos,
Democracia y Justicia Internacional, Catedrático e Investigador.
Bolivia, 2026.

APRESENTAÇÃO

Esta obra é o resultado da maturidade acadêmica e do compromisso político-jurídico firmados durante o período de 2020-2026, realizado no decorrer de percursos formativos com três Programas de Pós-Graduação da região Sul do Brasil.

Reunindo vozes que ecoam desde as profundezas das lutas ancestrais até os centros de pesquisa contemporâneos, este livro propõe um exercício urgente: a descolonização do pensamento jurídico a partir do encontro com os povos originários e os temas que envolvem ambiente, cultura ambiental e natureza.

O Direito, em sua gênese moderna e eurocêntrica, serviu frequentemente como instrumento de apagamento e minimização das questões singulares dos coletivos reidentificados por meio do ideário do colonialismo. No entanto, as reflexões aqui reunidas demonstram que ele também pode ser o terreno da emancipação e reflexão dialógica, desde que estejamos dispostos a enfrentar a pluriversalidade social da América Latina e, em espacial do Brasil.

A presente coletânea organiza-se em quatro dimensões fundamentais que se entrelaçam em uma trama interdisciplinar:

I. Teoria Crítica e Pluralismo Jurídico: Iniciamos com a necessária desconstrução do positivismo clássico. Este eixo analisa como o Direito moderno atuou no silenciamento das formas de organização originárias e propõe o reconhecimento de um pluralismo jurídico onde a alteridade seja o fundamento da norma, questionando se nossas instituições judiciárias protegem direitos ou apenas mantêm estruturas de dominação.

II. Epistemologias do Sul e Saberes Ancestrais: Aqui, a teoria encontra a “Ecologia de Saberes”. Propõe-se um diálogo onde o

Bem Viver (Sumak Kawsay/Suma Qamaña) deixa de ser um conceito exótico para se tornar uma diretriz de justiça cognitiva. O combate ao “epistemicídio” é o norte para redefinir categorias como soberania e cidadania sob a luz das vozes indígenas.

III. Direito ao Ambiente e Território: O território não é tratado como mercadoria, mas como pressuposto de vida. Os autores deste eixo discutem a demarcação como equilíbrio ecológico e a justiça climática intergeracional, reconhecendo os povos indígenas como os legítimos guardiões da biodiversidade frente ao extrativismo predatório.

IV. Enfrentamento às Violências: Por fim, a obra dedica-se à análise das violências estruturais, institucionais e epistêmicas. Do fenômeno do *lawfare* contra lideranças indígenas à discussão jurídica sobre genocídio e etnocídio na contemporaneidade, este eixo expõe as feridas abertas pela colonialidade, com especial atenção à interseccionalidade de gênero e às vulnerabilidades enfrentadas pelas mulheres e infâncias indígenas no acesso à justiça.

Escrever sobre povos indígenas a partir da Teoria Crítica é, antes de tudo, um ato de resistência acadêmica. Este livro formular as perguntas que provém dos coletivos afetados e que permitam a Ciência Ambiental e Jurídica transitar do antropocentrismo excludente para um biocentrismo inclusivo e plural.

Convidamos a/o leitor/a percorrer estas páginas com o espírito aberto ao diálogo e o compromisso ético de quem compreende que não há justiça social global sem o reconhecimento efetivo da dignidade e dos saberes dos povos originários.

A obra possui 12 capítulos e o primeiro sob o título **O DIREITO FUNDAMENTAL AO NOME INDÍGENA: ÉTNICO-PERTENCIMENTO, RESISTÊNCIA E CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE INDÍGENA ATRAVÉS DO REGISTRO DE NASCIMENTO** com autoria de Caroline Mocellin analisa o impacto

do processo colonizador e integracionista sobre a identidade dos povos originários do Brasil, os quais sofreram o apagamento compulsório de suas identidades socioculturais como condição para o acesso à cidadania formal. Historicamente, essa lógica excludente refletiu-se de modo contundente no Registro Civil das Pessoas Naturais, especialmente na atribuição do nome de nascimento, elemento estruturante da personalidade individual e coletiva que acabou moldado por ideais de dominação e eurocentrismo. A ausência de identificação culturalmente adequada no registro resultou no sub-registro civil e na consequente invisibilidade jurídica dos indígenas, obstaculizando seu livre desenvolvimento da personalidade, o pertencimento ancestral e o pleno exercício dos direitos fundamentais.

A ruptura desse paradigma iniciou-se com a edição da Resolução Conjunta nº 3/2012 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que garantiu o assento de nascimento de indígenas com a inclusão do prenome cultural e do sobrenome étnico, afastando a restrição de “exposição ao ridículo” constante no artigo 55 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973). Sob uma perspectiva decolonial, neoconstitucional e baseada na interculturalidade, a pesquisa examina o direito ao nome como uma garantia fundamental inerente à dignidade da pessoa humana e ao autodeterminismo étnico.

Embora a normativa constitua importante avanço e instrumento de resistência, o trabalho aponta desafios práticos e burocráticos persistentes. Dentre eles, destacam-se a dependência de atos administrativos em vez de lei em sentido estrito, a complexidade judicial para a retificação de nomes, as barreiras linguísticas na lavratura das certidões e a exigência do Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) para fins de heteroidentificação. Conclui-se que o fortalecimento das práticas registrais desconectadas da herança

colonial é indispensável para promover o acolhimento da diversidade, assegurando que o registro de nascimento atue efetivamente como porta de entrada para a cidadania plena e a tutela da ancestralidade indígena.

O capítulo dois nominado **INTERCULTURALIDADE E PLURALISMO JURÍDICO NA JUSTIÇA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: DESAFIOS INSTITUCIONAIS À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS POVOS INDÍGENAS XAVANTE** examina a mediação de conflitos fundiários e culturais envolvendo povos originários no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, focando nas condições institucionais e estratégias jurídicas que favoreçam o reconhecimento intercultural e a efetivação das garantias constitucionais consagradas aos Xavante. Metodologicamente, a pesquisa ampara-se em ampla revisão de literatura especializada em teorias de democracia judicial, pluralismo jurídico decolonial e análise de casos regionais, conjugada ao exame crítico de documentos oficiais e laudos etnográficos redigidos em língua portuguesa e espanhola.

Os resultados apontam que a atuação jurisdicional contemporânea ainda enfrenta expressivos entraves formais e operacionais. Dentre os principais obstáculos identificados, destacam-se a rigidez dos prazos processuais, a escassez de intérpretes bilíngues qualificados, a carência de varas jurisdicionais especializadas em direito socioambiental e a insuficiente valoração probatória das narrativas orais e laudos antropológicos nos autos judiciais. Esse cenário evidencia como a sobreposição de ritos dogmáticos e monistas restringe o acolhimento da diversidade e das cosmologias dos povos originários.

Como resposta a esses gargalos estruturais, o trabalho propõe um conjunto de medidas reformadoras para a consolidação de um ambiente decisório inclusivo. Entre as recomendações centrais estão a implementação de programas permanentes de formação continuada para magistrados sob a ótica da interculturalidade, a instituição de protocolos específicos para a realização de audiências interculturais, a criação de camaras judiciais itinerantes com atuação presencial nos territórios indígenas e o estabelecimento de um sistema de monitoramento intercultural fundamentado em indicadores geográficos e sociais.

Conclui-se que a adoção coordenada dessas diretrizes é indispensável para fortalecer a legitimidade democrática das decisões judiciais, aproximar os comandos dogmático-constitucionais da realidade sociocultural viva dos Xavante e assegurar o efetivo exercício da cidadania plena e da justiça decolonial no Brasil. O capítulo possui autoria de Dandara Christine Alves de Amorim e Wilson Pinto de Carvalho Filho.

O terceiro capítulo **nominado COMUNICAÇÃO DIGITAL E A CONSTRUÇÃO DO RACISMO EM FACE DA MULHER INDÍGENA: PERSPECTIVAS DECOLONIAIS** das autoras **Émelyn Linhares** e **Marlei Ângela Ribeiro dos Santos** investiga a construção do racismo e da discriminação étnico-cultural contra a mulher indígena na comunicação digital brasileira sob o prisma das teorias decoloniais. Articulando os aportes teóricos do grupo interdisciplinar Modernidade/Colonialidade – destacadamente Aníbal Quijano, Walter D. Mignolo, Nelson Maldonado-Torres e Rita Segato – com o ordenamento jurídico nacional e internacional, a pesquisa analisa como a sobreposição entre colonialismo, capitalismo e patriarcado (a tríplice matriz de dominação) atua na perpetuação da vulnerabilidade e da subalternização de corpos e identidades originárias nos ambientes virtuais.

Estruturado em três seções principais, o estudo aborda inicialmente a trajetória histórica da produção do discurso colonial, eurocêntrico e patriarcal, demonstrando como a racialização e a hierarquização social operam como ferramentas epistêmicas de controle de territórios, saberes e subjetividades. Em seguida, examina-se a manifestação desse discurso colonizador e racista no cenário contemporâneo contra o corpo da mulher indígena, com foco nas redes sociais e na grande mídia. Destaca-se que a mulher indígena sofre uma dupla marginalização – decorrente de gênero e etnia —, sendo frequentemente alvo de estereótipos pejorativos, desumanização, hipersexualização, invalidação da identidade étnica e ataques sexistas que violam seus direitos fundamentais à imagem, à identidade e à liberdade de expressão.

Por fim, respaldando-se nas Epistemologias do Sul e em dados sobre a atuação do movimento indígena digital, o trabalho ressalta a importância da presença e do protagonismo das mulheres originárias nos meios digitais como atos de resistência e decolonização do saber. Conclui-se que o enfrentamento ao racismo estrutural e institucional no espaço virtual exige uma revisão crítica do ordenamento jurídico e a garantia de uma proteção diferenciada que contemple a pluralidade cultural e o bem viver das comunidades originárias.

O capítulo de número quatro de Jade Monteiro e intitulado **INTERCULTURALIDADE NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO RIO GRANDE DO SUL** investiga a eficácia jurídica e a efetividade material do princípio constitucional da interculturalidade na Educação Escolar Indígena no Estado do Rio Grande do Sul. Sob a perspectiva do Direito Constitucional e da teoria decolonial, a autora demonstra que, embora a Constituição Federal de 1988 tenha superado o modelo integracionista ao assegurar o direito à organização social, costumes,

línguas maternas e processos próprios de aprendizagem (arts. 210, § 2º, e 231), acompanhada da Resolução CNE/CEB nº 3/1999 que instituiu a modalidade “Escola Indígena”, persiste um abismo entre o texto legal e a prática. A histórica utilização da escola como vetor de assimilação e etnocídio mantém-se reconfigurada pela colonialidade do saber, que impõe barreiras estruturais ao pleno exercício desses direitos fundamentais.

No cenário factual do Rio Grande do Sul, a pesquisa baseia-se em dados do Censo Escolar e do IBGE sobre os povos Kaingang, Mbyá Guarani, Charrua e Xokleng para evidenciar graves omissões estatais que configuram violações de direitos. Aponta-se um nítido vício de acesso, visto que apenas 60% dos estudantes indígenas frequentam instituições específicas da modalidade – concentração observada majoritariamente no Noroeste do estado. Soma-se a isso a mitigação do bilinguismo, restrito aos idiomas Kaingang e Guarani em detrimento das línguas Charrua e Xokleng, e a contínua desassistência material, ilustrada pelo fato de que 42% das escolas não receberam materiais pedagógicos em 2021 e apenas 33% acessaram acervos específicos. Por fim, a autonomia comunitária é tolhida pela burocratização e submissão dos Projetos Político-Pedagógicos (PPPs) à aprovação de órgãos não indígenas de viés eurocêntrico.

Ao final, o estudo conclui que a salvaguarda da interculturalidade e das pedagogias ancestrais exige do Poder Público mais do que o mero reconhecimento formal de preceitos normativos. A efetivação da igualdade material pressupõe o adimplemento de deveres estatais prestacionais positivos, tais como o provimento de infraestrutura adequada, a distribuição de insumos didáticos específicos e a desburocratização das instâncias decisórias curriculares. Sem esses aportes e sem o combate às práticas coloniais enraizadas nas instituições de ensino, as garantias constitucionais conferidas aos povos originários

permanecerão tolhidas em sua eficácia, perpetuando o quadro de inobservância dos Direitos Humanos e de espoliação epistêmica no ambiente escolar.

Sob o título **DA TUTELA ANTROPOCÊNTRICA À HERMENÊUTICA ECOCÊNTRICA: CRITÉRIOS DE DENSIFICAÇÃO DO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 EM DIÁLOGO COM O NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO** do autor João Vitor Oliveira Celestino o capítulo analisa alguns dos limites dogmáticos da leitura estritamente antropocêntrica conferida ao artigo 225 da Constituição Federal brasileira de 1988, modelo que tende a fundamentar a proteção do meio ambiente na preservação da vida humana e na garantia de uma “sadia qualidade de vida”. Sustenta-se que essa perspectiva tradicional reduz a integridade ecológica a um vetor instrumental, condicionando a intervenção estatal à comprovação de um dano humano direto ou imediato, o que se mostra insuficiente e inadequado perante cenários contemporâneos caracterizados por riscos difusos, complexos e cumulativos.

Frente a essas lacunas, a pesquisa investiga a viabilidade de uma densificação interpretativa em chave ecocêntrica sem a necessidade de reforma constitucional formal, pautando-se na força normativa da Constituição e nos desenvolvimentos do constitucionalismo contemporâneo. Utiliza-se o diálogo com o Novo Constitucionalismo Latino-Americano – especialmente com as experiências normativas do Equador e da Bolívia (*Buen Vivir* e direitos da *Pachamama*) – como referencial teórico e reforço hermenêutico para antecipar a tutela jurídica por meio do emprego rigoroso dos princípios da prevenção e da precaução.

Para evitar arbitrariedades e assegurar a estabilidade jurídica nessa virada ecocêntrica, o trabalho estabelece critérios formais de

legitimidade interpretativa: fidelidade ao texto constitucional, coerência sistêmica, busca pela máxima efetividade e dever de justificação pública racionalmente controlável. Conclui-se pela plenitude dogmática da transição hermenêutica no ordenamento pátrio, cujos reflexos práticos geram maior tempestividade na proteção dos ecossistemas, impõem um ônus argumentativo reforçado para atividades poluidoras e garantem a primazia da restauração e recomposição ambiental frente à mera reparação pecuniária.

O sexto capítulo nominado **O CUSTO DOS AGROTÓXICOS NO RIO GRANDE DO SUL: IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS, VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E ALTERNATIVAS PARA A TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA** dos autores Márcio Eduardo Fernández Carvalho, Margarete Sponchiado e Saionara Eliane Salomoni investiga os impactos socioambientais e na saúde pública decorrentes do uso de agrotóxicos no Rio Grande do Sul, com ênfase nos efeitos sobre a saúde reprodutiva e nas violações de direitos humanos, e identifica alternativas agroecológicas sustentáveis alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.

Por meio de análise documental e revisão bibliográfica sistemática, com triangulação entre dados oficiais, estudos independentes e referencial teórico, foram constatados crescimento contínuo da comercialização de agrotóxicos entre 2018 e 2024, presença de substâncias proibidas em mercados centrais, fragilidades regulatórias, contaminação de solos e mananciais, perda de biodiversidade e eventos de deriva com danos a culturas sensíveis.

A revisão evidenciou correlações epidemiológicas entre a exposição a agrotóxicos, alterações reprodutivas e aumento de malformações congênitas. Foram identificados como grupos mais vulneráveis trabalhadores rurais, gestantes, crianças e populações

residindo próximas a pulverizações, além de barreiras ao acesso à informação e à justiça. Como alternativas, foram sistematizadas experiências agroecológicas regionais como sistemas agroflorestais, arroz agroecológico e certificação participativa, bem como políticas emergentes, cuja efetividade depende de regulamentação, metas e financiamento.

Conclui-se que reduzir o uso de agrotóxicos e promover a agroecologia constitui imperativo ético, sanitário e ambiental, exigindo políticas públicas integradas, fortalecimento da fiscalização e garantia do direito à informação.

O capítulo oito denominado **PROPOSIÇÃO DE CRIAÇÃO DE REDES DE COOPERAÇÃO PARA RESILIÊNCIA VOLTADO AS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS NO RS (RECORE-RS)** dos autores Roberto Serena Fontaneli, Silvia Santin Bordin e André Gustavo Botafofo Gonçalves discorre sobre a proposição da criação de uma Rede de Cooperação para Resiliência Climática, voltado as Associações de Municípios do RS (RECORE-RS).

No RS os municípios estão organizados em 29 Associações Regionais, unidos na Federação das Associações de Municípios do RS - Famurs. A entidade representa todas as 497 cidades gaúchas – reunindo prefeitos, vice-prefeitos, secretários, técnicos e órgãos da gestão pública municipal. A RECORE-RS teria o objetivo de enfrentar os desafios climáticos, aumentar a resiliência regional e promover o desenvolvimento sustentável. Sabemos que os desafios climáticos não se resumem a área de um município e, portanto a Associação tem maior abrangência e mais recursos humanos e materiais.

A proposta é que a RECORE-RS seja estruturada em múltiplos níveis de governança, envolvendo Conselhos Diretores Regionais, Comitês Técnico Científicos, Fóruns Multissetoriais, Secretarias Executivas e Núcleos Municipais. O capítulo discute

fundamentos teóricos, experiências comparadas, estratégias de implementação e benefícios esperados, destacando a importância da cooperação intermunicipal e da integração com redes globais.

O nono capítulo sob o título **ANO DE 2024 NO RIO GRANDE DO SUL: TRAGÉDIA CLIMÁTICA OU ECOCÍDIO?** das autoras Rosangela Angoleri e Chirley Rigon analisam o aumento exponencial dos desastres ambientais de grandes proporções no século XXI, compreendendo-os como reflexos diretos da crise socioambiental global. O estudo investiga o conceito emergente de ecocídio, definido como a destruição massiva, grave e generalizada dos ecossistemas, bem como discute a urgência de sua criminalização e inclusão no rol de crimes internacionais do Estatuto de Roma perante o Tribunal Penal Internacional (TPI).

Sob a ótica do Direito Ambiental e da Justiça Ambiental, fundamenta-se historicamente a evolução do termo, desde a sua origem ligada aos impactos do desfolhante “Agente Laranja” na Guerra do Vietnã até as iniciativas normativas contemporâneas globais e os Projetos de Lei nº 2787/2019 e nº 2933/2023 no cenário legislativo brasileiro.

A pesquisa problematiza a atuação antrópica e o modo de produção capitalista como fatores estruturais da degradação ecológica, evidenciando como a busca desenfreada por acumulação econômica, a expansão acelerada do agronegócio e a superexploração dos recursos naturais impulsionam a perda irreversível da biodiversidade e a vulnerabilização social. A partir dessa fundamentação, analisa-se como estudo de caso a catástrofe ocorrida no estado do Rio Grande do Sul no ano de 2024. O evento, caracterizado por enchentes devastadoras que atingiram cerca de 96% dos municípios gaúchos, é examinado não apenas como fruto de anomalias climáticas ou fenômenos como o El

Niño, mas como materialização do ecocídio fomentado pelo modelo socioeconômico predatório e pelo desmonte de proteções ambientais.

A metodologia empregada é de natureza qualitativa, com caráter exploratório e descritivo, valendo-se dos procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica, análise documental e estudo de caso. Sob uma abordagem crítico-analítica e pautada no método dedutivo, a investigação correlaciona a evolução teórica do crime de ecocídio à realidade empírica das tragédias climáticas.

As autoras concluem que o desastre de 2024 no Rio Grande do Sul expõe assimetrias sociais profundas e a urgência de responsabilização jurídica perante a devastação ecológica, demonstrando que as populações marginalizadas sofrem de maneira desproporcional as consequências de escolhas econômicas que priorizam o capital em detrimento da sustentabilidade e da integridade da vida humana e não humana.

Na sequência as autoras Simone Terezinha Cislevski e Chirley Rigon apresentam uma análise comparativa sobre a aplicação e a implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em empresas do setor metalmeccânico de pequeno e grande porte, situadas na região Norte do estado do Rio Grande do Sul. Diante da relevância do setor industrial e de seus potenciais impactos ecológicos, a exemplo da geração de resíduos perigosos, emissões atmosféricas e consumo de recursos naturais, a pesquisa investiga como as assimetrias operacionais e estruturais de cada porte influenciam os desafios, as oportunidades e a conformidade legal dessas organizações.

A fundamentação teórica resgata a trajetória histórica da gestão ambiental e seus marcos normativos globais e nacionais, pautando-se nos princípios do desenvolvimento sustentável, na Constituição Federal de 1988 (Art. 225), na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), no Código Estadual do Meio Ambiente do RS (Lei

nº 15.434/2020) e nas diretrizes de certificação da NBR ISO 14001. Metodologicamente, enquadra-se como um estudo de abordagem qualitativa, de caráter exploratório, descritivo e explicativo, mediante o emprego de pesquisa bibliográfica, análise documental e reuniões informais com gestores e colaboradores das empresas analisadas.

Os resultados indicam disparidades significativas na maturidade da gestão ambiental de acordo com o porte empresarial. A empresa de grande porte demonstra maior capacidade de investimento e maturidade metodológica, contando com certificações formais, infraestrutura tecnológica avançada e processos estruturados para destinação e logística reversa de resíduos. Por sua vez, a pequena empresa, embora em processo de estruturação por meio de consultorias externas, enfrenta entraves financeiros e operacionais no manejo, triagem e destinação adequada de resíduos industriais (Classes I e II), destacando-se, contudo, pela agilidade e maior proximidade nas ações de engajamento interno.

Assim, as autoras concluem a reflexão afirmando que o SGA constitui um instrumento indispensável de competitividade e responsabilidade socioambiental, demonstrando que a superação das limitações técnicas e o alinhamento normativo possibilitam a integração entre desenvolvimento econômico e preservação ecológica, independentemente do porte organizacional. O capítulo intitula-se **ANÁLISE COMPARATIVA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) EM EMPRESAS METALMECÂNICAS NO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL.**

STARTUP DE IMPACTO SOCIAL: UM ESTUDO NA DIOSA - MÃO DE OBRA FEMININA dos autores Zenicléia Angelita Deggerone, Cibele Lúcia Bombardelli e Rafael Leite Araújo tem como objetivo analisar o impacto social gerado pela startup DIOSA – Mão de Obra Feminina na região metropolitana de Porto Alegre,

Rio Grande do Sul, Brasil. Quanto ao delineamento metodológico, a pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, tendo a coleta de dados sido realizada no período de abril a agosto de 2021.

Os resultados evidenciam que a DIOSA atendiam aos quatro critérios que a qualificava como um negócio de impacto social, destacando-se sua relevância na vida de seus *stakeholders* primários. Tal impacto manifesta-se por meio de iniciativas voltadas à redução das desigualdades de gênero, incluindo capacitação técnica, inserção de mulheres no mercado de trabalho, educação social, suporte jurídico, promoção de visibilidade, estímulo ao empoderamento financeiro e fortalecimento de redes de apoio e questões ambientais.

Adicionalmente, o estudo identificou desafios relacionados à baixa disponibilidade de mão de obra qualificada e à insuficiência de investimentos externos, fatores que limitam a ampliação das ações de capacitação, o aprimoramento de processos e a expansão das atividades para outras capitais brasileiras.

Excelente leitura.

Inverno de 2026

Organizadores

SUMÁRIO

PROLOGO

TEMATICA AMBIENTAL E INDIGENA EN CONTEXTOS INTERDICIPLINARIOS	5
--	---

APRESENTAÇÃO.....	9
-------------------	---

O DIREITO FUNDAMENTAL AO NOME INDÍGENA: ÉTNICO- PERTENCIMENTO, RESISTÊNCIA E CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE INDÍGENA ATRAVÉS DO REGISTRO DE NASCIMENTO	25
Caroline Mocellin	

INTERCULTURALIDADE E PLURALISMO JURÍDICO NA JUSTIÇA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: DESAFIOS INSTITUCIONAIS À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS POVOS INDÍGENAS XAVANTE.....	41
Dandara Christine Alves de Amorim	
Wilson Pinto de Carvalho Filho	

COMUNICAÇÃO DIGITAL E A CONSTRUÇÃO DO RACISMO EM FACE DA MULHER INDÍGENA: PERSPECTIVAS DECOLONIAIS	83
Êmelyn Linhares	
Marlei Ângela Ribeiro dos Santos	

INTERCULTURALIDADE NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO RIO GRANDE DO SUL	105
Jade de Oliveira Monteiro	

DA TUTELA ANTROPOCÊNTRICA À HERMENÊUTICA ECOCÊNTRICA: CRITÉRIOS DE DENSIFICAÇÃO DO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 EM DIÁLOGO COM O NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO	125
João Victor Oliveira Celestino	

NÃO-DISCRIMINAÇÃO E OS POVOS ORIGINÁRIOS: UMA ANÁLISE A PARTIR DA DOCTRINA DAS CATEGORIAS SUSPEITAS ...	147
Márcio de Lima	

O CUSTO DOS AGROTÓXICOS NO RIO GRANDE DO SUL: IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS, VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E ALTERNATIVAS PARA A TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA.....	175
Márcio Eduardo Fernández Carvalho Margarete Sponchiado Saionara Eliane Salomoni	
PROPOSIÇÃO DE CRIAÇÃO DE REDES DE COOPERAÇÃO PARA RESILIÊNCIA VOLTADO AS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS NO RS (RECORE-RS).....	199
André Gustavo Botafogo Gonçalves Silvia Santin Bordin Roberto Serena Fontaneli	
ANO DE 2024 NO RIO GRANDE DO SUL: TRAGÉDIA CLIMÁTICA OU ECOCÍDIO?	223
Rosangela Angoleri Chirley Rigon	
ANÁLISE COMPARATIVA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) EM EMPRESAS METALMECÂNICAS NO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL.....	253
Simone Terezinha Cislewski Chirley Rigon	
STARTUP DE IMPACTO SOCIAL: UM ESTUDO NA DIOSA - MÃO DE OBRA FEMININA.....	293
Rafael Leite Araújo Zenicléia Angelita Deggerone Cibele LúciaBombardelli	

O DIREITO FUNDAMENTAL AO NOME INDÍGENA: ÉTNICO-PERTENCIMENTO, RESISTÊNCIA E CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE INDÍGENA ATRAVÉS DO REGISTRO DE NASCIMENTO

Caroline Mocellin¹

“Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos.”

Ailton Krenak

INTRODUÇÃO

Como resultado de um processo colonizador, dominador, eurocentrista e integracionista, aos povos originários do Brasil foi duramente imposto um protocolo compulsório de apagamento de identidades: para exercerem sua cidadania de forma democrática e, portanto, pertencer a uma sociedade definida segundo novos padrões unilateralmente estabelecidos, passou a ser necessário o abandono por comple-

¹ Tabeliã de Notas e Registradora Civil das Pessoas Naturais de Peritiba/SC. Mestranda em Direito no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Oeste Catarinense – UNOESC. Bolsista da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa em Interculturalidade, Intersubjetividade de Gênero e Personalidade. E-mail: carolinemocellin@hotmail.com

to de tudo o que os identificava como indígenas e, assim, segundo a mentalidade colonizadora, deixarem de ser um obstáculo ao avanço e ao desenvolvimento social.

Esse processo contínuo, que perdura até os dias atuais, esteve refletido, durante longos anos, no Registro Civil das Pessoas Naturais e, especialmente, no registro de nascimento de indígenas, que possui importância singular na construção da personalidade individual e coletiva e cuja composição abarca qualificações estranhas às identidades culturais e ancestrais desses povos, sendo um dos principais motivos, devido à ausência de identificação, para a baixa aderência.

Dentre os mais variados elementos redefinidores da identidade e conformadores desse ideal que se encontravam refletidos no registro de nascimento de maneira absolutamente excludente foi o “nome”. A partir do registro de nascimento, o indígena, para além de passar ao *status* de integrado à sociedade, possuiria uma nova identidade, moldada segundo os ideais de dominação e aniquilação de diferenças, a começar pela própria designação de como era identificado perante seus pares.

Deslocados estavam, portanto, os indígenas, devido à ausência de registro civil – da sociedade, posto não ser pessoa identificável, bem como das suas próprias origens, por não serem elas reconhecidas perante o registro civil e, conseqüentemente, perante a própria sociedade da qual naturalmente, como pessoa digna que é, dela integrante.

A ruptura desse paradigma ocorreu apenas com a edição da Resolução Conjunta n. 03, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, de 19 de Abril de 2012, que dispõe sobre o assento de nascimento de indígenas no Registro Civil das Pessoas Naturais, a qual buscou de forma positiva conferir visibilidade a diversos aspectos socioculturais, pondo em prática o diálogo intercultural, ao prever o nome indígena como uma garantia a ser efetivada.

Conferindo proteção especial à identidade cultural e à identificação de indígenas através do nome, essa medida de caráter normativo aquebrou um processo recorrente de caráter excludente que vinha ocorrendo através de registros públicos e, por meio da interculturalidade, fomentou a aproximação entre indígenas e instituições públicas e privadas, visto ser ele, o registro de nascimento, a porta de entrada ao exercício de todos os direitos e deveres inerentes ao exercício da cidadania. Porém, muito se questiona se seria a normativa suficiente à garantia dos direitos fundamentais – ao registro de nascimento e à culturalidade de indígenas – havendo ainda duras críticas a serem levadas em consideração para atingir um nível satisfatório de proteção.

Sem prejuízo de necessários apontamentos para melhoria de práticas registrais e implemento de procedimentos decoloniais, com o propósito de analisar essa quebra de paradigma, busca-se, através da presente pesquisa, primeiramente, analisar o nome como um dos diversos fatores construtivos da identidade indígena para, em seguida, defini-lo como um direito e garantia fundamental, de modo que se possa verificar como a norma jurídica aplicável impacta no processo de identificação de indígenas – seja por terceiros ou por si próprios – na medida em que passa a ser sua cultura acolhida e validada.

1 O DIREITO AO NOME COMO CONTEÚDO INERENTE AO LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE

De acordo com o artigo 16 do Código Civil, “toda pessoa tem o direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome”. Consagrado como, para além de um direito humano e fundamental,

também um direito da personalidade, o nome não se circunscreve mais apenas para a identificação² e distinção de indivíduos dentro das relações sociais travadas na vida civil, mas sobretudo à construção da identidade e, por fim, da personalidade, seja ela individual ou coletiva, pois retrata e exterioriza o modo interno, individual e autônomo de ser, pensar e de agir do ser humano:

O nome, juntamente com outros atributos, tem por missão assegurar a identificação e individuação das pessoas e, por isso, é como se fosse uma etiqueta colocada sobre cada um de nós. Cada indivíduo representa uma soma de direitos e de obrigações, um valor jurídico, moral, econômico e social e, por isso, é importante que tais valores apareçam como o simples enunciado do nome de seu titular, sem equívoco e sem confusão possível. (LOUREIRO, 2018, p. 169)

O nome civil, principal elemento identificador e identitário da personalidade humana, comporta, para mais de elementos acessórios e dispensáveis, uma composição básica e fundamental, qual seja, o prenome e o sobrenome, ou também chamado como patronímico: muito embora hajam divergências, o prenome pode ser conceituado como um nome próprio e individual, que tem por finalidade diferenciar os membros de uma mesma família ou de um agrupamento, ao passo em que o sobrenome ou patronímico corresponde à sua origem ancestral.

É possível compreender que se trata, o nome, em si mesmo considerado, de um dos primeiros direitos exercitáveis e atribuíveis à

² Para esse trabalho, estabelece-se uma distinção essencial entre identificação de identidade, sob o aspecto da maneira pela qual ocorre sua manifestação: enquanto a identificação é a forma do Estado e dos próprios indivíduos reconhecem e individualizam os membros de uma sociedade, sendo, nesse sentido, uma manifestação externa de quem a pessoa é e escolhe ser, a identidade é a reunião de atributos e características formativas da personalidade, relacionando-se, assim, a aspectos internos e subjetivos, de foro íntimo e privado. Porém, ambos os conceitos se entrelaçam, visto que, conforme se verá no desenvolver da pesquisa, a identificação apenas será legítima, se corresponder à identidade, conferindo dignidade à pessoa humana.

pessoa humana, adquirido antes mesmo do seu nascimento³, em vida ou não, e que o acompanhará até a sua morte, sofrendo ou não mutações no decurso do tempo, o que é decorrência da própria e constante (des) construção da personalidade e condição existencial. Nesse sentido, o direito ao nome – e não meramente o direito de receber um nome – passa a merecer uma tutela diversa daquela originada pela ordem privada, ligada ao civilismo clássico, carecendo sobretudo de uma tutela neoconstitucional, tendo em vista promover a dignidade da pessoa humana, uma vez que, superada a natureza unicamente cadastral do nome, muito embora não lhe seja condicional, por ser preexistente, passa a ser, pelo registro civil de nascimento e por intermédio do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, uma garantia ligada à identidade pessoal, à origem familiar e à identificação cultural.

De acordo com o artigo 7º da Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos da Criança, de 1989, toda criança deve “ser registrada imediatamente após o nascimento e tem desde o nascimento o direito a um nome”. Teor semelhante possui o artigo 24 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, firmado pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 1966, acrescido ao direito de que “toda a criança tem direito, sem discriminação alguma por motivos de raça, cor, sexo, língua, religião, origem nacional ou social, posição econômica ou nascimento, às medidas de proteção que a sua condição de menor exige, tanto por parte da sua família como da sociedade e do Estado”. O direito ao nome passa, assim, a fazer parte do conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana e, por isso, consagra-se na ideia e pressuposto de que existe “em virtude

³ De acordo com o artigo 479-A do Provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece normas registráveis a serem observadas em todo território nacional, é “direito dos pais atribuir, se quiserem, nome ao natimorto”, ratificando a ideia de ser o nome, antes mesmo do próprio direito à vida, o primeiro direito fundamental a ser exercitável pelo ser humano, visto que até natimortos, ou seja, fetos que não logram nascer com vida possuem direito ao nome, sendo esse fato, de acordo com artigo 2º do Código Civil, o início da personalidade e vida da pessoa natural.

tão somente da condição humana e independentemente de qualquer outra circunstância” (SARLET, 2002), sendo as pessoas humanas titulares desse direito, ora implementado pelo Registro Civil e que deve ser invariavelmente reconhecido, tutelado e protegido por seus semelhantes e também pelo Estado.

Portanto, através da promoção do exercício de identidades e personalidades através do Registro Civil, o que é feito inclusive por meio da proteção registral ao nome, é o registro de nascimento um instrumento à conferência de meios necessários ao seu exercício pleno, em se tratando de uma garantia e direito fundamental importantíssimos quando levada em consideração as formas pelas quais ocorre a organização de políticas públicas e sociais. Inversamente, a ausência de registro civil – e a ausência de identificação e legitimação estatal à personalidade é uma de suas causas – acaba por lesionar a própria existência de pessoas que carecem de atendimento às necessidades básicas por meio de ações promotoras estatais, se tratando, nesse sentido, em decorrência da sua invisibilidade, de uma verdadeira “morte em vida”:

O registro de nascimento é um dos primeiros passos em direção à dignidade humana e à cidadania. O registro é um direito inerente à pessoa humana de ser reconhecida, pelo Estado e pela sociedade, como sujeito de direitos e obrigações, com um nome, uma filiação, uma história única de vida, e não como mais uma simples estatística nos bancos de dados governamentais [...]. A falta de registro de nascimento inabilita a pessoa de exercer direitos básicos de uma existência digna e de uma convivência livre e igualitária. Por outro lado, o registro de nascimento é um ponto de partida para a realização das necessidades modernas do homem e para uma participação mais efetiva e justa na distribuição dos recursos e dos serviços estatais. (PESSOA, 2006, p. 51-52)

Seguindo essa mesma lógica traçada, como um direito da personalidade por excelência, possibilita o nome o exercício da própria individualidade, o qual reclama que as pessoas sejam conhecidas e reconhecidas socialmente por quem são, e não pelo que esperam delas, não se bastando como um direito à identificação pessoal, mas especialmente um meio de realização da identidade (PINTO, 2003, p. 7-34). Abrange, assim, em seu conteúdo, diversos conteúdos formativos da personalidade individual, como a sua origem e cultura:

Os direitos da personalidade são próprios do ser humano, direitos que são próprios da pessoa. Não se trata de direito à personalidade, mas de direitos que decorrem da personalidade humana, da codificação de ser humano. Com os direitos da personalidade, protege-se o que é próprio da pessoa, como o direito à vida, o direito à integridade física e psíquica, o direito à integridade intelectual, o direito ao próprio corpo, o direito ao nome, dentre outros. Todos esses direitos são expressões da pessoa humana considerada em si mesma. Os bens jurídicos mais fundamentais, primeiros, estão contidos nos direitos da personalidade. (BORGES, 2007, p. 21)

A origem, que num primeiro instante e sob uma visão míope, poderia representar aspectos biológicos de determinada pessoa, a eles não se limita, visto que retrata, diante de visão muito mais ampla e abrangente, o direito à própria origem, ou seja, o direito de pertencimento – a algo ou a alguém⁶. Portanto, o nome materializa o direito de o indivíduo possuir, nele, a materialização de sua ascendência, mas também manifestações geoespaciais e culturais, conferindo proteção jurídica à liberdade como autodeterminação, reconhecida como elemento tangente à cidadania e participação social democrática, e ligando assim o seu passado e a de seus familiares ao presente.

Ocorre que, quando interseccionadas pautas de direitos indígenas à construção e livre desenvolvimento da personalidade, outros contornos surgem no horizonte. Devido ao processo colonizador que permeia as relações sociais do nosso cotidiano e que teve origem num processo de dominação hegemônica e eurocentrista, foram os povos originários compulsoriamente apagados em sua própria personalidade existencial: sob pena de uma morte física, sufocaram a sua vida cultural, reidentificando suas próprias cosmologias e tradições. Esse aniquilamento de diferenças a pretexto de propósitos igualitários e inclusivos à uma suposta comunhão nacional, embora mascarado, ainda está presente no registro de nascimento de indígenas – conclusão a que se chega quando analisados os níveis de sub-registro, ou seja, de indígenas não registrados.

Embora os números aparentem ser promissores, são eles irrealis, visto não ser possível, pelos métodos atuais, somado à tradição de nascimentos realizados fora de unidades hospitalares, contabilizar os indígenas, se relevando ser uma tarefa de difícil concretização. Ademais, a RANI – Registro Administrativo de Nascimento de Indígenas, atualmente sob competência da FUNAI – Fundação Nacional do Índio, por ser tão facultativo aos povos indígenas quanto o registro civil, possui pouca eficácia a esse fim, de identificar indivíduos e coletivos, bem como ao próprio exercício da cidadania, visto ter por finalidade apenas comprovar a condição de indígena, segundo procedimentos de heteroidentificação.⁴

Diante da baixa aderência de indígenas em efetivar o registro de nascimento de seus pares, visto de tratar de uma prática estranha à sua

⁴ Atualmente, a qualificação de pessoas como sendo indígenas, parte de um critério de heteroidentificação, não bastando, para fins de fruição de direitos e garantias próprios dessas parcelas, de prova bastante. Nesse sentido, não raras as ocasiões, o procedimento de heteroidentificação é o que se impõe, sendo procedimento complementar à autodeclaração de pertencimento étnico-racial, para confirmação da condição de indígena – o que ocorre, inclusive, pelo Registro de Nascimento junto ao Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, por meio da necessária apresentação da RANI, emitida pela FUNAI.

própria cultura, somado à omissão estatal em planejar estrategicamente ações promotoras e extensivas, lhes é negado e anulado o direito à própria personalidade e, conseqüentemente, à própria identidade, autodeterminação e vida enquanto símbolo de cultura. A ausência de registro civil, portanto, lhes retira a própria humanidade, ainda mais quando considerado que o nome indígena, uma das principais maneiras de expressão de resistência às práticas coloniais, carrega nele todos os atributos históricos e ancestrais da origem, da etnia, da territorialidade e da culturalidade inerente aos povos originários, motivo pelo qual a implementação do registro civil de nascimento é medida que se impõe para o seu reconhecimento público da sua existência física e imaterial, bem como para a identificação pessoal de indígenas sob a ótica da culturalidade, seja ela numa dimensão individual ou até mesmo coletiva, permitindo assim o livre desenvolvimento da personalidade através da manifestação do étnico-pertencimento.

2 ÉTNICO-PERTENCIMENTO E RESISTÊNCIA: A CONSTRUÇÃO DA PERSONALIDADE INDÍGENA ATRAVÉS DO NOME NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Entendida, primeiramente, a importância do nome para a construção da personalidade e, portanto, para a identidade e autodeterminação – bem como à própria afirmação da culturalidade, especialmente em caso de nome indígena – é necessário se passar à análise da forma pela qual é o nome recepcionado, qualificado e formalizado pelo Registro Civil das Pessoas Naturais, sendo essa a serventia extrajudicial legalmente competente para redigir assentos de nascimentos, nos quais é, num primeiro momento, realizada a atribuição do nome pelos responsáveis.

De acordo com o artigo 231 da Constituição Federal de 1988, “são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições”, sendo assim dever do Estado a proteção do direito fundamental à culturalidade dos povos indígenas – seja de forma ativa, instituindo programas e promovendo ações, ou mesmo passivamente, se omitindo de interferir na sua autodeterminação, visto ser básica a necessidade de que cada pessoa tenha, ao mesmo tempo, os meios necessários e a mínima liberdade para fazer escolhas de vida como condição ao pleno desenvolvimento da personalidade, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana:

Os direitos de grupos têm em regra um fundamento liberal [...] baseados no reconhecimento de que a diversidade cultural é um valor civilizacional que o Estado deve preservar. Estes direitos baseiam-se no pressuposto de que as comunidades pré-constitucionais têm uma identidade própria, expressa em língua, dialeto, práticas sociais, religião, que o Estado Constitucional deve garantir. Garantias que muitas vezes exigem regras especiais para a organização democrática do Estado, mas que em outros casos acabam por revelar fatores de perturbação da paz e da organização social em sociedades mais complexas, dando origem a conflitos étnicos, ao ressurgimento de nacionalismos e a novos pretextos para segregações [...]. (SILVA, 2015, p. 45)

Ocorre que, quando pensamos de modo confluyente temas como exercício da culturalidade por povos indígenas e a lavratura de registros civis, ainda há um longo caminho a trilhar, de modo que sejam garantidos os direitos constitucionalmente consagrados aos povos originários, especialmente pelo nome, sob o necessário prisma do multiculturalismo e interculturalidade.

O óbvio precisa ser dito: o sistema jurídico brasileiro, desde o seu embrionário, permeado por um ideal reacionário e eurocentrista, pautou a causa indígena através de um processo ambíguo e dicotômico de exclusão e integração, segundo o qual, por serem estranhos aos padrões hegemônicos de conquista e dominação, foram os indígenas considerados, de modo a permanecerem marginalizados e postos sob à tutela do Estado, como incapazes do exercício aos próprios direitos que lhe são inatos. Por não haver uma autonomia ou mesmo poder de decisão conferidos aos povos nativos, o abandono de sua cultura e ancestralidade, pelo homicídio de sua sobrevivência cultural, foi condição necessária à sua sobrevivência física:

Em virtude da exploração colonial, os indígenas perderam suas referências materiais/estruturais – terras, fonte de sua sobrevivência e imateriais – aspectos artísticos, linguísticos e religiosos. Esses elementos consolidaram-se por meio dos “etnocídios”, “epistemicídios”, genocídios, “linguicídios” e “memoricídios”. (WENCZENOVICZ, 2023, p. 28)

Um, dos inúmeros exemplos de características que careceram de abandono forçado, foi o nome registral⁵, sendo ele, entre todos os direitos da personalidade, o sinal mais visível da individualidade de um sujeito por externalizar suas origens: de acordo com o artigo 55 da Lei de Registros Públicos - Lei n. 6.015/1973, o “oficial de registro civil não registrará prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores”, sendo esse um dos grandes motivadores utilizados por Registradores Civis para coibir a utilização de nomes indígenas quando do seu registro de nascimento.

⁵ Para fins de melhor entendimento, há que ser diferenciado o nome: natural, sendo considerado aquele atribuído pelas pessoas legitimadas quando do nascimento; e o registral, considerado como aquele devidamente levado à publicidade registral por meio do registro de nascimento.

Não por outro motivo, a mesma lei não tutela aspectos pessoais e registrais de indígenas, havendo tão somente a previsão da facultatividade do registro de nascimento junto ao Registro Civil das Pessoas Naturais a indígenas, porém, em repetição e perpetuação do erro cometido por outros diplomas normativos, estende seus feitos apenas ao índio não integrado, havendo assim uma reiteração e constância de um ideal colonizador dentro das próprias formalidades registrais.

De acordo com o artigo 13 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos Indígenas, “os povos indígenas têm o direito de revitalizar, utilizar, desenvolver e transmitir às gerações futuras suas histórias, idiomas, tradições orais, filosofias, sistemas de escrita e literaturas, e de atribuir nomes às suas comunidades, lugares e pessoas e de mantê-los”, devendo o Estado adotar “medidas eficazes para garantir a proteção desse direito e também para assegurar que os povos indígenas possam entender e ser entendidos em atos políticos, jurídicos e administrativos, proporcionando para isso, quando necessário, serviços de interpretação ou outros meios adequados”, motivo pelo qual o nome indígena, mais do que um símbolo de resistência ao histórico de perseguição, é um direito humano e fundamental que deve ser garantido enquanto externalização do pertencimento.

Cumprindo a esse propósito, de acordo com o artigo 2º da Resolução Conjunta n. 3, de 19/04/2012, do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, “no assento de nascimento do indígena, integrado ou não, deve ser lançado, a pedido do apresentante, o nome indígena do registrando, de sua livre escolha, não sendo caso de aplicação do art. 55, parágrafo único da Lei n.º 6.015/73” e, para fins de formação do nome, “a etnia do registrando pode ser lançada como sobrenome”. Portanto, ainda que não haja lei em sentido estrito tutelando, possuímos atualmente norma administrativa vinculando a necessidade de que Registradores Cíveis respeitem o nome

indígena, formado por prenome cultural e etnia como sobrenome, seja o indígena, nos termos precários adotados pelo legislador, integrado ou não.

Não obstante o singelo avanço, ainda é possível detectar quatro problemas a serem solvidos. O primeiro deles, já mencionado, é que passe, o direito ao nome indígena, a ser positivado por lei em sentido estrito, e não mero diploma normativo despedido da legitimação própria de lei, como forma de reconhecimento e proteção à culturalidade. Os outros três, apesar de mais sutis, são de igual importância: a superação do entrave retificatório do nome indígena, visto que, atualmente e de acordo com a mencionada Resolução, é necessária a formalização jurisdicional, não sendo viável, por ora, a retificação administrativa, junto ao Registro Civil competente; a necessidade de que a interculturalidade permeie não apenas aspectos materiais do registro civil, em relação aos seus elementos componentes, mas sobretudo aspectos formais, de modo que sejam as certidões acessíveis plenamente perante indígenas, que sabidamente possuem alfabeto diverso do vernáculo adotado ordinariamente nos registros públicos; e, por fim, a prova da origem étnica, que atualmente é feita, necessariamente, pela apresentação da RANI – Registro Administrativo do Nascimento de Indígena, emitido pela FUNAI – Fundação Nacional do Índio, que representa uma burocratização ao procedimento e levanta grandes questões a respeito da heteroidentificação. Sem prejuízo, termos hoje a possibilidade de serem os indígenas registrados segundo seus nomes de origem, representa grande conquista e representa forma de resistência ao não passado que se encontra vivo e requer recorrente e contínuo enfrentamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo presente trabalho pode-se chegar à inevitável conclusão de que o Registro Civil das Pessoas Naturais é um importante instrumento para a exteriorização da identidade e, assim, possibilita o livre desenvolvimento da personalidade. Porém, para que seja justo e efetivo, é necessário o diálogo entre as instituições públicas, especialmente registrais, com os usuários deste serviço. Esse diálogo é ainda mais caro e necessário quando se coloca em jogo a ancestralidade de povos indígenas, de modo que a interculturalidade se torna o único caminho apto a permitir que direitos e garantias fundamentais prevaleçam – à culturalidade e ao registro civil.

Tendo em vista a necessária e harmônica proteção de direitos fundamentais, é premente a necessidade de que de que o registro civil reflita as identidades de povos indígenas, sendo o nome um dos elementos em que a personalidade se manifesta de forma mais latente: é, no nome, que se amalgamam uma série de características desenvolvidas e construídas pelo indivíduo pela sua autonomia e liberdade, especialmente sendo, em caso de indígenas, uma das principais e mais simbólicas amostras da culturalidade de um povo. Somado ao histórico de apagamento e submissão de indígenas aos padrões impostos de dominação externa é que se torna o nome hoje, para além de uma verdadeira exteriorização do próprio pertencimento de uma pessoa – às suas origens, territorialidades e culturalidades – e também símbolo de resistência e ao qual cabe ao Estado dispender esforços para que seja efetivado.

Não obstante, no que tange ao nome indígena, tenhamos normativa de abrangência nacional que não somente permite, mas sobretudo ordena que Registradores Civis recepcionem pedidos de prenomes indígenas elegidos quando do registro de nascimento, os

quais são formados segundo suas culturalidades, com o acréscimo da etnia como sobrenome do registrado, há ainda um longo caminho a percorrer com vistas à plena acessibilidade ao registro civil de indígenas, não sendo a tutela normativa suficiente à garantia de direitos registrais: seja pela insípida efetividade, seja pela eficácia pouco buscada.

REFERÊNCIAS

BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. **Direitos da Personalidade e Autonomia Privada**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 10 dez. 2024.

BRASIL. **Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas**. Disponível em: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Declaracao_das_Nacoes_Unidas_sobre_os_Direitos_dos_Povos_Indigenas.pdf. Acesso em 10 dez. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992**. Promulga o Pacto Internacional sobre Direitos Cíveis e Políticos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em 10 dez. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990**. Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm. Acesso em 10 dez. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em 10 dez. 2024.

BRASIL. **Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.** Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm. Acesso em 10 dez. 2024.

BRASIL. **Resolução Conjunta nº 3, de 19/04/2012.** Dispõe sobre o assento de nascimento de indígena no Registro Civil das Pessoas Naturais. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1731>. Acesso em 10 dez. 2024.

LOUREIRO, Luiz Guilherme. **Registros Públicos: Teoria e Prática.** Salvador: JusPodvim, 2018.

PESSOA, Jäder Lúcio de Lima. **Registro Civil de Nascimento: direito fundamental e pressuposto para o exercício da cidadania.** Brasil, 1988-2006. Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: <http://fdc.br/Arquivos/Mestrado/Dissertacoes/Integra/JaderLucioLimaPessoa.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2024.

PINTO, Paulo Mota. Direitos de personalidade no Código Civil Português e Brasileiro. **Revista Jurídica 314**, dez, 2003.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.

SILVA, Suzana Tavares. **Direitos Fundamentais na Arena Global.** 2ª ed. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2014. Disponível em: file:///C:/Users/PC/Downloads/direitos_fundamentais.pdf. Acesso em: 02 dez. 2024.

WENCZENOVICZ, Thais Janaina. **À escuta da aldeia: marcadores sociais e a memória nas comunidades indígenas no Brasil Meridional** 2. ed. revisada e ampliada. Joaçaba: Editora Unoesc, 2023.

INTERCULTURALIDADE E PLURALISMO JURÍDICO NA JUSTIÇA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: DESAFIOS INSTITUCIONAIS À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS POVOS INDÍGENAS XAVANTE

Dandara Christine Alves de Amorim¹

Wilson Pinto de Carvalho Filho²

INTRODUÇÃO

A configuração do Poder Judiciário brasileiro como espaço de mediação de conflitos societários passou a contemplar, a partir do início do

¹ Mestre em Desenvolvimento e Planejamento Territorial pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e mestre em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio pela Universidade Estadual de Goiás (UEG). Detém especializações em Direito Civil e Processo Civil, Direito Agrário e Ambiental, bem como em Direito e Processo do Trabalho e Previdenciário, todas pelo Centro Universitário Cathedral (UniCathedral). É também especialista em Gestão Pública pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) e em Tecnologia e Processos Educacionais pelo Centro Universitário do Vale do Araguaia (Univar). É graduada em Direito pelo Centro Universitário Cathedral (UniCathedral) e advogada regularmente inscrita na OAB/MT. Atualmente, exerce a função de Coordenadora do curso de Bacharelado em Direito do Centro Universitário do Vale do Araguaia (Univar), instituição onde também atua como professora e presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE). Foi nomeada presidente da Comissão de Validação de Relatórios de Leitura da Unidade Prisional de Aragarças/GO, em cumprimento à Resolução CNJ n 391/2021. Integra, ainda, a Comissão de Validação dos Relatórios de Estudo e Leitura do Sistema Prisional de Barra do Garças/MT, conforme Portaria n 03, de 20 de agosto de 2024 (GAB 1/CRIM/BG TJ/MT). Discente PPGD/UNOESC. E-mail: advdandaraamorim@outlook.com

² Doutorando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina UNOESC. Mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas. Especialista em Direito Internacional e Direitos Humanos e em Docência do Ensino Superior. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e Pedagogo pela Faculdade São Judas Tadeu. Membro do Observatório de Direitos Humanos, do Comitê de Diversidade e do Comitê de Inovação (TOADALAB), todos do Tribunal de Justiça do Maranhão. Fui aluno-bolsista do Programa Ibero-Americanas, parceria entre o Banco Santander e a Universidade Federal do Maranhão, com período de estudos na Universidade de Coimbra, Portugal. Servidor público efetivo do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, exerce o cargo de Diretor de Secretaria na Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Desenvolvo ações institucionais e práticas inovadoras voltadas ao enfrentamento à violência de gênero. Autor, coordenador e participante de diversos projetos, entre eles: Justiça em Rede: um link entre o Judiciário e as mulheres em situação de violência de gênero, Penha: bora dialogar, Não morra, Maria da Penha e Laços pela Paz em Casa. Atua ainda com grupos reflexivos e responsabilizantes para homens autores de violência de gênero, com foco nas masculinidades e em estratégias de prevenção à violência. E-mail: wilson.f@unoesc.edu.br

século XXI, demandas voltadas à proteção de direitos coletivos, entre os quais se incluem os direitos dos povos indígenas. A intensificação da judicialização de questões fundiárias e culturais revela uma tensão persistente entre a universalidade dos direitos fundamentais e a multiplicidade de sistemas normativos existentes nos territórios originários. Estudos jurídicos indicam que o modelo de democracia representativa, conforme descrito por Almond e Verba, prioriza procedimentos formais, afastando-se de práticas consuetudinárias e comunitárias. Essa priorização impõe obstáculos relevantes à legitimação intercultural das decisões judiciais, uma vez que ignora dinâmicas sociais próprias dos povos indígenas e compromete a efetividade das garantias constitucionais.

O conceito de interculturalidade propõe o reconhecimento recíproco entre ordenamentos estatais e saberes originários, contrapondo-se a abordagens homogeneizantes. Pesquisas empíricas sobre decisões judiciais envolvendo comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul demonstram que sentenças proferidas a partir de categorias jurídicas exógenas desconsideram a lógica interna dos grupos, resultando em deliberações desalinhadas com as estruturas comunitárias. Discussões sobre cidadania multicultural em contextos ibero-americanos reforçam a necessidade de diálogo entre múltiplos atores como condição para o fortalecimento de direitos diferenciados. No caso brasileiro, essa interlocução permanece incipiente no campo judicial, agravando a dissociação entre decisões formais e realidades socioculturais.

O povo Xavante, organizado em estruturas clânicas, rituais e de governança própria, apresenta especificidades territoriais e normativas que exigem do Judiciário a adoção de instrumentos compatíveis com o pluralismo jurídico. Estudos sobre memória histórica e processos de resistência revelam a existência de lacunas na implementação de

políticas públicas determinadas judicialmente, o que compromete a concretização de direitos garantidos constitucionalmente. A análise de processos de demarcação territorial destaca a centralidade das lideranças tradicionais e a necessidade de valorização dos registros orais na constituição da prova judicial. Tais elementos evidenciam a distância entre o texto normativo e a vivência concreta das comunidades originárias, sobretudo quando práticas decisórias ignoram os referenciais culturais indígenas.

Diante desse cenário, formula-se a seguinte pergunta de pesquisa: qual o potencial da democracia judicial no sistema brasileiro para reconhecer e efetivar direitos fundamentais do povo Xavante de maneira intercultural, considerando os limites institucionais e as práticas consuetudinárias que estruturam essa coletividade? Esse questionamento emerge de um vazio teórico-prático quanto à articulação entre as categorias da democracia deliberativa e o tratamento jurídico conferido aos povos indígenas nos tribunais nacionais. Ainda que o ordenamento jurídico brasileiro incorpore princípios constitucionais protetivos e normas internacionais de direitos indígenas, observa-se uma lacuna no que se refere à integração efetiva de epistemologias tradicionais nos processos decisórios judiciais.

A justificativa da presente investigação decorre da urgência em analisar, de forma crítica e aplicada, os mecanismos institucionais capazes de ampliar a sensibilidade cultural das decisões judiciais, ao mesmo tempo em que se fortalece a legitimidade das sentenças perante os povos indígenas. A escassez de estudos que articulem os fundamentos da democracia judicial a contextos concretos envolvendo o povo Xavante representa uma lacuna teórica relevante. A ausência de práticas judiciais sensíveis à interculturalidade, associada à reprodução de procedimentos homogêneos, reforça a exclusão estrutural dos sujeitos indígenas do processo deliberativo, comprometendo não

apenas a eficácia normativa, mas também a confiança recíproca entre comunidades tradicionais e instituições estatais.

A abordagem adotada neste trabalho parte da compreensão de que a efetividade dos direitos fundamentais indígenas depende não apenas da presença de normas protetivas no texto constitucional, mas também da existência de práticas institucionais capazes de interpretar essas garantias à luz da diversidade epistemológica presente nos territórios originários. A valorização de sistemas normativos próprios, ancorados em tradições, rituais e formas coletivas de resolução de conflitos, constitui passo necessário para que o Poder Judiciário deixe de atuar como instrumento de reprodução da monocultura jurídica e passe a operar como espaço dialógico, aberto à escuta e ao reconhecimento da alteridade normativa.

A metodologia empregada fundamentou-se em revisão de literatura especializada sobre democracia judicial, pluralismo jurídico e direitos indígenas, com ênfase em estudos regionais e relatórios institucionais elaborados em português e espanhol. Foram analisados marcos teóricos e documentos oficiais com o intuito de identificar elementos que permitissem compreender os limites institucionais do Judiciário frente às demandas Xavante e propor estratégias para superação desses obstáculos. A análise teórica foi articulada a elementos empíricos extraídos de estudos de caso, decisões judiciais e materiais produzidos por instituições indigenistas, compondo uma abordagem teórico-prática voltada à proposição de soluções concretas.

O objetivo central deste artigo consistiu em analisar as condições institucionais e as estratégias judiciais que favorecem o reconhecimento intercultural e a efetividade dos direitos fundamentais do povo Xavante no contexto da democracia judicial brasileira. A reflexão conduzida busca oferecer subsídios para a construção de um modelo de justiça que integre saberes tradicionais, respeite os ritmos

culturais das comunidades indígenas e promova a equidade no acesso aos mecanismos de garantia de direitos. Nesse sentido, o estudo propõe um diálogo entre fundamentos constitucionais, práticas jurídicas decoloniais e instrumentos processuais adaptados às dinâmicas socioculturais do povo Xavante.

A estrutura do artigo organiza-se em cinco seções interligadas. A primeira apresenta os fundamentos teóricos do pluralismo jurídico decolonial, examinando seus desdobramentos no reconhecimento de direitos indígenas no Brasil. A segunda seção aborda os entraves processuais da judicialização intercultural, com destaque para obstáculos institucionais que dificultam o acesso à justiça por parte dos Xavante. A terceira seção examina os marcos constitucionais e os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro no campo da proteção aos povos originários. Em seguida, a quarta seção discute a formação judicial intercultural e propõe instrumentos de avaliação de impacto na efetivação dos direitos indígenas. Por fim, a última seção reúne as considerações finais e apresenta um conjunto de recomendações para a institucionalização de práticas judiciais interculturais voltadas à promoção da cidadania indígena em sua dimensão coletiva e diferenciada.

2 TRAJETÓRIAS DECOLONIAIS NO RECONHECIMENTO JURÍDICO DOS POVOS INDÍGENAS

A abordagem decolonial ao pluralismo jurídico desafia a hegemonia do direito estatal ao reconhecer múltiplos saberes normativos. A análise de decisões envolvendo comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul evidencia que o Judiciário tende a aplicar categorias jurídicas exógenas às práticas comunitárias, desconsiderando princípios de autonomia

interna (Kuteten; Albernaz, 2021). Em contraste, Uribe e Fernandes (2021) sustentam que a incorporação de cosmovisões indígenas amplia a legitimidade social das decisões judiciais, enquanto Deus (2021) destaca a importância de uma perspectiva geográfica crítica, capaz de mapear desigualdades espaciais que atravessam o campo jurídico e impactam o reconhecimento da diversidade normativa. Esse reconhecimento impõe ao Judiciário um desafio hermenêutico: interpretar o direito estatal à luz de uma racionalidade não hegemônica. Nesse sentido, o pluralismo jurídico decolonial não significa a simples inclusão de novos sujeitos, mas a transformação da própria matriz epistêmica do direito.

A luta dos Xavante pelo reconhecimento de direitos territoriais revela tensões estruturais entre o paradigma multiculturalista e a prática judicial cotidiana. Plens e Pereira (2024) apontam que comissões de verdade conseguem instaurar narrativas que tornam visíveis injustiças históricas, embora raramente modifiquem a lógica estatal de produção normativa. Soares (2022) ressalta que o protagonismo cultural feminino, frequentemente invisibilizado, constitui recurso epistemológico potente, capaz de subverter hierarquias normativas e indicar caminhos para arranjos processuais mais inclusivos e sensíveis às estruturas comunitárias. Além disso, a presença de mulheres em espaços de deliberação fortalece o vínculo entre justiça e cuidado, ampliando o horizonte dos direitos a serem reconhecidos. A atuação feminina, enraizada em saberes transmitidos oralmente, conecta práticas ancestrais a estratégias institucionais contemporâneas.

O reconhecimento formal do pluralismo jurídico encontra barreiras institucionais significativas, como a ausência de intérpretes qualificados e a centralização de competências em varas que não possuem especialização em direitos indígenas. Rodrigues (2024) observa que a educação escolar indígena, fruto de lutas históricas, oferece ferramentas críticas que permitem às comunidades interagir

com o sistema de justiça de forma estratégica. Castro, Sousa e Vargas (2024) alertam que políticas de memória, quando desvinculadas de transformações institucionais, tendem a reduzir as resistências indígenas a objetos de museificação, sem produzir efeitos reparatórios substanciais. Esse cenário expõe a distância entre reconhecimento formal e eficácia prática dos direitos assegurados constitucionalmente. O Judiciário, ao ignorar especificidades culturais, fragiliza sua própria legitimidade perante as comunidades afetadas.

A sistematização de precedentes judiciais sensíveis ao pluralismo jurídico, conforme proposta por Moreira et al. (2022), constitui estratégia relevante, mas depende de articulações concretas entre operadores do direito e lideranças indígenas. Zuin, Panke e da Silva (2021) destacam o papel da língua natural como ferramenta de fortalecimento político e social, evidenciando que traduções literais de normas não substituem o diálogo intercultural. Athila (2022) demonstra que políticas públicas de saúde voltadas aos Yanomami só se consolidaram após intensas mobilizações que desafiaram a tecnocracia estatal, configurando experiências de resistência compartilhada e construção de alternativas institucionais. Essa articulação entre povos indígenas e instituições estatais pode inaugurar novos arranjos participativos, em que as comunidades influenciam diretamente os rumos da justiça. Criar jurisprudência intercultural, nesse contexto, é também criar uma gramática comum entre diferentes sistemas de significação.

A edificação de um pluralismo jurídico decolonial requer transformações processuais profundas, com valorização dos laudos antropológicos dos relatórios etnográficos como elementos centrais para decisões fundamentadas e interculturalmente legítimas. Ferro (2023) argumenta que a história constitucional brasileira revela ambivalências entre o universalismo normativo e as demandas por reconhecimento

diferenciado. A criação de espaços formais de escuta indígena torna-se essencial nesse contexto, favorecendo uma reconstrução do campo jurídico em que normas consuetudinárias dos Xavante coexistam, em pé de igualdade, com dispositivos constitucionais. Tais espaços não devem ser simbólicos, mas vinculativos e com impacto direto nos julgados. A mediação entre normativas estatais e costumes indígenas só se realiza plenamente quando reconhecida como um diálogo entre sujeitos de direito plenos.

As comissões da verdade emergem como ferramentas relevantes para a reparação histórica, embora enfrentem limitações no tratamento das violações de direitos dos povos indígenas. Plens e Pereira (2024) demonstram que as arqueologias de injustiças fundiárias realizadas por essas comissões raramente dialogam com as experiências vividas pelos grupos afetados, o que cria lacunas na legitimação intercultural dos relatos e dificulta sua inserção em processos judiciais. Rodrigues (2024) reforça que a trajetória da educação escolar indígena oferece importantes lições sobre persistência e reconhecimento, mas também evidencia que a simples produção de conhecimento não assegura, por si só, o acesso efetivo a direitos fundamentais. É preciso que os produtos dessas comissões ganhem status de prova judicial válida, orientando sentenças com base em uma memória coletiva sistematizada. A relação entre justiça transicional e autodeterminação indígena só se concretiza quando os relatos orais adquirem o mesmo peso dos documentos estatais.

Investigação sobre as violações cometidas durante o regime ditatorial revela omissões sistemáticas nas narrativas oficiais. Castro, Sousa e Vargas (2024) documentam episódios de violência contra os Xavante que permanecem silenciados em documentos estatais, sublinhando a urgência de processos judiciais que articulem memória histórica e justiça restaurativa. Moreira et al. (2022) sugerem que

o resgate das narrativas orais, juntamente com a valorização de lideranças tradicionais, constitui uma forma de justiça transicional que ultrapassa o enfoque meramente punitivo, reposicionando as comunidades indígenas como sujeitos ativos na construção do direito. Essas narrativas, transmitidas intergeracionalmente, mantêm viva a memória dos territórios e dos conflitos, contribuindo para a reconstrução de vínculos comunitários. Incorporá-las aos autos processuais é reconhecer que o tempo jurídico pode dialogar com o tempo da oralidade e da ancestralidade.

Kuteten e Albernaz (2021) analisam decisões envolvendo comunidades quilombolas e identificam que a negação sistemática de contextos históricos perpetua injustiças estruturais, ilustrando a urgência de construir precedentes que incorporem interpretações históricas enraizadas nas experiências coletivas. Ao negligenciar processos históricos de exclusão e resistência, o Judiciário contribui para a invisibilização de trajetórias sociais marcadas por violência e deslocamento. Zuin, Panke e da Silva (2021) demonstram que o uso da língua indígena em processos eleitorais fortalece a memória coletiva e ativa direitos políticos específicos, proporcionando protagonismo às comunidades nos espaços institucionais. A legitimação da linguagem nativa no campo jurídico revela a necessidade de uma escuta institucional que valorize as formas próprias de expressão e organização social. Ferro (2023) complementa ao indicar que a perspectiva decolonial aplicada à história constitucional brasileira exige revisão crítica dos marcos legais que se fundamentam em memória seletiva, abrindo espaço para uma justiça que reconheça outras epistemologias como válidas e juridicamente relevantes.

Soares (2022) ressalta que o protagonismo de mulheres indígenas nas comissões de verdade introduz perspectivas de gênero nas narrativas de transição, ampliando significativamente o escopo das

reparações e evidenciando formas de resistência pouco contempladas nos relatos institucionais. A incorporação dessas vozes transforma a compreensão dos danos históricos, ao revelar impactos específicos sobre os corpos e territórios femininos. Athila (2022) mostra que a criação dos distritos sanitários Yanomami resultou de intensas mobilizações políticas que resgataram práticas tradicionais de cuidado coletivo, redefinindo a justiça de transição com base em uma perspectiva de saúde pública intercultural. Essa reconfiguração dos paradigmas de reparação vincula saúde, território e autodeterminação. Deus (2021) reforça a urgência de um olhar geográfico crítico que conecte memória histórica à ocupação territorial, de modo a assegurar que os processos de verdade e reconciliação incorporem espacialidades tradicionais como condição para efetiva justiça reparatória.

A efetividade da justiça transicional, no que se refere aos povos indígenas, depende da integração ativa de seus representantes em fóruns deliberativos, da incorporação de métodos consensuais de resolução de conflitos e da sistematização de diretrizes bilíngues que respeitem os contextos sociolinguísticos locais. Plens e Pereira (2024) defendem a elaboração de guias processuais capazes de orientar magistrados na interpretação de provas orais, especialmente quando baseadas em narrativas ancestrais que demandam atenção à temporalidade e ao simbolismo. Castro, Sousa e Vargas (2024) recomendam a criação de painéis participativos de revisão histórica, nos quais lideranças tradicionais possam contribuir com análises documentais e relatos vivenciais. Essas iniciativas não apenas ampliam a sensibilidade das comissões da verdade às demandas dos Xavante, como também reforçam os vínculos entre justiça institucional e memória coletiva. A criação de mecanismos de escuta qualificada favorece decisões mais comprometidas com reparações simbólicas e materiais.

A participação indígena em políticas públicas de saúde evidencia desafios tanto institucionais quanto epistemológicos, sobretudo na adaptação de modelos biomédicos a práticas tradicionais de cura. Athila (2022) documenta que a criação do Distrito Sanitário Yanomami implicou reconhecimento formal das práticas de cuidado indígena, mas frisa que sua implementação efetiva só foi possível após pressões políticas persistentes das lideranças locais. Esse processo revela a importância de canais de mobilização direta e de estruturas institucionais responsivas. Zuin, Panke e da Silva (2021) evidenciam que a função social da língua natural indígena extrapola a comunicação cotidiana e se estende à ampliação do acesso a informações sobre direitos, como os eleitorais, sugerindo um modelo replicável na área da saúde pública. A linguagem, nesse contexto, transforma-se em tecnologia social, reforçando o protagonismo das comunidades na formulação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas. A tradução de termos técnicos para os idiomas originários contribui para o fortalecimento de vínculos identitários e para a democratização da informação.

Rodrigues (2024) traça panoramas abrangentes sobre a educação escolar indígena, evidenciando que os processos de alfabetização bilíngue fomentam capacidades críticas indispensáveis à interlocução com o sistema judiciário. Tais processos educativos não apenas instrumentalizam linguisticamente os sujeitos, como também constroem habilidades argumentativas e jurídicas fundamentais para a autodeterminação. Moreira et al. (2022) destacam experiências pedagógicas que valorizam os saberes tradicionais como eixo central de currículos interculturais, fortalecendo o vínculo entre formação educacional e identidade coletiva. A ênfase em epistemologias originárias transforma o ambiente escolar em território de resistência e agência. Esse protagonismo educacional, alicerçado em práticas comunitárias e linguísticas, constitui estratégia de empoderamento que repercute diretamente em reivindicações judiciais, pois oferece

repertório cognitivo, político e jurídico para fundamentar litígios que envolvem direitos territoriais, culturais e sociais.

Ferro (2023) analisa criticamente as políticas indigenistas implementadas no país, sugerindo que a história constitucional brasileira frequentemente dilui as especificidades indígenas em programas universais de difícil operacionalização local. Esse apagamento institucionaliza formas de exclusão simbólica e programática. Tal déficit normativo e operacional se reflete na baixa capacidade de adaptação dos serviços públicos às complexas e diversas dinâmicas culturais dos povos Xavante, provocando rupturas entre políticas formuladas e realidades vividas. Soares (2022) aponta os debates sobre direito e gênero como ferramenta indispensável para ampliar o alcance de políticas públicas, sobretudo no campo da saúde mental, evidenciando a interseção entre protagonismo cultural e estratégias de cuidado coletivo. A abordagem interseccional permite visibilizar demandas de mulheres indígenas, frequentemente invisibilizadas pelos marcos jurídicos hegemônicos, tornando as políticas mais responsivas às experiências subjetivas e comunitárias.

Deus (2021) ressalta que o protagonismo etnopolítico emerge de práticas concretas de governança territorial, nas quais as demandas por saúde e educação estão intrinsecamente ligadas às dimensões espaciais da vida indígena. A territorialidade, portanto, não se limita a uma referência geográfica, mas constitui fundamento das estratégias de organização e reprodução sociocultural. Kuteten e Albernaz (2021) analisam como decisões judiciais podem restringir ou ampliar esse protagonismo, dependendo do grau de sensibilidade dos magistrados diante dos arranjos normativos decoloniais que sustentam os modos de vida Xavante. A jurisprudência, nesse contexto, precisa abandonar a lógica assimilacionista e passar a reconhecer formas de normatividade comunitária. Castro, Sousa e Vargas (2024) concluem que a efetividade

das políticas públicas direcionadas a povos indígenas depende da articulação concreta entre saberes tradicionais e diagnósticos técnicos, os quais devem ser traduzidos em ações compartilhadas que respeitem os calendários, ritmos e epistemologias locais.

Plens e Pereira (2024) recomendam a criação de comissões interinstitucionais permanentes, com composição plural e representativa, para o monitoramento de indicadores de saúde e educação, assegurando a participação direta de lideranças Xavante nas etapas de avaliação e decisão. Essas comissões funcionariam como dispositivos de controle democrático e intercultural das políticas públicas. Athila (2022) sugere que a consolidação de indicadores culturais em manuais técnicos de formulação e execução de políticas públicas fortalece práticas de accountability e amplia a transparência institucional, sobretudo ao incorporar parâmetros não estatais de bem-estar. A tradução de valores indígenas em métricas próprias evita reduções colonialistas baseadas em indicadores ocidentais. A incorporação dessas propostas reforça o protagonismo indígena na definição dos critérios de sucesso de políticas públicas e contribui para a universalização dos direitos fundamentais de forma intercultural, participativa e sensível às singularidades dos modos de vida Xavante.

3. DESAFIOS PROCESSUAIS DA JUDICIALIZAÇÃO INTERCULTURAL

A morosidade processual constitui obstáculo significativo à efetivação dos direitos dos Xavante, refletida no acúmulo de ações fundiárias pendentes e na demora crônica na conclusão de perícias antropológicas essenciais ao reconhecimento dos territórios tradicionais. Kuteten e Albernaz (2021) apontam que decisões envolvendo

comunidades quilombolas frequentemente tramitam por longos períodos sem resolução, resultando na reprodução de desigualdades estruturais e na perpetuação da insegurança jurídica. A sobrecarga de magistrados sem formação específica no trato com direitos indígenas, conforme observado por Rodrigues (2024), amplia essa lentidão, já que a inexistência de varas especializadas inviabiliza uma atuação judicial mais sensível à complexidade dos litígios envolvendo povos originários. Moreira et al. (2022) evidenciam que a escassez de servidores públicos bilíngues representa entrave concreto, pois impede o adequado registro das provas orais, que carregam significados e elementos próprios dos usos e costumes tradicionais. Essa barreira compromete a plena participação dos demandantes indígenas, visto que grande parte das manifestações se dá por meio da oralidade estruturada em sua língua materna, que carrega elementos identitários e normativos inseparáveis.

A ausência de intérpretes certificados nas línguas indígenas compromete os princípios fundamentais do devido processo legal, especialmente aqueles ligados à publicidade e à motivação das decisões, pilares da teoria da argumentação jurídica conforme delineada por MacCormick. Zuin, Panke e da Silva (2021) relatam situações em que a ausência de tradução qualificada resultou em distorções significativas de depoimentos orais, fragilizando a estrutura lógica das sentenças e abrindo brechas para injustiças processuais. Soares (2022) acrescenta que a inexistência de protocolos bilíngues específicos desrespeita o direito de acesso à justiça, principalmente no caso de mulheres indígenas, cuja atuação se revela essencial nas assembleias comunitárias e nas decisões relacionadas à gestão dos territórios e à proteção das tradições. A lacuna institucional na formação e alocação de tradutores qualificados aprofunda assimetrias informacionais entre as partes e reduz drasticamente a legitimidade das decisões judiciais perante os grupos indígenas afetados, provocando desconfiança no

sistema jurídico estatal e reforçando a percepção de desconsideração institucional frente aos direitos coletivos diferenciados.

As regras formais que regem prazos e recursos processuais foram originalmente concebidas para litígios próprios da racionalidade ocidental e não se ajustam às práticas consuetudinárias, estruturadas em tempos sociais que não seguem o calendário estatal. Ferro (2023) afirma que a rigidez dos procedimentos subestima a complexidade cultural dos povos indígenas, impondo padrões processuais que desconsideram dinâmicas clônicas, rituais e formas próprias de negociação de conflitos. Deus (2021) destaca que a geografia política das terras indígenas, marcada por territórios amplos e de difícil acesso, demanda prazos adaptados às condições reais de circulação, comunicação e organização dos povos originários. A inexistência de flexibilização normativa quanto a esses prazos impõe um ônus logístico às comunidades, que muitas vezes precisam deslocar-se por longas distâncias em condições precárias, arcando com custos elevados para participar dos atos processuais. Essa limitação, ao inviabilizar o exercício pleno dos direitos, contribui para a manutenção da marginalização institucional dos povos indígenas no interior do sistema de justiça, ao mesmo tempo em que evidencia a urgência da reforma estrutural no desenho dos procedimentos aplicáveis a essas demandas.

Decisões monocráticas, proferidas sem o respaldo de colegiados especializados, aprofundam as fragilidades no tratamento jurídico das demandas indígenas, sobretudo ao permitir interpretações simplificadas de dispositivos constitucionais. Uribe e Fernandes (2021) argumentam que a multiplicidade de arranjos jurídicos presentes nas sociedades interculturais deve ser apreciada por turmas compostas por julgadores com formação e sensibilidade intercultural, de modo a evitar julgamentos unilaterais e reducionistas. Kuteten e Albernaz (2021) exemplificam situações em que sentenças elaboradas sem

consulta prévia às lideranças tradicionais acabam por desconsiderar os ritos coletivos de tomada de decisão, comprometendo a validade social do julgado entre os membros da comunidade. Esse vício de origem, ao violar a lógica participativa dos povos originários, tende a gerar instabilidade social e aumentar o risco de conflitos após o trânsito em julgado, o que demanda uma reavaliação das regras de composição e atuação das turmas judiciais com competência para apreciar causas indígenas.

A escassez de recursos financeiros destinados à estrutura judiciária voltada a casos indígenas perpetua deficiências logísticas que inviabilizam uma resposta institucional adequada às complexidades envolvidas. Moreira et al. (2022) alertam para a ausência de verbas específicas que viabilizem o deslocamento de peritos e o fornecimento de apoio técnico qualificado até as aldeias, o que compromete a produção de provas consistentes e culturalmente situadas. Castro, Sousa e Vargas (2024) relatam que, diante da ausência de patrocínio judicial, diversas comunidades se veem obrigadas a buscar financiamento junto a organizações não estatais, estabelecendo relações de dependência externa que comprometem sua autonomia. Esses entraves orçamentários evidenciam o descompasso entre o compromisso constitucional com os direitos fundamentais indígenas e a realidade financeira dos tribunais, enfraquecendo o papel garantidor do Estado.

A busca por um modelo processual mais eficaz e justo requer a criação de varas especializadas em direitos indígenas, a nomeação de juízes itinerantes com atuação em territórios originários e a implementação de protocolos bilíngues adequados aos contextos linguísticos e culturais específicos. Plens e Pereira (2024) sugerem a adoção de práticas de justiça restaurativa como etapa prévia às audiências judiciais, respeitando os rituais e tempos próprios das comunidades. Athila (2022) observa que as experiências desenvolvidas

no campo da saúde Yanomami demonstram a efetividade de modelos institucionais flexíveis, adaptados às necessidades dos povos indígenas, os quais poderiam inspirar soluções similares no âmbito do Poder Judiciário. Tais medidas possuem potencial para reduzir prazos, ampliar a participação ativa das comunidades nos processos judiciais e promover decisões com maior legitimidade social, articuladas com as dinâmicas comunitárias.

A valorização dos relatórios antropológicos e dos laudos etnográficos representa instrumento decisivo para uma justiça verdadeiramente intercultural, ao fornecer subsídios técnicos para a compreensão dos sistemas normativos próprios dos povos indígenas. Rodrigues (2024) destaca que pareceres bem elaborados orientam os magistrados na interpretação de usos e ocupações coletivas da terra, evitando abordagens baseadas em estereótipos ou em concepções distantes das realidades locais. Moreira et al. (2022) evidenciam que a sistematização de dados etnográficos melhora a precisão das decisões judiciais e contribui para a elaboração de sentenças mais contextualizadas. Contudo, os autores alertam que a dependência excessiva de peritos externos pode gerar conflitos de interesse, especialmente quando esses profissionais não possuem vínculos consistentes com as comunidades analisadas, o que reforça a necessidade de formar especialistas comprometidos com os princípios do pluralismo jurídico e da ética intercultural.

Ferro (2023) critica a fragmentação persistente entre a produção acadêmica e o uso de provas no contexto judicial, salientando a ausência de incorporação dos estudos constitucionais nos autos processuais. Deus (2021) defende a criação de comissões técnicas permanentes que integrem saberes geográficos e antropológicos ao processo decisório. Tal articulação, ao permitir a atualização contínua de cadastros territoriais e o reconhecimento de novas formas de ocupação, contribuiria para o

fortalecimento da base factual das decisões judiciais e a valorização de realidades espaciais historicamente invisibilizadas.

O reconhecimento jurídico de testemunhos orais, previsto no princípio constitucional da prova oral, enfrenta resistências dentro de práticas forenses ainda marcadas por uma preferência pela documentação escrita. Castro, Sousa e Vargas (2024) relatam episódios nos quais relatos de anciãos foram desconsiderados sob alegações de “imprecisão”, o que resultou na desqualificação de evidências com séculos de validade comunitária. Kuteten e Albernaz (2021) propõem a adoção de minutas bilíngues para o registro de depoimentos indígenas, assegurando fidelidade linguística e respeito à construção cultural dos testemunhos. A aplicação dessa medida elevaria o valor jurídico das narrativas orais e mitigaria o risco de distorções durante a redação das decisões.

Zuin, Panke e da Silva (2021) sugerem a formação de intérpretes especializados em línguas indígenas, aptos a traduzir não apenas termos, mas também as nuances semânticas e contextuais indispensáveis à adequada compreensão dos relatos. Athila (2022) destaca que experiências no campo da saúde Yanomami demonstraram o êxito da incorporação de protocolos bilíngues, que garantiram registros fiéis das práticas de cuidado coletivo. Essa prática evidencia a viabilidade de investimentos contínuos em tradução e interpretação dentro do Judiciário, com impacto direto na qualidade técnica e cultural das provas produzidas durante o processo.

Plens e Pereira (2024) apresentam casos nos quais a atuação de comissões da verdade, ancorada em métodos arqueológicos, contribuiu para a reconstrução de eventos de violência contra comunidades indígenas, fornecendo base para iniciativas de reparação. Soares (2022) observa que a combinação entre arqueologia cultural e relatórios antropológicos amplia a compreensão histórica de conflitos fundiários

e fundamenta juridicamente demandas de demarcação territorial. A convergência dessas metodologias evidencia o potencial das abordagens interdisciplinares na qualificação do processo probatório e na legitimação da tutela judicial em contextos de violações sistemáticas de direitos coletivos.

A formação de painéis interdisciplinares, compostos por antropólogos, juristas e lideranças indígenas, constitui proposta central de Uribe e Fernandes (2021) e Moreira et al. (2022), que sugerem sua institucionalização como instância consultiva obrigatória em casos com elevada complexidade sociocultural. Esses colegiados, ao emitir pareceres vinculantes, poderiam reduzir a incerteza probatória e orientar decisões mais sensíveis à realidade normativa indígena. A consolidação dessa estrutura ampliaria a legitimidade social das sentenças e fortaleceria a efetividade dos direitos fundamentais dos Xavante, ao garantir maior compatibilidade entre a forma jurídica e as práticas culturais.

Organizações não governamentais e redes de advocacia desempenham função estratégica na judicialização dos direitos indígenas, sobretudo ao selecionar casos com potencial para gerar precedentes favoráveis e influenciar políticas públicas. Athila (2022) exemplifica esse fenômeno por meio de ações na área de saúde entre os Yanomami, cujos efeitos transcenderam o caso específico e serviram de base para demandas territoriais dos Xavante. Plens e Pereira (2024) destacam que litígios bem estruturados podem induzir o Estado a adotar medidas administrativas antes mesmo do encerramento formal do processo, antecipando benefícios em contextos marcados por urgência e vulnerabilidade.

As comissões da verdade, embora não configurem órgãos judiciais, contribuem significativamente para o fortalecimento de narrativas que subsidiam ações reparatórias no campo jurídico. Plens

e Pereira (2024) demonstram que recomendações oriundas dessas comissões exerceram influência sobre decisões do Supremo Tribunal Federal em casos de demarcação, abrindo caminho para sentenças mais sensíveis às especificidades culturais. Castro, Sousa e Vargas (2024) indicam que a inclusão de relatos de sobreviventes nos autos de Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ampliou o alcance da reparação simbólica, promovendo repercussões concretas sobre a formulação de políticas públicas direcionadas às comunidades indígenas.

Redes transnacionais voltadas à proteção dos direitos dos povos originários, conforme analisado por Uribe e Fernandes (2021), operam como mediadoras entre demandas locais e normas internacionais, conectando o Brasil a convenções multilaterais e elevando a pressão diplomática sobre o Estado. Deus (2021) observa que a visibilidade internacional desses litígios, ao projetar a causa indígena em foros internacionais, pode acelerar processos de demarcação territorial, sobretudo diante da tentativa dos governos de evitar condenações em cortes de direitos humanos. Essa intersecção entre o direito interno e o sistema jurídico internacional reforça argumentos em juízo e influencia decisões proferidas por tribunais superiores.

A capacitação de lideranças indígenas para atuação direta em litígios representa outra estratégia relevante para o fortalecimento da autonomia comunitária. Rodrigues (2024) ressalta que formações jurídicas voltadas aos representantes indígenas reduzem a dependência de assessorias externas e promovem domínio sobre os instrumentos processuais disponíveis. Soares (2022) enfatiza a importância de oficinas específicas voltadas às mulheres indígenas, que ampliam sua participação como protagonistas em audiências, diversificando os perfis de representação e fortalecendo os debates sobre gênero, cultura e território. Essas iniciativas consolidam redes de apoio jurídico e

ampliam o repertório estratégico das comunidades, favorecendo o exercício pleno de seus direitos fundamentais.

A construção de alianças políticas locais constitui aspecto fundamental da resistência institucional. Kuteten e Albernaz (2021) evidenciam que a mobilização de atores regionais, incluindo universidades públicas e movimentos sociais, amplia a visibilidade de campanhas em defesa da demarcação de terras. Moreira et al. (2022) complementam essa análise ao afirmar que a articulação entre diversos atores sociais contribui para pressionar o Executivo e o Legislativo, criando um cenário político mais receptivo à formulação de políticas públicas inclusivas e ao fortalecimento de decisões judiciais favoráveis aos povos indígenas.

A mensuração de impactos após o julgamento, proposta por Athila (2022) e por Zuin, Panke e da Silva (2021), constitui etapa fundamental para aferir a efetividade real das decisões judiciais no cotidiano das comunidades. A produção de relatórios periódicos, ancorados em protocolos bilíngues e indicadores culturais, possibilita o acompanhamento contínuo dos desdobramentos concretos em áreas como saúde, educação e acesso à terra. A implementação desse monitoramento, integrada a uma prática de advocacia permanente e culturalmente situada, amplia a eficácia das sentenças e reforça o cumprimento dos direitos fundamentais dos Xavante no sistema de justiça brasileiro.

4 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E COMPROMISSOS INTERNACIONAIS NA PROTEÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS

A Constituição Federal de 1988 consagrou o reconhecimento dos direitos originários dos povos indígenas, assegurando garantias territoriais, culturais e políticas destinadas à proteção da autodeterminação e da identidade coletiva. A interpretação desses dispositivos, contudo, revela ambivalências persistentes entre perspectivas universalistas de direitos e abordagens baseadas no pluralismo jurídico, o que demanda articulação constante entre o ordenamento estatal e as normas consuetudinárias próprias dos Xavante (Ferro, 2023; Dahl, 2017; Kuteten; Albernaz, 2021). Destaca-se, nesse contexto, o artigo 231 da Carta Magna, que estabelece a obrigação estatal de demarcar terras tradicionalmente ocupadas, embora sua efetivação encontre entraves institucionais significativos, limitando a materialização das garantias constitucionais no campo judicial.

A incorporação de tratados internacionais, a exemplo da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, reforça os compromissos do Estado brasileiro para além das fronteiras normativas internas. A ratificação desses instrumentos introduziu exigências como a consulta prévia e o consentimento livre e informado, criando barreiras normativas ao exercício unilateral de poderes públicos sobre territórios indígenas (Uribe; Fernandes, 2021; Athila, 2022; Putnam, 2015). A aplicação desses dispositivos internacionais nos processos judiciais representa passo decisivo para conferir legitimidade intercultural às decisões que afetam diretamente os modos de vida e os regimes de uso coletivo das comunidades, fortalecendo os fundamentos democráticos do pluralismo jurídico.

Decisões recentes do Supremo Tribunal Federal envolvendo a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 572 ilustram com nitidez a tensão existente entre a universalidade dos princípios constitucionais e as especificidades históricas que marcam os povos originários. Nesse caso, o tribunal analisou a responsabilidade por veiculação de notícias falsas contra sua própria estrutura institucional, evidenciando os limites e os desafios do controle jurídico em contextos de conflito simbólico (Castro; Sousa; Vargas, 2024; Kuteten; Albernaz, 2021). A complexidade desses julgamentos ressalta a importância da incorporação de relatórios antropológicos e registros orais Xavante como elementos probatórios válidos e legítimos, aptos a fundamentar decisões contextualizadas e compatíveis com a realidade das comunidades. Esse processo de escuta ativa reforça a dimensão deliberativa do Poder Judiciário, cuja atuação exige compatibilização entre os dispositivos constitucionais e a pluralidade normativa dos povos indígenas, sob pena de esvaziamento democrático da função jurisdicional.

A análise comparada com experiências internacionais evidencia que Estados plurinacionais vêm adotando modelos institucionais que reconhecem juridicamente matrizes normativas indígenas, mediante a criação de câmaras especiais e cortes constitucionais com participação de representantes originários (Moreira et al., 2022; Ferro, 2023). Tais arranjos têm inspirado propostas no Brasil, incluindo a possibilidade de incorporar consultores indígenas em turmas temáticas do Supremo Tribunal Federal e em tribunais regionais. A implementação de práticas deliberativas com base intercultural tem potencial para ampliar a legitimidade social das decisões judiciais e assegurar maior conformidade com as estruturas clínicas e rituais dos Xavante, reconhecendo sua lógica comunitária como base para a formulação de julgamentos sensíveis ao pluralismo normativo.

A efetividade dos direitos previstos na Constituição depende também de marcos infraconstitucionais capazes de estabelecer diretrizes claras para a operacionalização de garantias fundamentais. Estudos voltados aos processos de delimitação territorial revelam a existência de lacunas em decretos e portarias vigentes, que ainda carecem de normativas bilíngues e ajustadas às práticas consuetudinárias das comunidades indígenas (Rodrigues, 2024; Plens; Pereira, 2024). A ausência desses instrumentos normativos compromete a segurança jurídica e favorece decisões arbitrárias, além de alongar indevidamente os processos administrativos e judiciais. Esse quadro de incerteza prejudica a confiança das comunidades no sistema de justiça e enfraquece a percepção do direito como mecanismo legítimo de proteção cultural.

A interação entre teorias contemporâneas de democracia judicial e os fundamentos constitucionais do Estado brasileiro oferece base para repensar o papel do Judiciário em contextos de diversidade normativa. O conceito de cultura cívica deliberativa formulado por Almond e Verba (2015) destaca a importância da motivação das decisões e da ampla publicidade como pilares para sua aceitação social. A dinâmica competitiva descrita por Schumpeter (2017), por sua vez, aponta para a necessidade de equilibrar a eficiência na produção de decisões e a garantia de proteção a grupos minoritários, configurando o Judiciário como arena legítima para disputas políticas e reconhecimento de identidades coletivas. A confluência entre essas perspectivas teóricas e os dispositivos constitucionais oferece suporte analítico para reconfigurar práticas judiciais atentas às especificidades culturais dos Xavante.

A criação de varas especializadas e departamentos judiciais voltados exclusivamente a matérias indígenas desponta como estratégia institucional relevante para superar obstáculos relacionados à generalização de competências. Tribunais que adotaram câmaras

técnicas compostas por juízes e assessores com formação em Direito Indígena fornecem exemplo promissor de estrutura institucional alinhada à complexidade sociocultural desses litígios (Plens; Pereira, 2024; Rodrigues, 2024). A atuação itinerante dessas unidades em territórios indígenas permite reduzir distâncias geográficas, facilitar o acesso à justiça e fortalecer a presença do Estado Democrático de Direito nos espaços tradicionais Xavante, promovendo decisões mais legítimas e culturalmente enraizadas.

O papel desempenhado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e pelo Conselho Nacional de Política Indigenista (CONADI) revela-se central na formulação e implementação de políticas voltadas à proteção dos direitos dos povos originários, operando como instâncias executivas e consultivas junto aos demais órgãos estatais. Relatórios técnicos produzidos por essas entidades subsidiam procedimentos de demarcação territorial e contribuem para mediar o diálogo entre magistrados e lideranças tradicionais, fornecendo elementos culturais e históricos indispensáveis à compreensão dos litígios (Castro; Sousa; Vargas, 2024; Soares, 2022). A institucionalização de fluxos de comunicação bilíngue, somada à criação de comissões de escuta com participação indígena, fortalece relações de confiança recíproca e melhora substancialmente a qualidade da fundamentação jurídica das decisões proferidas em disputas envolvendo os Xavante.

Comissões da verdade responsáveis pela apuração de violações históricas contra povos indígenas contribuíram para a produção de acervos compostos por evidências arqueológicas e relatos orais, os quais vêm sendo utilizados como base argumentativa em litígios fundiários e ações constitucionais. Plens e Pereira (2024) demonstram que a integração de achados arqueológicos no corpo dos processos judiciais possibilita o reconhecimento histórico de injustiças estruturais, promovendo, com isso, reparações de natureza simbólica e material.

A articulação entre esses registros e os protocolos judiciais de escuta intercultural favorece a consolidação de um repertório jurisprudencial alinhado às demandas territoriais e à preservação da memória coletiva Xavante.

A presença ativa de órgãos indigenistas em nível regional, a exemplo das coordenadorias instaladas em tribunais de justiça estaduais, tem contribuído para aproximar o sistema judiciário das realidades locais, proporcionando maior acesso à Justiça e representatividade às comunidades envolvidas. Estudos recentes indicam que essa descentralização institucional é capaz de identificar com mais celeridade conflitos emergentes, acelerar a produção de laudos antropológicos e viabilizar audiências que respeitam os calendários cerimoniais tradicionais (Zuin; Panke; da Silva, 2021; Athila, 2022). A experiência acumulada em políticas públicas territoriais voltadas à saúde Yanomami constitui referência metodológica importante, indicando possibilidades de replicação de práticas adaptadas ao universo cultural dos Xavante e à complexidade dos seus vínculos territoriais.

A interação entre advocacia jurídica e organismos indigenistas desempenha papel estratégico ao fomentar a mobilização de recursos e fortalecer canais de interlocução com instâncias internacionais. Uribe e Fernandes (2021) demonstram que redes transnacionais exercem pressão diplomática sobre os Estados para assegurar o cumprimento de normas internacionais de consulta e demarcação, com efeitos concretos sobre decisões domésticas. Deus (2021) acrescenta que essa articulação internacional contribui para consolidar a segurança jurídica das comunidades indígenas, ampliando sua capacidade de resistência frente a retrocessos institucionais que ameaçam conquistas históricas.

A criação de painéis interdisciplinares e câmaras consultivas permanentes, integradas por juristas, antropólogos e representantes do povo Xavante, configura proposta voltada à qualificação do processo

decisório em matéria indígena. Rodrigues (2024), Moreira et al. (2022) e Athila (2022) sustentam que esse modelo institucional pode reforçar a transparência, ampliar a motivação das decisões e assegurar maior legitimidade social aos julgados. A formalização dessas práticas colaborativas tende a consolidar um ambiente judicial de caráter intercultural, em que os julgamentos incorporem referências aos usos tradicionais e promovam a efetividade das garantias constitucionais destinadas aos povos originários.

O ordenamento jurídico brasileiro dispõe de dispositivos normativos que, embora reconheçam os direitos fundamentais, ainda operam sob estruturas que limitam a flexibilidade necessária ao acolhimento de pluralismos jurídicos. Almond e Verba (2015) e Lijphart (1984) explicam que sistemas majoritários tendem a excluir as minorias dos processos deliberativos, enquanto modelos consensuais favorecem a inclusão. No contexto das demandas Xavante, observa-se que a prevalência de entendimentos majoritários no Supremo Tribunal Federal pode inviabilizar a incorporação de reivindicações específicas, sendo necessário consolidar precedentes capazes de promover equilíbrio entre eficiência decisória e reconhecimento cultural.

As críticas ao universalismo jurídico indicam que a aplicação homogênea das normas legais tende a ocultar identidades coletivas e silenciar vozes subalternas. Todorov (2012) e Bobbio (2000) argumentam que o tratamento abstrato dos direitos pode resultar em exclusão de grupos historicamente marginalizados. Essa crítica fornece base à argumentação de Murphy, defensor da ponderação contextualizada como método apto a compatibilizar direitos fundamentais em conflito. A jurisprudência, nesse sentido, deve incorporar os usos comunitários e os interesses estatais de maneira harmônica, promovendo diálogo entre sistemas normativos diversos.

Schumpeter (2017) e Diamond (1999) evidenciam que democracias consolidadas oscilam entre competição institucional e inclusão de grupos sociais. A judicialização dos direitos indígenas insere o Poder Judiciário em um campo tensionado por imperativos de diversidade e práticas decisórias de viés majoritário. A formação de precedentes favoráveis aos povos originários requer compreensão crítica dessa dinâmica, permitindo que as decisões sirvam como parâmetros interpretativos para casos futuros e colaborem na construção de uma jurisprudência sensível às demandas interculturais.

A análise crítica de discursos midiáticos e processos de ressignificação social revela mecanismos pelos quais a lógica quantitativa contemporânea tende a subjugar minorias culturais. Baudrillard (1994) e Žižek (2010) apontam que os sistemas de massa promovem homogeneizações simbólicas e transformam os direitos em objetos mercantilizados, desprovidos de especificidade histórica. No âmbito jurídico, essa crítica adquire relevância ao alertar para o risco de fundamentações baseadas exclusivamente em indicadores estatísticos, negligenciando as singularidades dos Xavante. A construção de precedentes deve, portanto, valorizar evidências qualitativas, memórias comunitárias e relatos orais como elementos centrais da narrativa jurídica.

A geopolítica da ocupação territorial indígena, conforme demonstrado por Deus (2021) e Furtado (2011), revela que os limites impostos por marcos normativos refletem disputas estruturais de poder e conflitos espaciais historicamente estabelecidos. A rigidez legislativa vinculada ao uso da terra frequentemente desconsidera práticas ancestrais de manejo territorial, como as rotas sazonais de caça, coleta e cultivo. Em função dessa dissonância, decisões judiciais voltadas à resolução de conflitos fundiários envolvendo os Xavante necessitam adaptar a interpretação das normas institucionais às dinâmicas

socioculturais locais, de modo a evitar que regras abstratas inviabilizem formas consuetudinárias de existência e organização coletiva.

A proposição de modelos deliberativos e motivacionais de fundamentação jurídica, alinhados a perspectivas pragmáticas, contribui para construção de julgamentos que articulam coerência argumentativa e impacto material. Referências como Held (1987), Putnam (2015) e Dufour (2013) oferecem subsídios teóricos para essa reconfiguração. Held sustenta que o diálogo intersubjetivo fortalece o processo democrático; Putnam enfatiza a relevância do capital social para a institucionalização da confiança entre Estado e sociedade; Dufour, por sua vez, problematiza os limites da racionalidade liberal na produção de justiça. A convergência desses referenciais permite vislumbrar a reforma de práticas judiciais que resultem na formação de precedentes sensíveis à diversidade cultural, promovendo efetividade dos direitos fundamentais dos Xavante e contribuindo para consolidação de uma justiça intercultural e responsiva.

5 FORMAÇÃO JUDICIAL INTERCULTURAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS

A capacitação continuada de magistrados para atuação em litígios envolvendo povos originários requer estruturação pedagógica que contemple módulos específicos sobre interculturalidade e pluralismo jurídico decolonial, conforme analisado por Kuteten e Albernaz (2021) em estudos sobre jurisprudência envolvendo comunidades quilombolas. A inclusão de disciplinas voltadas à história constitucional brasileira sob perspectiva decolonial, aliada à abordagem das práticas consuetudinárias dos Xavante, conforme proposto por Ferro (2023),

oferece base para que magistrados compreendam a profundidade cultural dos litígios. Paralelamente, cursos baseados nas formulações de MacCormick e Murphy, ao tratarem de democracia judicial, motivação e ponderação contextualizada, contribuem para fortalecer a capacidade institucional de adaptação diante da diversidade normativa indígena.

Programas de intercâmbio entre sistemas judiciais, como os observados em países plurinacionais mencionados por Moreira et al. (2022), oferecem subsídios para o desenvolvimento de práticas comparadas, com ênfase em experiências exitosas de funcionamento de câmaras indígenas. A inserção de atividades simuladas, como audiências bilíngues baseadas nos protocolos de saúde Yanomami sistematizados por Athila (2022), representa ferramenta concreta para o desenvolvimento de habilidades práticas entre magistrados, servidores e intérpretes. Esse formato de treinamento favorece a legitimação social das decisões judiciais, reduz impactos de atritos culturais e fortalece a percepção comunitária de justiça efetiva.

A formação continuada de operadores do direito deve incluir, também, metodologias etnográficas básicas, conforme recomendação de Rodrigues (2024) e Castro, Sousa e Vargas (2024), que permitam maior aproximação entre magistrados e as técnicas de produção de laudos antropológicos. Capacitar juízes para conduzir entrevistas com anciãos, registrar narrativas orais e interpretar contextos comunitários eleva a qualidade das provas e evidencia o valor das formas narrativas tradicionais. Zuin, Panke e da Silva (2021) reiteram que o reconhecimento da língua natural como instrumento de empoderamento fortalece a atuação jurídica das comunidades e consolida práticas de escuta intercultural efetiva.

No plano tecnológico, a adoção de plataformas de ensino a distância bilíngues, conforme proposto por Plens e Pereira (2024), amplia o alcance da capacitação e viabiliza a participação de magistrados lotados

em regiões remotas, superando barreiras logísticas. A disponibilização de conteúdos autoadministráveis sobre democracia deliberativa, com base em Held (1987), e capital social, segundo Putnam (2015), viabiliza atualização contínua de referenciais teóricos. Estudos mais recentes, como os de Soares (2022) sobre protagonismo feminino e práticas de cuidado indígena, podem ser incorporados periodicamente para manter o programa alinhado aos debates contemporâneos.

A efetividade dos programas de formação demanda mecanismos de avaliação sistemática, que articulem indicadores qualitativos e quantitativos, conforme metodologias de monitoramento de políticas públicas desenvolvidas por Deus (2021). A aplicação de pesquisas de satisfação junto a lideranças Xavante, com base em instrumentos sugeridos por Furtado (2011), oferece feedback direto da comunidade, reforçando a responsividade institucional. Esses mecanismos de avaliação contínua asseguram a adequação dos conteúdos ministrados às realidades vividas pelas populações indígenas e às necessidades concretas dos juízes que os aplicam.

Parcerias estratégicas com instituições de ensino superior, especialmente universidades que ofertam cursos em geografia crítica, etnologia e antropologia do direito, conforme defendido por Dahl, Limongi e Paciornik (1997) e Dufour (2013), enriquecem os módulos formativos com abordagens multidisciplinares. A participação ativa de pesquisadores e docentes na elaboração dos materiais didáticos assegura maior coerência entre teoria e prática, promovendo a construção de decisões mais fundamentadas e sensíveis à realidade intercultural dos Xavante.

A criação de varas judiciais indígenas especializadas, conforme sugestão de Kuteten e Albernaz (2021), constitui medida estruturante para centralizar expertise, adaptar rotinas aos calendários cerimoniais e permitir maior consistência jurisprudencial. Essas unidades devem

ser integradas por magistrados com formação intercultural e funcionar de forma itinerante, como propõem Moreira et al. (2022), garantindo presença efetiva do Judiciário em territórios indígenas e consolidando um novo paradigma de acesso à justiça para os povos originários.

Protocolos processuais com enfoque intercultural, concebidos a partir das experiências das comissões de verdade descritas por Plens e Pereira (2024), instituem fases de escuta prévia junto às lideranças Xavante e registro bilíngue dos depoimentos coletados. A adoção do princípio da motivação, nos moldes teóricos desenvolvidos por MacCormick, exige que os julgados expressem não apenas os fundamentos jurídicos formais, mas também revelem o reconhecimento das normas consuetudinárias vigentes nas comunidades, conforme propõe Rancière (2015) ao tratar da dissensão e da pluralidade no campo jurídico. Tais elementos qualificam a decisão como instrumento de diálogo entre sistemas normativos distintos, promovendo maior legitimidade intercultural.

O dimensionamento dos prazos processuais de maneira compatível com os ritos tradicionais e os deslocamentos geográficos necessários, segundo os diagnósticos territoriais apresentados por Deus (2021), evita a imposição de penalidades a partes que não podem observar prazos estatais rígidos. Essa flexibilização temporal, inspirada nos protocolos de saúde Yanomami sistematizados por Athila (2022), pode ser operacionalizada por meio de resoluções administrativas internas dos tribunais, articuladas com portarias relativas à demarcação territorial, conforme analisado por Rodrigues (2024). A adequação temporal do processo à realidade cultural Xavante assegura o respeito ao tempo ritualístico das comunidades e reduz distorções institucionais.

A realização de audiências coletivas, conforme delineado nos estudos de Castro, Sousa e Vargas (2024), constitui estratégia que valoriza a forma de governança clânica dos Xavante, permitindo

que assembleias comunitárias decidam de forma autônoma sobre encaminhamentos processuais. Esse arranjo procedimental amplia o protagonismo coletivo e incorpora as recomendações de Soares (2022) no tocante à participação de mulheres indígenas em deliberações formais. Ao fortalecer dinâmicas assembleares, essa metodologia reforça o capital social comunitário, conforme delineado por Putnam (2015), e amplia os canais de legitimidade para decisões que impactam coletivos historicamente silenciados.

A elaboração de cartilhas bilíngues e glossários jurídicos ajustados ao vocabulário xavante, conforme propõem Zuin, Panke e da Silva (2021), promove transparência e facilita o acompanhamento do processo por integrantes das comunidades. A disponibilização desses materiais em plataformas digitais acessíveis, segundo as diretrizes de linguagem cidadã propostas por Guimarães (2007), amplia o alcance da informação jurídica e empodera os participantes indígenas ao oferecer suporte linguístico e cognitivo para cada etapa procedimental. Essa prática reduz a assimetria entre os sujeitos processuais e fortalece os princípios de publicidade e participação.

A institucionalização de sessões de conciliação intercultural, orientadas pela lógica pragmatista de Murphy, estimula a resolução consensual de conflitos e previne a judicialização excessiva de litígios que poderiam ser solucionados por vias restaurativas. A incorporação de práticas de justiça restaurativa nos contextos comunitários, inspiradas nas experiências Yanomami sistematizadas por Athila (2022), representa modelo viável para renegociação de disputas fundiárias em bases culturais específicas. A formalização dessas estratégias contribui para a construção de precedentes que respeitem as complexidades normativas locais e promovam a harmonização entre justiça estatal e autonomia indígena.

A institucionalização de indicadores interculturais, conforme proposto por Deus (2021), possibilita a avaliação de dimensões que extrapolam os resultados jurídicos imediatos, alcançando variações significativas na qualidade de vida das comunidades Xavante em decorrência das decisões judiciais proferidas. Esses indicadores devem contemplar o acesso efetivo à terra, a consolidação da educação intercultural, tal como delineada por Moreira et al. (2022), e a implementação de políticas de saúde diferenciada, conforme analisado por Athila (2022), compondo uma métrica ampla e sensível à diversidade sociocultural.

A elaboração de relatórios pós-julgamento, inspirada em auditorias de políticas públicas realizadas por Furtado (2011), deve ser submetida à apreciação de painéis interdisciplinares integrados por antropólogos, juristas e representantes indígenas, conforme defendido por Uribe e Fernandes (2021). Essa instância técnica assegura o acompanhamento constante da efetividade das sentenças no contexto socioterritorial Xavante, promovendo um ciclo contínuo de revisão, correção de rumos e aprimoramento institucional fundado em evidências.

Pesquisas qualitativas baseadas em métodos etnográficos, estruturadas segundo as orientações metodológicas de Silva e Panke (2021) para o registro de narrativas orais, viabilizam a documentação das percepções comunitárias em torno de justiça e legitimidade. A integração dessas evidências com estatísticas oficiais, à luz das discussões críticas de Zizek (2010) sobre discursos de massa e neutralização da diferença, permite compreender resultados processuais não apenas em termos quantitativos, mas também sob a perspectiva vivida pelos sujeitos coletivos afetados.

O uso de plataformas georreferenciadas, ancorado na abordagem geográfica de Deus (2021), viabiliza o mapeamento da implementação

de medidas judiciais relativas à demarcação de terras e à provisão de serviços públicos. Esse monitoramento territorial revela áreas cobertas e lacunas na execução das decisões, fornecendo subsídios para adaptações regulatórias e práticas judiciais mais sintonizadas com os padrões de mobilidade e uso tradicional do território xavante, contribuindo para decisões responsivas à realidade local.

A periodicidade das avaliações deve obedecer a ciclos anuais, inspirando-se em modelos institucionais como os discutidos por Diamond (1999), o que permite atualização de protocolos judiciais e incorporação de achados teóricos recentes, como os de Dahl (2017) e Held (1987). Relatórios sistemáticos fundamentam propostas de aprimoramento dos fluxos processuais, reforçam a formação continuada de magistrados e oferecem subsídios para o redimensionamento de varas especializadas, consolidando avanços institucionais.

A ampla divulgação dos resultados, orientada pelos princípios de publicidade e motivação de MacCormick, fortalece a cultura cívica deliberativa delineada por Almond e Verba (2015), ao passo que assegura accountability por meio da transparência. A produção e publicação de relatórios multilíngues, conforme recomendações de Soares (2022) e Dufour (2013), contribui para construção de repertório institucional de boas práticas, que pode servir como referência para outras cortes. Essa sistematização reforça a efetividade dos direitos fundamentais dos Xavante e reafirma o compromisso do Judiciário com a interculturalidade e a justiça plural.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise empreendida ao longo deste trabalho permitiu constatar que a efetivação dos direitos fundamentais dos povos indígenas,

especialmente dos Xavante, está intrinsecamente ligada à capacidade do sistema de justiça brasileiro de incorporar práticas institucionais que respeitem a diversidade epistêmica e a interculturalidade. A partir do estudo dos marcos constitucionais, das normas internacionais como a Convenção 169 da OIT e da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, observou-se que o ordenamento jurídico nacional já contém princípios que reconhecem o pluralismo jurídico. No entanto, sua aplicação concreta ainda encontra entraves estruturais, normativos e simbólicos que dificultam a realização plena desses direitos no cotidiano judicial.

A investigação demonstrou que o reconhecimento formal de direitos originários, previsto no artigo 231 da Constituição Federal, esbarra em obstáculos como a rigidez processual, a ausência de intérpretes bilíngues e a centralização de competências em varas não especializadas (Rodrigues, 2024; Ferro, 2023; Kuteten; Albernaz, 2021). A carência de mecanismos de escuta qualificada, o desprezo às narrativas orais e a falta de protocolos adequados para registro de práticas consuetudinárias comprometem a legitimidade das decisões judiciais, além de perpetuar uma lógica assimilacionista. Nesse contexto, a atuação do Judiciário, quando descolada da realidade indígena, reforça o hiato entre a letra da lei e a vivência dos povos tradicionais.

Por meio do diálogo com autores como Soares (2022), Athila (2022), Uribe e Fernandes (2021), entre outros, verificou-se que experiências exitosas de inclusão, como os protocolos bilíngues na saúde Yanomami e os litígios estratégicos que resultaram em mudanças administrativas, devem inspirar práticas jurisdicionais mais responsivas. A adoção de cartilhas jurídicas bilíngues, sessões de conciliação intercultural, painéis interdisciplinares e formação continuada de magistrados com ênfase em pluralismo jurídico e práticas indígenas constituem medidas estruturantes. Tais estratégias

são compatíveis com uma concepção ampliada de democracia judicial, conforme proposto por MacCormick, Murphy e Putnam, em que o Judiciário deixa de ser apenas um órgão de controle e passa a ser espaço de escuta e reconstrução dialógica da justiça.

Com base na análise crítica das experiências jurídicas nacionais e internacionais, defende-se a criação de varas especializadas com atuação itinerante em territórios indígenas, conforme recomendam Moreira et al. (2022) e Plens e Pereira (2024). Tais varas devem contar com equipe técnica formada por intérpretes especializados, antropólogos e juristas com formação em Direito Indígena, garantindo que as decisões estejam ancoradas em parâmetros éticos, linguísticos e culturais condizentes com os contextos locais. A inclusão de representantes Xavante em painéis deliberativos e consultivos pode fortalecer a confiança institucional, assegurar maior transparência e contribuir para a redução de conflitos pós-decisórios.

As comissões de verdade, ao integrarem relatos orais, vestígios arqueológicos e análises antropológicas, demonstraram seu potencial para subsidiar ações judiciais e políticas públicas reparatórias. No entanto, como ressaltam Castro, Sousa e Vargas (2024), esse potencial só se concretiza se houver articulação com políticas permanentes de reparação simbólica e material. A implementação de indicadores interculturais e relatórios pós-julgamento avaliados por instâncias mistas, compostas por lideranças indígenas e especialistas, surge como mecanismo de monitoramento institucional e de accountability, conforme proposto por Deus (2021) e Furtado (2011).

A pesquisa alcançou o objetivo de identificar e analisar as condições institucionais para a efetivação dos direitos Xavante na justiça brasileira contemporânea, apresentando um conjunto de recomendações integradas que podem qualificar a atuação do Judiciário. No entanto, os desafios persistem, e a consolidação de um

modelo verdadeiramente plural exige esforços contínuos. A aliança entre universidades, movimentos sociais, órgãos públicos e redes de advocacia indígena é fundamental para sustentar esse processo.

Finalmente, propõe-se que futuras pesquisas explorem o impacto concreto das decisões judiciais em territórios indígenas por meio de estudos de caso etnográficos, mapeamento georreferenciado de políticas públicas e análises comparadas entre diferentes grupos étnicos. Esse campo de investigação é promissor para ampliar o repertório de práticas interculturais e consolidar um Estado de Direito mais inclusivo, deliberativo e efetivamente comprometido com a dignidade dos povos originários.

REFERÊNCIAS

ALMOND, Gabriel A.; VERBA, Sidney. **The civic culture: political attitudes and democracy in five nations**. Princeton: Princeton University Press, 2015.

ATHILA, Adriana Romano. Epidemias, protagonismos y derechos específicos de salud: la creación del Distrito Sanitario Yanomami y la política de salud indígena en Brasil (1991-2021). **Astrolabio. Nueva Época**, n. 28, p. 21-30, 2022.

BAUDRILLARD, Jean. **À sombra das maiorias silenciosas: o fim do social e o surgimento das massas**. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.

BOBBIO, Norberto. **O futuro da democracia**. rev. e ampl. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

CASTRO, Iára Quelho; SOUSA, Miguel Rodrigues; VARGAS, Vera Lúcia Ferreira. Os povos indígenas e a ditadura: violência, memória e história. **História Revista**, v. 29, n. 1, p. 123-140, 2024.

DAHL, Robert A. **Madisonian democracy**. In: MADISON, James. Routledge, 2017. p. 271–300.

DAHL, Robert A.; LIMONGI, Fernando; PACIORNIK, Celso. **Poliarquia: participação e oposição**. São Paulo: Edusp, 1997.

DEUS, José Antônio Souza. O paradigma multiculturalista e o protagonismo etnopolítico das comunidades indígenas: Um olhar Geográfico Contemporâneo e crítico sobre a questão. **Geopauta**, v. 5, n. 1, 2021.

DIAMOND, Larry. **Developing democracy: toward consolidation**. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.

DUFOUR, DanyRobert. **A cidade perversa: liberalismo e pornografia**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.

FERRO, Sérgio. Política indigenista e história constitucional brasileira em perspectiva decolonial. **Diké-Revista Jurídica**, v. 22, n. 24, p. 2-32, 2023.

FREUD, Sigmund. **O malestar na cultura**. Porto Alegre: L&PM, 2010.

FURTADO, Celso. **Raízes do subdesenvolvimento**. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.

GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. **Desafios brasileiros na era dos gigantes**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.

GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. **Quinhentos anos de periferia**. 5. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2007.

HELD, David. **Models of democracy**. Stanford: Stanford University Press, 1987.

KUTETEN, Felipe Hiroshi; ALBERNAZ, Renata Ovenhausen. **Inclusão, multiculturalismo ou pluralismo jurídico decolonial?** análise das decisões judiciais envolvendo comunidades quilombolas tradicionais no Rio Grande do Sul. Revista acadêmica da Faculdade de Direito de Recife. Recife. Vol. 93, n. 2 (Out. 2021), p. 183-195, 2021.

LIJPHART, Arend. **Democracies: patterns of majoritarian and consensus government in twentyone countries**. New Haven: Yale University Press, 1984.

MOREIRA, Vânia Maria Losada et al. **Povos indígenas, independência e muitas histórias: repensando o Brasil no século XIX**. Editora CRV, 2022.

PLENS, Claudia; PEREIRA, Flávio. Comissões da Verdade e Direitos Indígenas: Desvendando Injustiças Históricas por meio da e Justiça de Transição e da Arqueologia. **Cadernos do LEPAARQ (UFPEL)**, p. 06-35, 2024.

PUTNAM, Robert D. **Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015.

RANCIÈRE, Jacques. **O ódio à democracia**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2015.

RODRIGUES, Gilberto Cesar Lopes. Educação Escolar Indígena: histórico de uma conquista: Educación Escolar Indígena: historia de una conquista. **Revista Cocar**, v. 21, n. 39, 2024.

SCHUMPETER, Joseph A. **Capitalismo, socialismo e democracia**. São Paulo: SciELO Editora UNESP, 2017.

SOARES, Inês Virgínia. **Mulheres, direito e protagonismo cultural**. Almedina Brasil, 2022.

TODOROV, Tzvetan. **Os inimigos íntimos da democracia**. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

URIBE, Mauricio Alejandro Diaz; FERNANDES, Fernando Roque. De la homogenización a la diversidad: reflexiones sobre las emergencias indígenas y la ciudadanía multicultural en Colombia y Brasil. **Jangwa Pana: Revista de Ciencias Sociales y Humanas**, v. 20, n. 3, p. 373-397, 2021.

ZIZEK, Slavoj. **CONTRA OS DIREITOS HUMANOS**. Revista *Mediações*, Londrina, v. 15, n. 1, p. 11–29, jan./jun. 2010.

ZUIN, Aparecida Luzia Alzira; PANKE, Luciana; DA SILVA, Marcelo Xavier. A função social da língua natural indígena: de sujeitos eleitores a atores sociais no processo eleitoral. **Estudos Eleitorais**, v. 15, n. 2, p. 129-166, 2021.

COMUNICAÇÃO DIGITAL E A CONSTRUÇÃO DO RACISMO EM FACE DA MULHER INDÍGENA: PERSPECTIVAS DECOLONIAIS

Êmelyn Linhares¹

Marlei Ângela Ribeiro dos Santos²

INTRODUÇÃO

Sob o prisma histórico, a discriminação étnico cultural e o preconceito assentados nos marcadores sociais do colonialismo e das colonialidades são os mais sólidos e definidores frente a tantas outras concepções humanas. As primeiras alusões à mulheres foram ilustradas por homens, que estabeleceram a desigualdade de gênero e implantaram uma doutrina patriarcal fundada no ideário colonial.

A subalternidade feminina é difundida pela colonialidade e se pulveriza por diversos segmentos nas sociedades pós-coloniais. Isso torna evidente a distância entre o protagonismo e a figura da mulher, levando a minimização as vozes femininas, que incidem na mídia, em anúncios informativos, notícias, informações, narrações e outros em razão do estereótipo feminino.

Com os corpos marcados pelo ideário do colonialismo, as mulheres são levadas a minimização e subalternização, tendo como

¹ Mestre em Interdisciplinaridade e Ciências Humanas/UFS. Doutora em Direito UNOESC. E-mail: emy_dr@outlook.com.br

² Mestre em Direito UNOESC. Doutora em Direito/UNOESC. E-mail: marlei.ange.adv@hotmail.com

resultado a dependência e posse do elemento masculino. Tal fato, também atinge as mulheres indígenas, certamente, de diversas formas, sofrendo pela desigualdade, pela não aceitação de suas identidades, com leis tão somente decorativas, injustiça social e institucional, baixa representatividade e visibilidade, além do racismo estrutural e institucional, seja pela sociedade ou sua própria comunidade.

Problematicamente, as relações de desigualdade de gênero estão insertas no âmbito dos meios digitais, especialmente, pela propagação de informações de cunho machistas com a superexposição da imagem da mulher indígena estereotipada. Desse modo, pretende-se analisar a trajetória histórica da mulher indígena frente à comunicação digital no Brasil, uma vez que o discurso colonial hegemônico e patriarcal é veiculado pelos meios de comunicação digital em face dos povos originários, especialmente mulheres que são duplamente subalternizadas pelo “gênero” e etnia, motivo pelo qual são violados tanto os direitos fundamentais como o direito à imagem, identidade e à liberdade de expressão.

A escrita apoia-se no ordenamento jurídico nacional, bem como teorias decoloniais do grupo interdisciplinar Modernidade/Colonialidade formado no fim dos anos 90, capitaneado por Aníbal Quijano, e seguido por Maldonado-Torres, Mignolo e outros. Utiliza-se como procedimento metodológico o bibliográfico-investigativo com aporte do ordenamento jurídico brasileiro e internacional, bem dados estatísticos. O trabalho divide-se em três partes: A construção e trajetória do discurso colonial hegemônico e patriarcal contra homens e mulheres indígenas; Discurso colonizador e racista contra o corpo e identidade da mulher indígena; Epistemologias do sul: desconstruindo discursos racistas e machistas pelo olhar da mulher indígena.

2 A CONSTRUÇÃO E TRAJETÓRIA DO DISCURSO COLONIAL HEGEMÔNICO E PATRIARCAL CONTRA HOMENS E MULHERES INDÍGENAS

As arbitrariedades contra os povos originários iniciaram em 1500 por intermédio do colonialismo³ implantado pelos europeus no território brasileiro, evento propulsor da hegemonia eurocêntrica, do capitalismo e patriarcado, todos elementos que contribuíram para a definição de identidades, raças e a implementação da estrutura opressora por meio da cor, gênero⁴ e classe. Por instrumento do colonialismo e das diversidades culturais, delinear-se as contendas e desinformações, que resultaram na colonização de terras e corpos, bem como no alastramento de violências nas esferas pública e privada. Com efeito, o menosprezo às idiossincrasias está relacionado à organização discriminatória e etnoracista que ultrapassam o campo ideológico e circundam as intuições até a contemporaneidade.

Boaventura de Sousa Santos (2020) sustenta que o colonialismo, o capitalismo e o patriarcado, também denominados pelo autor como os “três unicórnios” e “todopoderosos”⁵, são os principais meios de dominação que amparam a implementação das diversidades sociais, culturais e raciais mediante uma doutrinação constante. Estes unicórnios, muitas vezes, transfiguram-se em imperialismos, neocolonialismo, racismo e outros padrões classificatórios.

³ Maldonado-Torres (2007, p. 131) compreende o colonialismo como “uma relação política e econômica, na qual a soberania de um povo está no poder de outro povo ou nação, o que constitui a referida nação em um império”.

⁴ Butler (2019) anuncia que o gênero é a estilização repetida do corpo, um agrupamento de atos reiterados no núcleo de uma estrutura reguladora consistente e resistente, que se congela no tempo objetivando fabricar a aparência de uma substância, isto é, uma classe natural de ser. Acrescenta a autora as estruturas compulsórias são originadas pelas diversas forças que controlam a aparência social do gênero.

⁵ O autor justifica tais denominações em razão destes três mecanismos possuírem características similares como ferozes e selvagens, contudo, possuem também a fraqueza de sucumbir à sagacidade daquele que os identificar.

Ainda sobre tais mecanismos, a instituição das subalternidades na modernidade amparam a padronização geopolítica dos saberes, que foi estruturado pelo colonialismo. Mignolo (2003) afirma que as narrativas são emancipatórias e colonizadores, as quais são baseadas nas diferenças imperiais, culturais e coloniais. Acrescenta o autor:

A diferença é, de fato, ‘colonial’, antes que ‘cultural’. Ou seja, é a diferença que justifica a exploração, o controle e a dominação de um setor da população sobre outros. ‘Racismo’ e ‘racialização’ são consequências da ‘diferença colonial’. Enquanto a ‘diferença cultural’ remete ao relativismo, a ‘diferença colonial’ remete à libertação dos poderes imperiais epistêmicos. A descolonização epistêmica (legal, econômica, religiosa) é predicada na necessidade de “libertar” as opressoras vida natural e relações sociais através da reprodução da ‘diferença colonial’, ou seja, definindo e hierarquizando povos e nações em relação a um padrão ideal de sociedade, de liberdade, de democracia, de mercado, de relações laborais, e da organização legal. (MIGNOLO, 2003, p. 440).

Contribuindo com tal entendimento, Gonzalez (2020) afirma que os indivíduos integrantes de grupos racialmente subordinados são as minoridades que foram incorporadas pelo processo colonizatório. Aliás, este fabrica narrativas heroicas acerca das origens e propósitos da modernidade⁶. No campo dos saberes, a colonialidade⁷ atua permanentemente na reprodução dos critérios e estruturas de existência econômica, cognitiva e política. Desse modo, o racismo tem papel

⁶ Maldonado-Torres (2019) assevera que a colonialidade também pode ser nominada como “modernidade/colonialidade”, ou seja, maneira mais completa de se referir também à modernidade ocidental.

⁷ Maldonado-Torres conceitua a colonialidade como “um padrão de poder que emergiu como resultado do colonialismo moderno, mas em vez de estar limitado a uma relação formal de poder entre dois povos ou nações, se relaciona à forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se articulam entre si através do mercado capitalista mundial e da idéia de raça” (2007, p. 131).

fundamental na determinação da divisão de quem tem ou não direitos, e vai além, como fonte organizadora daqueles que podem ou não construir e reproduzir conhecimentos e informações (BERNARDINO-COSTA, GROSGOUEL, MALDONADO-TORRES, 2019).

Com a chegada dos europeus e suas ideologias hegemônicas, foi implantado no território brasileiro um discurso legitimando as violências contra os povos indígenas. Certamente, no Brasil, o colonialismo, a colonialidade e o capitalismo se concatenaram originando os conflitos entre diversos grupos sociais que são submetidos ao padrão eurocêntrico. Portanto, as características que distinguem as classificações que representam a submissão e o comando, são resultados do poder e controle fundados na experiência europeia deturpada.

As violências são consumadas pelo Estado, bem como pela própria sociedade em variados âmbitos, desprezando culturas, identidades e grupos considerados díspares e que afrontam as políticas de embranquecimento, que excluem e repugnam os povos indígenas. A modernidade/colonialidade tece relações dominantes, de forma epistêmica, racial, de gênero, sexual, ecológica, espacial, de crenças, e subjetividades (GROSGOUEL, 2019).

O capitalismo, prejudicando as minorias raciais, controla a discriminação de grupos oprimidos e auxilia na inferiorização da mulher em relação ao homem, criando “uma sociedade profundamente injusta, porque hierárquica” (GONZALEZ, 2020, p. 250). Ora, não se trata somente de uma cegueira epistemológica que tem o princípio na compartimentação categórica, mas sim uma organização dos eixos da colonialidade, capitalismo e patriarcado que ordem os conflitos pelo controle nos meios de dominação e discursos (LUGONES, 2014).

Do discurso em face dos povos originários, notabiliza-se a ampla propagação da violência patriarcal, que é ligada ao sexismo, ou seja, à dominação masculina (HOOKS, 2019). A oportunidade de estabelecer

o patriarcado⁸ surgiu com a tomada do poder pelos homens, que usurparam da sexualidade e reprodução feminina, construindo uma ordem simbólica fazendo uso da religião, mitos e explicações oriundas na naturalidade das estruturas possíveis (REGUANT, 2001).

Dessa forma, são característicos da modernidade/colonialidade o patriarcado, heterossexualismo e o dimorfismo biológico e, conseqüentemente, o duplo processo de inferiorização das mulheres pelo gênero e cor (LUGONES, 2014). Acerca dos efeitos destes processos opressores, e relacionando aos povos indígenas, especialmente às mulheres indígenas, Anne McClintock descreveu uma cena colonial pintada no século XVI, na qual Jan Van der Straet apresenta a “descoberta” da América como um encontro erotizado entre um homem e uma mulher:

Despertada de sua languidez sensual pelo épico recém-chegado, a indígena estende uma mão convidativa, que insinua sexo e submissão. [...] Vespúcio, o recém-chegado semelhante a Deus, está destinado a inseminar-la com as sementes masculinas da civilização, a frutificar a selva e a subjugar as cenas revoltantes do canibalismo vistas ao fundo. [...] A cena inaugural do descobrimento cheira não só a megalomania masculina e agressão imperial, mas também a ansiedade e paranoia masculinas. [...] Os canibais parecem mulheres e estão assando num fogo uma perna humana (MCCLINTOCK, 2010, p. 50-51).

Com o colonialismo, o patriarcado primeiramente se manifesta pela hierarquia familiar, posteriormente, se transpõe para demais relações que circundam a vida em sociedade, estando presente nas metrópoles raciais, coloniais e periferias, resultando em uma estrutura

⁸ Patriarcado é conceituado por Dolores Reguant (2001) como um modo de organização política, econômica, religiosa e social estabelecida na ideia da liderança e soberania do homem, isto é, da supremacia do homem sobre a mulher.

em variados âmbitos ensaiados pelo poder (SEGATO, 2018). Sobre isso, Mignolo reflete sobre o vínculo do patriarcado com o capitalismo e a colonialidade:

El patriarcado regula las relaciones sociales de género y también las preferencias sexuales y lo hace en relación a la autoridad y a la economía, pero también al conocimiento: qué se puede/debe conocer, quiénes pueden y deben saber. Mujeres, Indios y Negros estaban excluidos de acceso a lo que se considera la cúpula del saber. Sin duda fundamental, la colonialidad del poder opera a varios niveles y no a ese único nivel. De manera que la economía capitalista, cuya fundación histórica localizamos en el siglo XVI conjuntamente con la puesta en marcha de la matriz colonial, es uno de los niveles. Sería difícil controlar el mundo solo económicamente, sin el control del conocimiento y de la subjetividad que justifica el control de los otros niveles (MIGNOLO, 2014, p. 10-11).

Certamente, o colonialismo, a colonialidade, o capitalismo e o patriarcado atuaram e continuam em movimento com o fim de reprimir e ocultar os direitos indígenas, o que o fazem com a disseminação dos discursos hegemônicos. O racismo e preconceito étnico representam o extermínio das comunidades indígenas, juntamente aos seus saberes, memórias, línguas, tradições e direitos, revertendo em vulnerabilidades à estas pessoas, especialmente às mulheres indígenas.

Os efeitos dos discursos contra os indígenas perpassa o âmbito estatal, ingressando, de forma estrutural, nas instituições privadas, no mercado, nas atividades televisivas, de radiodifusão e na comunicação digital. Permanece no Brasil a mentalidade colonizada e colonizadora que ampara o discurso que estereotipiza e promove o racismo contra os povos tradicionais, renegando suas identidades, memórias e trajetórias, desatendendo a autodeterminação destes povos.

Seja pelo ordenamento jurídico ou pela difusão de discursos etnoracistas, os povos indígenas são discriminados e criminalizados pelo simples fato de serem indígenas. A inaceitação e rejeição, em específica contra a comunidade originária, tornou-se ‘naturalizada’, prooagandeando a imagem do “índio” inimigo e favorecendo a segregação desta e outras tantas minoriais (especialmente de mulheres pertencentes a estes grupos).

3 DISCURSO COLONIZADOR E RACISTA CONTRA O CORPO E IDENTIDADE DA MULHER INDÍGENA

De fato, o Brasil constituiu-se pelas ideologias colonizadoras europeias, portanto, a mecanização da sociedade, cultura, tradições e concepções indígenas continuam sofrendo apagamentos de tudo que compõe a intersubjetividade e a coletividade ancestral. Com a expansão dos conceitos e percepções hegemônicas, ergueram-se barreiras à voz e vez das pessoas indígenas.

A colonialidade, o capitalismo e o patriarcado são concretos e visíveis na comunicação digital e na mídia numa totalidade. Aqueles agem na garantia e fortificação do poder colonial, certificando as divisões de classe, raça e gênero na sociedade e no espaço virtual. O único conhecimento e discurso considerado racional é o eurocentrado, o qual naturaliza as violências sofridas por aqueles considerados inferiores pelo padrão de poder. Tanto os espaços geográficos, os espaços virtuais/digitais também possuem limitações de locais para determinados indivíduos, ou seja, a aceitação ou não do discurso e imagem se vincula com a identidade da pessoa.

Saffioti (2013, p. 234) esclarece que a raça realiza “a função de símbolo da condição econômica dos indivíduos”, e esta incumbência

compreende as relações díspares de poder por meio da miscigenação. Este e tantos outros fatos, refletem no contexto vivenciado por mulheres indígenas diante da inconstância cultural, iniciada em 1500, que firmou seus papéis na sociedade brasileira. Diante da inevitável normalização e naturalização das divisões de raça e sexo, originou-se a bifurcação no mundo social que monopoliza corpos e *habitus* dos agentes, procedendo na sistematização de concepções, discernimentos e ações (BOURDIEU, 2017).

À vista disso, depreende-se que a percepção de parte da população brasileira foi edificada de modo imperialista, unificando a violência epistêmica e a gradatividade do conhecimento da civilização, que resulta a manutenção da mulher, especialmente a indígena, em posição subalterna (SPIVAK, 2010). Lugones bem explana sobre como mulheres não brancas são vistas:

En este sentido, el capitalismo eurocentrado global es heterosexual. Creo que es importante que veamos, mientras intentamos entender la profundidad y la fuerza de la violencia en la producción tanto del lado oculto/oscuero como del lado visible/claro del sistema de género moderno/colonial, que esta heterosexualidad ha sido coherente y duraderamente perversa, violenta, degradante, y ha convertido a la gente ‘no blanca’ en animales y las mujeres blancas en reproductoras de “La Raza” (blaca) y de “La Clase” (burguesa) (LUGONES, 2014, p. 33, grifo das autoras).

Em outras palavras, as mulheres não brancas são observadas como animais, uma vez que são consideradas “sem gênero”, ainda que consideradas do sexo feminino, são marcadas pela ausência do padrão de feminilidade hegemônico. A mulher indígena e colonizada aufere *status* inferior ao próprio gênero feminino que é prescrito, assim, não usufruem dos “privilégios” que mulheres brancas possuem. Lugones

(2014) acrescenta que mulheres indígenas da América, durante o período pré-colonial, possuíam status superior de mulheres brancas no capitalismo eurocentrado. Contudo, atualmente as circunstâncias são manifestamente diversas.

De acordo com o Relatório contra a violência Indígena (CIMI, 2021), em 2020, foram registrados 15 casos de racismo e discriminação étnico-culturais contra os povos indígenas. Tal número revela apenas uma parcela minúscula da realidade enfrentada de norte a sul do Brasil. No relatório é ressaltado acerca do local de ocorrência do crime de racismo, isto é, nas redes sociais:

A maior parte dos casos ocorreu através das redes sociais (8 registros). São apresentados nesta amostragem: 2 casos abrangendo todos os povos indígenas do Brasil; casos registrados nos estados do Acre (1), Mato Grosso (2), Mato Grosso do Sul (4), Paraná (2), Roraima (1), São Paulo (1) e Tocantins (2) (CIMI, 2021, p. 169)

A lógica colonial, patriarcal e capitalista carrega consigo ordens sociais, políticas, econômicas, culturais, e por consequência, ordena as concepções dos indivíduos, especialmente, quando da comunicação digital (GORDON, 2019). Logo, a vinda da sociedade da (des) informação é anterior ao mundo digital/virtual, desde à colonização do país a verdade é mantida em segundo plano. Muitas informações hoje veiculadas acabam por retratar e conservar uma falsa realidade e imagem dos povos tradicionais. Neste contexto, destaca-se o alastramento de comentários sexistas e racistas contra as mulheres indígenas, auxiliando na projeção de opiniões ardilosas e criminosas por meio do espaço virtual.

Palavras, opiniões e informações divulgadas possuem a característica de durabilidade e onipresença no recinto digital,

proporcionando a violação e desrespeito aos direitos e garantias fundamentais, criando assim, um conflito entre os direitos dos interlocutores. A legitimação de fronteiras devastadoras ocorre rotineiramente e fere o direito à expressão, de imagem e de não discriminação das mulheres indígenas. A propagação da imagem feminina indígena é assentada no saber colonizado, que rege as relações na sociedade e distancia quem é considerado dessemelhante as exigências hegemônicas.

O alvo principal da violação de direitos é a mulher indígena. Embora o reconhecimento dos povos tradicionais pela Constituição Federal de 1988, os direitos específicos desta coletividade continuam sendo desrespeitados. O homem indígena é pouco notado pelo ordenamento jurídico e sociedade, no entanto, a mulher indígena desaparece como sujeito de direito e pertencente à população brasileira.

As violências difundidas pelos discursos em face da mulher indígena são compostas pelo preconceito de gênero e raça/etnia, de forma sólida define trajetórias árduas e carentes de humanidade, sobressaindo a visão masculina sobre a feminina. A colonialidade possui assistência dos meios de comunicação digital na divulgação e fomento da ideia colonial de territorialização das terras e corpos indígenas, limitando a identidade originária feminina à circunstâncias negacionistas.

Sobre a imagem e discurso que incide sobre a mulher indígena, Tupinambá afirma que é constituído no saber colonizado, o que ridiculariza os povos originários e afasta a possibilidade de representatividade no século XXI:

Eu acho muito vergonhosa a forma como [...] retratam a mulher indígena, uma imagem deturpada ligada ao atraso, ridículo, exótico, erótico, com muitas coisas pejorativas. E mesmo assim muita gente ainda pensa que não existe preconceito contra indígenas no Brasil, são estereótipos tão presentes na sociedade que acabam

sendo aceitos e vistos como algo natural para algumas pessoas. E o que dizer sobre o recente comercial de bebida alcoólica, com “mulheres indígenas”, no caso atrizes vestidas de índias, com roupas inspiradas na de indígenas americanos, não-brasileiros, que aparecem para apagar a “fumaça” do churrasco de não-indígenas? O não-respeito às culturas indígenas. O grande desafio sem dúvida é a descolonização desse “saber colonizado. (TUPINAMBÁ, 2012).

As mulheres indígenas são mais vulneráveis em comparação à homens indígenas ou demais mulheres, tanto na própria comunidade como na sociedade, onde são constantemente vítimas de racismo e outras violências. A imagem e representação da mulher indígena é criada e reproduzida pela perspectiva de outrem que transmite repetições estereotipadas que não condizem com a realidade. Com isso, “a cultura popular do índio seja este entre-lugar de sobrevivência e resistência do discurso desse excluído que, assim, reconstrói sua identidade social em confronto com o discurso hegemônico que tenta reduzi-lo a um lugar subalterno” (GUERRA, 2012).

Ainda que silenciadas pelas opressões variadas, as mulheres indígenas lutam pela sua identidade, cultura e subjetividades, dentro e fora da mídia e do mundo virtual⁹. Atuantes nas redes sociais e na comunicação digital, mulheres indígenas criam seus espaços na batalha contra a hiperbolização de sua vida e trajetória histórica, visando cessar o tom exagerado de outrem, dialogar de forma harmônica e dignificar o seu “eu”. Acerca desta luta, Tupinambá aponta a força dos povos originários, especialmente no movimento indígena:

⁹ Ressalta-se que, no tocante às comunidades indígenas que residem nas terras indígenas e não da área urbana, fazem uso da rede de computadores (quando há), bem como da internet que é disponibilizada nas próprias escolhas da comunidade. Desse modo, seja por meio de computador ou de celular, utilizam a estrutura física disponibilizada nas escolhas, destas apenas 6,84% possuem laboratório de informática e apenas 14,73% tem acesso à internet (MEC, 2019).

Eu diria para minhas parentas de todas as etnias para não esquecerem quem elas são e não desistirem dos seus sonhos, mesmo que os rios, mares e lagoas fiquem salgados com nossas lágrimas. Não deixem ninguém as desrespeitar ou dizer o que podem fazer (TUPINAMBÁ, 2012).

As razões das denúncias realizadas pelas mulheres indígenas têm fonte no processo histórico de estigmas, exclusões e racismos. A invisibilidade da mulher indígena é de longa duração e releva as contendas e preconceitos da sociedade brasileira. As vivências destas mulheres originárias hão de ser reconhecidas sob diversas perspectivas, principalmente pela concepção de gênero.

4 EPISTEMOLOGIAS DO SUL: DESCONSTRUINDO DISCURSOS RACISTAS E MACHISTAS PELO OLHAR DA MULHER INDÍGENA

Sem dúvida, as mulheres indígenas possuem seus cursos e caminhos envoltos nas relações e vínculos entre a autoridade do homem e a heteronormatividade. Os mecanismos de individuação da mulher indígena são díspares do sistema hegemônico, o que impossibilita que seus direitos individuais tenham o mesmo significado e a mesma garantia para todas as pessoas (BIROLI, 2018).

Portanto, a intolerância frente aos meios de comunicação digital, atravessa as culturas, etnias, cor, “gênero” e classe, através dos discursos que consagram a desigualdade e menosprezam coletividades e identidades oprimidas, o que reflete na dificuldade ou não concretização de direitos, especialmente o direito de liberdade e expressão e voz destes grupos, em especial as mulheres indígenas.

O discurso é muito mais do que um conjunto de palavras e frases, sobretudo é um artifício que edifica um imaginário social específico, por efeito do controle e poder (RIBEIRO, 2019). Nota-se que a pessoa não indígena, mormente a branca, torna-se a vítima benevolente, transfigurando o opressor em oprimido e o oprimido em tirano (KILOMBA, 2019), assim é expreso na comunicação digital quando o assunto em discussão concerne às mulheres indígenas.

Em diversas publicações na internet, através de variadas plataformas (por exemplo, Youtube e Instagram), é possível verificar publicações e comentários racistas, preconceituosos e sexistas visando atacar as mulheres indígenas. Alguns comentários reiteram as ideologias colonizadoras e reproduzem o estereótipo das mulheres indígenas, por exemplo: “[...] Índia quer microfone e holofotes. Índia não quer mais apito [...]” (BBC NEWS BRASIL, 2021); “Seria mais útil se ela fosse plantar macaxeira pra tribo comer”, “India Fake da USP [...]” (TV CULTURA, 2021); “Já não fazem índios como antes [...]”, “Essa não é indígena nem aqui nem na China [...]”, “Pensei que índios andassem pelados, da mais pra índia mestiça bem branquinha e quase não tem olho puxado estranho!”, “Essa patricinha aí de franja? [...]” (BAND JORNALISMO, 2021); “É da tribo pau no kulll”, “Pra mim Índia verdadeira são aquelas que anda descalço e peitos a mostra” (38_KARABINA, 2021).

Discursos como os aludidos acima demonstram que a colonialidade e o machismo se fazem presentes no meio virtual quando do não reconhecimento do exercício dos direitos indígenas. Isso, demonstra a ideologia inserta e fundada na classificação social e a eliminação de grupos subalternos, reflexos da mentalidade eurocêntrica da sociedade que reitera o padrão de dominante e dominado nas esferas sociais e virtuais¹⁰.

¹⁰ Um caso de racismo realizado através da internet que ocorreu no Estado de Santa Catarina

A presença de indígenas nas redes e na comunicação digital representa a luta pela memória e o reconhecimento da história dos povos indígenas, buscando a restituição de suas identidades e o fim do extermínio, consolidando suas tradições, saberes, línguas e comunidades. A colonialidade do poder, do saber e do ser, ferramenta definidora dos padrões que controlam a sociedade, é reproduzida diariamente quando da disseminação de informações e discursos racistas e preconceituosos, violando os direitos dos povos tradicionais.

O colonialismo atribuiu traços específicos e estereotipados às mulheres indígenas, e, em processo de repetição pela colonialidade, é notável nos argumentos e falas publicadas e divulgadas que retratam estas mulheres a “invasoras” e negam suas identidades, mantendo-se as opiniões escassas de respeito e a violência estrutural diária quando da discussão dos direitos específicos indígenas. No Brasil, indígena é sinônimo de desobediência, criminalidade, vadiagem e improdutividade, e com efeito, tal compreensão consente a violação da identidade, imagem e coletividade indígena.

Os danos originados pelas informações e opiniões deturpadas publicadas na mídia ocorrem de variadas formas e estão interligadas com a violação dos direitos fundamentais dos povos tradicionais. Por isso, essencial a presença e incorporação destes povos na mídia, nas

teve repercussão, haja vista que desde o ano de 2012, o autor do crime mantinha uma página na internet com publicações falsas, mensagens racistas e proferia discurso de ódio contra o povo Guarani, que vive na terra indígena Morro dos Cavalos, no município de Palhoça. Sublinha-se que em setembro de 2020 o autor do crime foi condenado pela Justiça Federal do respectivo estado. A magistrada responsável pelo julgamento determinou a retirar da página do ar e condenou ao pagamento indenizatório de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em benefício da comunidade. Em sede de defesa, o autor alegou o direito à liberdade de expressão, tal argumento foi reconhecido pela magistrada como um falso argumento, tendo em vista que o autor utilizou da sua liberdade de expressão para cometer crimes de racismo, calúnia, injúria e difamação (TRF4, 2020). A decisão na íntegra pode ser acessada pelo site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região por meios dos seguintes links: https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtValor=50081578920194047200&selOrigem=SC&chkMostrarBaixados=&todasfases=&selForma=NU&todaspartes=&txtChave=&numPagina=1 e https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=721600784481251961747476994381&evento=40400623&key=1e0384eeebd2172ec06e5f0095730163cbea66a900cb590b2957fc95e02359ef&hash=ea56cb1272514006c8dc44c7661852c3.

redes e comunicação digital, especialmente para se manifestarem sobre as violações que ocorrem contra suas comunidades.

A não aceitação de indígenas no ambiente virtual dizima os povos originários a uma coletividade sem voz, privados de seus direitos vivenciam usualmente práticas estatais e sociais violentadoras. O Brasil é saturado de leis e atos carregados de vicissitudes da realidade indígena do país, muitas vezes, acobertando atentados aos direitos fundamentais e humanos.

A plenitude do reconhecimento e respeito aos povos tradicionais no ambiente virtual é inapelável num Estado que se diz democrático, não podendo ser apercebida a execução de direitos indígenas como uma afronta aos direitos individuais de pessoas não indígenas ou dos próprios meios de comunicação em massa.

Os direitos específicos dos povos tradicionais, assistenciais ou não, objetivam reparar as violações que continuam atingindo esta coletividade. Desse modo, não cabe ao Estado, nem a sociedade no mundo digital embaraçar os pleitos destas comunidades. Isto assenta-se nas palavras de Boaventura: “a hegemonia reivindicada pelos direitos humanos resulta de uma vitória histórica ou de uma derrota histórica?” (SANTOS, 2018, p. 59, 60).

Isto posto, o acometimento de violências e danos às vidas, identidades e imagens de pessoas indígenas, em especial das mulheres, no Brasil ainda prospera, tanto pelas mãos da sociedade como por parte do Estado. Nestas circunstâncias, a observância da perspectiva decolonial assiste o deslinde e identificação das violações pelo senso comum que estão interligadas ao tempo, espaço, subjetividades e saberes nos processos vivenciados pelos colonizados, oportunizando novos conceitos e realidades com a expansão da descolonização (MALDONADO-TORRES, 2019).

5 CONCLUSÃO

A comunicação digital no Brasil tem se mostrado propícia às violações aos direitos indígenas. Pela performance da colonialidade, as subjetividades e realidades são influenciadas pelos conflitos entre pessoas indígenas e não indígenas. A concepção da população acerca da tecnologia e a comunicação digital é regida pelos fatores culturais, princípios e experiências, conseqüentemente, a aceitação ou não de indígenas no espaço virtual ou na própria sociedade se interliga aos processos hegemônicos.

No tocante às mulheres indígenas, insta ressaltar que ainda de forma anterior aos processos emancipatórios, estas mulheres enfrentam e combatem o racismo, preconceito e sexismo, este compreendido como o agrupamento de meios no contexto da sociedade patriarcal brasileira. Em outras palavras, o preconceito de gênero de mulher ainda garante a subordinação das mulheres a todas as formas de desigualdade e violências.

Tanto a raça como o feminino e o masculino são construções sociais e culturais, que exigem expressões e manifestações de cada pessoa, de forma pessoal ou virtual, alimentando hostilidades e danos. Sem dúvida, os princípios desta mazela histórica fundamentam-se na negação dos povos indígenas e seus direitos. Isto é, o racismo e o etnoracismo estão enraizados no não reconhecimento da diversidade cultural brasileira, o que prejudica o bem viver das presentes e futuras gerações.

Dentro do sistema opressor da colonialidade, do patriarcado e do capitalismo, se faz necessária uma proteção jurídica diferenciada para com as mulheres indígenas. A aplicabilidade dos direitos fundamentais

precisa ser voltada para as concepções destas mulheres e da comunidade indígena como um todo. Os direitos carecem de uma nova abordagem, o que é essencial para o reconhecimento da pluralidade do país, a renovação dos conceitos e interpretações do Direito e do ordenamento jurídico deve se dar com o auxílio de homens e mulheres indígenas, só assim existirá uma real possibilidade de erradicar as violências contra esta coletividade.

A luta pelos direitos indígenas representa o reconhecimento e respeito aos povos tradicionais que resistem pelo direito à memória, tradições, línguas e identidades. Essencial o avanço das teorias e concepções decoloniais, tanto no ordenamento jurídico quanto na sociedade brasileira. Sem dúvida, a trajetória permanecerá árdua na concretização dos direitos e da representatividade indígena, contudo, não há possibilidade de negociação, as demandas de homens e mulheres indígenas precisam ser ouvidas.

REFERÊNCIAS

BAND JORNALISMO. **Indígena brasileira discursa na COP26.**

Youtube, 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PwAoPNvZM8Y>. Acesso em 10 jan. 2024.

BBC NEWS BRASIL. **Quem é Txai Suruí, jovem que discursou na COP26 e foi criticada por Bolsonaro.**

Youtube, 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=56YUAX8y1yM>. Acesso em 10 jan. 2024.

BERNARDINO-COSTA, Joaze; GROSGOUEL, Ramón; MALDONADO-TORRES, Nelson. **Decolonialidade e pensamento afro-diaspórico.** 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.

BIROLI, Flávia. **Gênero e desigualdades**: os limites da democracia no Brasil. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2018.

BOURDIEU, Pierre. **A dominação masculina**. 14^a ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2017.

BUTLER, Judith. P. **Problemas de gênero**: feminismo e subversão da identidade. 17 ed. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019.

CIMI – Conselho Indigenista Missionário. **Relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil**: dados de 2020. RANGEL, Lucia Helena (Coord.) 2021. Disponível em: <https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2021/11/relatorio-violencia-povos-indigenas-2020-cimi.pdf>. Acesso em 11 nov. 2024.

GONZALEZ, Lélia. **Por um feminismo afro-latino-americano**. LIMA, Márcia; RIOS, Flavia (Orgs.). 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

GORDON, Lewis R. **Antropologia Filosófica, Raça e a Economia Política Da Privação De Direito**. Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico. Organizadores Joaze Bernardino-Costa, Nelson Maldonado-Torres, Ramón Grosfoguel. 2^a ed. Belo Horizonte/MG:Editora Autêntica, 2019.

GROSFOGUEL, Ramón. **Para uma visão decolonial da crise civilizatória e dos paradigmas da esquerda ocidentalizada**. In: BERNARDINO-COSTA, Joaze; GROSFOGUEL, Ramón; MALDONADO-TORRES, Nelson (Orgs.) Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.

GUERRA, Vânia M. L. **Indígenas e identidades**: um olhar discursivo sobre a luta pela terra. In: ROSA, A. M.; MARQUES, C. N.; SOUZA, C. C. De; DURIGAN, M. (org.). Povos indígenas: reflexões interdisciplinares. São Carlos: Pedro & João Editores, 2012, pgs. 43-68.

HOOKS, Bel. **O feminismo é para todo mundo**: políticas arrebatadoras. Tradução Bhuvi Libanio, 9. ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2019.

38_KARABINA. Instagram. Publicação de 22 de janeiro de 2021. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CKXPB06LYMG/>. Acesso em 10 jan. 2024.

KILOMBA, Grada. **Memórias da plantação**: episódios de racismo cotidiano. Tradução Jess Oliveira, 1. ed. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

LUGONES, María. **Colonialidad y Género**: Hacia un feminismo descolonial. In: MIGNOLO, Walter et al. Género y descolonialidad. 2 ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Del Signo, 2014.

MALDONADO-TORRES, Nelson. **Sobre la colonialidad del ser**: contribuciones al desarrollo de un concepto. In: CASTRO-GÓMEZ, S.; GROSFUGUEL, R. (Orgs.) El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Universidad Central-IESCO, -Siglo del Hombre Editores, 2007. p. 127-167. Disponível em: <http://ram-wan.net/restrepo/decolonial/17-maldonado-colonialidad%20del%20ser.pdf>. Acesso em 01 jul. 2024.

MALDONADO-TORRES, Nelson. **Analítica da colonialidade e da decolonialidade**: algumas dimensões básicas. In: BERNARDINO-COSTA, Joaze; GROSFUGUEL, Ramón; MALDONADO-TORRES, Nelson (Orgs.) Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.

MCCLINTOCK, Anne. **Couro Imperial**: raça, gênero e sexualidade no embate colonial. Tradução: Plínio Dentzien. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2010.

MEC. Ministério da Educação. **MEC trabalha por avanços na educação escolar indígena**. Publicação em 19 abr. 2019. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/busca-geral/206-noticias/1084311476/75261-mec-trabalha-por-avancos-na-educacao-escolar-indigena>. Acesso em 01 jul. 2024.

MIGNOLO, Walter. **The Darker Side of The Renaissance**: Literacy, Territoriality, and Colonization. 2nd ed., University of Michigan Press, 2003. Disponível em: <https://people.duke.edu/~wmignolo/InteractiveCV/Publications/darker2nded.pdf>. Acesso em 12 de set. 2024.

MIGNOLO, Walter. **Introducción. ¿Cuáles son los temas de género y (des)colonialidad?** In: MIGNOLO, Walter et al. *Género y descolonialidad*. 2 ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Del Signo, 2014.

REGUANT, Dolores. **La mujer no existe**. Bilbao: Maite Canal, 1996. In: Victoria Sal. *Diccionario ideológico feminista*. Vol III, Barcelona: Icaria, 2001.

RIBEIRO, Djamilá. **Lugar de fala**. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019.

SAFFIOTI, Heleieth I. B. **A mulher na sociedade de classes**. 3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Para uma nova visão da Europa**: aprender com o Sul. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENDES, José Manuel (Orgs.) 1 ed. – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2018.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **A cruel pedagogia do vírus**. Coimbra: Almedina, abril 2020.

SEGATO, Rita. **La guerra contra las mujeres**. 2. ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros, 2018.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. **Pode o subalterno falar?** Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

TRF4. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. **Consulta Processual Unificada**, Ação Civil Pública n. 5008157-89.2019.4.04.7200. Sentença publicada em 22 set. 2020. Disponível em: https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&selForma=NU&txtValor=50081578920194047200&chkMosstrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=SC&sistema=&txtChave=. Acesso em 12 set. 2024.

TUPINAMBÁ, Aracy. **Aracy Tupinambá fala sobre o contexto das mulheres indígenas na mídia brasileira**. Publicada em 24 de julho de 2012. Entrevista concedida a Cinema Artes. Disponível em: <https://acervo.racismoambiental.net.br/2012/01/23/aracy-tupinamba-fala-sobre-mulheres-indigenas-na-midia-brasileira/>. Acesso em 12 de set. 2020.

TV CULTURA. **Representante dos povos originários discursa na COP26**. Youtube, 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8kVFATDrdsA>. Acesso em 10 jan. 2024.

INTERCULTURALIDADE NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO RIO GRANDE DO SUL

Jade de Oliveira Monteiro¹

INTRODUÇÃO

O tema central abordado neste capítulo é a metacategoria ‘interculturalidade’ na educação escolar indígena do Rio Grande do Sul. A interculturalidade é um direito e princípio constitucional, assumido na Constituição Federal de 1988, ao prever que o Estado protegerá as manifestações das culturas indígenas, bem como reconhecer aos Povos Originários o direito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições.

O conceito de interculturalidade que se originou com as experiências sociais latino-americanas consiste na formação de um novo projeto ideológico para uma nova sociedade, que seja crítica à modernidade/colonialidade e seus padrões hegemônicos; a criação de um novo modelo que pressuponha o reconhecimento de outras formas de conhecimento, outras práticas políticas, outras formas de poder social e estatal (Walsh, 2007).

Diante das pesquisas realizadas anteriormente sobre o tema, observou-se uma escassez de estudos aprofundados sobre a implementação de perspectivas interculturais nas escolas indígenas do Estado do Rio Grande do Sul. Essa lacuna é especialmente relevante

¹ Doutoranda em Educação (PPGED/UERGS). Mestre em Educação/UERGS. Técnica-administrativa no Instituto Federal de Ciência Educação e Tecnologia (IFRS). E-mail: jade-monteiro@uergs.edu.br

no que diz respeito às garantias constitucionais de utilização das línguas maternas e aos processos próprios de aprendizagem, aspectos fundamentais para a valorização e preservação das culturas indígenas na educação escolar.

A escolarização de indígenas parte de uma concepção histórica permeada pela colonialidade do saber e seus aspectos racistas de aculturação e assimilação, que seguem enraizados nas instituições e sociedade brasileira. A transformação desse paradigma, com a construção de uma escola outra para os indígenas, é um processo complexo e gradual, mesmo com as garantias conquistadas nas políticas educacionais e legislações.

Por meio da interlocução entre as práticas observadas no cotidiano das escolas indígenas, os indicadores oficiais coletados pelo Censo da Educação Básica e o estudo das políticas educacionais destinadas a essas comunidades, se propõe um estudo que almeja contribuir com a promoção da interculturalidade epistêmica decolonial.

1 COLONIALIDADE E A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

O processo de colonização das Américas foi o maior genocídio cultural conhecido na história da humanidade. E, a educação escolar foi utilizada como uma ferramenta do etnocídio imposto aos Povos Originários pelo colonizador desde a invasão do território hoje compreendido como o Brasil.

Esse projeto de extermínio por meio da escolarização foi institucionalizado, e seguiu vigente até o final do século XX, com políticas que, dentre outros propósitos, pretendiam a substituição das línguas maternas pela língua portuguesa e dos modos de vidas originários pelos valores ocidentais.

Contudo, os Povos Indígenas que lograram resistir aos inúmeros ataques pelos cerca de 500 anos de opressão, constituíram organizações de lutas pelo seu direito de existir e tiveram conquistas muito relevantes no enfrentamento das políticas de extermínio.

Uma dessas conquistas é o princípio da interculturalidade, presente na Constituição Federal de 1988. Premissa que se intersecciona com as demais garantias quando indica que o Estado protegerá as manifestações das culturas indígenas, bem como reconhece aos Povos Originários o direito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições.

No tocante à educação escolar, a Constituição Federal expressa esse preceito principalmente nas passagens que garantem aos Povos Indígenas a utilização de suas línguas maternas na alfabetização e o reconhecimento aos seus processos próprios de aprendizagem.

Com o intuito de colaborar com a concretização dessa premissa, foi criada pelo Parecer 14/99 do Conselho Nacional de Educação (CNE), a categoria “Escola Indígena” na política educacional do Brasil, como instituição destinada a ofertar uma educação escolar verdadeiramente específica e intercultural, integrada ao cotidiano das comunidades indígenas (Brasil, 1999).

Contudo, o reconhecimento constitucional da interculturalidade conquistado pelos Povos Indígenas ainda está longe de ser implementado. As políticas educacionais não são as únicas prejudicadas pelo não cumprimento de premissas interculturais e pela violação de direitos humanos, no entanto, se mostram um objeto de estudo consistente para abordar estas questões.

O atravessamento da colonialidade do saber nas relações educacionais tornam o caminho para a interculturalidade mais árduo e complexo, mas as escolas indígenas resistem e lutam por avanços, por reconhecimento e pelas suas pedagogias ancestrais.

A luta desses Povos e os avanços obtidos nos mais de 30 anos desde a conquista deste direito não foram suficientes para superar a presença das colonialidades no cotidiano escolar, e muito menos na sociedade. A adoção de modelos ocidentalizados de escolas, como uma adaptação para o atendimento de jovens indígenas, por vezes ignora diversidades étnicas e promove uma subjetivação das suas pedagogias ancestrais.

Esses apagamentos se manifestam de forma velada, ora nas omissões do Estado em fazer valer a disposição de alfabetização nas línguas maternas, por meio da falta de materiais didáticos específicos ou formação adequada dos profissionais, entre outros; ora na burocratização dos processos, que engessa as estruturas curriculares e dificulta a utilização de métodos outros de construção do conhecimento; ora na insuficiência de recursos para estruturação e organização das escolas; entre outros meios que, de forma intencional ou não, perpetuam a subalternização dos saberes indígenas.

Grande parte dos trabalhos existentes sobre educação e escolarização indígena se dedicam à produção de reflexões, análises e formulações de experiências a partir de uma escola específica ou de uma comunidade em particular, o que é extremamente relevante e indispensável para discorrer com profundidade sobre o tema.

Há, atualmente, uma defasagem na produção de estudos mais amplos, que sejam capazes de observar as estatísticas e indicadores institucionais das escolas, como os coletados pelo INEP no Censo Escolar, e relacioná-los a essas elaborações particulares. Uma vez que os dados oficiais coletados sobre as escolas indígenas não são sequer disponibilizados de forma acessível e atualizada, fato que muitas vezes dificulta a sua utilização como fonte de informação.

2 O PRINCÍPIO DA INTERCULTURALIDADE NA ESCOLARIZAÇÃO INDÍGENA

Embora a interculturalidade esteja assegurada como um princípio constitucional no Brasil, sua implementação nas escolas indígenas e em contextos escolares do Rio Grande do Sul enfrenta desafios significativos, bem como a desassistência do Estado.

As garantias constitucionais de respeito às línguas maternas e aos processos de aprendizagem próprios dos povos indígenas, muitas vezes, não se traduzem em práticas educativas concretas dentro dessas instituições escolares. Isso aponta para a necessidade urgente de investigar como essas garantias têm sido postas na prática e quais são os principais obstáculos que impedem sua realização.

Ainda que se tenha demonstrado um aumento considerável de escolas indígenas no Rio Grande do Sul, sobretudo nos últimos 10 anos (2013-2023), os dados coletados apontam uma disparidade na distribuição dessas instituições. Em 2020, apenas 60% dos estudantes indígenas matriculados na Educação Básica foram atendidos por escolas indígenas no Estado. Contudo, a análise das matrículas por região demonstra que esse percentual é atingido apenas na região Noroeste, enquanto no restante do Estado a maioria dos estudantes indígenas se encontram matriculados nas escolas tradicionais (ocidentais).

Se o acesso às escolas indígenas já apresenta desafios significativos, a análise dos indicadores relacionados à implementação da interculturalidade nessas instituições evidencia um cenário igualmente preocupante. Apenas com as informações constantes no Censo Escolar, já é possível inferir que as práticas interculturais, fundamentais na escolarização indígena, ainda não são cumpridas na sua integralidade.

Um dos marcadores que nos permite abordar a presença da interculturalidade trata da(s) língua(s) utilizada nas escolas. No ano de 2021, 81% das escolas indígenas do Rio Grande do Sul promoviam o ensino bilíngue. Contudo, as línguas maternas descritas foram apenas Kaingang (56%) e Guaraní (33%), não havendo menção sobre a utilização de Charrua nem de Xokleng nas escolas indígenas sul-riograndenses.

Outro indicador que nos permite refletir acerca da interculturalidade dispõe da utilização de materiais pedagógicos. Os dados do censo indicam que 42% das escolas indígenas não tiveram acesso a nenhum material pedagógico no ano de 2021. Enquanto apenas 33% das escolas indígenas afirmaram dispor de materiais pedagógicos específicos para educação indígena.

Teoricamente, as comunidades possuem relativa autonomia na elaboração dos seus projetos pedagógicos, e podem por meio deles exercer seus métodos tradicionais de ensino. Todavia, para que eles sejam aprovados devem ser submetidos a instâncias não indígenas, que reproduzem as perspectivas coloniais, frequentemente contrárias aos interesses dos povos indígenas (Cimi, 2017).

Para além do currículo, que deveria ser elaborado segundo os conhecimentos tradicionais da comunidade, mas nem sempre é (Ferreira, 2018), a produção de livros didáticos específicos também foi pouco explorada, bem como os recursos financeiros destinados para a execução deste projeto são insuficientes, o parco investimento realizado para garantia de materiais didáticos pelas escolas indígenas é destinado essencialmente à aquisição e à distribuição de livros didáticos convencionais (Baniwa, 2006).

Uma das questões que se evidencia a partir destes elementos é a permanência de uma abordagem colonialista na educação indígena. A presença dessa colonialidade do saber ainda se faz sentir nas

estruturas educacionais, manifestando-se em práticas pedagógicas que desvalorizam ou ignoram os saberes e modos de vida indígenas. A reflexão crítica sobre essas práticas e a busca por alternativas decoloniais são fundamentais para a promoção de uma educação verdadeiramente intercultural.

Cabe ressaltar que não é todo o conhecimento e cultura indígena que pode ser escolarizado. Por essa razão há que se tomar em conta a diferenciação entre a educação indígena, que se pratica por meio das pedagogias ancestrais e a escolarização intercultural indígena, a ser construída em uma instituição imposta, mas necessária, dotada de autonomia para adaptar suas estruturas a fim de contemplar os processos próprios de aprendizagem das comunidades e suas alteridades.

3 O ENTORNO DE REFLEXÃO ENTRE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E INTERCULTURALIDADE

Torna-se relevante enfatizar que toda pesquisa parte de um referencial teórico e social e, nesse contexto para os temas aqui escolhidos utiliza-se das concepções formadas pelo Grupo Latino-americano de Estudos Subalternos e suas discussões acerca da Modernidade/Colonialidade. Dentre os principais teóricos que compõem este coletivo, e que embasarão as construções teóricas nesta tese se encontram autores como Aníbal Quijano, Catherine Walsh, Walter Dignolo, Enrique Dussel, entre outros.

Constitui-se também como referência relevante para a produção deste trabalho as epistemologias indígenas, suas pedagogias ancestrais, cosmovisões e perspectivas educacionais, que serão embasadas por escritos de autores, professores e pesquisadores indígenas brasileiros

como Gersem Luciano Baniwa, Rosani Fernandes, Bruno Ferreira, Davi Kopenawa, Ailton Krenak, Eloy Terena, entre outros.

Ademais, considerar-se-á também as publicações realizadas por pesquisadores e instituições indigenistas como Maria Aparecida Bergamaschi, Wilmar da Rocha D'Angelis, Luís Donisete Benzi Grupioni e produções do Conselho Indigenista Missionário, Instituto Socioambiental, e outras organizações sociais indigenistas e governamentais. Bem como de intelectuais brasileiros que se associam às temáticas da decolonialidade e da interculturalidade como Luciana Ballestrin, Vera Maria Candau, Thaís Luzia Colaço, Raquel Sparemberger entre outros.

Serão ainda tomadas em conta as elaborações acerca dos Direitos Humanos, sobretudo no tocante à educação e interculturalidade, e seus desdobramentos no ordenamento jurídico brasileiro. Além das políticas educacionais adotadas no Brasil e no Rio Grande do Sul e produtos de suas avaliações, como legislações, atos, indicadores e relatórios que permitam uma análise combinada com os resultados obtidos por meio da pesquisa de campo. Na sequência, apresentam-se alguns conceitos que comporão o estudo proposto.

3.1 SOBRE A PERSPECTIVA DECOLONIAL

A colonização do continente americano pelos europeus iniciou um processo que abalou e redesenhou o sistema de organização mundial, as relações de poder passaram a ser determinadas a partir de marcadores de raça, como descreve o sociólogo Aníbal Quijano (2005), inventados em consonância com o “mito da modernidade” (Dussel, 2012).

A fim de ocupar o topo dessa nova cadeia hierárquica foi produzida a construção supremacista de uma identidade ocidental eurocêntrica (branca) e masculina, que invade, domina e subjuga um território, já ocupado por outros povos, e forma um novo sistema de classificação social com base na divisão do trabalho e marcadores de superioridade/inferioridade relacionados à posição que indivíduo ocupa na estrutura produtiva de acordo com sua raça e gênero, na qual somente o homem branco europeu assume o mais alto nível de prevalência (Quijano, 2005).

Esse movimento produziu, para além do maior etnocídio conhecido na história da humanidade, um processo de subalternização dos povos ameríndios, pautado no apagamento e na assimilação cultural. Surgem nesse processo as colonialidades, caracterizadas como um fenômeno com origem e caráter colonial, mas que se estabelece de forma mais duradoura e estável do que o colonialismo em cuja matriz se iniciou (Quijano, 2005).

As forças de resistência insurgentes deste processo foram denominadas como decolonialidade. Walter Dignolo (2007) sintetiza o movimento decolonial da seguinte forma: se a colonialidade é constitutiva da modernidade, essa lógica opressiva produz uma energia de descontentamento, que produz reações às violências imperiais (e estruturais), e essa energia pode ser traduzida em projeto decoloniais, que, em última instância, também são constitutivos da modernidade.

3.2 AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS

A formação das políticas educacionais brasileiras foi atravessada pelas colonialidades desde a sua origem. A instituição escolar foi introduzida no país durante o período colonial, quando os padres

jesuítas, em suas missões, se dedicaram a catequizar os nativos, a fim de substituir suas religiões, línguas e costumes ancestrais por aqueles praticados pelos colonizadores, como forma de civilizar-lhes (D'Angelis, 2012).

Por mais de cinco séculos, as políticas educacionais foram utilizadas como estratégia de integração e assimilação dos povos indígenas à sociedade nacional, e contribuíram com o etnocídio de diversas comunidades, bem como com a diluição cultural de outras tantas.

Contudo, entre avanços e retrocessos, tem se evidenciado o debate sobre a interculturalidade na educação como um movimento que busca romper com a colonialidade do saber, com a monocultura hegemônica dos conhecimentos ocidentais e com as práticas epistemicidas que subalternizam as culturas indígenas, como parte de uma construção coletiva em direção ao giro decolonial.

A educação escolar intercultural e bilíngue assumiu no Brasil um status de direito fundamental social a partir da Constituição Federal de 1988, que assegurou aos Povos Indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, refletindo diretamente nas políticas educacionais que lhe sucederam (Wenczenovicz; Baez, 2016).

Esta conquista intensificou a reivindicação dos movimentos indígenas pela construção de novos programas de educação escolar “geridos pelas comunidades indígenas, e não para elas ou com elas” (D'Angelis, 2012, p. 16).

As escolas indígenas surgem na política educacional brasileira a partir do ano de 1999, com intuito de promover uma educação específica e intercultural, integrada ao cotidiano das comunidades indígenas (Brasil, 1999). Aos poucos a sensação de desconfiança e imagem de aculturação refletida no ambiente escolar vai sendo ressignificada, e a educação

escolar passa a ser vista como um instrumento de fortalecimento das culturas e das identidades indígenas e um possível canal de conquista da desejada cidadania (Baniwa, 2006).

Entretanto, muito há que se melhorar nas escolas indígenas, tanto nas questões estruturais quanto nas questões epistêmicas. Realidade documentada por Bruno Ferreira (2018, p. 208): “A maioria das escolas Kaingang de Guarita funcionam de forma improvisada, com sala de aulas pequenas e com grande número alunos prensados como sardinhas em lata”, que deixa explícito em seu texto o desconforto causado pela precariedade da estrutura escolar aos profissionais e estudantes da sua comunidade.

Os dados coletados no Censo Escolar de 2022 demonstram essa defasagem na implementação do direito à educação intercultural nas escolas indígenas, a partir da análise de práticas como a utilização de materiais específicos para a educação escolar indígena, a língua em que o ensino é ministrado, a organização do ambiente escolar, dentre outros (Wenczenovicz; Monteiro, 2024).

3.3 EDUCAÇÃO INDÍGENA E SUAS PEDAGOGIAS ANCESTRAIS

As diversas culturas e etnias se utilizam de suas pedagogias ancestrais, que pela sua natureza de resistência não deixam de ser decoloniais, na reprodução, perpetuação e/ou mudança dos seus costumes, religiosidades, tradições e saberes acumulados ao longo de toda a sua existência cultural, e, ao conjunto dos processos envolvidos na socialização dos indivíduos para este fim denomina-se educação.

Reconhecida a existência de olhares e metodologias distintas entre as muitas sociedades originárias, se apresentarão aqui aspectos

comuns observados entre os Povos Indígenas brasileiros, que não devem ser interpretados de forma restrita ou limitante, mas como uma convergência de pensamento. Como nos relata Gersem Baniwa (2006, p. 131): “Cada povo indígena projeta e deseja para si um tipo de alteridade, [...] a prática pedagógica tradicional indígena integra, sobretudo, elementos relacionados entre si: o território, a língua, a economia e o parentesco”.

No processo educacional indígena o aprendizado não se separa das experiências cotidianas: “a educação na cultura é integral” (Bergamaschi, 2005, p. 170). Não há uma instituição dedicada à aquisição de conhecimento, a aldeia é a escola, toda a comunidade é responsável por fazer com que as crianças se tornem membros sociais plenos, fundamentadas nas suas tradições e na memória coletiva, por meio das palavras dos mais velhos, e pela participação: “para aprender, as novas gerações são estimuladas a participar, inseridas em grupos, assumindo responsabilidades, realizando trabalhos, compartilhando vários processos de atividades” (Bonin, 2015, p. 1).

A organização dos saberes se dá a partir da sua cosmologia ancestral que garante e sustenta a possibilidade de vida, como descreve Baniwa: “É a cosmologia que estabelece os princípios norteadores e os pressupostos básicos da organização social, política, econômica e religiosa” (Baniwa, 2006, p. 171).

A ciência indígena considera seus conhecimentos como públicos e ao alcance de todos, embora respeite certas competências e aptidões individuais e grupais; a natureza é a fonte de todo o conhecimento, e ao homem, cabe desvendá-la, compreendê-la, aceitá-la e contemplá-la, para poder compreender a partir dela a totalidade do mundo; não para dominá-la ou controlá-la, mas para aprender a seguir e respeitar sua lógica, seus limites e potencialidades em benefício de sua própria vida (Baniwa, 2006).

A formação e transmissão dos seus saberes ocorre de forma intuitiva, criativa, livre: “E dentro da tribo coexiste o criar, o criar que é a consequência do aprender, que por sua vez é o motivo pelo qual sua alma-luz corporificou-se, para apre(e)nder-se e criar” (Jecupé, 1998, p. 96). O processo de ensino-aprendizagem trata das experiências cotidianas, cada experiência vivida faz parte da obtenção de conhecimento.

Mas, a espontaneidade do aprendizado não significa não haver orientação, como levanta Bruno Ferreira: “as crianças e jovens são orientados, no decorrer de seu desenvolvimento, em tudo aquilo de que vão precisar saber quando forem adultos para ocuparem seus lugares na organização social” (Ferreira, 2010, p. 205), conduzidas, sempre que necessário, por seus pais, parentes e demais membros de sua comunidade.

As crianças aprendem a assumir desafios e responsabilidades e a se inserir na vida social da sua comunidade, através de observação, experiências empíricas e da autorreflexão proporcionadas por “mitos, histórias, festas, cerimônias e rituais realizados para tal fim” (Baniwa, 2006, p. 130).

Por meio de uma tradição oral que vincula o presente e o passado (Cruikshank, 2006) na perpetuação dos seus sistemas culturais, cujas crenças, valores e tecnologias são provenientes de um conhecimento comunitário prático e profundo, construído em milhares de anos de observações e experiências empíricas compartilhadas e orientadas para garantir a manutenção do seu modo de vida específico (Baniwa, 2006), as pedagogias ancestrais resistem, em busca da valorização dos seus processos próprios de transmissão do conhecimento e construção dos saberes.

4 BREVE DESCRIÇÃO DAS COLETIVIDADES INDÍGENAS DO RIO GRANDE DO SUL

No Estado do Rio Grande do Sul, aproximadamente 36 mil pessoas se declararam indígenas no Censo de 2022; destas, quase 16 mil viviam em 25 dos mais de 65 territórios indígenas existentes no Estado; as outras quase 20 mil foram apontadas como residentes fora das terras indígenas (IBGE, 2023).

No estado existem cerca de 140 terras indígenas, mas apenas a metade se encontra em algum estágio do processo de demarcação, são: 36 em estudo, 7 declaradas, 2 delimitadas e 20 regularizadas; as restantes se encontram em condição irregular (Atlas, 2021). A diversidade étnico-cultural encontrada no Estado é composta pelos povos Kaingang, Guarani, Charrua e Xokleng, sendo os dois primeiros significativamente mais numerosos.

A etnia Charrua chegou a ser considerada extinta durante a invasão e colonização do seu território, contudo, sua existência foi reconhecida pela FUNAI em 2007. Apesar das diversas violências epistêmicas sofridas, sua cultura resistiu se mantendo invisível pelos períodos de maior violência, sem deixar de preservar seu sistema sócio-cultural. Não há um levantamento preciso de quantos indivíduos compõem esse grupo, no entanto os documentos apontam entre 30 e 50 pessoas, algumas residentes na Aldeia Polidoro, localizada em Porto Alegre, que indicam a existência de parentes na região das Missões.

Os Xoklengs se fazem presentes majoritariamente no Estado de Santa Catarina, depois de serem expulsos do Rio Grande do Sul e quase levados à extinção pelos colonos. No entanto, algumas famílias retornaram às terras sul-rio-grandenses, se assentando junto às aldeias de outras etnias, reconstruindo sua vinculação ancestral com este

território (Silva, 2008). Devido à sua pulverização e a falta de interesse dos órgãos governamentais, não é possível precisar a quantidade de Xoklengs que vivem no Rio Grande do Sul, no entanto, sua presença se faz cada vez mais assídua, com retomada de seus territórios ancestrais.

A etnia Kaingang é a mais abundante nas terras gaúchas, localizados majoritariamente na região do planalto noroeste, porém se fazem presentes nas diversas áreas de ocupação indígena. Sofreram muito com o processo de apagamento cultural, que fez com que algumas comunidades perdessem suas crenças religiosas e língua materna (Mota, 2018), entretanto, diversas comunidades conseguiram preservar a sua identidade cultural.

Os Mbyá Guarani estão dispersos por diversas regiões sul-rio-grandenses, presentes nas Missões, no Pampa, no Planalto e no Litoral, em localidades rurais e urbanas, num contingente calculado em aproximadamente 2 mil pessoas. As principais dificuldades enfrentadas por estes povos estão relacionadas com questões territoriais e falta de infraestrutura básica para sobrevivência material e cultural.

CONCLUSÃO

A educação escolar indígena no Brasil reflete um espaço de confronto entre a colonialidade do saber e a luta pela interculturalidade. Embora avanços importantes tenham sido conquistados desde a Constituição de 1988, os desafios relacionados à implementação da prática do direito à educação intercultural permanecem. A precariedade estrutural, a insuficiência de materiais didáticos específicos e a adoção de modelos escolares ocidentais muitas vezes ignoram as singularidades das pedagogias ancestrais, perpetuando práticas

Nesse contexto, as escolas indígenas resistem como espaços de reafirmação cultural e de luta pela autonomia pedagógica, ao mesmo tempo que enfrentam limitações impostas por políticas públicas insuficientes e pela reprodução de perspectivas coloniais. A ressignificação do papel da escola, de um instrumento de aculturação para um espaço de fortalecimento identitário, é um passo significativo, mas que exige investimentos concretos e o engajamento das comunidades indígenas na formulação

Portanto, a superação dos desafios indicados depende de um esforço coletivo para promover um modelo de educação que integre as pedagogias indígenas e garanta as condições e simbólicas para sua prática. A valorização da diversidade étnico-cultural e a desconstrução das posições epistêmicas são passos fundamentais para consolidar uma educação verdadeiramente intercultural e decolonial, capaz de fortalecer as identidades indígenas e contribuir para a justiça social e o respeito à pluralidade cultural.

REFERÊNCIAS

ANDRÉ, Marli Eliza D. A. de. **Etnografia da prática escolar**. São Paulo: Papirus, 1995.

ATLAS Socioeconômico do Rio Grande do Sul. 6ª Ed. Porto Alegre: Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, Departamento de Planejamento Governamental, 2021. Disponível em: <<https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/inicial>>. Acesso em 25 mai. 2022.

BANIWA, Gersem dos Santos Luciano. **O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje**. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006.

BERGAMASCHI, Maria A. **Nhembo'e: enquanto o encanto permanece!** Processos e práticas de escolarização nas aldeias Guarani. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação, Porto Alegre, 2005.

BONIN, Iara. Educação Escolar Indígena. **Porantim**, Brasília, Encarte Pedagógico VI, ago. 2015.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**, Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30 mar. 2024.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Resolução n. 3, de 14 de dezembro de 1999. Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e dá outras providências. In: SILVA, Luiz Fernando Villares e. (org.). **Coletânea da legislação indigenista brasileira**. Brasília: CGDTI/FUNAI, 2008.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSGUÉL, Ramón. Prólogo. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSGUÉL, Ramón (org.). **El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global**. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007. Disponível em: <http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libreria/147.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2024.

CIMI - Conselho Indigenista Missionário. **Por uma educação descolonial e libertadora: manifesto sobre a educação escolar indígena no Brasil**. Brasília: Cimi, 2017.

CRUIKSHANK, Julie. Tradição oral e história oral: revendo algumas questões. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína (org.). **Usos & abusos da história oral**. 8. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

D'ANGELIS, Wilmar da Rocha. **Aprisionando Sonhos: A educação escolar indígena no Brasil**. Campinas, SP: Curt Nimuendajú, 2012.

DULCI, Tereza Maria Spyer; MALHEIROS, Mariana Rocha. Um Giro Decolonial à Metodologia Científica: Apontamentos Epistemológicos para Metodologias desde e para a América Latina. **Revista Espirales**, Foz do Iguaçu, Edição Especial, janeiro de 2021.

DUSSEL, Enrique. **1492: el encubrimiento del otro**. Buenos Aires: Docencia, 2012.

FERREIRA, Bruno. Em busca de políticas públicas para efetivação da educação escolar indígena diferenciada. **Tellus**, Campo Grande, ano 10, n. 19, p. 203-210, jul./dez. 2010.

FERREIRA, Bruno. Descolonizando a escola: em busca de novas práticas. **Avá online**, Misiones, n. 33, p. 165-184, 2018. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169062373008> . Acesso em: 30 mar. 2024.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística . **Censo Demográfico 2022: indígenas: primeiros resultados do universo**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102018.pdf>> . Acesso em: 24 nov. 2024.

JECUPÉ, Kaka W. **A terra dos mil povos: história indígena brasileira contada por um índio**. São Paulo: Petrópolis, 1998.

KOHL-SANTOS, P., & MOROSINI, M. C. (2021). O revisitar da metodologia do estado do conhecimento para além de uma revisão bibliográfica. **Revista Panorâmica Online**, 33. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/revistapanoramica/index.php/revistapanoramica/article/view/1318>. Acesso em 30/09/2024.

MIGNOLO, Walter D. El Pensamiento Decolonial: Desprendimiento Y Apertura: Un manifiesto. *In*: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSFOGUEL, Ramón (Orgs.). **El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global**. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007.

MOTA, Fabrício. **Indígenas no Rio Grande do Sul, entre a esperança e a miséria**. Agência Pública, 2018. Disponível em: <https://apublica.org/ensaio/2018/07/indigenas-no-rio-grande-do-sul-entre-a-esperanca-e-a-miseria/>. Acesso em: 27 mai. 2024.

NETO, Otávio Cruz. O trabalho de campo como descoberta e criação. *In*: MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.); DESLANDES, Suely Ferreira; NETO, Otavio Cruz; GOMES, Romeu. **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 1994. 80p.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina, Buenos Aires: **Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales**, 2005. Disponível em: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf. Acesso em: 30 mar. 2024.

SILVA, Sergio Baptista. Categorias sócio-cosmológico-identitárias indígenas recentes e processos de consolidação de novos sujeitos coletivos de direito: os Charrua e os Xokleng no Rio Grande do Sul. *In*: NÚCLEO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS POVOS INDÍGENAS, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança Urbana (org.). **Povos Indígenas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil**. Porto Alegre: Prefeitura de Porto Alegre, 2008.

WALSH, Catherine. Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y posicionamiento “otro” desde la diferencia colonial. *In*: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSFOGUEL, Ramón (Orgs.). **El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global**. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007. p. 47-62.

WALSH, Catherine (org.). **Pedagogías Decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir**. Tomo II. Quito: Ediciones Abya-Yala, 2017.

WENCZENOVICZ, Thaís Janaina; BAEZ, Narciso Leandro Xavier. Direitos fundamentais, educação indígena e identidade emancipatória: reflexões acerca de ações afirmativas no Brasil. **Revista Brasileira de Direito**, Passo Fundo, v. 12, n. 2, p. 95-107, jul./dez. 2016.

WENCZENOVICZ, Thaís Janaina; MONTEIRO, Jade de Oliveira. Interculturalidade nas escolas indígenas do Brasil: as pedagogias ancestrais e a utilização das línguas maternas nas práticas educacionais no ano de 2022 . **Revista De Gestão E Secretariado**, 15(6), e3629, 2024. <https://doi.org/10.7769/gesec.v15i6.3629>

DA TUTELA ANTROPOCÊNTRICA À HERMENÊUTICA ECOCÊNTRICA: CRITÉRIOS DE DENSIFICAÇÃO DO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 EM DIÁLOGO COM O NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO- AMERICANO

João Victor Oliveira Celestino¹

INTRODUÇÃO

A crise ecológica contemporânea evidencia limites de leituras jurídico-constitucionais que, em parte da prática interpretativa, tendem a compreender a tutela ambiental sobretudo a partir da proteção da vida humana e de seus correlatos, como saúde, bem-estar e qualidade de vida. No Brasil, esse enquadramento aparece com frequência na interpretação do art. 225 da Constituição Federal de 1988, especialmente quando o dispositivo é lido prioritariamente a partir da expressão “sadia qualidade de vida”, como se o fundamento central da proteção do meio ambiente residisse, antes de tudo, na sua função de assegurar condições adequadas à existência humana.

Essa tendência não decorre apenas de uma preferência hermenêutica contingente, mas também é favorecida pela própria

¹ Mestrando em Direitos Fundamentais pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. Especialista em Direito Processual Civil pelo Instituto Damásio de Ensino. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Membro do Grupo de Estudo de Interculturalidade e Intersubjetividade: gênero, orientação sexual, raça e etnia. Analista Jurídico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E-mail: jv.celestino@hotmail.com

estrutura redacional do caput: ao afirmar que “todos têm direito” ao meio ambiente equilibrado, ao qualificá-lo como “essencial” à qualidade de vida, ao defini-lo como “bem de uso comum do povo” e ao direcionar o dever de preservação às “presentes e futuras gerações”, o texto organiza a tutela ambiental como direito titularizado por pessoas e funcionalmente conectado à continuidade da vida humana (BRASIL, 1988). Nesse enquadramento, a integridade ecológica corre o risco de ser tratada predominantemente como meio para fins humanos, e não como parâmetro constitucional relevante em si, o que pode reduzir a autonomia normativa do art. 225 e limitar o potencial preventivo de suas exigências (BRASIL, 1988).

Partindo desse diagnóstico, o artigo examina se, e sob quais critérios, a Constituição de 1988 admite uma densificação interpretativa capaz de deslocar o eixo antropocêntrico predominante para uma hermenêutica biocêntrica ou ecocêntrica, na qual a Natureza seja reconhecida como portadora de valor jurídico próprio e, em termos funcionais, como polo de tutela constitucional direta, sem reforma formal do texto. O debate é conduzido em perspectiva comparada, em diálogo com experiências do novo constitucionalismo latino-americano, especialmente Equador e Bolívia, que reorganizam a proteção ecológica para além de uma lógica instrumental ao reconhecer titularidades ecológicas e ao alterar o padrão de justificação de decisões públicas e privadas potencialmente degradadoras (EQUADOR, 2008; BOLÍVIA, 2010).

A literatura já consolidou teses que este trabalho busca atualizar e refinar. De um lado, persiste a compreensão de que o modelo constitucional de 1988 seria inevitavelmente antropocêntrico e, por isso, incapaz de sustentar uma tutela ecológica com autonomia normativa. De outro, afirma-se que reconhecer valor jurídico próprio da Natureza exigiria alteração formal do texto constitucional, sob pena de ativismo judicial e insegurança jurídica. O artigo não nega que o

art. 225 foi formulado em linguagem marcadamente humanística, mas sustenta que essa marca não impõe uma leitura reduitiva. Ao contrário, a moldura constitucional pode ser interpretada em chave mais exigente, de modo a afirmar a integridade ecológica como razão constitucional relevante por si, reforçando prevenção e precaução como núcleos operativos do dispositivo, sem romper com a centralidade da dignidade humana no sistema constitucional (BRASIL, 1988).

A orientação teórica combina pressupostos do constitucionalismo contemporâneo, com ênfase na força normativa da Constituição, na centralidade de princípios e na exigência de justificação pública controlável, com aportes do constitucionalismo latino-americano no campo socioambiental. Nesse horizonte, observa-se o deslocamento do ambiente como “recurso” para a integridade ecológica como parâmetro jurídico relevante em si, apto a orientar deveres de proteção e padrões de controle antes da ocorrência de danos consumados.

Quanto aos métodos e técnicas de pesquisa, adota-se pesquisa bibliográfica e documental, com análise dogmático-constitucional e hermenêutica do art. 225 em leitura sistemática e teleológica, acompanhada de exame comparado de referenciais normativos latino-americanos pertinentes ao reconhecimento de titularidades ecológicas. Além disso, recorre-se à reconstrução argumentativa de parâmetros decisórios, como máxima efetividade, unidade da Constituição, força normativa, interpretação conforme e racionalidade da ponderação, com o objetivo de explicitar um itinerário interpretativo disciplinado, capaz de evitar tanto o esvaziamento minimalista da proteção quanto a criação interpretativa de um “novo texto constitucional”.

As principais hipóteses são: (a) o art. 225, embora redigido em chave antropocêntrica, admite, por interpretação evolutiva, sistemática e teleológica, uma densificação ecocêntrica que reconhece a integridade ecológica como razão constitucional autônoma de

proteção, sem negar a dignidade humana (BRASIL, 1988); (b) o diálogo com o constitucionalismo latino-americano pode operar como reforço hermenêutico para antecipar o tempo da tutela, privilegiando prevenção e precaução (AVRITZER et al., 2017; GUDYNAS, 2015); (c) essa densificação eleva o ônus de justificativa exigível de políticas públicas e atividades econômicas de impacto ambiental relevante, sob padrões transparentes e controláveis (ALEXY, 2014; BARROSO, 1998).

Os resultados esperados consistem em demonstrar a compatibilidade dogmática desse percurso com a Constituição de 1988, explicitar seus ganhos operacionais, como intervenção mais tempestiva e maior transparência argumentativa, e delimitar condições de legitimidade para a construção interpretativa proposta.

1 O CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO EM PERSPECTIVA

A expressão “constitucionalismo latino-americano” pode designar, de modo amplo, a história constitucional da região ou, em sentido mais específico, processos constituintes recentes marcados por participação social ampliada e por uma agenda explícita de transformação. Nesse recorte, consolidou-se o uso de “novo constitucionalismo latino-americano” como rótulo descritivo, e não como uma escola homogênea, para experiências que buscaram reconfigurar a relação entre Estado, sociedade e grupos historicamente subalternizados, em resposta a crises de legitimidade, desigualdade persistente e exclusões estruturais (SANTOS, 2010; GARGARELLA, 2014).

Em sentido estrito, esse novo constitucionalismo pode ser entendido como um ciclo político-constitucional que, com intensidades distintas, resultou em reformas e novas constituições, com destaque

para a experiência andina, especialmente no Equador e na Bolívia. O ciclo se vincula a mobilizações sociais, críticas ao padrão liberal-elitista de formação estatal e demandas por reconhecimento de identidades coletivas e de formas plurais de vida social (SANTOS, 2010; YRIGOYEN FAJARDO, 2011).

O qualificativo “novo” não implica ruptura total com o constitucionalismo moderno, que permanece como matriz institucional em vários aspectos. O que se observa é uma mudança de ênfase: a constituição passa a ser apresentada, além de limitar o poder, como instrumento de reconstrução democrática e de enfrentamento de desigualdades históricas. A centralidade de direitos sociais e coletivos, a incorporação de mecanismos participativos e a valorização de sujeitos historicamente marginalizados partem do diagnóstico de que a cidadania apenas formal, sem proteção material e simbólica, tende a reproduzir exclusões.

1.1 ELEMENTOS RECORRENTES: PLURINACIONALIDADE, INTERCULTURALIDADE E EXPANSÃO DE DIREITOS

Embora não exista uma lista única de características, alguns elementos se repetem na literatura. A plurinacionalidade critica o modelo de Estado-nação homogêneo e propõe reconhecer a coexistência de povos e nações com identidade própria dentro do mesmo Estado. A interculturalidade, por sua vez, é apresentada como método político-institucional, e não como mera celebração da diversidade, pois envolve diálogo institucional, reconhecimento de línguas e saberes e releitura do direito estatal diante de práticas e normatividades diversas (YRIGOYEN FAJARDO, 2011; WOLKMER, 2015).

Outro traço é o investimento em instrumentos de participação e no ideal de “constituição desde baixo”, com a ideia de que a legitimidade

deriva também do processo de elaboração e da possibilidade de apropriação contínua pela sociedade. A crítica, contudo, alerta que participação formal pode coexistir com decisões concentradas, o que limita a efetividade do projeto (GARGARELLA, 2014). Soma-se a isso a ampliação dos catálogos de direitos, com destaque para direitos sociais, coletivos e difusos. No Equador, ganham relevo os direitos do Buen Vivir, que articulam dignidade, condições materiais e uma concepção de vida boa que ultrapassa o bem-estar individual.

A discussão sobre o Buen Vivir (Vivir Bien) ajuda a compreender a dimensão programática desses textos. Trata-se de um conceito em disputa, com função crítica ao desenvolvimento convencional e com a pretensão de articular direitos, economia política e relação com o ambiente em chave não estritamente utilitarista (GUDYNAS, 2011).

1.2 TENSÕES INSTITUCIONAIS E EFETIVIDADE

Uma forma útil de compreender o novo constitucionalismo latino-americano é reconhecer sua tensão constitutiva: de um lado, catálogos expansivos de direitos, reconhecimento de sujeitos coletivos e promessa de democratização; de outro, a permanência de arranjos de poder que podem limitar essas promessas. A crítica à “sala de máquinas” sustenta que, sem reconfiguração consistente da organização do poder, e não apenas da declaração de direitos, a constituição tende a gerar frustração e bloqueios estruturais à implementação (GARGARELLA, 2014). Essa tensão não elimina o interesse do paradigma, mas recomenda mobilizá-lo com prudência e com delimitação do que dele se extrai, em termos dogmáticos, para o debate ambiental brasileiro.

2 PACHAMAMA E DIREITOS DA NATUREZA: BASES TEÓRICAS E INSTITUCIONAIS

No campo ambiental, as experiências constitucionais andinas recentes deslocam a tutela ecológica de uma matriz predominantemente antropocêntrica para uma gramática que reconhece valor próprio e titularidade à Natureza. Em vez de tratar o ambiente apenas como bem instrumental, protegido na medida em que serve à saúde, à propriedade ou ao desenvolvimento humano, essa orientação admite a Natureza (Pachamama) como sujeito de direitos. Com isso, a proteção não depende de utilidade imediata para pessoas nem da existência de danos humanos individualizáveis. O giro não elimina direitos humanos nem reduz a política ambiental a moralismo abstrato; ele redefine o que conta como lesão juridicamente relevante e fortalece exigências de integridade ecológica, respeito aos ciclos vitais e restauração, inclusive antes de o comprometimento ambiental se converter em prejuízos diretos e mensuráveis (GUDYNAS, 2015).

A Constituição do Equador tornou-se referência ao instituir capítulo específico sobre “derechos de la naturaleza”. O texto reconhece um núcleo de proteção ligado ao respeito integral da existência e à manutenção e regeneração de ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos. Também legitima qualquer pessoa, comunidade, povo ou nacionalidade a exigir do poder público o cumprimento desses direitos. Do ponto de vista dogmático, o aspecto central é o deslocamento do polo de titularidade, que reorienta a argumentação constitucional em conflitos entre proteção ecológica, políticas públicas e atividades econômicas. A continuidade ecológica passa a operar como fundamento suficiente para intervenção.

A experiência boliviana reforça deslocamento semelhante pela via legislativa. A Lei nº 071, de 21 de dezembro de 2010, reconhece direitos

da Madre Tierra e explicita, para fins de proteção e tutela, seu caráter de sujeito coletivo de interesse público. A norma enumera direitos como vida, diversidade, água, ar limpo, equilíbrio e restauração, além de orientar a interpretação por princípios como harmonia, não mercantilização e interculturalidade. Ainda que constituição e lei atuem em planos distintos, a convergência indica a intenção de colocar a normatividade ecológica no centro da justificação de políticas públicas e escolhas econômicas.

Para este trabalho, a comparação não pretende replicar fórmulas estrangeiras. O objetivo é evidenciar um efeito dogmático útil ao debate brasileiro: ao mudar o polo de titularidade, altera-se o critério de relevância jurídica da lesão e se antecipa o tempo da tutela. Essa perspectiva comparada contribui para discutir como o art. 225 pode ser lido de modo a incluir ciclos, funções e processos ecológicos como objeto direto de proteção, mesmo sem reconhecer, expressamente, a Natureza como sujeito de direitos.

3. A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A CHAVE DO CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO

O constitucionalismo contemporâneo, frequentemente associado ao neoconstitucionalismo, é descrito como conjunto de transformações que reposicionam a Constituição no centro do sistema jurídico, afirmam sua normatividade direta, reforçam a proteção de direitos fundamentais e intensificam a relevância da jurisdição constitucional. Em linhas gerais, essa chave descreve a passagem de um constitucionalismo predominantemente formal para um constitucionalismo substantivo, no qual a Constituição opera como norma jurídica vinculante e condiciona a validade de decisões estatais (HESSE, 1991; BARROSO, 2005).

Nesse horizonte, assume relevo a força normativa dos princípios. Princípios não são apenas enunciados de orientação ou preferências morais do constituinte; são normas jurídicas que irradiam efeitos, orientam a interpretação do direito infraconstitucional, impõem deveres de conformação às políticas públicas e podem fundamentar controle de constitucionalidade. A consequência é a elevação do padrão de justificação pública, pois decisões estatais passam a exigir demonstração de compatibilidade com direitos e princípios estruturantes, de modo racionalmente controlável (HESSE, 1991; ALEXY, 2014).

A teoria dos direitos fundamentais contribui ao descrever princípios como mandamentos de otimização e ao associar a proporcionalidade, nos subtestes de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, a um método para enfrentar colisões normativas sem reduzir a decisão a voluntarismo (ALEXY, 2014). Em chave complementar, a compreensão de direitos como razões de princípio auxilia a explicar por que democracia constitucional não se esgota na regra da maioria e por que certos direitos funcionam como limites robustos à política majoritária (DWORKIN, 2005).

No Brasil, a Constituição de 1988, com alta densidade normativa e ampla principiologia, favoreceu a expansão da argumentação constitucional e a constitucionalização do Direito. Para a matéria ambiental, isso implica que a proteção ecológica não se reduz a tema setorial, mas constitui parâmetro constitucional de validade e legitimidade de políticas públicas, decisões administrativas e opções legislativas. Nesse contexto, a qualidade do controle constitucional depende da explicitação de razões, evidências e alternativas consideradas, especialmente quando a proteção ambiental entra em tensão com atividade econômica e direitos sociais.

4 A TUTELA DO MEIO AMBIENTE NO ART. 225: FUNDAMENTOS E LIMITES DO PARADIGMA ANTROPOCÊNTRICO

A Constituição Federal de 1988 instituiu, no art. 225, um modelo de proteção ambiental frequentemente descrito como antropocêntrico, pois estrutura o “meio ambiente ecologicamente equilibrado” como bem de uso comum do povo e como condição essencial à sadia qualidade de vida, impondo deveres ao Poder Público e à coletividade. Nessa chave, a tutela do ambiente é justificada, em termos predominantes, pela finalidade de assegurar condições materiais e existenciais para a vida humana digna e para a justiça intergeracional, em articulação com a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e a proteção à saúde.

Esse desenho normativo permite proteção intensa quando a centralidade humana funciona como razão para exigir níveis elevados de prevenção, controle e fiscalização. O limite surge quando a instrumentalidade humana opera como filtro indevido, capaz de retardar a tutela até que o comprometimento ecológico se converta em prejuízos humanos diretos e comprováveis. Em contextos de risco difuso, impactos cumulativos e irreversibilidade potencial, esse filtro é dogmaticamente frágil, porque desloca o núcleo de proteção do equilíbrio ecológico para efeitos tardios, frequentemente de difícil demonstração.

O diálogo com a legislação infraconstitucional estruturante reforça a dimensão coletiva e preventiva da tutela. A Política Nacional do Meio Ambiente define “meio ambiente” de modo abrangente e funcional, e a ação civil pública consolida instrumentos processuais coletivos de proteção de bens difusos. Esses marcos, contudo, não eliminam a questão central do artigo: como interpretar o art. 225 para que o objeto de proteção não seja reduzido a interesses humanos,

preservando, ao mesmo tempo, coerência com a estrutura constitucional e com limites institucionais.

5 DA SUPERAÇÃO DO ANTROPOCENTRISMO À HERMENÊUTICA ECOCÊNTRICA E PLURINACIONAL: CRITÉRIOS E EFEITOS

A densificação ecocêntrica do art. 225, em diálogo crítico com o constitucionalismo latino-americano, parte de uma constatação simples: a crise ecológica não se manifesta apenas por danos pontuais, mas por riscos sistêmicos, difusos e cumulativos. A tarefa, portanto, não é inflacionar direitos por retórica, e sim elevar a integridade ecológica à condição de parâmetro constitucional autônomo, capaz de orientar prevenção, decisão e controle. Isso pode ser feito sem negar a dignidade humana e sem romper com a tradição constitucional brasileira (LEITE; AYALA, 2004; GUDYNAS, 2015).

A experiência regional evidencia esse deslocamento. Ao reconhecer direitos da Natureza no Equador e ao estabelecer um estatuto jurídico da Madre Tierra na Bolívia, esses ordenamentos afirmam que o ambiente não pode ser tratado como simples instrumento de benefícios humanos imediatos. Fixam, em termos normativos, deveres de cuidado e limites ecológicos como critérios estruturantes de políticas públicas e de escolhas econômicas. A perspectiva plurinacional aprofunda esse horizonte ao incorporar modos não hegemônicos de compreender a relação entre vida humana, território e ciclos naturais, ampliando razões públicas e desafiando a redução da Natureza a “recurso”.

Essa orientação é compatível com o ordenamento brasileiro porque a Constituição de 1988 já assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe deveres vinculantes de defesa e

preservação, com sentido intergeracional. O diálogo comparado, assim, opera como reforço hermenêutico: não substitui o texto constitucional, mas explicita consequências normativas necessárias para enfrentar incerteza científica, impactos cumulativos e assimetrias informacionais próprias da sociedade de risco (LEITE; AYALA, 2004)

5.1 CRITÉRIOS DE LEGITIMIDADE: FIDELIDADE AO TEXTO, COERÊNCIA SISTÊMICA E CONTROLE ARGUMENTATIVO

A densificação ecocêntrica do art. 225 só se sustenta quando opera como aperfeiçoamento da eficácia constitucional, e não como substituição do texto por preferências do intérprete. Por isso, a proposta exige critérios cumulativos que funcionem, ao mesmo tempo, como garantias de legitimidade e como filtros contra voluntarismo. O objetivo é viabilizar controle racional da decisão e previsibilidade mínima do método. Essa disciplina é ainda mais necessária quando o deslocamento interpretativo busca reduzir a dependência do “dano humano” individualizável como gatilho exclusivo, pois a mudança incide diretamente sobre o padrão de relevância do ilícito ambiental e sobre o momento de intervenção estatal.

(a) Fidelidade semântica e finalística ao texto constitucional

O primeiro critério é a fidelidade ao sentido e à finalidade do art. 225. A Constituição não precisa reconhecer expressamente a Natureza como sujeito de direitos para admitir que a integridade ecológica tenha densidade normativa própria. O objeto protegido, “meio ambiente ecologicamente equilibrado”, é uma categoria funcional que pressupõe ciclos, processos, conectividade e estabilidade ecológica. Ler o dispositivo como tutela restrita a utilidades humanas imediatas reduz o alcance do

próprio texto e enfraquece o dever de preservação imposto ao Poder Público e à coletividade.

Em termos práticos, a fidelidade semântica e finalística exige que a decisão identifique o bem ecológico constitucionalmente relevante em sua dimensão funcional, e não como mero cenário ou recurso. O eixo se desloca de “quanto alguém perdeu” para “qual integridade ecológica foi afetada ou ameaçada”, permitindo tutela antes do dano consumado. Assim, a leitura ecocêntrica não cria conteúdo novo, apenas extrai uma consequência necessária do texto: o “equilíbrio ecológico” constitui o núcleo semântico que não pode ser esvaziado por filtros que atrasem a proteção.

(b) Coerência sistêmica e concordância prática

O segundo critério é a coerência sistêmica. A densificação ecocêntrica deve compatibilizar proteção ambiental, direitos sociais, desenvolvimento e ordem econômica, sem rebaixar o meio ambiente a variável residual do conflito. Isso implica tratar o art. 225 como parâmetro de validade e de legitimidade de decisões estatais e escolhas privadas relevantes, exigindo justificativa reforçada quando a opção implicar degradação significativa. Metodologicamente, a coerência sistêmica exige concordância prática: nenhum polo do conflito pode ser eliminado, mas o nível de sacrifício ecológico admissível precisa ser justificado por razões públicas densas, e não por fórmulas genéricas.

O ponto decisivo é que a densificação ecocêntrica não converte a proteção ecológica em cláusula absoluta. Ela altera o padrão de fundamentação: escolhas degradadoras demandam justificativa mais exigente do que escolhas preservacionistas. Essa assimetria não é moralismo, mas efeito estrutural de um direito-dever de proteção com função preventiva em cenário de risco difuso e cumulativo (LEITE; AYALA, 2004).

(c) Máxima efetividade e vedação de esvaziamento protetivo

O terceiro critério é a máxima efetividade do direito-dever ambiental. O art. 225 não é proclamação simbólica. Ele impõe deveres de defesa e preservação e, por isso, deve produzir efeitos operacionais, sobretudo na forma de padrões de prevenção, controle de risco e fiscalização. A densificação ecocêntrica reforça essa exigência: se a integridade ecológica é parâmetro constitucional relevante em si, a atuação estatal não pode se limitar a reagir quando o dano humano já se materializou.

Na prática, máxima efetividade implica motivação qualificada para autorizações e políticas de impacto, explicitação de condições e medidas preventivas, e recusa de leituras que transformem a restauração em mera faculdade. O critério também orienta o controle de constitucionalidade: decisões que “aceitam o risco” sem explicar por que ele é constitucionalmente tolerável, ou que tratam o equilíbrio ecológico como argumento secundário, falham em efetividade.

(d) Racionalidade decisória controlável e justificação pública verificável

O quarto critério é a racionalidade decisória controlável. Ele é o que transforma a densificação ecocêntrica em método verificável e replicável. Exige-se que a decisão apresente razões públicas apoiadas em evidências, prognoses e alternativas consideradas, e que explicita por que medidas menos gravosas seriam insuficientes. A proporcionalidade e a ponderação estruturada operam como instrumentos de controle, reduzindo o espaço do subjetivismo (ALEXY, 2014; BARROSO, 1998).

Para evitar que “ecocentrismo” se reduza a rótulo, este critério impõe uma gramática mínima de fundamentação. Em termos essenciais, a decisão deve: (i) descrever o bem ecológico tutelado e o tipo de risco envolvido, incluindo a cumulatividade; (ii) indicar o nexo entre a medida ou atividade e o risco ecológico plausível; (iii) expor alternativas examinadas e justificar sua rejeição; (iv) explicitar

medidas de prevenção, mitigação, compensação e monitoramento; (v) justificar, com densidade, qualquer flexibilização do patamar protetivo, demonstrando compatibilidade com o núcleo constitucional de proteção (ALEXY, 2014; BARROSO, 1998).

5.2 EFEITOS OPERACIONAIS: TEMPO DA TUTELA, ÔNUS ARGUMENTATIVO E REMÉDIOS

Os critérios acima não são meras exigências formais. Eles produzem efeitos concretos porque redefinem como o art. 225 funciona como parâmetro decisório. O núcleo da mudança é claro: a tutela deixa de depender, como condição de relevância, da comprovação de interesse humano direto e passa a reconhecer a integridade ecológica como bem constitucional cuja ameaça plausível já impõe resposta, sob padrões de prevenção e precaução.

(a) Efeito temporal: antecipação do momento de intervenção

O primeiro efeito é temporal. A tutela passa a ser antecipatória diante de risco sério e plausível, ainda que não exista “vítima humana” identificável. Isso reorganiza o padrão de intervenção estatal: em vez de atuar predominantemente depois da degradação, a decisão opera no tempo do risco, com condicionantes, restrições e medidas preventivas. O debate deixa de ser “o dano ocorreu e quem sofreu” e passa a ser “qual integridade ecológica está sob ameaça e quais deveres de proteção são imediatamente exigíveis”. Trata-se de consequência coerente com o art. 225 como direito-dever e com a necessidade de lidar com incerteza e cumulatividade (LEITE; AYALA, 2004).

(b) Efeito material: redefinição do que conta como lesão constitucionalmente relevante

O segundo efeito é material. O critério de relevância jurídica deixa de ser exclusivamente a demonstração de prejuízo humano direto e passa a incluir lesões e ameaças à funcionalidade ecológica. O núcleo de proteção, assim, não se limita a utilidades imediatas do ambiente, mas abrange ciclos, funções e processos ecológicos como conteúdo do “equilíbrio”. É o deslocamento que o diálogo comparado ajuda a iluminar ao priorizar a continuidade ecológica como razão protetiva.

Na prática, isso altera a arquitetura do conflito: a proteção ambiental deixa de ocupar posição subsidiária e passa a ser razão constitucional primária, cuja compressão exige justificativa reforçada.

(c) Efeito argumentativo: elevação do ônus de justificação e transparência decisória

O terceiro efeito é argumentativo. A densificação ecocêntrica eleva o ônus de justificação do decisor público e do agente econômico em medidas de impacto significativo. Essa elevação não é escolha ideológica, mas exigência de racionalidade controlável: se o art. 225 opera como parâmetro de validade, decisões que afetam a integridade ecológica precisam de motivação densa, com alternativas, evidências, prognoses e razões explícitas para qualquer flexibilização (ALEXY, 2014; BARROSO, 1998).

O ganho prático é decisivo: a discussão deixa de ser declaratória e se torna auditável. O debate se desloca para elementos verificáveis, como identificação do risco, avaliação da cumulatividade, escolha de medidas e demonstração de que opções menos gravosas não eram suficientes.

(d) Efeito remediativo: primazia da recomposição e da restauração

O quarto efeito é remediativo. Ao reconhecer a integridade ecológica como razão protetiva autônoma, reforça-se a primazia de recomposição e restauração, evitando a normalização de respostas

meramente indenizatórias como se fossem equivalentes ao equilíbrio ecológico. A indenização pode ter papel relevante, mas não substitui a lógica constitucional de preservação e recomposição. Por consequência, decisões e políticas devem tratar a restauração como eixo preferencial, sempre que tecnicamente possível, e justificar de modo explícito quando isso não puder ocorrer.

(e) Parâmetros mínimos como instrumento de controle

Para reduzir arbitrariedade e assegurar previsibilidade, a densificação ecocêntrica recomenda avaliar decisões e políticas ambientais por parâmetros mínimos que transformam a fundamentação em roteiro controlável. Não se trata de burocracia, mas de verificação da racionalidade do ato: identificação do bem ecológico afetado, grau de risco e cumulatividade, alternativas examinadas, medidas de prevenção e mitigação, e justificativa reforçada para flexibilizações.

O efeito prático é direto: com esses elementos, a decisão se torna mais transparente, o controle se torna mais objetivo e o espaço para soluções retóricas se reduz. Em síntese, a proposta não busca apenas “proteger mais”, mas proteger melhor, com método explícito e controlável.

CONCLUSÃO

O trabalho partiu do diagnóstico de que a leitura dominante do art. 225 da Constituição de 1988 tende a estruturar a tutela ambiental em chave antropocêntrica, isto é, como proteção do meio ambiente sobretudo enquanto condição para a vida humana, a saúde e a qualidade de vida. Sustentou-se que esse enquadramento é favorecido pela própria redação do caput, ao titularizar o direito em “todos” e ao vincular o bem ambiental às presentes e futuras gerações, o que,

na prática interpretativa, pode converter a integridade ecológica em argumento instrumental e retardar a intervenção jurídica até a prova de prejuízos humanos diretos, sobretudo em cenários de risco difuso, cumulatividade e possível irreversibilidade.

Em resposta a esse problema, o artigo examinou se a Constituição de 1988 admite uma densificação interpretativa capaz de deslocar o eixo antropocêntrico para uma hermenêutica biocêntrica ou ecocêntrica, sem reforma formal do texto. A análise demonstrou que tal deslocamento é dogmaticamente compatível com o constitucionalismo contemporâneo, na medida em que a normatividade da Constituição, a centralidade dos princípios e a exigência de justificação pública controlável autorizam extrair do próprio enunciado “meio ambiente ecologicamente equilibrado” um núcleo semântico-funcional que inclui ciclos, processos, conectividade e estabilidade ecológica. Com isso, a integridade ecológica pode operar como razão constitucional relevante em si, sem negar a dignidade humana, mas evitando que ela funcione como filtro excludente que subordina a tutela ambiental à demonstração de dano humano individualizável.

O diálogo comparado com o novo constitucionalismo latino-americano cumpriu, então, uma função metodologicamente delimitada: não se pretendeu importar modelos, e sim evidenciar um ganho dogmático central das experiências andinas, a saber, a alteração do padrão de relevância jurídica da lesão e a antecipação do tempo da tutela quando a normatividade ecológica assume protagonismo. Essa comparação foi mobilizada como reforço hermenêutico, apto a iluminar a necessidade de respostas preventivas e precaucionais diante de incerteza científica e impactos cumulativos, contribuindo para explicitar consequências normativas que podem ser extraídas do art. 225 sem a criação interpretativa de um “novo texto constitucional”.

Com base nisso, foram apresentados critérios cumulativos de legitimidade para a densificação ecocêntrica, precisamente para evitar voluntarismo e assegurar replicabilidade do método: fidelidade semântica e finalística ao art. 225, coerência sistêmica e concordância prática com o restante da Constituição, máxima efetividade e vedação de esvaziamento protetivo, e racionalidade decisória controlável por justificação pública verificável. Esses critérios não foram tratados como fórmulas abstratas, mas como parâmetros capazes de disciplinar decisões e políticas ambientais, exigindo identificação do bem ecológico tutelado, descrição do risco e de sua cumulatividade, consideração de alternativas, adoção de medidas preventivas, mitigatórias e de monitoramento, além de motivação reforçada para qualquer flexibilização do patamar de proteção.

Os objetivos propostos foram alcançados porque se demonstrou, de modo coerente com a fundamentação, que a Constituição de 1988 comporta uma evolução interpretativa que não rompe com seus fundamentos, mas aperfeiçoa a eficácia do direito-dever ambiental. Também se explicitou por que essa densificação produz ganhos operacionais concretos: antecipa o momento de intervenção no tempo do risco, redefine o que conta como lesão constitucionalmente relevante ao incluir ameaças à funcionalidade ecológica, eleva o ônus argumentativo de decisões e atividades de impacto significativo e reforça a primazia de recomposição e restauração em relação a respostas meramente indenizatórias, sempre que tecnicamente possível. Ao final, delimitou-se um conjunto de condições de legitimidade que torna a proposta controlável e institucionalmente responsável, reduzindo espaço para soluções retóricas e aumentando transparência e auditabilidade.

Conclui-se, portanto, que a transição de uma leitura predominantemente antropocêntrica para uma hermenêutica ecocêntrica do art. 225 é viável no ordenamento brasileiro sem emenda

constitucional, desde que conduzida por um itinerário interpretativo disciplinado, fiel ao texto, coerente com o sistema e sustentado por justificação pública verificável. A consequência normativa decisiva é a afirmação da integridade ecológica como parâmetro constitucional autônomo de proteção, capaz de orientar prevenção, precaução e controle de risco em termos mais tempestivos e racionalmente controláveis, fortalecendo a proteção ambiental não por expansão retórica, mas por aprimoramento metodológico e argumentativo da decisão constitucional.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2014.

ACOSTA, Alberto; MARTÍNEZ, Esperanza (comp.). *La naturaleza con derechos: de la filosofía a la política*. Quito: Ediciones Abya-Yala, 2011. 376 p. ISBN 978-9978-22-995-8. Disponível em: https://www.hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Acosta_Martinez_La_naturaleza_com_derechos.pdf. Acesso em: 9 fev. 2026.

AVRITZER, Leonardo; MARONA, Marjorie Corrêa; DANTAS, Fernando Antônio de Carvalho; GOMES, Lilian Cristina Bernardo. *O constitucionalismo democrático latino-americano em debate: soberania, separação de poderes e sistema de direitos*. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.

BARROSO, Luís Roberto. *Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora*. São Paulo: Saraiva, 1998.

BARROSO, Luís Roberto. *Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito: o triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil*. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, n. 240, p. 1-42, abr./jun. 2005. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43618>. Acesso em: 9 fev. 2026.

BOLÍVIA. Ley N° 071, de 21 de diciembre de 2010 (Ley de Derechos de la Madre Tierra). La Paz, 2010. Disponível em: <https://www.planificacion.gob.bo/uploads/marco-legal/Ley%20N%C2%B0%20071%20DERECHOS%20DE%20LA%20MADRE%20TIERRA.pdf>. Acesso em: 9 fev. 2026.

BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 9 fev. 2026.

BRASIL. Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 2 set. 1981. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em: 9 fev. 2026.

BRASIL. Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor e a outros interesses difusos e coletivos. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 25 jul. 1985. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm. Acesso em: 9 fev. 2026.

DWORKIN, Ronald. *Uma questão de princípio*. Tradução de Luís Carlos Borges. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

EQUADOR. *Constitución de la República del Ecuador*. Registro Oficial, Suplemento 449, 20 out. 2008. Última modificación: 25 ene. 2021. Disponível em: https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf. Acesso em: 9 fev. 2026.

GARGARELLA, Roberto. *La sala de máquinas de la Constitución: dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010)*. Buenos Aires: Katz Editores, 2014.

GUDYNAS, Eduardo. *Buen vivir: germinando alternativas al desarrollo. América Latina en Movimiento*, Quito, n. 462, p. 1-20, fev. 2011. Disponível em: <https://www.gudynas.com/publicaciones/articulos/GudynasBuenVivirGerminandoALAI11.pdf>. Acesso em: 9 fev. 2026.

GUDYNAS, Eduardo. *Derechos de la naturaleza: ética biocéntrica y políticas ambientales*. 1a ed. Buenos Aires: Tinta Limón, 2015. 320 p. ISBN 978-987-3687-06-8. Disponível em: https://tintalimon.com.ar/public/ugjx9vscmlhgykpk73olibixe0t/pdf_978-987-3687-06-8.pdf. Acesso em: 9 fev. 2026.

HESSE, Konrad. *A força normativa da Constituição*. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991.

LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. *Direito ambiental na sociedade de risco*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

SANTOS, Boaventura de Sousa. *A gramática do tempo: para uma nova cultura política*. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

WOLKMER, Antonio Carlos. *Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no direito*. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015.

YRIGOYEN FAJARDO, Raquel. *El horizonte del constitucionalismo pluralista: del multiculturalismo a la descolonización*. In: RODRÍGUEZ GARAVITO, César (coord.). *El derecho en América Latina: un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011. p. 139-155. Disponível em: <https://sociologiajuridica.net/2011/09/13/yrigoyen-fajardo-el-horizonte-del-constitucionalismo-pluralista-del-multiculturalismo-a-la-descolonizacion-2011/>. Acesso em: 9 fev. 2026.

NÃO-DISCRIMINAÇÃO E OS POVOS ORIGINÁRIOS: UMA ANÁLISE A PARTIR DA DOUTRINA DAS CATEGORIAS SUSPEITAS

Márcio de Lima¹

INTRODUÇÃO

A pesquisa enfrenta a discriminação estrutural contra os povos indígenas no Brasil, explorando como práticas jurídicas e administrativas contribuíram para a marginalização desses grupos ao longo da história. Para tanto, revisita a narrativa da colonização sob uma perspectiva decolonial, privilegiando as epistemologias e experiências dos povos originários, tendo como objetivo analisar como a discriminação estrutural se manifesta nas instituições, normas e práticas sociais, perpetuando a exclusão e inferiorização dos povos indígenas, fazendo um paralelo, na sequência, com as contribuições da doutrina das categorias suspeitas.

Diversas pesquisas anteriores abordaram a questão indígena sob diferentes perspectivas. Estudos como os de Schwarcz (2015) e Grupioni (1996) destacaram a violência da colonização e a construção de narrativas eurocêtricas que legitimaram a apropriação territorial e o genocídio dos povos indígenas. Portanto, este artigo não compartilha da tese de que a assimilação cultural foi uma via eficaz para o respeito aos modos de vida dos povos originários, atualizando e refinando a

¹ Graduação em Direito (FURB), Especialização *lato sensu* em Criminologia, Política Criminal e Segurança Pública (ANHANGUERA/UNIDERP), Mestre em Direito (Mestrado) pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC, Campus de Chapecó/SC. E-mail: ml19634@gmail.com

análise sobre a persistência do estigma étnico e a lógica colonial nas relações interétnicas, mantendo os povos originários no rol de grupos suspeitos de sofrerem discriminação estatal.

A orientação teórica do texto é fundamentada na perspectiva decolonial, que busca desconstruir as narrativas coloniais e valorizar os saberes ancestrais dos povos indígenas, marco teórico que se revela indispensável para correta compreensão da trajetória dos povos originários a partir da colonização. Utiliza-se como procedimento metodológico o bibliográfico-investigativo.

A inovação argumentativa reside na análise da discriminação estrutural como um fenômeno sistêmico e persistente, que se manifesta tanto nas práticas institucionais quanto no imaginário coletivo. A doutrina das categorias suspeitas, neste ponto, é central para a discussão, pois propõe que certos grupos, como os povos indígenas, devem ser considerados suspeitos de discriminação e, portanto, merecem proteção especial, contribuindo sobremaneira para efetividade dos direitos humanos e dos direitos fundamentais constitucionais (civis e sociais).

As principais hipóteses do artigo são: (1) a discriminação estrutural contra os povos indígenas é um fenômeno sistêmico e persistente, enraizado na história colonial; (2) a assimilação cultural não é eficiente para superar o estigma étnico e garantir a plena cidadania indígena; (3) a doutrina das categorias suspeitas é útil para a proteção dos direitos dos povos indígenas; (4) a efetividade dos direitos humanos e dos direitos fundamentais constitucionais exige o enfrentamento das estruturas que perpetuam a desigualdade histórica.

Os principais resultados que serão explicados no desenvolvimento incluem a análise das práticas jurídicas e administrativas que contribuíram para a marginalização dos povos indígenas, a discussão sobre a persistência do estigma étnico e a lógica colonial nas relações interétnicas, e a possibilidade de aplicação da doutrina das categorias

suspeitas como ferramenta para evitar a perpetuação ou a criação de novas formas de discriminação.

1 DISCRIMINAÇÃO ESTRUTURAL E OS POVOS INDÍGENAS: CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

A história dos povos indígenas no Brasil é marcada pela violência da colonização, que implicou deslocamentos forçados, perda de territórios, destruição de culturas e imposição de modelos civilizatórios excludentes. Empós, e já no contexto de formação do Estado brasileiro, incorporou-se práticas jurídicas e administrativas que contribuíram para a marginalização dos povos originários, sob discursos de assimilação e integração.

Assim, discutir sobre os povos originários no contexto brasileiro transcende a simples rememoração de fatos históricos. Tal reflexão, ao contrário, exige enfrentar a reprodução de narrativas que, tradicionalmente, refletem a perspectiva dos colonizadores, sustentando a ideia de que estas terras foram “descobertas” por europeus, os quais, supostamente, conduziram os nativos à superação de uma condição de selvageria. Essa construção narrativa, ainda presente no imaginário coletivo, tende a conferir uma aparente legitimidade às práticas de apropriação territorial e ao genocídio perpetrado durante o processo colonial.

Essa representação fica evidente, inclusive, nos relatos iniciais, que descreveram o encontro entre europeus e povos originários como pacífico, pautado em uma suposta comunhão que teria unificado ambos sob uma mesma fé e objetivos. Contudo, a realidade subsequente revelou o oposto: de um lado, a imposição violenta, com traços de

genocídio, e de outro, a resistência e a tentativa de sobrevivência dos povos indígenas (Schwarcz, 2015).

Observa-se, portanto, que a construção da memória social brasileira, especialmente a partir dos processos de educação formal, consolidou uma narrativa que enquadra a colonização como um ato de descobrimento de um território habitado por sujeitos considerados inferiores. Essa perspectiva não apenas reduziu esses povos à condição de seres carentes de objetos triviais, como espelhos e roupas, como também naturalizou a imposição de elementos culturais europeus, tais como práticas religiosas, linguísticas e costumes, sob a justificativa de um suposto benefício civilizatório.

Grupioni (1996) evidencia que essa lógica foi reforçada nos materiais didáticos, que difundiram imagens fragmentadas e contraditórias dos povos indígenas ao longo da história. Inicialmente, os indígenas eram apresentados como figuras amistosas, que colaboraram com os europeus no extrativismo e na construção das primeiras estruturas coloniais. No entanto, rapidamente passaram a ser retratados como obstáculos à colonização, sobretudo quando resistiam, como no caso dos Tamoios, que se aliaram aos franceses contra os portugueses. Nesse contexto, o indígena deixa de ser visto como colaborador e passa a ser rotulado como traiçoeiro. Paralelamente, sua figura é associada à de mão de obra escravizada, utilizada pelos bandeirantes, tanto para expandir o território como para capturar fugitivos. A justificativa para a posterior substituição dessa mão de obra pela escravidão africana repousava na narrativa de que os indígenas seriam “preguiçosos” e avessos ao trabalho forçado, além de demasiadamente apegados à liberdade.

Simultaneamente, disseminou-se a ideia de que os indígenas deveriam ser civilizados, principalmente por meio da catequização,

frequentemente representada pela iconografia de missionários como Anchieta e Nóbrega ladeados por crianças indígenas.

Após esse processo, os povos originários desaparecem dos relatos históricos, deixando apenas vestígios culturais genéricos, como a referência aos Tupis, suas divindades e suas moradias, e algumas práticas como a queimada, a fabricação de redes e mitologias diversas. Já nos períodos posteriores, quando se discute a ocupação de regiões como o Centro-Oeste e o Norte, a presença indígena é praticamente ignorada, como se tais territórios fossem desabitados. Nos raros momentos em que aparecem nos livros didáticos, os povos indígenas são retratados de forma superficial, restritos à Amazônia e ao Xingu, com eventuais menções a figuras como Rondon, os irmãos Villas-Bôas e à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) (Grupioni, 1996).

Esse itinerário de subalternização, fundado na noção de “descobrimento”, estrutura, conforme Quijano (2005), um novo padrão de poder global. Tal modelo se assenta na invenção de categorias sociais racializadas – indígenas, negros e mestiços —, nas quais a raça passa a ser critério central para hierarquização social e definição de papéis. Nesse sistema, os sujeitos classificados como “descobertos” são posicionados na base da hierarquia, sendo considerados culturalmente inferiores. Essa lógica não apenas legitima a expropriação de suas terras, como também promove a negação de sua cultura, identidade e existência, na medida em que tudo aquilo que não se alinha aos padrões eurocêntricos é percebido como atraso ou obstáculo ao progresso.

Tal percepção de inferioridade dos povos originários é perceptível desde os primeiros relatos dos colonizadores. Colombo, por exemplo, ao descrever suas observações às autoridades espanholas, inseria os povos nativos como elementos da paisagem, ao lado da fauna e da flora. Suas anotações referem-se aos habitantes de forma secundária, muitas vezes mencionando-os entre descrições de plantas, animais ou recursos

minerais. As pessoas eram associadas a descrições físicas e utilitárias, como a força dos corpos comparada à robustez das raízes, ou a menção a adornos de ouro no nariz, posicionados discursivamente no mesmo nível de observações sobre cães ou objetos naturais (Todorov, 2019).

Apesar da narrativa eurocêntrica ter propagado a ideia de que o fascínio pelo Novo Mundo decorria, sobretudo, de suas riquezas naturais, a realidade é que os povos originários detinham sistemas de conhecimento, tecnologias e modos de vida extremamente adaptados às especificidades do território. Muitos desses saberes foram fundamentais para a própria sobrevivência dos colonizadores, embora sistematicamente invisibilizados pela lógica colonial.

Essa negação dos saberes indígenas configura o que Porto-Gonçalves (2005) denomina de “colonialidade do saber”, fenômeno que deriva da imposição de um olhar epistemológico eurocêntrico sobre o mundo. Esse processo não apenas desqualificou os conhecimentos ancestrais, como também inviabilizou seu reconhecimento social e científico, relegando-os a um plano de subalternidade epistêmica.

Diante desse cenário, torna-se imperativo revisitar a história do Brasil sob uma perspectiva decolonial, que privilegie as epistemologias e experiências dos povos originários. Somente por meio desse exercício crítico é possível compreender, de forma mais justa e acurada, o papel dessas populações na formação social, cultural e econômica do país.

1.1. DESIGUALDADE ESTRUTURAL: DEFINIÇÃO

O conceito de desigualdade estrutural exprime uma forma de discriminação que não se refere a episódios isolados ou pontuais, mas a padrões persistentes de exclusão e inferiorização direcionados a determinados grupos. Trata-se de práticas e atitudes – tanto legais

quanto fáticas – que se perpetuam ao longo do tempo e até mesmo por gerações, configurando um fenômeno generalizado e sistêmico (CIDH, 2019).

O caráter generalizado da discriminação estrutural diz respeito à sua dimensão quantitativa, isto é, à escala abrangente do problema. Já o caráter sistêmico refere-se à forma como as decisões, políticas, práticas institucionais e normas culturais de uma sociedade contribuem para reproduzir e consolidar desigualdades. Essa forma de discriminação se manifesta de modo visível em diversos indicadores sociais, como o acesso desigual à moradia, ao crédito, à saúde, à educação de qualidade, bem como nas taxas de expectativa de vida, de nutrição e nas dificuldades enfrentadas para usufruir do espaço público ou acessar locais de lazer. Além disso, destaca-se que a discriminação estrutural não se limita aos dados estatísticos, sendo também reproduzida no imaginário coletivo por meio de estereótipos e narrativas pejorativas, que negam dignidade às suas vítimas (CIDH, 2019).

Na mesma esteira, Assari (2019) afirma que o fenômeno da desigualdade estrutural retrata diferenciações sem legitimidade racional, enraizadas na própria estrutura da sociedade, expressando-se por meio de diversas instituições, como os sistemas jurídico, educacional, empresarial, governamental e de saúde. Essas disparidades resultam da concentração do poder político e econômico, uma vez que determinados grupos, historicamente, foram responsáveis pela formulação das normas e leis, enquanto outros tiveram seu acesso à riqueza e aos recursos sistematicamente restringido.

Com base no contexto histórico e nos conceitos acima detalhados, é possível afirmar que a discriminação contra os povos indígenas se manifesta estruturalmente, com reflexos nas instituições, nas normas e nas práticas sociais. A dificuldade de acesso à educação

intercultural (Serpa; Grando, 2018) à participação política (Lima², 2024) e, sobretudo, à efetivação dos direitos territoriais (Osowski, 2017) revelam as principais faces desta dinâmica persistente de negação de direitos, resultando na invisibilização das culturas indígenas e na estigmatização social.

Em termos de resistência, Darcy Ribeiro (2017), cujas contribuições acadêmicas sobre os povos indígenas se destacaram, especialmente na segunda metade do século XX, identificou três principais estratégias de enfrentamento adotadas por essas populações diante do avanço dos processos colonizatórios. A primeira consistia na migração para regiões isoladas, estratégia que, embora permitisse postergar o contato, não eliminava a necessidade futura de enfrentamento. A segunda resposta correspondia à resistência armada, a qual, apesar de expressar uma forma ativa de defesa, resultava na desestruturação das organizações sociais tradicionais, uma vez que impunha um estado de conflito contínuo, inviabilizando o pleno funcionamento de instituições socioculturais. Por fim, a terceira possibilidade, considerada por Ribeiro como uma consequência inevitável, era a aceitação da convivência forçada com os colonizadores. Esta última, muitas vezes, surgia após tentativas frustradas de fuga ou resistência, ou ainda como uma escolha pragmática diante da impossibilidade de manter a autonomia, sendo motivada pela expectativa de, ao menos, negociar algum grau de controle sobre as novas condições impostas.

Neste cenário, a adoção dos códigos culturais da sociedade envolvente, seja por meio da assimilação linguística, da adoção de práticas laborais ou de padrões de vestimenta, serviu apenas para descaracterizar a identidade indígena, negada desde o início pelo colonizador. Assim, persiste a atribuição de um estigma, fundamentado

² Artigo aprovado no GEP – Interculturalidade e Intersubjetividade: gênero, orientação sexual, raça e etnia, aguardando publicação.

exclusivamente na origem étnica e em representações estereotipadas construídas historicamente sobre o indígena e sobre sua relação com o mundo cristão. Tais representações, embora apresentem traços que lhes conferem aparência de verdade, não se fundamentam em uma análise objetiva da realidade. Antes, configuram-se como construções simbólicas cristalizadas, cuja função social é estruturar e manter as hierarquias nas relações interétnicas, assegurando a segregação e prevenindo aquilo que o imaginário dominante percebe como risco de contaminação cultural (Ribeiro, 2017).

As estratégias de enfrentamento identificadas pelo autor revelam não apenas a resiliência histórica dos povos indígenas diante da invasão colonial, mas também os dilemas profundos que acompanharam suas tentativas de sobrevivência. Seja pela fuga, pela luta ou pela convivência forçada, cada escolha imposta a esses grupos implicou perdas significativas, seja de território, de autonomia ou de coesão social, processo este ainda em curso. Ribeiro evidencia que a convivência imposta, ainda que por vezes motivada por expectativas de negociação, esteve longe de significar uma integração real ou justa. Pelo contrário, ela marcou o início de uma relação assimétrica, em que os códigos culturais indígenas foram sistematicamente desvalorizados e silenciados, mesmo quando aparentemente incorporados aos modos de vida hegemônicos, tudo isso compondo um processo discriminatório complexo e profundo, cujas raízes continuam alimentando práticas sociais ainda vigentes.

A análise proposta por Ribeiro (2017) também lança luz sobre os limites da assimilação cultural como via de integração. A persistência do estigma étnico, mesmo entre os indígenas que adotaram práticas da sociedade envolvente, revela o caráter excludente das estruturas sociais dominantes, que se sustentam em representações simbólicas arraigadas. O rótulo de “bugre” e demais estereótipos não operam com

base em diferenças reais e concretas, mas em construções que servem para manter distâncias e reforçar desigualdades. Nesse sentido, a não superação dessas narrativas revela a permanência de uma lógica colonial nas relações interétnicas, na qual a suposta inferioridade do outro é continuamente reafirmada para justificar a negação de direitos e o bloqueio da plena cidadania indígena.

1.2. O PAPEL DO DIREITO NA REPRODUÇÃO (OU SUPERAÇÃO) DAS DESIGUALDADES

O Direito no Brasil tem historicamente oscilado entre ser instrumento de dominação – quando legitima a negação dos direitos indígenas – e de resistência, quando, a partir de marcos normativos como a Constituição de 1988 e instrumentos internacionais, passa a reconhecer os direitos à terra, à cultura e à autodeterminação.

A linha do tempo abaixo transcrita, formulada com base nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas para a escrita da dissertação intitulada “Integracionismo da População Indígena e a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná (2014-2024)”, no Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Direito da Unoesc Chapecó/SC, ajuda a compreender como se desenvolveu o tratamento jurídico dos povos originários, a partir da colonização:

Quadro 1 – Linha do tempo da legislação indigenista no Brasil

Período	Marco Normativo/ Político	Características Principais
Colonial (1500-1822)	Cartas Régias, Diretório dos Índios (1757)	Tutela, assimilação forçada, catequese, perda de autonomia.

Período	Marco Normativo/Político	Características Principais
Império (1822-1889)	Constituição de 1824	Reconhecimento limitado; indígenas como “órfãos” da nação; tutela reforçada.
Primeira República (1889-1930)	Código Civil de 1916	Indígenas como relativamente incapazes; reforço da tutela.
Era Vargas (1930-1945)	Criação do SPI (1910)	Proteção paternalista; políticas de integração forçada.
Período Militar (1964-1985)	Estatuto do Índio (Lei 6.001/1973)	Regime tutelar mantido; objetivo de “integrar à comunhão nacional”.
Constituição de 1988	Artigos 231 e 232	Ruptura com o paradigma tutelar; reconhecimento de direitos originários, culturais e territoriais.
Pós-1988 (até hoje)	Convenção 169 da OIT (1991), Declaração da ONU sobre Povos Indígenas (2007)	Consolidação do direito à autodeterminação, consulta livre, prévia e informada, e reforço das garantias constitucionais.

Fonte: Elaborado pelo autor

Analisando os principais diplomas que abordaram a questão indígena, fica evidente que a relação histórica do Estado brasileiro com estes povos foi marcada por um contínuo processo de negação de direitos, subalternização e tentativa de assimilação forçada. Desde o período colonial, passando pelo Império e se consolidando na República, os povos originários foram sistematicamente tratados como sujeitos incapazes, tutelados e, muitas vezes, invisibilizados nos projetos de construção nacional.

É preciso concordar, por outro lado, que o cenário se inverteu nas últimas décadas, pelo menos no plano normativo, tendo como marco, no contexto interno, a Constituição de 1988, que passou a reconhecer aos indígenas, no art. 231, “[...] sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.”

Internacionalmente, a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 1989, representa um marco importante na proteção internacional dos direitos dos povos indígenas, ao estabelecer diretrizes para a consulta prévia em projetos que impactem seus territórios, além de assegurar direitos relacionados à posse da terra, à preservação cultural e à autodeterminação, incluindo o reconhecimento das instituições e métodos próprios de resolução de conflitos.

Assies (2009) observa que a elaboração do documento se deu em resposta às críticas dirigidas à antiga Convenção nº 107, de 1957, cuja lógica assimilacionista refletia uma visão ultrapassada de proteção, centrada na integração dos povos indígenas ao modelo nacional. Com o fortalecimento dos movimentos indígenas, sobretudo na América Latina, novas concepções foram incorporadas, rejeitando políticas assimilacionistas e introduzindo a noção de povos indígenas como sujeitos de direitos autônomos.

Fajardo (2009) complementa ao indicar que a Convenção nº 169 representou uma mudança na relação entre Estado e povos indígenas, ao garantir-lhes o direito de definir suas prioridades de desenvolvimento e gerenciar suas instituições, o que influenciou significativamente o constitucionalismo latino-americano nas décadas seguintes.

A esse instrumento somam-se a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007, e a Declaração Americana da OEA, de 2016, as quais reafirmam direitos fundamentais como a autodeterminação, a preservação das línguas e culturas tradicionais, a restituição de bens culturais e o direito à participação política e à consulta prévia. Esses documentos são frutos de longos processos de mobilização indígena e refletem o reconhecimento da necessidade de proteger os direitos coletivos desses povos em contextos historicamente marcados por violência e exclusão. Embora tenham influenciado

legislações nacionais e contribuído para avanços normativos, sua efetiva implementação ainda enfrenta entraves, como a resistência política, a pressão de interesses econômicos e a fragilidade institucional. A persistência de conflitos fundiários e ameaças às comunidades indígenas, como se observa no debate sobre o marco temporal, demonstra que a aplicação desses instrumentos depende do compromisso contínuo dos Estados e da mobilização da sociedade civil, sendo a efetividade dessas normas diretamente condicionada ao fortalecimento das estruturas de proteção e fiscalização dos direitos indígenas.

Apesar dos avanços experimentados nas últimas décadas, é inegável diante do contexto histórico que o direito foi utilizado, por longo período, como instrumento de discriminação dos povos originários, permitindo e incentivando políticas de integração forçada, tutela e restrição de direitos, fator de suma importância para avaliarmos a inclusão dessa parcela da população no rol das minorias vulneráveis que se enquadram como categorias suspeitas de discriminação.

2.A DOCTRINA DAS CATEGORIAS SUSPEITAS: ORIGEM E FUNDAMENTOS

A doutrina das categorias suspeitas surgiu na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos a partir da nota de rodapé número 4 do caso *United States v. Carolene Products Co.* (1938), que sugere uma intensificação do controle judicial quando leis afetam minorias políticas, grupos vulneráveis ou restringem direitos fundamentais. Essa doutrina foi posteriormente consolidada em casos envolvendo discriminação racial, de gênero e origem nacional.

Pela importância histórica, faço a transcrição da mencionada nota:

There may be narrower scope for operation of the presumption of constitutionality when legislation appears on its face to be within a specific prohibition of the Constitution, such as those of the first ten amendments, which are deemed equally specific when held to be embraced within the Fourteenth. See Stromberg v. California, 283 U. S. 359, 283 U. S. 369-370; Lovell v. Griffin, 303 U. S. 444, 303 U. S. 452. It is unnecessary to consider now whether legislation which restricts those political processes which can ordinarily be expected to bring about repeal of undesirable legislation is to be subjected to more exacting judicial scrutiny under the general prohibitions of the Fourteenth Amendment than are most other types of legislation. On restrictions upon the right to vote, see Nixon v. Herndon, 273 U. S. 536; Nixon v. Condon, 286 U. S. 73; on restraints upon the dissemination of information, see Near v. Minnesota ex rel. Olson, 283 U. S. 697, 283 U. S. 713-714, 283 U. S. 718-720, 283 U. S. 722; Grosjean v. American Press Co., 297 U. S. 233; Lovell v. Griffin, supra; on interferences with political organizations, see Stromberg v. California, supra, 283 U. S. 369; Fiske v. Kansas, 274 U. S. 380; Whitney v. California, 274 U. S. 357, 274 U. S. 373-378; Herndon v. Lowry, 301 U. S. 242, and see Holmes, J., in Gitlow v. New York, 268 U. S. 652, 268 U. S. 673; as to prohibition of peaceable assembly, see De Jonge v. Oregon, 299 U. S. 353, 299 U. S. 365. Nor need we enquire whether similar considerations enter into the review of statutes directed at particular religious, Pierce v. Society of Sisters, 268 U. S. 510, or national, Meyer v. Nebraska, 262 U. S. 390; Bartels v. Iowa, 262 U. S. 404; Farrington v. Tokushige, 273 U. S. 284, or racial minorities, Nixon v. Herndon, supra; Nixon v. Condon, supra: whether prejudice against discrete and insular minorities may be a special condition, which tends seriously to curtail the operation of those political processes ordinarily to be relied upon to protect minorities, and which may call for a correspondingly more searching judicial inquiry. Compare 17 U. S. Maryland, 4 Wheat. 316, 17 U. S. 428; South Carolina v. Barnwell Bros., 303 U. S. 177, 303 U. S. 184, n 2, and cases cited.

Comentando a nota, Clève e Lorenzetto (2015) apontam que é possível extrair da decisão uma fundamentação teórica para a democracia. Uma vez que nesse modelo, o processo democrático configura-se como uma dinâmica de competição entre grupos, na qual vitórias e derrotas temporárias são inerentes e devem ser legitimamente aceitas como parte do funcionamento institucional. No entanto, revelar-se inadmissível, prosseguem os autores, que determinados grupos sejam arbitrariamente excluídos ou sistematicamente impedidos de participar desse processo decisório. Em cenários que envolvem a marginalização ou o silenciamento de determinados atores políticos, justifica-se a atuação do Poder Judiciário como instância de controle e correção das disfunções do próprio processo democrático. Nesse contexto, torna-se evidente a tensão estrutural entre os ideais do constitucionalismo e os princípios da democracia.

Strauss (2011), após a devida contextualização histórica, reporta que apesar de algumas divergências e oscilações na jurisprudência, até o início da década de 1980 estavam consolidados os principais critérios para definição de uma categoria suspeita:

- Preconceito contra uma minoria discreta e isolada;
- Histórico de discriminação contra o grupo;
- Incapacidade do grupo de buscar reparação política (impotência política);
- Imutabilidade da característica que define o grupo;
- Irrelevância da característica em relação à capacidade dos membros de contribuir para a sociedade.

Prossegue a autora (2011) sustentando que a partir da combinação dos fatores acima, a Suprema Corte passou a classificar certos grupos como suspeitos, outros como quase suspeitos e outros

como não suspeitos. Assim, as classificações baseadas em raça, origem nacional e religião são consideradas suspeitas e submetidas à análise de *strict scrutiny* (escrutínio rigoroso). Gênero e ilegitimidade são considerados quase suspeitos e recebem uma análise de *intermediate scrutiny* (escrutínio intermediário). Idade, condição socioeconômica e incapacidades são avaliadas sob o teste de *rational basis* (base racional).

O padrão de base racional (*rational basis review* ou *minimum scrutiny*), conforme visto acima, é o mais elementar. Nesse nível, qualquer lei pode ser analisada, independentemente do seu conteúdo, exigindo-se apenas uma justificativa mínima: basta que a norma seja um meio racional e razoável para alcançar um fim legítimo. Trata-se, portanto, de um juízo marcado por ampla deferência judicial ao legislador, sendo frequentemente aplicado em matérias de natureza econômica (Clève e Lorenzetto, 2015b).

No segundo nível, de escrutínio intermediário (*intermediate scrutiny*), exige-se que o Estado demonstre que a lei persegue um interesse importante e que há uma relação substancial entre esse interesse e o meio utilizado, baseando-se na cláusula da igual proteção prevista na 14ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos. É o teste aplicado às chamadas “classificações quase-suspeitas” (Clève e Lorenzetto, 2015b).

Por fim, o escrutínio estrito (*strict scrutiny*) representa o grau mais elevado de controle. Aplicado a leis que estabelecem classificações suspeitas – como restrições ao direito ao voto ou normas que impactam diretamente direitos fundamentais —, esse teste demanda que a norma: (i) persiga um interesse imperioso (*compelling interest*); (ii) seja cuidadosamente delineada (*narrowly tailored*) para atingir esse interesse; e (iii) adote o meio menos restritivo (*least restrictive means*) possível.

Embora a Suprema Corte dos EUA não defina com precisão o que constitui um interesse imperioso, a doutrina compreende-o como algo essencial, e não meramente discricionário.

A análise judicial também exige que a norma não exceda os limites do interesse público e utilize o meio mais adequado para alcançar seus fins, o que implica uma verificação separada de cada um dos critérios exigidos (Clève e Lorenzetto, 2015b, p. 114/115).

Como exemplo de aplicação da doutrina em casos envolvendo outros países, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem se utilizado da mencionada produção jurisprudencial e acadêmica, tendo como base o disposto no art. 1.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que estabelece proibições as discriminações fundadas em critérios de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social (Convenção Americana de Direitos Humanos, 1969).

No entanto, conforme bem observam Leal e Vargas (2022), para a Corte o rol acima é meramente exemplificativo, havendo clara inclinação nos julgados no sentido de alargar as hipóteses sujeitas ao modelo de escrutínio mais estrito, como ocorreu no caso dos “Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde vs. Brasil (2016)” e dos “Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares vs. Brasil (2020)”, nos quais a “pobreza” foi considerada como elemento da proibição de discriminação com base na posição econômica dos envolvidos.

À guisa de arremate, Treacy (2011, p. 199) afirma que as chamadas categorias suspeitas possuem um traço comum entre elas, o que possibilita reconhecer situações em que esse tipo de análise pode ser aplicado – sobretudo considerando que os instrumentos internacionais de direitos humanos adotam cláusulas abertas que admitem a inclusão de situações análogas. Em linhas gerais, essas categorias dizem respeito a grupos vulneráveis ou em desvantagem, que enfrentam obstáculos específicos para o pleno exercício de seus direitos, em função de fatores sociais, econômicos, étnicos, culturais, etários, de gênero ou ligados ao

estado físico ou mental. Nos casos em que os tratados internacionais proíbem expressamente determinados motivos de discriminação, presume-se que os indivíduos pertencentes a essas categorias estão em condição de vulnerabilidade.

3 CATEGORIAS SUSPEITAS E POVOS INDÍGENAS: UMA ANÁLISE NO CONTEXTO BRASILEIRO

Embora a doutrina das categorias suspeitas, como visto, não tenha origem no direito brasileiro, seus fundamentos são compatíveis com princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do pluralismo. O Supremo Tribunal Federal (STF), em algumas decisões, já adota raciocínios semelhantes, especialmente em casos envolvendo ações afirmativas e proteção de minorias, embora sem uma formulação teórica tão explícita quanto a da Suprema Corte dos EUA.

No contexto indígena, a Constituição de 1988 rompeu com o paradigma assimilacionista, reconhecendo a esses povos seus direitos originários às terras que tradicionalmente ocupam, além da proteção às suas culturas e formas de organização social. A não-discriminação assume, portanto, um caráter substancial, que não se limita à igualdade formal, mas exige o enfrentamento das estruturas que perpetuam a desigualdade histórica, alçando-os ao rol das categorias suspeitas.

Assim, ao se reconhecer os povos indígenas como categoria suspeita, o Estado passa a ter o ônus de demonstrar, de forma qualificada, que qualquer distinção normativa ou restrição que os afete não viola a Constituição. Isso significa que normas, políticas públicas ou decisões administrativas que impliquem restrições de direitos devem ser submetidas a um controle rigoroso (*strict scrutiny*), que considere os

contextos históricos de discriminação e as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil.

Ainda que pareça lógica a inclusão dos povos originários como parte das categorias suspeitas de discriminação, revela-se necessário enfrentarmos os critérios elencados por Strauss (2011) para definição de uma categoria como suspeita, concluindo-se, de pronto, que a população indígena preenche todos os requisitos listados, vez que se trata de uma minoria discreta (0,83% da população brasileira – IBGE/2022) e isolada, em muitos casos sem espaço territorial definido, sendo vítima, ainda, de um histórico quinhentenário de discriminação e violação de direitos. Também é preciso considerar que seus componentes possuem características que os definem enquanto grupo e essas características não os incapacitam de contribuir para a sociedade.

No que diz respeito à impotência política, talvez um dos elementos de maior importância, uma vez que a participação efetiva na arena pública é essencial para promoção das mudanças sociais, até a promulgação da Lei nº 6.001/1973, conhecida como Estatuto do Índio, os povos indígenas não possuíam sequer garantias de participação política, estando inclusive excluídos do direito ao voto. O referido Estatuto, de caráter predominantemente integracionista, passou a reconhecer alguns direitos aos indígenas, inclusive de natureza política, desde que estivessem considerados “integrados” à comunhão nacional; caso contrário, permaneciam sob tutela da União e privados de participação no sistema político.

Esse contexto explica por que somente em 1982 foi eleito o primeiro deputado federal indígena, Mário Juruna, do PDT do Rio de Janeiro, fato que rompeu uma série de barreiras institucionais até então intransponíveis. Juruna tornou-se figura de destaque ao denunciar com veemência as violações cometidas contra os povos indígenas. Em 1980, no entanto, teve negado um pedido de passaporte para participar de

um evento internacional sobre etnocídio e genocídio indígena, sob a justificativa de que tal impedimento se baseava em fundamentos legais e culturais – declaração essa dada por representante da FUNAI, demonstrando o uso político da instituição em apoio ao regime autoritário e o contínuo cerceamento de direitos fundamentais dos indígenas, como a liberdade de locomoção (Jornal do Brasil, 1980).

No processo eleitoral seguinte, Juruna não obteve êxito ao tentar a reeleição, e o Congresso Nacional permaneceu por mais de três décadas sem representação indígena, até a eleição de Joênia Wapichana, em 2018, pelo estado de Roraima. Mais recentemente, a representatividade indígena no parlamento brasileiro avançou de forma inédita, com a eleição, para a Câmara dos Deputados, de Célia Xakriabá (PSOL/MG), Juliana Cardoso (PT/SP), Sílvia Waiãpi (PL/AP), Sônia Guajajara (PSOL/SP) e Paulo Guedes (PT/MG). No Senado Federal, também de maneira inédita, foram eleitos Wellington Dias (PT/PI) e Hamilton Mourão (Republicanos/RS), ambos autodeclarados indígenas.

A conquista dos mandatos, ainda que seja acanhada frente aos grupos majoritários no Congresso Nacional, vem rendendo frutos em prol dos povos indígenas, como no caso da consulta formulada ao Tribunal Superior Eleitoral (autos de n.º 0600222-07.2023.6.00.0000) pela Deputada Federal Célia Xakriabá, versando sobre o rateio dos recursos do fundo eleitoral e do direito de antena aos povos indígenas nos pleitos eleitorais, oportunidade em que a Corte Eleitoral assentou:

DIREITO ELEITORAL. CONSULTA. DEPUTADA FEDERAL. LEGITIMIDADE. TEMPO DE ANTENA E RECURSOS PARA CANDIDATAS E CANDIDATOS INDÍGENAS. QUESTIONAMENTOS ABSTRATOS E OBJETIVOS. CONSULTA CONHECIDA. PRIMEIRO E SEGUNDO QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS AFIRMATIVAMENTE. TERCEIRO

QUESITO PREJUDICADO.1. Consulta formulada por autoridade com jurisdição federal, cujas indagações tratam de matéria afeta à legislação eleitoral e são dotadas de abstração e objetividade.2. O fomento de ações de incentivo à participação dos povos originários no processo político impõe sejam adotadas medidas efetivas para garantir a representatividade dos indígenas nos espaços de poder.3. A distribuição de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, bem como de tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, na exata proporção das candidaturas indígenas apresentadas pelos partidos políticos, respeitados os percentuais de gênero, concretiza os princípios constitucionais da igualdade e da proteção dos direitos dos povos originários.4. Consulta conhecida. Primeiros e segundos questionamentos respondidos afirmativamente. Terceira indagação prejudicada. Consulta nº060022207, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/03/2024.

Esses avanços institucionais e judiciais indicam uma mudança relevante na forma como o Estado brasileiro tem reconhecido e enfrentado as desigualdades históricas sofridas pelos povos indígenas. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ao afirmar a necessidade de medidas concretas para garantir a representatividade indígena nas disputas eleitorais, é exemplo de como a perspectiva da não-discriminação substancial e da igualdade material começa a se refletir na jurisprudência nacional. Essa atuação estatal, ao reconhecer os povos originários como sujeitos de direitos coletivos e específicos, reforça a ideia de que pertencem, efetivamente, ao rol das categorias suspeitas, devendo quaisquer distinções ou omissões que os atinjam ser justificadas sob o mais alto escrutínio de exercício do controle de constitucionalidade.

Portanto, o enquadramento dos povos indígenas como categoria suspeita não apenas se justifica com base nos critérios doutrinários e jurisprudenciais, como também constitui instrumento jurídico e político necessário à superação das iniquidades estruturais que os afetam. Ao exigir do Estado uma atuação proativa e justificada, esse enquadramento contribui para a consolidação de um modelo de justiça mais inclusivo, sensível à diversidade e comprometido com a dignidade humana. Trata-se de reconhecer que a igualdade real exige tratamento desigual dos desiguais – não como privilégio, mas como reparação histórica e afirmação de um pacto constitucional verdadeiramente plural e democrático.

CONCLUSÃO

Finalizando a pesquisa, é possível afirmar que o artigo alcançou seus objetivos ao analisar a discriminação estrutural contra os povos indígenas no Brasil, destacando como práticas jurídicas e administrativas históricas contribuíram para a marginalização desses grupos.

Através de uma abordagem decolonial, foi possível evidenciar a persistência do estigma étnico e a lógica colonial nas relações interétnicas. A doutrina das categorias suspeitas foi central para a discussão, demonstrando a necessidade de proteção especial para os povos indígenas.

A análise revelou também que a assimilação cultural não é eficiente para garantir a plena cidadania indígena e que a efetividade dos direitos humanos e dos direitos fundamentais constitucionais exige o enfrentamento das estruturas que perpetuam a desigualdade histórica.

Por outro lado, a doutrina das categorias suspeitas, ao propor que certos grupos, como os povos indígenas, devem ser considerados

suspeitos de discriminação e, portanto, merecerem proteção especial, revela-se essencial para superar as iniquidades estruturais que afetam essas minorias.

Portanto, é essencial um compromisso contínuo com a justiça social e a igualdade material para assegurar a dignidade e os direitos dos povos originários. Somente por meio de uma atuação proativa e justificada do Estado será possível garantir a plena cidadania e dignidade dos povos indígenas, reconhecendo seu papel fundamental na formação social, cultural e econômica do país. A efetividade dos direitos humanos e dos direitos fundamentais constitucionais depende da implementação de estratégias que enfrentem a discriminação estrutural e promovam a inclusão e valorização dos povos originários.

REFERÊNCIAS

ASSARI, S. **Como estruturas sociais injustas ajudam alguns, mas prejudicam outros**. The Conversation, 4 abr. 2019. Disponível em: <https://theconversation.com/how-unjust-social-structures-help-some-but-harm-others-113622>. Acesso em: 12 jun. 2025.

ASSIES, W. **Pueblos indígenas y sus demandas en los sistemas políticos**. Revista CIDOB d'Afers Internacionals, Barcelona, n. 85–86, p. 89–107, maio 2009.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 jun. 2025.

BRASIL. **Constituição Política do Império do Brasil de 25 de março de 1824**. *Coleção de Leis do Império do Brasil*, Rio de Janeiro, 1824. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/367572/constituicao_1824.pdf. Acesso em: 12 jun. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 8.072, de 20 de junho de 1910**. Crêa o Serviço de Protecção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais e aprova o respectivo regulamento. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-8072-20-junho-1910-504520-publicacaooriginal-58095-pe.html>. Acesso em: 14 de fevereiro de 2025.

BRASIL. **Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916**. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm. Acesso em: 14 de fevereiro de 2025.

BRASIL. **Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973**. Dispõe sobre o Estatuto do Índio. *Presidência da República*, Brasília, 19 dez. 1973. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6001.htm. Acesso em: 14 fev. 2025.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. **Consulta 060022207/DE**, Relator(a) Min. Kassio Nunes Marques. Acórdão de 27 fev. 2024. Publicado no Diário de Justiça Eletrônico, n. 44, de 25 mar. 2024. Disponível em: <https://www.tse.jus.br/legislacao/consultas/consulta-0600222-07-2023-6-00-0000>. Acesso em: 12 jun. 2025.

CLÈVE, C. M.; LORENZETTO, B. M. A jurisdição constitucional no século XXI entre processo e substância: um olhar sobre a experiência americana. *Novos Estudos Jurídicos*, Itajaí (SC), v. 20, n. 3, p. 1057–1078, 2015a. DOI: 10.14210/nej.v20n3.p1057-1078. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/nej/article/view/8364>. Acesso em: 5 jun. 2025.

CLÈVE, C. M.; LORENZETTO, B. M. Constituição Federal, controle jurisdicional e níveis de escrutínio. *Direitos Fundamentais & Justiça*, p. 97–123, 2015b.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – CIDH. **Compendio sobre la igualdad y no discriminación: estándares interamericanos.** OEA/Ser.L/V/II.170 Doc. 31. Washington, D.C.: Organización dos Estados Americanos, 12 fev. 2019. 144 p. ISBN 978-0-8270-6861-2. Disponível em: <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/compendio-igualdadnondiscriminacion.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2025.

FAJARDO, R. Z. Y. **Aos 20 anos do Convênio 169 da OIT: Balanço e desafios da implementação dos direitos dos Povos Indígenas na América Latina.** In: INESC. Povos Indígenas: Constituições e Reformas Políticas na América Latina. Brasília: INESC, 2009.

G1. **Câmara terá 5 deputados indígenas, recorde histórico.** G1, 4 out. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2022/eleicao-em-numeros/noticia/2022/10/04/camara-tera-5-deputados-indigenas-recorde-historico.ghtml>. Acesso em: 20 set. 2024.

GRUPIONI, L. D. B. **Imagens contraditórias e fragmentadas: sobre o lugar dos índios nos livros didáticos.** Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 77, n. 186, 1996.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Censo 2022: mais da metade da população indígena vive nas cidades.** Agência de Notícias, Rio de Janeiro, 19 dez. 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/42277-censo-2022-mais-da-metade-da-populacao-indigena-vive-nas-cidades>. Acesso em: 11 jun. 2025.

JORNAL DO BRASIL. **Funai nega a Juruna passaporte para ir à Holanda. Rio de Janeiro, 7/11/1980.** Disponível em: https://documentacao.socioambiental.org/noticias/anexo_noticia/42734_20170911_095411.PDF. Acesso em 23/9/2024.

LEAL, M. C. H.; VARGAS, E. F. de. **A doutrina das categorias suspeitas na Corte Interamericana de Direitos Humanos: caso “empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares vs. Brasil”**. Revista Quaestio Iuris, Itajaí (SC), v. 15, n. 1, p. 1–30, 2022.

NAÇÕES UNIDAS – ONU. **Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas**. Nova York, 13 set. 2007. Disponível em: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_pt.pdf. Acesso em: 12 jun. 2025.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS – OEA. **Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas**. Aprovada durante a 46ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da OEA, Santo Domingo, República Dominicana, 15 jun. 2016. Disponível em: <https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/docs/Declaracion-Americana-sobre-los-Derechos-de-los-Pueblos-Indigenas-OEA.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2025.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT. **Convenção nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais**, 1989. Aprovada na 76ª Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, em 27 jun. 1989. Promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004. Disponível em: https://www.ilo.org/dyn/normlex/pt/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169. Acesso em: 12 jun. 2025.

OSOWSKI, R. **O marco temporal para demarcação de terras indígenas, memória e esquecimento**. Mediações, v. 22, n. 2, p. 320–346, 2017.

PORTO-GONÇALVES, C. W., in. **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas**. Edgardo Lander (org). Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. setembro 2005.

QUIJANO, A. **Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina**. In: QUIJANO, Anibal. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005.

RIBEIRO, D.. **Os Índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno**. 7 ed. São Paulo: Global Editora, 2017.

SCHWARCZ, L. M. **Brasil: uma biografia**. São Paulo: Companhia das Letras, 2015

SERPA, A. O.; GRANDO, B. S. **Indígena na cidade? Considerações sobre a educação intercultural na escola**. Revista Interinstitucional Artes de Educar, v. 4, n. 3, p. 623–654, 2018.

STRAUSS, M. **Reevaluating Suspect Classifications**. Seattle University Law Review, v. 35, p. 135–174, 2011.

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. **Smith v. Allwright**, 304 U.S. 144 (1938). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/304/144/>. Acesso em: 12 jun. 2025.

TODOROV, T. **A Conquista da América: a questão do outro**. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. 5 ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2019.

TREACY, G. F. **Categorías sospechosas y control de constitucionalidade**. Lecciones y Ensayos, n. 89, p. 181–216, 2011. Recebido em: 25 ago. 2021. Aprovado em: 29 abr. 2022.

O CUSTO DOS AGROTÓXICOS NO RIO GRANDE DO SUL: IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS, VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E ALTERNATIVAS PARA A TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA

Márcio Eduardo Fernández Carvalho¹

Margarete Sponchiado²

Saionara Eliane Salomoni³

INTRODUÇÃO

O Rio Grande do Sul (RS) ocupa posição de destaque na produção agropecuária nacional, sendo um dos maiores produtores de soja, arroz, trigo, milho e fumo do país. Essa posição, contudo, vem acompanhada de elevado consumo de insumos químicos sintéticos: o estado figura entre os maiores consumidores de agrotóxicos do Brasil, com crescimento ininterrupto das vendas entre 2018 e 2024 (IBAMA, 2024).

O conceito de colonialismo químico, desenvolvido por Bombardi (2021), evidencia que o Brasil opera como destino privilegiado de

¹ Graduação em Bacharelado em Gestão Ambiental pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS/Tapes), Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) E-mail: marcio-carvalho01@uergs.edu.br

² Graduação em Engenharia Agrônômica pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Mestrado Fitotecnia na Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Doutorado em Ciências - Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Professora no Curso de Bacharelado em Gestão Ambiental, Bacharelado em Administração e Especialização em Educação para Inovação Socioambiental da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS/Tapes) E-mail: margarete-sponchiado@uergs.edu.br

³ Graduação em Ciências Biológicas – LP pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Mestrado em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos, (UFSCar), Pós-Graduação em ESG - Governança Ambiental, Social e Corporativa, (UNISE). Professora nos Cursos de Bacharelado em Gestão Ambiental, Bacharelado em Agronomia e de Pós-Graduação em Gestão Ambiental na Indústria na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS/Erechim) E-mail: saionara-salomoni@uergs.edu.br

substâncias proibidas nos países centrais, transferindo riscos e externalizando custos socioambientais para populações vulneráveis. Oito dos dez agrotóxicos mais vendidos no Brasil em 2024 são proibidos na União Europeia, o que configura assimetria regulatória estrutural que precisa ser debatida à luz dos direitos humanos e da justiça ambiental (Bombardi, 2021; Fundação Heinrich Böll, 2023).

Este capítulo, tem como tema central a análise do custo real dos agrotóxicos no Rio Grande do Sul, entendido não apenas em termos econômicos, mas como conjunto de impactos sobre a saúde humana, o ambiente e os direitos fundamentais. A orientação teórica articula a perspectiva da justiça ambiental (Acselrad; Mello; Bezerra, 2009), o conceito de colonialismo químico (Bombardi, 2021) e a abordagem agroecológica (Gliessman, 2009; Primavesi, 2006; Shiva, 2003). A metodologia empregada é a análise documental com triangulação de fontes, complementada por revisão bibliográfica sistemática.

As principais hipóteses sustentam que: (1) o crescimento do consumo de agrotóxicos no RS está associado a danos à saúde reprodutiva e ao aumento de malformações congênitas; (2) os impactos socioambientais se distribuem de forma desigual, afetando desproporcionalmente grupos vulneráveis em situação de injustiça ambiental; (3) existem alternativas agroecológicas viáveis que, articuladas a políticas públicas, permitem reduzir a dependência química sem comprometer a produção alimentar.

O capítulo dialoga com os temas Justiça Ambiental e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dado que articula análise de violações de direitos, distribuição desigual de riscos ambientais e caminhos de transição alinhados à Agenda 2030 da ONU.

1 PANORAMA DO USO DE AGROTÓXICOS NO RIO GRANDE DO SUL

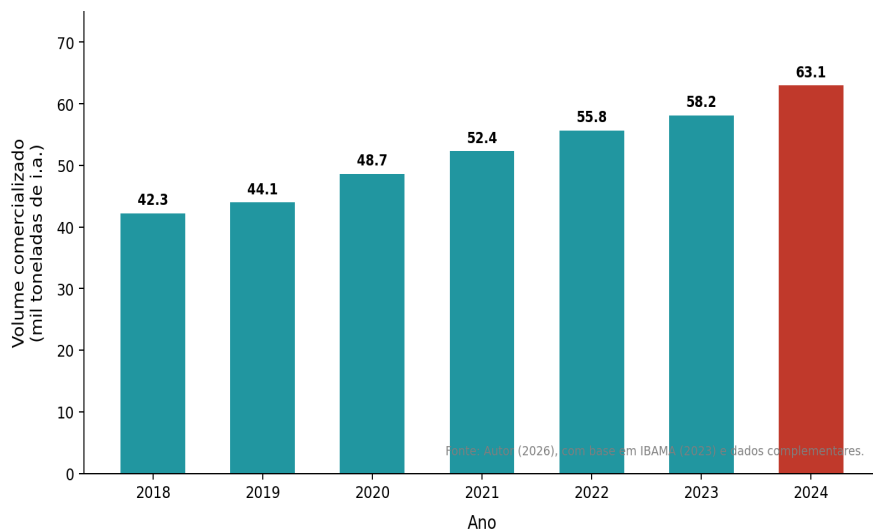
O Rio Grande do Sul registrou crescimento de aproximadamente 49% no volume de agrotóxicos comercializados entre 2018 e 2024, passando de 42,3 mil toneladas de ingredientes ativos para 63,1 mil toneladas (IBAMA, 2023).

Dentre os ingredientes ativos de maior volume comercializado, destacam-se o glifosato, a atrazina, o 2,4-D, o acefato e o mancozebe. Oito dos dez compostos mais consumidos no Estado são proibidos na União Europeia por apresentarem evidências de carcinogenicidade, disrupção endócrina ou persistência ambiental que superam os padrões regulatórios europeus (Bombardi, 2021; Fundação Heinrich Böll, 2023). Essa assimetria regulatória, denominada colonialismo químico, implica que populações rurais gaúchas são expostas a riscos que os países produtores dessas substâncias já reconheceram como inaceitáveis para suas próprias populações.

O Gráfico 1 ilustra essa trajetória ascendente, revelando uma curva de dependência química que não foi interrompida por nenhuma política de redução no período analisado.

Grafico 1 – Comercialização de agrotóxicos no Rio Grande do Sul (2018–2024)

Figura 1 – Comercialização de agrotóxicos no Rio Grande do Sul (2018-2024)



Fonte: Autor (2026), com base em IBAMA (2023) e dados complementares.

O marco regulatório brasileiro é composto principalmente pela Lei nº 7.802/1989, regulamentada pelo Decreto nº 4.074/2002, que distribui as competências de avaliação entre o Ministério da Agricultura (MAPA), a Anvisa e o Ibama. No Rio Grande do Sul, a Lei Estadual nº 7.747/1982 foi pioneira no controle de agrotóxicos, e a Lei nº 15.434/2020 institui a Política Estadual de Redução de Agrotóxicos, cujos mecanismos de implementação, porém, permanecem sem regulamentação plena (Rio Grande do Sul, 2020).

O Quadro 1 sintetiza os dez agrotóxicos mais comercializados no RS em 2024 e sua situação regulatória comparada.

Quadro 1 – Agrotóxicos mais comercializados no RS (2024) e situação regulatória comparada

Ingrediente ativo	Uso principal	Situação no Brasil	Situação na EU
Glifosato	Herbicida (soja, milho)	Permitido	Renovação controversa
2,4-D	Herbicida (cereais)	Permitido	Proibido em vários países
Atrazina	Herbicida (milho)	Permitido	Proibido desde 2004
Acefato	Inseticida (diversas)	Permitido	Proibido desde 2003
Mancozebe	Fungicida (uva, maçã)	Permitido	Proibido desde 2020
Clorpirifós	Inseticida (frutas)	Parcialmente restrito	Proibido desde 2020
Paraquate	Herbicida	Proibido (2020)	Proibido desde 2007
Carbendazim	Fungicida	Parcialmente restrito	Proibido
Imidacloprido	Inseticida sistêmico	Permitido	Restrito (abelhas)
Tiametoxam	Inseticida (sementes)	Permitido	Restrito (abelhas)

Fonte: Autor (2026), com base em Bombardi (2021), IBAMA (2023) e Fundação Heinrich Böll (2023).

2 IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS E NA SAÚDE PÚBLICA

2.1 CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL: SOLOS, ÁGUA E BIODIVERSIDADE

A exposição crônica a agrotóxicos produz efeitos sistêmicos nos ecossistemas agrários gaúchos. Estudos realizados pela UFRGS (2018; 2023) identificaram a presença de múltiplos ingredientes ativos em mananciais de abastecimento público, incluindo substâncias proibidas na União Europeia. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM, 2020) registrou contaminação por glifosato e seus metabólitos

em rios da Bacia Hidrográfica do Rio Vacacaí, afetando a ictiofauna e a qualidade da água para consumo humano.

Araújo *et al.* (2003) e Zilli *et al.* (2014) documentaram que aplicações sucessivas de glifosato alteram a composição das comunidades microbianas do solo, com impactos na ciclagem de nutrientes e na saúde do ecossistema edáfico.

A perda de biodiversidade funcional no solo compromete a resiliência dos sistemas produtivos a longo prazo, gerando um ciclo de dependência química crescente.

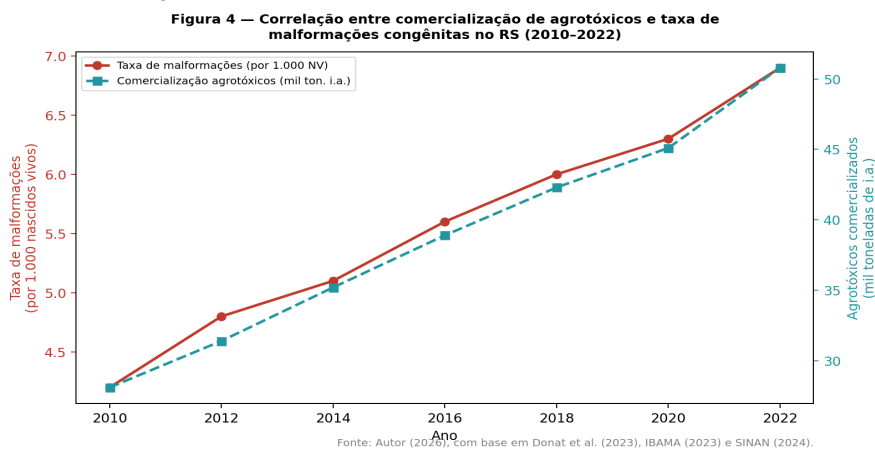
Os eventos de deriva de herbicidas constituem problema recorrente em regiões de cultivo intensivo, causando danos a culturas sensíveis como horticultura, viticultura e apicultura.

O caso do município de Vacaria, onde análises de água identificaram contaminação por agrotóxicos acima dos limites legais (Câmara Municipal de Vacaria, 2019), ilustra como a falha regulatória e a pulverização aérea irrestrita afetam populações urbanas e periurbanas.

2.2 SAÚDE REPRODUTIVA E MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS

O Gráfico 2 ilustra a correlação entre o crescimento da comercialização de agrotóxicos e o aumento da taxa de malformações congênitas no RS entre 2010 e 2022, evidenciando uma trajetória preocupante que demanda atenção das políticas públicas de saúde e ambiente.

Grafico 2 – Correlação entre comercialização de agrotóxicos e taxa de malformações congênicas no RS (2010–2022)



Fonte: Autor (2026), com base em Donat et al. (2023), IBAMA (2023) e SINAN (2024).

A correlação entre exposição a agrotóxicos e danos à saúde reprodutiva constitui uma das evidências epidemiológicas mais preocupantes no contexto gaúcho. Donat *et al.* (2023) analisaram a distribuição temporal de malformações fetais no Rio Grande do Sul e identificaram associação estatisticamente significativa com o volume de agrotóxicos comercializados nos municípios de maior produção agrícola. Santos; Galvão; Barbosa (2021) corroboram esses achados em revisão integrativa que abrange estudos brasileiros e internacionais.

Os agrotóxicos classificados como disruptores endócrinos atuam interferindo no sistema hormonal de mamíferos, incluindo humanos, mesmo em doses consideradas seguras pelos modelos toxicológicos tradicionais. Facchini *et al.* (2015) documentaram alterações na puberdade, na fertilidade e no desenvolvimento infantil associadas à exposição a organofosforados, piretroides e herbicidas triazínicos.

O Dossiê ABRASCO (2024) reúne evidências de que a exposição crônica a agrotóxicos está associada ao aumento de cânceres hormônio-

dependentes, abortos espontâneos e alterações na contagem de espermatozoides.

2.3 GRUPOS POPULACIONAIS MAIS VULNERÁVEIS

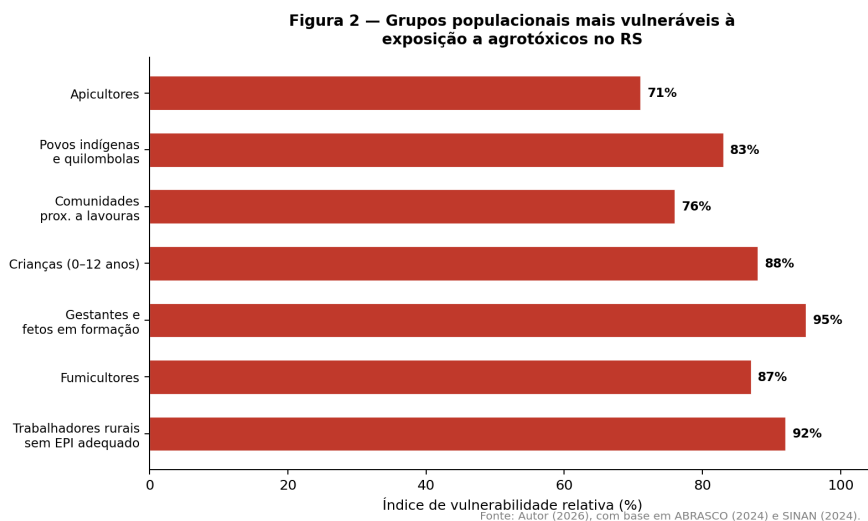
Os impactos dos agrotóxicos não se distribuem de forma equânime. Trabalhadores rurais que aplicam produtos sem Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado, fumicultores sujeitos à doença da folha verde do tabaco (*green tobacco sickness*), gestantes em municípios de alta exposição, crianças em fase de desenvolvimento neurológico e comunidades indígenas e quilombolas em territórios próximos a lavouras intensivas constituem os grupos mais vulneráveis identificados na literatura (ABRASCO, 2024; Faria; Fassa; Facchini, 2007).

As notificações de intoxicação exógena por agrotóxicos no RS registradas no SINAN (2024) revelam subnotificação estrutural estimada em até 50 vezes o número de casos confirmados (Faria; Fassa; Facchini, 2007).

Essa lacuna epidemiológica invisibiliza o sofrimento de populações rurais e dificulta a construção de políticas de prevenção baseadas em evidências.

O Gráfico 3 apresenta os principais grupos vulneráveis e seu índice relativo de exposição.

Gráfico 3 – Grupos populacionais mais vulneráveis à exposição a agrotóxicos no RS



Fonte: Autor (2026), com base em ABRASCO (2024) e SINAN (2024).

3 AGROTÓXICOS E VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

A análise do uso de agrotóxicos pela perspectiva dos direitos humanos revela que a exposição involuntária a substâncias tóxicas constitui violação de direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal de 1988 (Art. 225, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado), no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC/ONU, 1966) e na Declaração de Estocolmo (ONU, 1972). O direito à saúde (Art. 6º da CF/1988), o direito à alimentação adequada e o direito à informação são sistematicamente violados quando populações são expostas a riscos que não escolheram e sobre os quais não foram devidamente informadas.

O conceito de injustiça ambiental, conforme Acsehrad; Mello; Bezerra (2009), descreve o mecanismo pelo qual os riscos ambientais

produzidos por processos econômicos concentrados são transferidos para populações vulneráveis. No contexto dos agrotóxicos gaúchos, essa transferência ocorre em pelo menos três dimensões: geográfica (comunidades rurais próximas a lavouras intensivas); social (trabalhadores rurais de baixa renda sem acesso a EPI e assistência médica); e geracional (crianças e fetos em formação expostos a substâncias com efeitos de longo prazo).

O Quadro 2 apresenta os principais instrumentos jurídicos aplicáveis e as respectivas violações identificadas.

Quadro 2 – Direitos humanos violados pelo uso de agrotóxicos no RS: fundamentos jurídicos

Direito violado	Fundamento jurídico	Manifestação concreta no RS
Direito à saúde	Art. 6º CF/1988; PIDESC Art. 12	Intoxicações agudas e crônicas; malformações congênitas; cânceres associados
Direito ao meio ambiente equilibrado	Art. 225 CF/1988; Declaração de Estocolmo (1972)	Contaminação de solos, mananciais e biodiversidade
Direito à alimentação adequada	PIDESC Art. 11; Lei 11.346/2006	Resíduos de agrotóxicos em alimentos acima do permitido (PARA 2024: 20,6% insatisfatórios)
Direito à informação	Art. 5º XIV CF/1988; Lei 12.527/2011	Ausência de rótulos com resíduos; subnotificação de intoxicações
Direito ao trabalho seguro	Art. 7º CF/1988; Convenção OIT nº 184	Exposição sem EPI; green tobacco sickness entre fumicultores
Direitos de povos indígenas e quilombolas	Convenção OIT nº 169; CF/1988 Art. 231	Deriva de pulverizações sobre territórios tradicionais

Fonte: Autor (2026).

A ação popular nº 5006486-82.2022.8.21.0001/RS (Rio Grande do Sul, 2025), proposta contra o Estado do Rio Grande do Sul por omissão na fiscalização de agrotóxicos, exemplifica como a via

judicial tem sido mobilizada para suprir as lacunas do poder público. O reconhecimento, pelo Tribunal de Justiça gaúcho, de que o Estado tem obrigação de fiscalizar o uso de agrotóxicos e de que sua omissão configura lesão ao interesse difuso constitui precedente relevante para a litigância ambiental estratégica.

Barreiras de acesso à justiça, incluindo custos processuais, dificuldade de comprovação do nexo causal entre exposição e doença, e pressão sobre comunidades rurais, limitam a responsabilização dos agentes causadores dos danos. A justiça reparatória demanda a criação de fundos de reparação financiados pelas corporações responsáveis pela contaminação, o estabelecimento de presunção de causalidade entre exposição e doença e o acesso facilitado de vítimas ao sistema de justiça.

4 ALTERNATIVAS AGROECOLÓGICAS E POLÍTICAS PÚBLICAS

4.1 EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO TERRITÓRIO GAÚCHO

Quatro experiências concretas no território gaúcho demonstram que a transição agroecológica é tecnicamente viável e pode ser economicamente sustentável quando articulada a políticas públicas consistentes.

O sistema agroflorestal Cambona 4 (Machadinho/RS) registrou produtividade de 14.070 kg/ha de erva-mate sem uso de agrotóxicos, combinando árvores nativas e proteção de nascentes (AECIA, 2025; Fiocruz, 2025).

Nos assentamentos do MST na Região Metropolitana de Porto Alegre e na Costa Doce, a produção de arroz agroecológico sem agrotóxicos abastece programas de compras públicas como o PNAE,

que desde 2024 destina mínimo de 45% dos recursos à agricultura familiar (Brasil, 2024).

Cooperativas vinculadas à Rede Ecovida articulam certificação participativa e circuitos curtos de comercialização que garantem rastreabilidade e preços justos.

Por fim, iniciativas do CAPA em São Lourenço do Sul apoiam fumicultores na diversificação de cultivos e saída do ciclo de endividamento com as fumageiras (Agência Pública, 2022).

O Quadro 3 compara os modelos convencional e agroecológico nas principais dimensões de análise.

Quadro 3 – Comparativo entre modelo convencional e modelo agroecológico

Dimensão	Modelo convencional	Modelo agroecológico
Base tecnológica	Insumos químicos externos	Processos ecológicos e recursos locais
Biodiversidade	Monoculturas	Sistemas diversificados
Solo	Recurso físico-químico	Organismo vivo
Manejo de pragas	Controle químico	Manejo ecológico integrado
Energia	Alta dependência de insumos fósseis	Maior eficiência e fontes renováveis
Impactos ambientais	Em grande parte externalizados	Internalizados no manejo e monitorados
Saúde do trabalhador	Exposição a substâncias tóxicas	Redução da exposição; ambientes mais saudáveis
Segurança alimentar	Dependente de insumos importados	Soberania alimentar local

Fonte: Autor (2026), com base em Shiva (2003) e Primavesi (2006).

4.2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REDUÇÃO DE AGROTÓXICOS

No plano federal, o Decreto nº 12.538/2025 instituiu o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (PRONARA), prevendo a redução

gradual de substâncias altamente perigosas, o fomento a bioinsumos e o fortalecimento da vigilância integrada (Brasil, 2025a). Paradoxalmente, o decreto foi publicado no mesmo dia em que 115 novos agrotóxicos foram autorizados pelo MAPA, evidenciando contradições persistentes na política pública. Além disso, o Projeto de Decreto Legislativo nº 443/2025 ameaça sustar o programa, sem que tenham sido definidas metas quantitativas ou alocação orçamentária específica (Câmara dos Deputados, 2025).

O Quadro 4 sistematiza as principais políticas públicas para redução de agrotóxicos no RS.

Quadro 4 – Políticas públicas para redução de agrotóxicos no RS: situação e desafios

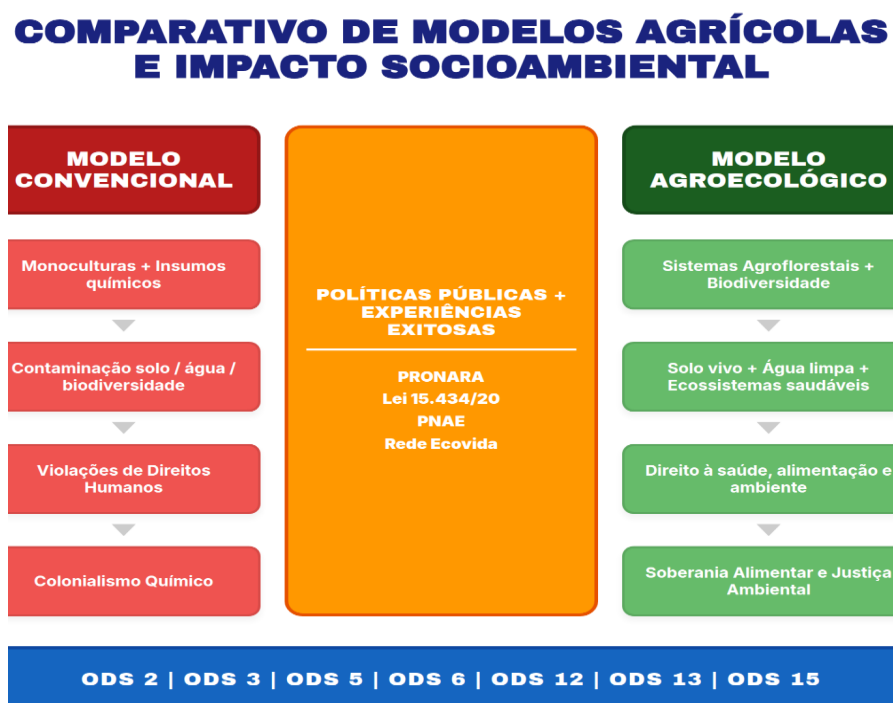
Política/ Programa	Objetivo principal	Situação atual	Principais desafios
Lei nº 15.434/2020 (RS)	Política Estadual de Redução de Agrotóxicos	Aprovada	Falta de regulamentação
PRONARA – Decreto nº 12.538/2025	Redução gradual de agrotóxicos altamente perigosos e fomento a bioinsumos	Em vigor	Ameaça de sustação (PDL 443/2025); ausência de metas e orçamento
PL 6427/2025	Obrigatoriedade de informação sobre resíduos nos rótulos de alimentos	Em tramitação	Pendente de análise nas comissões
PNAE	Compras públicas de alimentos agroecológicos (mínimo 45% para agricultura familiar)	Ativo	Baixa adesão de municípios
Certificação participativa – Rede Ecovida	Garantia de qualidade e rastreabilidade de produtos agroecológicos	Consolidada	Alcance limitado a grupos organizados
Bancos de sementes	Conservação da agrobiodiversidade	Ativo	Falta de apoio institucional

Fonte: Autor (2026).

4.3 FLUXOGRAMA DA TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA

A Figura 1, sistematiza a dinâmica de transição do modelo convencional para o modelo agroecológico, destacando o papel das políticas públicas e experiências exitosas como catalisadores e o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Figura 1 – Fluxograma da transição agroecológica: do modelo convencional ao modelo sustentável



Fonte: Autor (2026), com base em Primavesi (2006), Shiva (2003) e Gliessman (2009).

4.4 ALINHAMENTO COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A Figura 2 avança na análise ao ilustrar não apenas o alinhamento estático dos ODS com a pesquisa, mas a dinâmica de interação entre eles.

Figura 2 – 11 dos 17 ODS interagindo na pesquisa.



Fonte: Autor (2026)

O Quadro 5 sistematiza os principais alinhamentos identificados.

Quadro 5 – Alinhamento da transição agroecológica com os ODS da ONU

ODS	Título	Conexão com a transição agroecológica
ODS 2	Fome Zero e Agricultura Sustentável	A agroecologia aumenta a resiliência climática e a segurança alimentar em territórios vulneráveis
ODS 3	Saúde e Bem-Estar	Redução da exposição a agrotóxicos e prevenção de doenças agudas e crônicas, incluindo cânceres e malformações
ODS 5	Igualdade de Gênero	Protagonismo das mulheres camponesas na produção agroecológica e na gestão de sementes crioulas

ODS	Título	Conexão com a transição agroecológica
ODS 6	Água Limpa e Saneamento	Proteção de mananciais pela eliminação de agrotóxicos persistentes e manejo ecológico do solo
ODS 10	Redução das Desigualdades	Combate à injustiça ambiental e à distribuição desigual dos riscos dos agrotóxicos
ODS 12	Consumo e Produção Responsáveis	Circuitos curtos, rastreabilidade e rotulagem de resíduos de agrotóxicos em alimentos
ODS 13	Ação Climática	Sistemas agroflorestais que sequestram carbono e aumentam a resiliência a eventos climáticos extremos
ODS 15	Vida Terrestre	Conservação da agrobiodiversidade, das sementes crioulas e dos polinizadores

Fonte: Autor (2026), com base em ONU Brasil (2024).

CONCLUSÃO

A análise documental e revisão bibliográfica sistemática, com triangulação entre dados oficiais, estudos independentes e referencial teórico, evidenciou crescimento contínuo da comercialização de agrotóxicos no Rio Grande do Sul entre 2018 e 2024, com presença dominante de substâncias proibidas na União Europeia. Esse padrão configura colonialismo químico estrutural que viola sistematicamente direitos humanos fundamentais, impõe custos externos à saúde pública e ao ambiente, e distribui riscos de forma desigual sobre grupos vulneráveis em situação de injustiça ambiental.

As correlações epidemiológicas entre exposição a agrotóxicos e malformações congênitas, alterações reprodutivas e cânceres no RS estão documentadas na literatura científica revisada e corroboradas pelos dados do SINAN (2024) e do PARA (2024). A subnotificação estrutural de intoxicações e as barreiras de acesso à informação e à justiça agravam esse quadro.

Simultaneamente, experiências agroecológicas consolidadas no território gaúcho demonstram que a produção de alimentos sem agrotóxicos é tecnicamente viável, economicamente sustentável e socialmente superior quando articulada a políticas públicas de compras governamentais, assistência técnica e certificação participativa. O PRONARA (2025) representa avanço institucional relevante, mas sua efetividade depende de metas quantitativas, recursos orçamentários e proteção contra tentativas de susterção.

Conclui-se que o custo real dos agrotóxicos no Rio Grande do Sul transcende as métricas econômicas convencionais, incidindo sobre a saúde das gerações presentes e futuras, a integridade dos ecossistemas e a dignidade de populações rurais vulneráveis. A transição agroecológica alinhada à Agenda 2030 da ONU não é opção técnica, mas imperativo ético, sanitário e ambiental inadiável, que exige políticas públicas integradas, fortalecimento da fiscalização, garantia do direito à informação e justiça reparatória para as vítimas já afetadas.

REFERÊNCIAS

ABRASCO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA. *Dossiê ABRASCO 2024: agrotóxicos, saúde e direitos humanos*. Rio de Janeiro: Abrasco, 2024. Disponível em: https://abrasco.org.br/wp-content/uploads/2024/12/Dossie-Abrasco_2024.pdf. Acesso em: 10 de jun. de 2026.

ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília Campello do A.; BEZERRA, Gustavo das Neves. *O que é justiça ambiental*. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. Disponível em: https://conflitosambientais.org/wp-content/uploads/2023/06/Justamb.2021.OQuee_.livro_.pdf. Acesso em: 12 de jun. de 2026.

AECIA – ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES ECOLOGISTAS DE IPÊ E ANTÔNIO PRADO. *Histórico*. Antônio Prado: Aecia, 2025. Disponível em: <https://www.aecia.com.br/historico.php>. Acesso em: 10 de jun. de 2026.

AGÊNCIA PÚBLICA. Depressão, ansiedade e suicídios: a realidade dos que plantam tabaco no Brasil. *Agência Pública*, São Paulo, 17 jan. 2022. Disponível em: [inserir URL da matéria]. Acesso em: 12 jun. 2026.

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA)**: apresentação dos resultados do ciclo 2024. Brasília: Anvisa, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/alimentos/para/resultados-2024.pdf>. Acesso em: 10 de jun. de 2026.

ARAÚJO, A. S. F. *et al.* **Efeito do herbicida glifosato sobre a comunidade microbiana do solo**. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, v. 27, n. 5, p. 915–921, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcs/a/twqss8fRfgDWVvSBXjKwfVM/>. Acesso em: 12 de jun. de 2026.

BOMBARDI, Larissa Mies. **Agrotóxicos e colonialismo químico**. São Paulo: Elefante, 2021. Disponível em: <https://editoraelefante.com.br/produto/agrotoxicos-e-colonialismo-quimico/>. Acesso em: 12 de jun. de 2026.

BRASIL. *Constituição* (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 jun. 2026.

BRASIL. Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, p. 11459, 12 jul. 1989. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7802.htm. Acesso em: 12 jun. 2026.

BRASIL. Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 18 set. 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11346.htm. Acesso em: 12 jun. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XIV do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 18 nov. 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em: 12 jun. 2026.

BRASIL. Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002. Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 8 jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4074.htm. Acesso em: 12 jun. 2026.

BRASIL. Lei nº 15.226, de 1º de outubro de 2025. Dispõe sobre alterar a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para elevar de 30% para 45% o percentual mínimo de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) destinados à aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 1 out. 2025. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2025/lei-15226-30-setembro-2025-798050-publicacaooriginal-176573-pl.html> . Acesso em: 10 jun. 2026.

BRASIL. Decreto nº 12.538, de 30 de junho de 2025. Institui o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (Pronara). *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 1 jul. 2025. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2025/decreto-12538-30-junho-2025-797671-publicacaooriginal-175763-pe.html>. Acesso em: 12 jun. 2026.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Decreto Legislativo nº 443, de 2025. Susta o Decreto nº 12.538, de 30 de junho de 2025, que institui o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (Pronara). Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2025. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=3333333>. Acesso em: 10 de jun. de 2026.

CÂMARA MUNICIPAL DE VACARIA. Câmara aprovou projeto que destina recursos para a análise mensal da água consumida em Vacaria. *Câmara Municipal de Vacaria*, Vacaria, 14 ago. 2019. Disponível em: <https://www.camaravacaria.rs.gov.br/noticia/camara-aprovou-projeto-que-destina-recursos-para-a-analise-mensal-da-agua-consumida-em-vacaria> .Acesso em 10 de jun. de 2026.

DONAT, Milena Makoski *et al.* Malformações fetais: distribuição temporal e sua associação com o uso de agrotóxicos no Rio Grande do Sul. *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 47, n. 138, p. 546-557, jul./set. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/sdeb/2023.v47n138/546-557/>. Acesso em: 12 de jun. de 2026.

FACCHINI, L. A. *et al.* **Dossiê Abrasco**: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: ABRASCO, 2015. Disponível em: https://abrasco.org.br/wp-content/uploads/2024/12/Dossiê-Abrasco_Danos-dos-Agrotoxicos-na-Saude-Reprodutiva.pdf. Acesso em: 10 de jun. de 2026.

FARIA, Neice Müller Xavier; FASSA, Anaclaudia Gastal; FACCHINI, Luiz Augusto. **Intoxicação por agrotóxicos no Brasil**: os sistemas oficiais de informação e desafios para realização de estudos epidemiológicos. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 12, n. 1, p. 25–38, jan./mar. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/NnkMLxYqx4p-5ZD6pkWpxn8x/>. Acesso em: 12 de jun. de 2026.

FEPAM – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
HENRIQUE LUÍS ROESSLER. *Qualidade das águas da Bacia Hidrográfica do Rio Vacacaí: relatório de monitoramento 2015-2020*. Porto Alegre: Fepam, 2020. Disponível em: <https://www.fepam.rs.gov.br/relatorio-vacacai-2015-2020.pdf>. Acesso em: 10 de jun. de 2026.

FIOCRUZ. PRONARA: **A pesquisadora do Cesteh fala sobre os desafios do Programa**. Informe Ensp, Rio de Janeiro, 2025. Disponível em: <https://www.fiocruz.br/noticia/pronara-desafios>. Acesso em: 10 de jun. de 2026.

FUNDAÇÃO HEINRICH BÖLL. **Atlas dos Agrotóxicos 2023**. Brasília: Fundação Heinrich Böll, 2023. Disponível em: <https://br.boell.org/pt-br/atlas-dos-agrotoxicos>. Acesso em: 10 de jun. de 2026.

GLIESSMAN, Stephen R. **Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável**. 4. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/21495>. Acesso em: 12 de jun. de 2026.

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. **Relatórios de comercialização de agrotóxicos 2018–2023**. Brasília: IBAMA, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/agrotoxicos/relatorios-comercializacao-2018-2023.pdf>. Acesso em: 10 de jun. de 2026.

IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. *Relatórios de comercialização de agrotóxicos 2024*. Brasília, DF: Ibama, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/agrotoxicos/relatorios-comercializacao-2024.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2026.

ONU - Organização das Nações Unidas. **Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC)**. Nova York: ONU, 1966. Disponível: <https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20direitos%20Econ%C3%B3micos,%20Sociais%20e%20Culturais.pdf> . Acesso em 12 de jun. 2026.

ONU - Organização das Nações Unidas. **Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Declaração de Estocolmo)**. Estocolmo: ONU, 1972. https://defensoria.ms.def.br/images/repositorio-dpgems/conteudo-nucleos/nudedh/legislacao-internacional/sistema-onu/21_-_declara%C3%A7%C3%A3o_de_estocolmo_sobre_o_meio_ambiente_humano_-_1972_-_OK-compectado.pdf Acesso em: 12 de jun. de 2026.

ONU BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**. Brasília: Nações Unidas Brasil, 2024. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 10 de jun. de 2026.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Convenção nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais**. Genebra: OIT, 1989. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1989%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20Povos%20Ind%C3%ADgenas%20e%20Tribais%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20OIT%20n%C2%BA%20169.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2026.

PRIMAVESI, Ana. **Manejo ecológico do solo**: a agricultura em regiões tropicais. São Paulo: Nobel, 2006. Disponível em: <https://anama-riaprimavesi.com.br/livros-para-download/>. Acesso em: 12 de jun. de 2026.

RIO GRANDE DO SUL. **Lei nº 7.747, de 22 de dezembro de 1982**. Dispõe sobre o controle de agrotóxicos no Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Diário Oficial do Estado. 1982. Disponível em: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/bra175160.pdf>. Acesso em: 12 de jun. de 2026.

RIO GRANDE DO SUL. **Lei nº 15.434, de 9 de janeiro de 2020**. Institui a Política Estadual de Redução de Agrotóxicos no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Diário Oficial do Estado, 2020. Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/rs/lei-15434-2020-rs-politica-estadual-reducao-agrotoxicos>. Acesso em: 10 de jun. de 2026.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Ação Popular nº 5006486-82.2022.8.21.0001/RS**. Autor: Esthevam Lermen Eidt e Cesar Ricardo Benini. Réu: Estado do Rio Grande do Sul. Juíza: Patrícia Antunes Laydner. Porto Alegre, 21 dez. 2025. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/jurisprudencia/processo/5006486-82.2022.8.21.0001>. Acesso em: 10 de jun. de 2026.

SANTOS, Raquel; GALVÃO, Cláudia Maria; BARBOSA, Dulce Aparecida. **Malformações congênitas e agrotóxicos**: revisão integrativa. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 55, e03675, 2021. DOI: 10.1590/S1980-220X2019031703675. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/rRJbWr5fC96TZyhmtGYBxkm/>. Acesso em: 12 de jun. de 2026.

SHIVA, Vandana. **Monoculturas da mente**: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia. São Paulo: Gaia, 2003. Disponível em: https://zonamenosum.files.wordpress.com/2016/12/livro_vandana_shiva-monoculturas_da_mente.pdf. Acesso em: 12 de jun. de 2026.

SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação. **Dados de exposição humana a agrotóxicos no Rio Grande do Sul - 2024**. Porto Alegre: Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, 2024. Disponível em: <https://saude.rs.gov.br/sinan-dados-exposicao-agrotoxicos-2024>. Acesso em: 10 de jun. de 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Instituto de Química. **Monitoramento de resíduos de agrotóxicos em mananciais de abastecimento público no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: UFRGS, 2018. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/233380>. Acesso em: 12 de jun. de 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. **Relatório de monitoramento de agrotóxicos em águas superficiais e subterrâneas no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: UFRGS, 2023. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/271905>. Acesso em: 10 de jun. de 2026.

ZILLI, J. E. *et al.* Effects of the glyphosate-resistance gene and of herbicides applied to the soybean crop on soil microbial biomass and enzymes. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, v. 38, n. 3, p. 952-961, 2014.

PROPOSIÇÃO DE CRIAÇÃO DE REDES DE COOPERAÇÃO PARA RESILIÊNCIA VOLTADO AS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS NO RS (RECORE-RS)

André Gustavo Botafogo Gonçalves¹

Silvia Santin Bordin²

Roberto Serena Fontaneli³

RESUMO

A proposição para a criação de Rede de Cooperação para Resiliência Climática, voltado as Associações de Municípios do RS (RECORE-RS) é o objeto deste capítulo. No RS os municípios estão organizados em 29 Associações Regionais, unidos na Federação das Associações de Municípios do RS - Famurs. A entidade representa todas as 497 cidades gaúchas – reunindo prefeitos, vice-prefeitos, secretários, técnicos e órgãos da gestão pública municipal. A RECORE-RS teria o objetivo de enfrentar os desafios climáticos, aumentar a resiliência regional e promover o desenvolvimento sustentável. Sabemos que os desafios climáticos não se resumem a área de um município e, portanto a Associação tem maior abrangência e mais recursos humanos e materiais. A proposta é que a RECORE-RS seja estruturada em múltiplos níveis de governança, envolvendo Conselhos Diretores Regionais, Comitês Técnico Científicos, Fóruns Multissetoriais, Secretarias Executivas e Núcleos Municipais. O capítulo discute

¹ Pedagogo, Gestor Ambiental, Especialista em Desenvolvimento e Turismo Rural - abotafogo@gmail.com

² Profa Adj. da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – silvia-bordin@uergs.edu.br

³ Prof. Adj. da Uergs – roberto-fontaneli@uergs.edu.br

fundamentos teóricos, experiências comparadas, estratégias de implementação e benefícios esperados, destacando a importância da cooperação intermunicipal e da integração com redes globais.

Palavras-chave: adaptação climática; cooperação intermunicipal; desenvolvimento sustentável; governança regional; resiliência.

INTRODUÇÃO

A crise climática contemporânea tem se manifestado de forma cada vez mais intensa, impondo desafios às regiões rurais e urbanas. Atingimos em nível global a chamada **emergência climática** como parte da chamada **tripla crise planetária** (mudanças climáticas, poluição e perda de biodiversidade), destacando que os **eventos extremos** – como enchentes, secas, ondas de calor e deslizamentos – estão se tornando mais frequentes e intensos no Brasil. A mudança não é apenas um desafio ambiental, mas também **social e político**, exigindo respostas urgentes e coordenadas. A adaptação às mudanças climáticas precisa ser pensada de forma inclusiva, considerando os grupos mais vulneráveis e fortalecendo a governança local (Di Giulio; Gresse; Jacobi, 2024).

No RS os impactos de eventos extremos como estiagens prolongadas, enchentes repentinas e variações bruscas de temperatura têm se tornado recorrentes. Esses fenômenos afetam não apenas a produção agrícola – fortemente baseada na agricultura familiar – mas também a infraestrutura urbana, a saúde pública e a qualidade de vida das comunidades locais.

A vulnerabilidade socioeconômica da região é agravada pela dependência de cadeias produtivas sensíveis às variações climáticas, como leite, milho, soja, trigo e hortifruticultura. Estudos recentes

e debates promovidos em eventos como a Semana Alto Uruguai do Meio Ambiente destacam que a resiliência climática precisa ser construída de forma integrada, envolvendo poder público, sociedade civil, setor privado e academia, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 13 (Ação contra a mudança global do clima). O ODS 13 visa ações que venham a “adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos”. O Brasil possui 21 intervenções nas unidades federativas, com a participação de organizações como a UNESCO, IOM (International Organization for Migration, United Nations Development Programme (UNDP) is the UN’s global development network. (Brasil – ONU, 2026).

Nesse contexto, a criação das Redes de Cooperação para Resiliência Climática no RS, RECORE-RS, doravante referida somente como rede-RS, surge como uma resposta articulada e inovadora. A proposta busca fortalecer capacidades locais, promover a cooperação intermunicipal e integrar esforços regionais e globais. A rede-RS pretende ser mais do que uma instância administrativa deve constituir um espaço de aprendizagem coletiva, de inovação social e de construção de políticas públicas orientadas para a adaptação e mitigação dos impactos climáticos.

A iniciativa dialoga diretamente com políticas estaduais e nacionais recentes. O Plano Rio Grande, (RS 2024) instituído em 2024, organiza medidas de reconstrução e adaptação climática no estado, incluindo a criação de comitês científicos e fundos específicos para financiar ações de resiliência. Em 2026, o governo estadual investiu R\$ 5 milhões na estruturação do Centro de Inteligência Climática (CIC) do Parque Tecnológico Binacional de Santana do Livramento, próximo à fronteira entre o Brasil e o Uruguai. O convênio estabelecido entre a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), a Universidade

Federal do Pampa (Unipampa) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foi publicado nesta terça-feira (31), no Diário Oficial do Estado em Santana do Livramento, voltado ao monitoramento e antecipação de riscos climáticos, reforçando a importância da cooperação binacional e da inovação tecnológica com recursos do Funrigs (RS 2026). Essas iniciativas demonstram que a rede-RS pode se articular com estruturas já existentes, ampliando o alcance das políticas públicas. (RS 2026)

No plano nacional, o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) é o principal colegiado de governança climática, responsável por coordenar ações interministeriais e monitorar políticas climáticas, conforme estabelece a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). Além disso, o CIM desempenha um papel fundamental na elaboração e no acompanhamento do Plano Clima, um dos principais instrumentos previstos na PNMC (Brasil – MMA – 2023). A rede-RS, ao se alinhar a esse marco, poderá acessar recursos e programas federais, além de contribuir para o cumprimento das metas brasileiras no âmbito do Acordo de Paris.

Portanto, a introdução deste capítulo fundamenta a necessidade da rede-RS como instrumento de governança climática intermunicipal, capaz de articular os municípios via Associações de Municípios, em torno de uma agenda comum de adaptação e desenvolvimento sustentável, ou seja do local, que é importante, para o regional que é estratégico e mais eficiente. A proposta se insere em um contexto de crescente mobilização regional, estadual e nacional, reforçando que a cooperação é o caminho mais eficaz para enfrentar os desafios da emergência climática.

2.1 RESILIÊNCIA CLIMÁTICA

O conceito de resiliência climática refere-se à capacidade de sistemas sociais, econômicos e ambientais de absorver impactos, adaptar-se e transformar-se diante de eventos extremos. Segundo o IPCC (2023), a resiliência não é apenas resistência, mas envolve inovação e reorganização de práticas. No contexto rural, isso significa diversificação produtiva, uso de tecnologias de baixo carbono e fortalecimento de redes comunitárias.

A resiliência climática se refere a ecossistemas que desenvolvam a capacidade de se adaptar as mudanças climáticas que vem ocorrendo ao longo dos anos. Para que se alcance a resiliência climática deve-se fortalecer os sistemas naturais e investir no planejamento da ocupação dos espaços.

O objetivo da resiliência climática é apoiar as comunidades e as operações de negócios para que possam resistir melhor às mudanças nas condições, tanto no curto quanto no longo prazo.

Em muitas regiões do RS, predominantemente na região norte do Estado, a resiliência climática precisa considerar a predominância da agricultura familiar e a vulnerabilidade de pequenas propriedades. Programas de extensão rural e cooperativas locais já desempenham papel importante, mas carecem de integração regional. Entre esses programas temos o “Desenvolver RS Rural”, o qual tem objetivo de investir recursos para atender Indígenas, Quilombolas e pescadores. O programa prevê apoio ao desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. (RS – SDR, 2006).

Já a Emater/RS-Ascar, atua fortemente com orientação ao público vulnerável no meio rural como indígenas, quilombolas, agricultores familiares, no uso sustentável do solo, preservação dos ecossistemas e produção saudável de alimentos. No seu Informativo Conjuntural

de 2024, a empresa informa os eventos climáticos adversos ocorridos no estado e as medidas tomadas para superar os danos e para orientar políticas para enfrentamentos que possam ocorrer futuramente. (Emater/RS-Ascar 2026).

No estado do RS também atua na extensão rural, o IRGA, o qual vem, ao longo dos anos “buscando respostas mais adequadas a demandas por desenvolvimento agrícola e rural mais equitativo em ambientalmente equilibrado”. Esta busca está embasada nas mudanças climáticas que vem afetando a produção agrícola, além de outras mudanças. (IRGA, 2026).

A rede-RS pode ser o espaço institucional para consolidar essas iniciativas, articulando saberes tradicionais e conhecimento científico, organizando as ações regionalmente, com a participação das lideranças dos municípios unidos nas Associações de Municípios.

2.2 GOVERNANÇA MULTINÍVEL

Segundo Schimanski (2026), a governança multinível aplicada aos eventos climáticos e meteorológicos evidencia a necessidade de maior engajamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de modo a favorecer o planejamento de ações sinérgicas entre agentes públicos e privados. A governança climática é caracterizada pela interação entre diferentes níveis de poder local, regional, nacional e internacional. Experiências brasileiras como a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (Rede Clima) tem como finalidade impulsionar a geração de conhecimento e o avanço científico e tecnológico na área de mudança do clima, resultantes do intercâmbio de informações e da integração de competências de especialistas, pesquisadores, grupos de pesquisa e instituições científicas, tecnológicas

e de inovação que possuam reconhecida competência nas áreas do conhecimento relevantes ao tema. (BRASIL, MCTI, 2023). Assim como o Programa Cidades Verdes Resilientes, o qual foi instuído pelo Decreto n. 12.041/2024 e tem como objetivo “aumentar a qualidade ambiental e a resiliência das cidades brasileiras diante dos impactos da mudança do clima, por meio da integração de políticas urbanas, ambientais e climáticas, estimulando as práticas sustentáveis e a valorização dos serviços ecossistêmicos do verde urbano”, mostram que a cooperação intermunicipal é fundamental para ampliar a escala de ações e acessar recursos. (Brasil – MMA, 2024)

No Rio Grande do Sul, iniciativas como o Plano Rio Grande 2024 (RS 2024) e o Centro de Inteligência Climática (RS 2026) reforçam a importância da articulação entre municípios e estado. A rede-RS, ao se estruturar em múltiplos níveis (Conselho Diretor, Comitê Técnico-Científico, Fórum Multissetorial, Secretaria-Executiva e Núcleos Municipais), incorpora princípios de governança multinível, garantindo que decisões locais estejam alinhadas a estratégias regionais e nacionais.

2.3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL REGIONAL

O desenvolvimento sustentável no RS exige conciliar crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental. A região enfrenta desafios como êxodo rural, envelhecimento populacional e baixa diversificação produtiva. A rede-RS pode contribuir para superar esses obstáculos ao promover:

- Inovação agrícola: incentivo a práticas agroecológicas e sistemas integrados de produção. É fortemente apoiada por políticas públicas que incentivam práticas agroecológicas e sistemas integrados de produção, como a Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta (ILPF). Programas recentes do MDA e da Embrapa consolidam esse modelo como estratégico para sustentabilidade e aumento da produtividade. (Embrapa, 2020; MDA, 2024; MDA, 2025).

- Educação ambiental: programas de capacitação em escolas e comunidades. De acordo com INPE, MMA, MEC e ANPPEA (2026), a Educação Ambiental pode desempenhar papel estratégico como vetor de governança climática multinível, articulando políticas públicas, territórios e atores institucionais, o que contribui para fortalecer a capacidade adaptativa diante das mudanças climáticas.
- Economia verde: estímulo a energias renováveis, manejo florestal sustentável e turismo ecológico. O Plano de Transformação Ecológica, lançado pelo Ministério da Fazenda em 2024, destaca as energias renováveis como eixo estratégico para o crescimento sustentável do país. O Plano Floresta+ Sustentável, instituído pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em 2023, promove o desenvolvimento florestal por meio da ampliação de áreas de florestas plantadas, recuperação de áreas degradadas e incentivo à silvicultura. O programa contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e fortalece a bioeconomia nacional. O Ministério do Turismo defende o turismo sustentável como pilar da economia verde, destacando seu papel na geração de empregos, preservação ambiental e integração regional. Programas como **Conheça o Brasil** incentivam viagens internas e fortalecem o turismo como vetor de desenvolvimento sustentável.
- Planejamento Ambiental Regional sistêmico para o uso e ocupação do solo e do território baseado em bacias

hidrográficas como unidades deste planejamento. “A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos” (BRASIL, 1997).

A literatura sobre desenvolvimento regional (Ostrom, 1990; Sachs, 2015) destaca que soluções duradouras emergem da cooperação entre atores locais. A rede-RS, ao criar espaços de diálogo e ação conjunta, pode ser catalisadora de um novo modelo de desenvolvimento sustentável para o Alto Uruguai.

3. CONTEXTO REGIONAL

3.2 IMPACTOS CLIMÁTICOS OBSERVADOS

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) divulgou uma análise dos efeitos e dos impactos do desastre climático provocado pelas chuvas históricas de maio de 2024, no Rio Grande do Sul. De acordo com a análise, o prejuízo total decorrente das inundações foi de R\$ 88,9 bilhões, incluindo perdas produtivas, sociais, ambientais e de infraestrutura. Climainfo, 2004

Esses eventos não são isolados: refletem tendências globais de intensificação de extremos climáticos, conforme relatórios do IPCC (2023). A vulnerabilidade da região é ampliada pela falta de sistemas robustos de monitoramento e alerta, pela baixa diversificação econômica e pela limitada capacidade de investimento dos municípios.

3.3 POTENCIAL DE COOPERAÇÃO

Apesar das vulnerabilidades, por exemplo, o Alto Uruguai gaúcho possui grande potencial de cooperação. A AMAU – Associação dos municípios do Alto Uruguai Gaúcho, já atua como espaço de articulação política e técnica entre os municípios, promovendo consórcios intermunicipais em áreas como saúde e gestão de resíduos. Essa experiência pode ser replicada na agenda climática, criando sinergias entre municípios e ampliando a escala das ações.

A rede-RS, ao se estruturar como rede de cooperação, poderá:

- Integrar diagnósticos municipais em um plano regional de adaptação.
- Compartilhar recursos técnicos e financeiros, reduzindo custos e ampliando eficiência.
- Fortalecer a voz política da região em negociações com governo estadual e federal.
- Atrair parcerias internacionais, aproveitando programas de cooperação climática da União Europeia e de agências da ONU.

Assim, o contexto estadual evidencia tanto os desafios quanto as oportunidades para a criação de uma rede gerenciada pelas Associações de Municípios. A vulnerabilidade socioeconômica e climática exige respostas urgentes, mas o capital social existente e a experiência das Associações do Municípios e da Famurs oferecem bases sólidas para a construção de uma rede de resiliência climática.

4 ESTRUTURA DA REDE-RS

A Rede de Cooperação para Resiliência Climática voltada para as Associações dos Municípios do RS, foi pensada como uma estrutura de governança multinível, capaz de articular diferentes atores e escalas de decisão. Sua arquitetura institucional busca equilibrar representatividade política, rigor técnicocientífico, participação social e eficiência administrativa.

4.1 CONSELHO DIRETOR REGIONAL

O Conselho Diretor seria a instância máxima de deliberação da rede-RS, composto por representantes das 29 Associações de Municípios, presidida pela Famurs, além de membros convidados do governo estadual e federal. Suas principais funções incluem:

- Definir diretrizes estratégicas regionais de adaptação climática.
- Aprovar planos e projetos intermunicipais.
- Representar a rede-RS em negociações com órgãos nacionais e internacionais.

Experiências semelhantes podem ser observadas em consórcios intermunicipais de saúde e resíduos sólidos no Brasil, que demonstram a eficácia de colegiados regionais para decisões estratégicas.

4.2 COMITÊ TÉCNICOCIENTÍFICO

Formado por pesquisadores de universidades (como a UERGS, UFFS, UFRGS, UFSM, IFRS, UPF e URI), técnicos da Emater/RS-Ascar e especialistas convidados, o Comitê terá papel central na produção de conhecimento e na validação científica das ações da rede-RS. Entre suas atribuições:

- Elaborar diagnósticos climáticos regionais.
- Propor metodologias de monitoramento e avaliação.
- Capacitar gestores e comunidades em práticas de adaptação.

Esse modelo se inspira em redes como a Rede Clima do MCTI, que articula núcleos de pesquisa em todo o país para subsidiar políticas públicas. (Brasil – MCTI, 2023)

4.3 FÓRUM MULTISSETORIAL

O Fórum será o espaço de participação da sociedade civil, setor privado e organizações não governamentais. Sua função é garantir legitimidade social e diversidade de perspectivas. Atividades previstas:

- Realização de audiências públicas e consultas comunitárias.
- Criação de grupos temáticos (agricultura, energia, saúde, educação).
- Estímulo à inovação social e ao empreendedorismo verde.

A experiência de fóruns participativos em conselhos municipais de meio ambiente mostra que a inclusão de múltiplos atores fortalece a governança e amplia a aceitação das políticas.

4.4 SECRETARIA EXECUTIVA

A Secretaria Executiva será responsável pela gestão administrativa e operacional da rede-RS. Suas funções incluem:

- Coordenação de reuniões e eventos.
- Gestão financeira e prestação de contas.
- Articulação com parceiros externos e captação de recursos.

A eficiência da Secretaria será fundamental para garantir a continuidade das ações e evitar a fragmentação institucional.

4.5 NÚCLEOS MUNICIPAIS

Cada Associação de Municípios terá um Núcleo Municipal da RECORE-RS, integrado por representantes da prefeitura, sociedade civil e setor produtivo. Esses núcleos serão responsáveis por:

- Implementar projetos locais de adaptação.
- Alimentar o sistema regional com dados e informações.
- Mobilizar comunidades para participação ativa.

Essa descentralização garante que a rede-RS não seja apenas uma instância regional distante, mas esteja enraizada nas realidades locais.

5 ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO

A criação da rede-RS exige não apenas uma estrutura institucional clara, mas também um conjunto de estratégias práticas que garantam sua efetividade. A seguir, são apresentadas as principais etapas de implementação, inspiradas em boas práticas nacionais e internacionais de governança climática.

5.1 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

O primeiro passo é a realização de diagnósticos municipais e regionais sobre vulnerabilidades climáticas. Esse processo deve ser participativo, envolvendo gestores públicos, agricultores, associações comunitárias e universidades. O objetivo é identificar riscos específicos (estiagens, enchentes, deslizamentos) e mapear capacidades locais de resposta. Ferramentas como o **MapBiomias** (mapBiomias, 2026) e o **Sistema de Alerta da Defesa Civil** (Casa Militar – Defesa Civil, 2026) podem ser integradas as da RECORE-RS. Esses planos incluirão metas de curto, médio e longo prazo fornecer dados atualizados sobre uso do solo e eventos extremos.

5.2 PLANOS MUNICIPAIS DE ADAPTAÇÃO

- Com base nos diagnósticos, cada município deverá elaborar seu Plano Municipal de Adaptação Climática, alinhado às diretrizes region, como:
- Infraestrutura urbana resiliente (drenagem, habitação segura).

- Educação ambiental nas escolas.

A integração desses planos em um Plano Regional de Adaptação permitirá maior coerência e eficiência.

- Incentivo à diversificação agrícola.
 - Proteção de nascentes e matas ciliares.
- ### 5.3 Capacitação técnica e científica

A rede-RS deve investir em programas de capacitação para gestores públicos, técnicos agrícolas e lideranças comunitárias. Universidades, Institutos federais e instituições como a Emater/RS-Ascar e Embrapa podem oferecer cursos e oficinas sobre:

- Agricultura de baixo carbono.
- Energias renováveis.
- Gestão de riscos climáticos.
- Ferramentas digitais de monitoramento.

Essa capacitação fortalece a autonomia dos municípios e cria uma rede de especialistas regionais.

5.4 PROJETOS PILOTO

A implementação inicial deve incluir projetos-piloto em áreas estratégicas, como:

- Agricultura resiliente: sistemas agroflorestais e irrigação eficiente.
- Energia limpa: instalação de painéis solares em escolas e postos de saúde.
- Gestão hídrica: recuperação de bacias hidrográficas e reservatórios comunitários.
- Infraestrutura verde: criação de parques urbanos para absorção de águas pluviais.

Esses projetos servirão como laboratórios de inovação, gerando resultados concretos e replicáveis.

5.5 INTEGRAÇÃO COM REDES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

A RECORE-RS deve buscar parcerias com programas nacionais, como o Plano Clima (RS, 2024) e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, (Brasil – MMA, 2026) além de redes internacionais como o ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI, 2026) Essa integração amplia o acesso a recursos financeiros, conhecimento técnico e visibilidade política.

6 BENEFÍCIOS ESPERADOS

A implementação da RECORE-RS trará benefícios múltiplos e interconectados, que vão além da mitigação de riscos climáticos. A seguir, são destacados os principais impactos esperados:

6.1 BENEFÍCIOS SOCIAIS

- Fortalecimento comunitário: ao envolver associações, cooperativas e escolas, a rede-RS promove maior coesão social e senso de pertencimento.
- Educação e conscientização: programas de capacitação e campanhas educativas ampliam o conhecimento da população sobre mudanças climáticas e práticas sustentáveis.
- Saúde pública: ao reduzir impactos de enchentes e estiagens, diminui-se a incidência de doenças relacionadas à água e ao estresse ambiental. Segundo o Ministério da Saúde (Brasil – MS, 2014), e consonância com a WHO (2019) a redução do risco de desastres deve ser considerada uma função essencial da saúde pública, integrando ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e reabilitação. O enfrentamento das emergências requer abordagem abrangente, que contemple tanto os danos quanto suas causas, além de colaboração intersetorial e interinstitucional para proteger a saúde em todas as suas dimensões.

6.2 BENEFÍCIOS ECONÔMICOS

- Diversificação produtiva: incentivo a práticas agroecológicas e sistemas integrados aumenta a resiliência da agricultura familiar.
- Acesso a financiamentos: integração com fundos nacionais e internacionais abre novas oportunidades de crédito e investimento.

- Redução de perdas: medidas preventivas diminuem prejuízos agrícolas e custos com reconstrução de infraestrutura.

6.3 BENEFÍCIOS AMBIENTAIS

- Proteção de recursos hídricos: recuperação de nascentes e bacias hidrográficas garante maior segurança hídrica.
- Conservação da biodiversidade: práticas sustentáveis preservam ecossistemas locais e corredores ecológicos.
- Redução de emissões: estímulo a energias renováveis e agricultura de baixo carbono contribui para metas nacionais de mitigação.

6.4 BENEFÍCIOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAIS

- Fortalecimento da governança regional: a RECORE-RS consolida as associações municipais como referência em cooperação intermunicipal.
- Maior influência política: municípios ganham voz coletiva em negociações com governo estadual, federal e organismos internacionais.
- Modelo replicável: a experiência da RECORE-RS pode inspirar outras regiões brasileiras a criar redes semelhantes, ampliando o impacto nacional.

CONCLUSÃO

A emergência climática global exige respostas locais e regionais inovadoras. O Rio Grande do Sul com sua forte base na agricultura familiar e vulnerabilidades socioeconômicas, encontra na criação da Rede de Cooperação para Resiliência Climática (RECORE-RS) uma oportunidade histórica de transformar desafios em possibilidades.

Ao longo deste capítulo, demonstrouse que a rede-RS não é apenas uma proposta administrativa, mas um modelo de governança multinível capaz de articular municípios, sociedade civil, setor privado e academia em torno de uma agenda comum de adaptação e mitigação. Sua estrutura – composta por Conselho Diretor, Comitê Técnico Científico, Fórum Multissetorial, Secretaria Executiva e Núcleos Municipais – garante representatividade, rigor técnico e participação social.

As estratégias de implementação, que incluem diagnósticos participativos, planos municipais de adaptação, capacitação técnica, projetos piloto e integração com redes nacionais e internacionais, oferecem um caminho concreto para transformar intenções em ações. Os benefícios esperados abrangem dimensões sociais, econômicas, ambientais e políticas, reforçando que a rede-RS pode ser catalisadora de um novo modelo de desenvolvimento sustentável regional.

Mais do que enfrentar os impactos imediatos das mudanças climáticas, a RECORE-RS projeta o Rio Grande do Sul como referência nacional e internacional em cooperação intermunicipal para resiliência climática. Sua experiência poderá inspirar outras regiões brasileiras e latinoamericanas, ampliando o alcance da inovação institucional.

Em síntese, a rede-RS representa um compromisso coletivo com o futuro, reafirmando que a cooperação é o caminho mais eficaz para enfrentar a crise climática. O sucesso da iniciativa dependerá da

capacidade de mobilizar atores locais, garantir recursos financeiros e manter a articulação com políticas estaduais, nacionais e globais. Se bem implementada, a RECORE-RS poderá transformar o Rio Grande do Sul em um laboratório vivo de resiliência e sustentabilidade, contribuindo para um Brasil mais preparado diante dos desafios climáticos do século XXI.

A proposta da rede-RS representa uma inovação institucional para o Rio Grande do Sul articulando municípios, sociedade civil e parceiros externos em torno da resiliência climática. Sua implementação poderá servir de modelo para outras regiões brasileiras, reforçando a importância da cooperação intermunicipal diante da crise climática global. Mais do que enfrentar impactos imediatos, projeta o Rio Grande do Sul como referência nacional e internacional em cooperação para resiliência climática.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 9 jan. 1997. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19433.htm (planalto.gov.br in Bing). Acesso em: 19 jun. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Plano de Contingência Nacional para Emergências em Saúde Pública – PCE**. Brasília: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2014. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_contingencia_emergencias_saude_publica.pdf (bvsms.saude.gov.br in Bing). Acesso em: 19 jun. 2026.

BRASIL – MCTI - **Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais e Centro de Síntese em Mudanças Ambientais e Climáticas**. 2023 Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/cgcl/paginas/rede-brasileira-de-pesquisas-sobre-mudancas-climaticas-globais-e-centro-de-sintese-em-mudancas-ambientais-e-climaticas>. Acesso em: 14 abr 2026.

Brasil – MMA – 2023 – **Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima**. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/smc/dgov/cim>. Acesso em: 14 abr 2026.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Plano Floresta+ Sustentável**. Brasília: MAPA, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura> (gov.br in Bing). Acesso em: 23 jun. 2026.

Brasil – MMA – 2024. **Programa Cidades Verdes Resilientes**. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/meio-ambiente-urbano-recursos-hidricos-qualidade-ambiental/cidades-verdes-resilientes>. Acesso em: 14 abr 2026.

BRASIL. Ministério da Fazenda. **Brasil pode assumir a liderança na economia verde com aposta em energias renováveis**. Brasília: Ministério da Fazenda, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/fazenda>>. Acesso em: 23 jun. 2026.

BRASIL. Ministério do Turismo. **Brasil defende turismo sustentável como pilar da economia verde durante Fórum Esfera Internacional**. Belém: Ministério do Turismo, 2025. Disponível em: <<https://www.gov.br/turismo>>. Acesso em: 23 jun. 2026.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. **Programa Nacional de Pesquisa e Inovação para a Agricultura Familiar e Agroecologia (PNPIAF)**. Brasília: MDA, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/mda>>. Acesso em: 23 jun. 2026.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. **Plano de Aceleração de Soluções (PAS TERRA): expansão da agroecologia e agroflorestas resilientes**. Brasília: MDA, 2025. Disponível em: <<https://www.gov.br/mda>>. Acesso em: 23 jun. 2026.

Brasil – MMA – **Fundo Nacional sobre mudança do clima**. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/secex/dfre/fundo-nacional-sobre-mudanca-do-clima>. Disponível em: 09 mar 2026.

Brasil – ONU. 2026. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 22 jun 2026.

Climainfo. **Chuvas históricas no RS**. Disponível em: <https://climainfo.org.br/2024/12/02/chuvas-historicas-no-rs-causaram-prejuizo-de-mais-de-r-89-bilhoes/>. Acesso em: 16 abr 2026

DI GIULIO, Gabriela Marques e GRESSE, Eduardo Gonçalves e JACOBI, Pedro Roberto. **Emergência climática, eventos extremos e as experiências no contexto brasileiro**. Diálogos Socioambientais. Santo André: Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo. Disponível em: <https://periodicos.ufabc.edu.br/index.php/dialogosocioambientais/article/view/1061>. Acesso em: 19 jun. 2026. , 2024

Emater/RS-Ascar 2026. **Informativo conjuntural 2024**. Disponível em: https://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/conjuntural/conj_18062026.pdf. Acesso em: 22 jun 2026.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). **Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF): sustentabilidade no campo brasileiro**. Brasília: Embrapa, 2020. Disponível em: <<https://www.embrapa.br>>. Acesso em: 23 jun. 2026.

INPE; MMA; MEC; ANPPEA (org.). **Educação Ambiental e Governança Climática Multinível no Brasil**. Maceió: LADIS/DIIA-V-INPE, 2026. Disponível em: <<http://mtc-m12e.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-m12e/2026/04.09.18.14/doc/thisInformationItemHomePage.html>>. Acesso em: 19 jun. 2026.

IPCC. **Climate Change**, 2023: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.

IRGA. **Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural**

- Programa de Extensão – Disponível em: <https://irga.rs.gov.br/upload/arquivos/202501/08151422-programa-de-extensao.pdf>. Acesso em: 22 de jun 2026.

OSTROM, E. Governing the Commons: **The Evolution of Institutions for Collective Action**. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

RS – Plano Rio Grande – **Todos nós por todos nós**. Porto Alegre: Governo do RS, 2024. Disponível em: <https://planoriogrande.rs.gov.br/plano-rio-grande>. Acesso em: 16 abr 2026

RS – 2026. **Governo do Estado investe R\$ 5 milhões em Centro de Inteligência Climática na fronteira com o Uruguai**. Disponível em: <https://estado.rs.gov.br/governo-do-estado-investe-r-5-milhoes-em-centro-de-inteligencia-climatica-na-fronteira-com-o-uruguai>. Acesso em: 16 abr 2026

RS – SDR – (Secretaria de Desenvolvimento Rural). **Governo do Estado autoriza elaboração de projetos para indígenas, pescadores e quilombolas pelo Desenvolve RS Rural**. Disponível em: <https://www.sdr.rs.gov.br/governo-do-estado-autoriza-elaboracao-de-projetos-para-indigenas-pescadores-e-quilombolas-pelo-desenvolve-rs-rural>. Acesso em: 22 de jun 2026.

SACHS, I. **Desenvolvimento includente, sustentável e sustentável**. Rio de Janeiro: Garamond, 2015.

SCHIMANSKI, Silvana. A Governança Multinível e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Contexto dos Eventos Climáticos. **Revista CEDEPEM**, v. 3, n. 3, p. 67–74, 2023. DOI: <https://doi.org/10.15210/cedepem.v3i3.31005>. Acesso em: 19 jun. 2026.

WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Health Emergency and Disaster Risk Management Framework**. Geneva: WHO, 2019. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/326106> (apps.who.int in Bing). Acesso em: 19 jun. 2026.

ANO DE 2024 NO RIO GRANDE DO SUL: TRAGÉDIA CLIMÁTICA OU ECOCÍDIO?

Rosangela Angoleri¹

Chirley Rigon²

INTRODUÇÃO

O ambiente natural cria um espaço para a existência dos seres vivos. No início do século 21, a biodiversidade de plantas e animais começou a desaparecer em uma escala sem precedentes e o grau de poluição do ambiente natural passou a exceder os padrões aceitáveis. (KOWALSKA, 2023, p. 1). O desenvolvimento industrial e a aceleração da urbanização resultam na aquisição de áreas cada vez maiores para investimentos em cultivo e construção. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, entre 2012 e 2050, serão necessários mais 100 milhões de hectares de terra para a produção agrícola (FAO, 2020³, apud KOWALSKA, 2023, p.3).

A Guerra do Vietnã é considerada um marco do surgimento das armas ecológicas. Durante a operação de codinome “*Ranch Hand*”⁴, foram descartados aproximadamente 19 milhões de galões de herbicidas (MARTIN, 2012; STELLMAN, 2018). Agentes fitotóxicos e

¹ Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Regional Integrada – URI Campus Erechim. Pós-graduanda em Gestão Ambiental na Indústria na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.

² Docente Convidada da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) – Unidade em Erechim. Bacharel em Direito pela Universidade Regional Integrada – URI Campus Erechim; Especialista em Direito Público com Ênfase em Gestão Pública pela Faculdade Damásio; Mestra em Educação pela Universidade do Oeste do Paraná - UNIOESTE. E-mail: adm@belaarte.srv.br.

³ FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Global forest resources assessment 2020: key findings. Rome: FAO, 2020a.

⁴ Ranch Hand - Ajudante do rancho, ou peão de fazenda

desfolhantes fortes causaram profundas transformações na estrutura biológica e contribuíram para a destruição da fitosfera. (CUSATO, 2018). Os acontecimentos no Vietnã intensificaram o trabalho legislativo para proibir o uso de desfolhantes para fins militares. No entanto, a normatização do ecocídio não foi realizada no Direito Internacional até agora (KOWALSKA, 2023, p.6).

Atualmente, o termo ecocídio passou a ser compreendido como o dano de tal extensão que provoca a destruição ou a perda do ecossistema existente em um dado território, seja por ação humana, seja por causa diversa, e cujas proporções e gravidade impõem à redução da possibilidade do uso e gozo pacíficos do referido território, pelos respectivos habitantes (HIGGINS apud SHORT, 2016, p. 63 apud PEREIRA, 2018, p. 276). Para ser admitido perante o Tribunal Penal Internacional (TPI), considera-se que o ecocídio deve ser uma ofensa massiva ao meio ambiente, capaz de ocasionar graves danos ao ecossistema e violações à fauna, flora, ao ar e/ou as águas, de sorte a determinar a morte de vários espécimes animais ou vegetais, ou tornar inapropriado o uso das águas, do solo, subsolo e/ou do ar, de modo a ocasionar abalos à própria vida humana. (GORDILHO e RAVAZZANO, 2017, p. 690).

Este trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica sobre o que é Ecocídio, a busca pela regularização deste crime como um crime contra a humanidade, a destruição do ambiente e as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no ano de 2024.

Mudanças climáticas, como eventos climáticos extremos, inundações, ciclones/furacões, seca/calor extremos, poluição do ar e outros desequilíbrios ambientais estão produzindo danos cada vez maiores. Os eventos climáticos extremos (ECE), como o ocorrido no estado do Rio Grande do Sul (RS), localizado na Região Sul do Brasil, em 2024, estão aumentando em frequência e gravidade, elevando

a probabilidade de impactos severos e generalizados para pessoas e ecossistemas. A influência humana no sistema climático é clara: as recentes emissões antropogênicas de gases de efeito estufa são as mais altas da história (FARIA, 2025, p.2).

As enchentes do ano de 2024 no Rio Grande do Sul não resultaram somente das mudanças climáticas do Planeta Terra, mas sim, de toda a destruição provocada pelo homem no decorrer das últimas décadas. Alterações significativas na dinâmica ambiental do Planeta provocando um desequilíbrio nos ecossistemas de tal modo a provocar danos irreversíveis.

O trabalho propõe uma análise robusta e crítica, conectando a evolução jurídica e histórica do conceito de Ecocídio com a realidade das catástrofes ambientais, culminando em uma crítica ao modelo socioeconômico que as fomenta.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A investigação se fundamenta em um referencial teórico interdisciplinar, que articula o conceito de Ecocídio com a crítica ao modelo de desenvolvimento.

2.1 ECOCÍDIO: DEFINIÇÃO E EVOLUÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL

O neologismo ecocídio passa a ser utilizado durante a guerra do Vietnã, derivando da palavra grega *oikos* (casa, lar) e da expressão latina *cide* (destruição). Foi exatamente no ano de 1970 que um grupo de cientistas norte-americanos cunharam o termo para denunciar a

destruição ambiental e uma provável catástrofe para a saúde humana em razão do programa de guerra herbicida desenvolvido durante aquele conflito e denominado Operação *Ranch Hand*. Referido movimento desencadeado pelos aludidos cientistas obrigaram o governo norte-americano ao rever sua política de guerra, inclusive renunciando ao uso de herbicidas em guerras futuras (SHORT, 2016, p. 38 apud PEREIRA, 2018, p.275-276).

Adam Jones (2011, p. 26 apud PEREIRA, 2018, p. 276) define ecocídio como:

A destruição voluntária do ambiente natural e dos ecossistemas, através de (a) poluição e outras formas de degradação ambiental e (b) esforços militares para minar a sustentabilidade da população e seus meios de subsistência.

Segundo Pereira (2018, p. 277), o movimento pela criminalização do ecocídio, resultante da violação do Direito Internacional tem como uma de suas principais responsáveis a advogada Polly Higgins, que, por meio da campanha *End Ecocide on Earth*⁵, buscou sensibilizar juristas, ativistas, autoridades e governos para que o ecocídio fosse reconhecido como o quinto crime internacional, ainda ausente da competência material do Tribunal Penal Internacional, além dos crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crime de agressão (crimes contra a paz).

Para Kowalska (2023), o resultado, é a pobreza, a desnutrição, a exclusão social e a discriminação exacerbadas. A decomposição da ordem internacional torna a segurança cada vez mais fluida e complexa. Por essa razão, a segurança deve ser entendida a partir de uma perspectiva mais ampla, levando em consideração o ambiente da vida humana.

⁵ End Ecocide on Earth - Acabar com o Ecocídio na Terra

Assim, a formulação e aplicação de normas de segurança ambiental exigem também um ambiente legislativo adequado.

O termo ecocídio foi cunhado pela primeira vez pelo Professor Arthur W. Galston na Conferência sobre Guerra e Responsabilidade Nacional, em Washington, onde também propôs um novo acordo internacional para proibir o ecocídio, foi o primeiro a caracterizar danos e destruição massivos de ecossistemas como ecocídio⁶.

Durante a Conferência de Estocolmo de 1972, que introduziu o histórico Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), a temática do ecocídio foi revisitada. Contudo, o ecocídio não foi inserido na declaração que originou a UNEP, tendo tido maior importância nos eventos não-oficiais que ocorreram paralelamente à Conferência (BORGES, 2013, p. 6469).

O primeiro princípio da Declaração de Estocolmo nos diz que:

O homem tem o direito fundamental a liberdade, a igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras” (DECLARACAO DE ESTOCOLMO⁷, 1972, apud KOWALSKA, 2023, p.5).

Em 1990, o Vietnã codifica o ecocídio em suas leis nacionais. De acordo com o Artigo 278 do Código Penal que estabelece:

Aqueles que, em tempo de paz ou de guerra, cometerem atos de aniquilação em massa de uma população em uma área, destruindo a fonte de seu sustento, minando

⁶ Disponível em: <https://ecocidelaw.com/bibliography/>

⁷ DECLARATION on the Human Environment, adopted by the United Nations Conference on the Human Environment, signed in Stockholm on 16 June 1972.

a vida cultural e espiritual de um país, perturbando os fundamentos de uma sociedade com o objetivo de miná-la, bem como outros atos de genocídio ou atos de ecocídio ou de destruição do meio ambiente natural, serão condenados a pena de dez a vinte anos de prisão, prisão perpétua ou pena de morte (VIETNÃ, 1990⁸).

Em 1991, a Comissão de Direito Internacional incluiu o artigo 26: danos intencionais e graves ao meio ambiente em seu Projeto de Código de Crimes Contra a Paz e a Segurança da Humanidade. Contudo, em 1996 o Projeto de Código da Comissão de Direito Internacional é reduzido a quatro crimes, os mesmos quatro atualmente previstos no Estatuto de Roma: agressão, genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra⁹.

No ano de 2001, a Ucrânia tipifica o crime de ecocídio em sua legislação interna. O Artigo 441 do Código Penal prevê: A destruição em massa da flora e da fauna, a contaminação do ar ou dos recursos hídricos, bem como quaisquer outras ações que possam causar um desastre ambiental, serão puníveis com pena de prisão de oito a quinze anos¹⁰.

Em 2016, o Procurador do Tribunal Penal Internacional publica um Documento de Política sobre Seleção e Priorização de Casos. Este documento afirma que o impacto de um crime é um fator na avaliação da gravidade. Em 2019, Vanuatu e Maldivas pedem que seja considerada a inclusão do crime de ecocídio no Estatuto de Roma na 18ª Reunião da Assembleia dos Estados-Partes do TPI, iniciativa que foi reforçada pela Bélgica em 2020 na 19ª Reunião do mesmo órgão.

⁸ Disponível em: <https://ecocidelaw.com/bibliography>

⁹ Disponível em: <https://ecocidelaw.com/bibliography>

¹⁰ Disponível em: <https://ecocidelaw.com/bibliography>

No Brasil, em 2019, foi proposto o Projeto de Lei nº 2787/2019¹¹, com a finalidade de modificar a Lei de Crimes Ambientais, motivado pelo desastre do rompimento da barragem de Brumadinho. A proposta busca tipificar como crime as condutas que resultem no rompimento de barragens e em desastres ambientais, além da elaboração ou apresentação de estudos, laudos ou relatórios de segurança falsos ou enganosos. O texto também prevê o aumento dos valores mínimo e máximo das multas aplicadas a infrações administrativas ambientais. A última movimentação do projeto ocorreu em 02/02/2023, permanecendo pendente a designação de relator. Em 2023, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº 2933/2023, que busca criminalizar a prática de atos ilegais ou arbitrários com a consciência de que geram uma probabilidade substancial de danos graves, generalizados ou de longo prazo ao meio ambiente.

2.2. A CONEXÃO COM A JUSTIÇA AMBIENTAL E A VULNERABILIDADE SOCIOECOLÓGICA

O Ecocídio e suas consequências não afetam a sociedade de forma homogênea. A crescente degradação ambiental faz da segurança ecológica um componente crucial (MICHAJŁOW apud POKRUSZYŃSKI, 2017).

As diferenças sociais são evidenciadas em função das áreas ocupadas serem áreas inundáveis ou de Áreas de Preservação Permanente (APP), agravando a exposição aos riscos ambientais (REHBEIN e ALVES, 2025). O risco, portanto, não é determinado somente pela intensidade dos fenômenos naturais, mas pela posição

¹¹ <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137437>

e exposição social das populações (ACSELRAD, 2004). O aumento do ecocídio provoca pobreza, desnutrição e exclusão social (KOWALSKA, 2023, p.4), estabelecendo uma clara pauta de Justiça Ambiental.

2.3. O MODELO CAPITALISTA COMO FATOR ESTRUTURAL DO ECOCÍDIO

O Ecocídio não decorre de comportamentos individuais, mas sim de atividades industriais ou de ações coletivas promovidas pelo modelo socioeconômico. A ascensão da modernidade, marcada pela divisão do trabalho e pelo modo de produção capitalista, universalizou a exploração da natureza (BOLDT, p. 198).

Historicamente, há uma conexão clara entre colonização, exploração econômica, e esgotamento ambiental (PEREIRA, 2021). A devastação do ambiente é um efeito colateral da lógica de acumulação de capital e do aumento do consumo humano, resultando na destruição da biodiversidade, na poluição de rios e na degradação do solo (MARQUES e ALMEIDA, 2021). O avanço da monocultura (grãos) e o uso intensivo de agrotóxicos (EGGER et al, 2021) são exemplos concretos dessa priorização econômica sobre a sustentabilidade do ecossistema.

3 METODOLOGIA

O trabalho está ordenado da seguinte forma: primeiramente, um breve histórico sobre o que é o Ecocídio, sua definição e evolução no Brasil e no mundo, elenca as principais tragédias ambientais ocorridas no Brasil e no mundo, e suas consequências para o ambiente e para a sociedade. Finaliza enfatizando que tragédia ambiental ocorrida no Rio Grande do Sul, no ano de 2024 não é apenas resultado das mudanças

climáticas, mas sim decorrentes da destruição do ambiente em prol de uma sociedade capitalista.

O artigo se insere no campo da Pesquisa Qualitativa, utilizando procedimentos técnicos de análise documental e estudo de casos, sob uma abordagem crítico-analítica.

O estudo possui caráter exploratório e descritivo. É exploratório na medida em que busca construir a fundamentação teórica do conceito emergente de Ecocídio e sua aplicabilidade a contextos nacionais. É descritivo ao detalhar as características, causas e consequências das tragédias ambientais selecionadas.

A abordagem é crítico-analítica, pois busca criticar a eficácia do ordenamento jurídico e do modelo socioeconômico (capitalismo) diante da magnitude das catástrofes, utilizando o Método Dedutivo, partindo da premissa geral do Ecocídio para a análise específica do evento no Rio Grande do Sul no ano de 2024.

Os procedimentos técnicos utilizados foram: a Pesquisa Bibliográfica: Utilização de doutrina jurídica, artigos científicos e literatura sobre os eixos conceituais de Ecocídio, Justiça Ambiental e Crítica ao Capitalismo (referenciais de Kowalska, Pereira, Boldt, Acselrad, entre outros); Pesquisa Documental: Análise de projetos de lei, documentos oficiais de órgãos como a Defesa Civil do RS, relatórios de instituições ambientais e notas técnicas sobre o evento de 2024; Estudo de Casos: Análise comparativa de tragédias ambientais notórias (Mariana, Brumadinho) e internacionais (Tchernóbil, Deepwater Horizon) para contextualizar a escala do dano (Ecocídio), culminando no estudo aprofundado do evento no Rio Grande do Sul em 2024 como prova da vulnerabilidade sistêmica.

3.1 ECOCÍDIO: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS

No Brasil, entre 1991 e 2023, foram registrados um total de 67.230 desastres. No período de 1991 a 2001, contabilizou-se 8.942 ocorrências, número que aumentou para 22.648 entre 2002 e 2012 e chegou a 35.640 entre 2013 e 2023, indicando crescimento na incidência de desastres nas últimas décadas. (Brasil, 2023¹², apud REHBEIN e ALVES, 2025, p. 6).

Esse aumento na frequência e intensidade dos desastres, no entanto, não reflete uma distribuição equitativa de impactos, pois as consequências incidem de forma desproporcional sobre populações historicamente vulnerabilizadas (PEREIRA, 2021, apud REHBEIN e ALVES, 2025, p. 6). O risco, portanto, não é determinado somente pela intensidade dos fenômenos naturais, todavia pela posição e exposição social das populações, que as torna mais suscetíveis à perda de bens, direitos e meios de subsistência. As assimetrias de poder, que moldam as políticas, exacerbam essa vulnerabilidade, tornando certos grupos mais expostos aos danos e menos contemplados pelos benefícios da ocupação do território (ACSELRAD, 2004, apud REHBEIN e ALVES, 2025, p. 6 e 7).

3.2 EVIDÊNCIAS DA DESTRUIÇÃO AMBIENTAL CAUSADA PELO HOMEM

Segundo dados do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, 2004-2012 (PPCDAM), as áreas mais

¹² BRASIL. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil. Atlas Digital de Desastres no Brasil. Brasília: MIDR, 2023.

preservadas do ponto de vista ambiental são exatamente as terras indígenas. O comprometimento e o esgotamento da biodiversidade implicam a destruição dos povos ancestrais. Tal comprometimento, permitido pelo Estado omissor, por sua gravidade e irreparabilidade, deve acarretar responsabilidades tanto no plano coletivo quanto no plano individual (PEREIRA, 2018 p. 270).

Estimativas mostram que, entre 1990 e 2020, 420 milhões de hectares de floresta foram perdidos globalmente como resultado do desmatamento (FAO, 2020a¹³; 2020c¹⁴, apud KOWALSKA, 2023 p.4). Estima-se que, a cada minuto, 40,5 hectares de florestas tropicais, que desempenham funções vitais tanto para o funcionamento humano quanto para todo o ecossistema do planeta, são derrubados (SANERA; SHAW, 1999 apud KOWALSKA, 2023, p.4). A falta de normatização do ecocídio pode contribuir para a transformação do ambiente humano em um terreno baldio ecológico (BROSWIMMER, 2002, apud KOWALSKA, 2023, p.4).

A expansão do agronegócio associa-se também, no modelo preconizado pela chamada modernização agrícola, a intensificação do uso de agrotóxicos, no que o Brasil tem ocupado as primeiras posições entre os maiores consumidores do mundo, na última década (PIGNATI et al., 2017; FIOCRUZ, 2018¹⁵, apud EGGER et al, 2021, p. 25).

De maneira fundamentalista, as atividades pesqueiras se fizeram essenciais para o desenvolvimento da sociedade, tanto como produto comercial quanto como herança cultural. (SANTOS, 2022, p. 1). A indústria pesqueira, partindo de uma percepção ambiental, é responsável pela maior parte da captura de animais marinhos para

¹³ FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Global forest resources assessment 2020: key findings. Rome: FAO, 2020a.

¹⁴ FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. The state of the World's forests: forests, biodiversity and people. Rome: FAO, 2020c.

¹⁵ Fiocruz - Fundação Oswaldo Cruz. Coleção Saúde, Ambiente e Sustentabilidade. Série Fiocruz Institucionais. Agrotóxicos e Saúde, Vol. 2. 2018. Disponível em: <<https://portal.fiocruz.>>

a comercialização, por isso, ao observar que a poluição e degradação do ecossistema aquático é consequência, principalmente, das técnicas agressivas e do descarte inapropriado dos resíduos pesqueiros, torna-se inevitável associar a indústria pesqueira aos impactos ambientais, classificando-a como agente de degradação, afetando o equilíbrio da fauna e da flora marinha(SANTOS, et al, 2022, p. 114).

Em 2019 foi aprovado o Relatório da Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES) pelo Plenário do IPBES em Paris. O relatório mostra que este quadro de perda de biodiversidade ameaça boa parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) fixados pelas Nações Unidas, e identifica e classifica, pela primeira vez, os cinco fatores que mais contribuem globalmente para as mudanças na natureza, que também se aceleraram nos últimos 50 anos, segundo as pesquisas. O primeiro refere-se às mudanças no uso da terra e do mar: três quartas partes do meio terrestre e cerca de dois terços do marinho se encontram significativamente alterados pela ação humana. Um segundo fator é a exploração de organismos, 33% dos recursos pesqueiros marítimos eram explorados em níveis insustentáveis em 2015. O terceiro, com impacto cada vez maior, a mudança climática. O quarto fator é a poluição, o rejeito plástico, que decuplicou desde 1980. E, finalmente, as espécies exóticas invasoras, cuja presença cresceu 70% desde 1970, em pelo menos 21 países. (JACOBI, RODRIGUEZ e MILZ 2019 p.2).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES: O ECOCÍDIO MATERIALIZADO

4.1 ESTUDOS DE CASO: TRAGÉDIAS GLOBAIS E NACIONAIS

Há muitos exemplos históricos de violações graves ao meio ambiente e, em meio a tantos casos, geralmente as situações mais danosas não decorrem de comportamentos individuais, senão de atividades industriais ou de qualquer outro gênero de ações coletivas. Portanto, entre os fatores decisivos para a ampliação das agressões contra o ambiente está a ascensão da modernidade, período caracterizado por três elementos fundamentais: a crescente divisão do trabalho, o modo de produção capitalista e o surgimento do Estado-nação moderno. Com a modernização europeia, o mercado livre passou a ser exaltado como o veículo natural e mais eficiente para a coordenação de sociedades complexas e o Estado-nação racional-legal foi celebrado como a forma final da organização política. A exploração da natureza foi universalizada e mercantilizada e, no final das contas, os imperativos da modernidade tardia produziram a estrutura global em que as tendências ecocidas se aceleraram consideravelmente (BOLDT, p. 198)

Em face do sistema de desenvolvimento industrial implantado no Brasil, e ao consequente aumento do consumo humano, presenciamos graves alterações no sistema ambiental devastando ecossistemas, poluindo o ar, o solo e as águas e ocasionando perdas, algumas irreversíveis, como as centenas de espécies de mamíferos e de aves extintas nas últimas décadas. Além do grande impacto devastador provocado na flora e nos próprios seres humanos, através da poluição

dos rios, desmatamentos, degradação do solo, que causam a destruição da biodiversidade (MARQUES e ALMEIDA, 2021, p. 118)

De fato, historicamente, verificamos uma clara conexão entre colonização, exploração econômica, escravização, espoliação, tortura, extermínio, miséria e esgotamento ambiental. Daí a adequabilidade de eventual atenção, por parte do Tribunal Penal Internacional, no sentido de que o genocídio pode se dar por uma ação ecocida, própria de estruturas sociais e estatais democrático-liberais, porém com efeitos destrutivos e que provocam a ruptura das estruturas e formações sociais em suas dinâmicas de expressão e existência (PEREIRA, 2021, p. 24).

Diversos desastres ambientais recentes são evidências do impacto destrutivo das ações humanas, configurando-se como episódios de ecocídio que comprometem a biodiversidade e a saúde humana.

O acidente de Tchernóbil, em 26 de abril de 1986, é um dos principais desastres ambientais do século XX, liberando centenas de vezes mais material radioativo do que em Hiroxima (MANNA e LAGE, 2019, p. 35). Os efeitos de doses fracas de radioatividade, como tumores, cardiopatias e doenças inéditas, afetam milhões de pessoas, principalmente crianças e jovens, com temores de impactos irreversíveis no genoma humano (DUPUY, 2007 p.243).

O acidente com a plataforma Deepwater Horizon, em 20 de abril de 2010, no Golfo do México, é considerado o desastre de maior repercussão deste século no setor de óleo e gás. Resultou em 11 mortes, 17 feridos, perda da plataforma e o derramamento de cerca de 5 milhões de barris de óleo, causando um desastre ambiental de grande vulto e impactos indiretos como a alteração no consumo de frutos do mar e o aumento da tendência ao suicídio na população local (FIGUEIREDO et al 2022, p. 2). Outros incidentes relacionados ao setor de óleo e gás incluem o caso de Sidoarjo, na Indonésia (2006), que gerou um vulcão de lama ininterrupto, e o vazamento de óleo na costa brasileira em

agosto de 2019, considerado o maior desastre ambiental em extensão causado por petróleo no litoral do Brasil e a maior contaminação costeira tropical do mundo (FIGUEIREDO et al 2022, p. 3).

O Mar de Aral, que já foi o quarto maior mar interior do planeta, está atualmente em colapso devido à expansão da produção de algodão no Uzbequistão e países vizinhos. Os rios que o alimentavam (Amu Darya e Syr Darya) tiveram a maior parte de sua água (85%) desviada para irrigação (ADB, 2001, apud WILLIAMS, 2005 p. 2), principalmente para o cultivo de algodão, que é altamente consumidor de água (NEW SCIENTIST, 2004, apud Williams, 2005 p. 2).

A Ilha de Páscoa é citada como um exemplo extremo de crime ambiental e destruição de florestas no Pacífico. O desaparecimento de toda a floresta e a extinção de suas espécies de árvores causaram a perda de matérias-primas e fontes de caça, resultando em surtos de fome, um declínio populacional de 70%, canibalismo e a construção dos *Moaïs Kavakava*¹⁶ (DIAMOND, 2007 apud CALIXTO, 2023, p. 80).

No Brasil, apesar de o termo ecocídio ainda não ser juridicamente tipificado, alguns crimes ambientais ocorridos no país podem ser considerados exemplos desse conceito, em razão da gravidade e da extensão dos danos provocados ao meio ambiente e às populações afetadas.

Na última década, ocorreram em Minas Gerais os dois principais desastres ligados ao rompimento de barragens de mineração no país, nos municípios de Mariana e Brumadinho. O rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, localizada no município de Mariana, ocorreu em 5 de novembro de 2015. Lançou-se ao longo de mais de 650 km da bacia do rio Doce, um dos mais importantes cursos hídricos do Sudeste do Brasil, imensa quantidade de rejeitos de atividades minerárias. Esse

¹⁶ Um “mo’ai kavakava” é uma pequena figura de madeira de um estilo originário da cultura Rapa Nui da Ilha de Páscoa.

evento é considerado o maior desastre socioambiental no Brasil e um dos maiores relacionados à mineração (HELLER; MODENA, 2016; LACAZ; PORTO; PINHEIRO, 2017 apud RAMOS et al 2023, p 3).

Pouco mais de três anos após o desastre em Mariana, em 28 de janeiro de 2019, houve o rompimento, no município de Brumadinho, da barragem de rejeitos B1 da mina Córrego do Feijão. Esse novo desastre acarretou o lançamento de cerca de 13 milhões de m³ de rejeitos na bacia do rio Paraopeba e causou a morte de 270 pessoas (FREITAS et al., 2019; DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2019; MINAS GERAIS, 2019b apud RAMOS et al 2023, p 3).

A ocorrência dos recentes desastres de grandes proporções resultou em uma série de danos às populações do entorno, de curto, médio e longo prazo. Nessas situações, há implicações sobre estruturas de saneamento, como no caso das captações de água realizadas diretamente e no entorno dos cursos hídricos atingidos pelos rejeitos (RAMOS, 2023, p. 19).

A crise das queimadas na Amazônia atingiu níveis sem precedentes, com a escala de destruição piorando a cada ano. (LAZARO et al, 2024, p.2). Cientistas de renome, como Carlos Nobre e Thomas Lovejoy, têm soado o alarme sobre a aproximação da Amazônia de um ponto crítico de inflexão, onde o desmatamento contínuo e a degradação ambiental podem empurrar o ecossistema para um estado irreversível de colapso ecológico. Nobre vem enfatizando que a região pode se transformar de uma floresta tropical exuberante em um ambiente semelhante a uma savana seca se o desmatamento atingir entre 20-25% da área original da floresta. De acordo com suas pesquisas, a Amazônia está alarmantemente próxima desse limiar, com aproximadamente 17% da floresta já perdida (Lovejoy & Nobre, 2019; Nobre, 2014, apud LAZARO et al, 2024, p.2).

As diferenças sociais são evidenciadas ainda mais em função das áreas ocupadas serem áreas inundáveis (várzeas aterradas) áreas de APP. Agravam a exposição aos riscos ambientais: enchentes e deslizamentos. A intensificação de extremos climáticos deslinda a gravidade da crise em curso, que expõe desigualmente estes grupos à violência climática. (REHBEIN e ALVES, 2025, p. 7)

O aumento do ecocídio também é causado pela dominação de fatores econômicos e desigualdades sociais. A devastação do ambiente natural provoca alterações climáticas, déficit de terras aráveis e, consequentemente, escassez de alimentos. Fenômenos como secas, desertificação, anomalias climáticas e o efeito estufa promovem transformações negativas no funcionamento da natureza e das sociedades. Cerca de 800 milhões de pessoas passam fome crônica e 2 bilhões sofrem de deficiência de micronutrientes (FAO, 2017¹⁷, apud KOWALSKA p.4).

4.2 RELAÇÃO ENTRE A DESTRUIÇÃO AMBIENTAL E AS ENCHENTES DE 2024 NO RIO GRANDE DO SUL

Observa-se um negacionismo em relação à responsabilização das catástrofes climáticas, colocando-as como efeitos naturais das mudanças climáticas, por sua vez, já dadas, estabelecidas, estabilizadas e provavelmente imutáveis, configurando-se em narrativas catastróficas do tipo conformadas, que reproduzem o discurso de que não há mais nada a se fazer para evitar o já iniciado colapso ambiental. (FONSECA, 2025, p.27)

¹⁷ FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. The future of food and agriculture: trends and challenges. Rome: FAO, 2017.

A temperatura média de nosso planeta já aumentou cerca de 1,6 °C acima dos níveis pré-industriais. Em áreas continentais, esse aumento médio da temperatura atingiu cerca de 2,1 °C, e algumas regiões brasileiras aumentaram 2.4 °C, como o vale do Rio São Francisco, a região leste da Amazônia, entre outras. A região ártica de nosso planeta já aumentou 3.5 °C em sua temperatura em vastas áreas, que cobrem Canadá, Escandinávia e Rússia. Portanto, a meta do Acordo de Paris de limitar o aquecimento médio global em 1.5 °C está certamente sob risco (ARTAXO, 2025, p.2). Se as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) continuarem a crescer no ritmo atual, a temperatura média global pode aumentar em cerca de 4,3°C em relação aos valores pré-industriais ao longo deste século, de acordo com as simulações climáticas do IPCC (IPCC, 2023¹⁸, apud ARTAXO, 2025, p. 2).

Mesmo no caso de que a maior parte dos países cumpra seus atuais compromissos de redução, teremos um aumento médio de temperatura de 3,1°C (UNEP, 2024¹⁹, apud ARTAXO p. 2). Importante salientar que um aumento de temperatura médio de 3,1°C implica que no Brasil teremos aumento de temperaturas de 4 a 4,5 °C. Esse aquecimento exacerbado terá efeitos profundos sobre o clima, o meio ambiente, as economias e a população. O aumento das temperaturas médias está associado a uma maior frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas, tempestades e inundações. Esses eventos são esperados para se tornarem mais frequentes e severos, com impactos significativos sobre a agricultura, a infraestrutura, na saúde das populações, e na vida cotidiana no Brasil e em todo o planeta (ARTAXO, 2025, p. 2).

¹⁸ IPCC. Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II, and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Ed. Core Writing Team, H. Lee and J. Romero. Geneva: IPCC, 2023. p.35-115. Doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.

¹⁹ UNEP 2024. Emission gap report, 2024. Doi: <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/46404>.

As mudanças climáticas estão alterando os padrões de precipitação no Brasil. Em vastas áreas do Cerrado, Vale do São Francisco e Amazônia, estamos observando redução na quantidade de chuva. No sul do Brasil, como no Rio Grande do Sul, a chuva está aumentando em média. Os eventos de chuva extrema aumentaram não só no sul do Brasil, com chuvas intensas que causam inundações em cidades e perda de safras agrícolas em áreas rurais. (ARTAXO, 2025 p. 2). Um exemplo emblemático dessa realidade ocorreu no Brasil recentemente, com o desastre que assolou o estado do RS em 2024, que ainda se recuperava da enchente ocorrida seis meses antes. Entre o final de abril e o início de maio, chuvas provocaram inundações em quase todo o território rio-grandense, recaindo sobre 478 dos 497 municípios, ou seja, 96% do estado gaúcho (REHBEIN: ALVES, 2025 p. 7).

A calamidade afetou cerca de 2,4 milhões de pessoas, com 806 feridos, 25 desaparecidos e 184 mortos, conforme o último boletim da Defesa Civil do estado, de abril de 2025 (Defesa Civil do RS, 2025, apud REHBEIN e ALVES, 2025, p. 7), e com mais de 600 mil pessoas deslocadas (ACNUR, 2024, apud REHBEIN e ALVES, 2025 p. 7). Pode-se verificar que as enchentes expuseram as vulnerabilidades históricas de comunidades socialmente marginalizadas, desigualmente expostas a riscos e com limitada capacidade de adaptação. (REHBEIN e ALVES, 2025 p 7).

4.3 DEBATES: EVENTOS E IMPACTOS NO RIO GRANDE DO SUL

O clima do Rio Grande do Sul também sofre influência dos fenômenos El Niño²⁰ e La Niña²¹, que provocam variabilidade interanual acentuada, principalmente na precipitação. Em anos sob influência de La Niña tende a haver redução na precipitação e ocorrência de estiagens, e em anos de El Niño as precipitações tendem a ocorrer em maior volume e intensidade, podendo chover em um único dia o equivalente à média mensal. Durante o El Niño mais recente, ocorreram quatro eventos de precipitações severas no Rio Grande do Sul: junho de 2023, no Vale do Rio dos Sinos e no Litoral Norte; setembro de 2023, no Vale do Rio Taquari-Antas; novembro de 2023, nos vales dos rios Taquari-Antas e Caí, na Serra Gaúcha e na Região Metropolitana; e abril-maio de 2024, abrangendo praticamente todo o estado. As chuvas do último evento foram extremas tanto em volume quanto em intensidade. Registros de pluviômetros da ANA, CEMADEN e INMET superaram 500 mm em duas semanas em boa parte do Rio Grande do Sul, e totalizaram mais de 1.000 mm em alguns locais. O enorme volume precipitado em curto período de tempo provocou movimentos de massa e cheias rápidas e com grande subida do nível dos rios nas regiões de serra, e inundações prolongadas e de grande extensão nas regiões mais baixas (FONSECA et al 2024, s.p.).

As precipitações extremas em abril e maio de 2024 resultaram no maior desastre climático já registrado no Rio Grande do Sul, com consequências graves de deslizamentos de terra, enxurradas, inundações e alagamentos em diferentes regiões do estado (FONSECA et al 2024,

²⁰ El Niño - Fenômeno natural que consiste no aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico equatorial e alterando padrões climáticos globais.

²¹ La Niña - Fenômeno climático natural que consiste no resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, o que causa alterações nos padrões de ventos e chuvas em todo o mundo.

s.p.). Os eventos extremos que ocorreram na bacia do Guaíba estão ligados a uma problemática multidimensional que tem como pano de fundo as mudanças climáticas e o resultado da economia neoliberal predominante que degrada a natureza. Ou seja, os componentes antrópicos incluem fatores ecológicos e políticos, em especial o modelo de ocupação e uso do solo que degrada ecossistemas e fragiliza as áreas de vida de centenas de milhares de pessoas, no que toca à região atingida (BRACK, 2024, s.p.).

A degradação da natureza, por sua vez, no RS e no Brasil, é resultado do progressivo ataque à legislação ambiental e do enfraquecimento da estrutura pública dos órgãos públicos que deveriam atender à maioria da população, em âmbitos estadual e municipais, em diferentes políticas de defesa contra essas catástrofes. Entretanto, além das atividades econômicas e ocupação inadequada das áreas de preservação permanente (APP), constata-se um sucateamento das políticas públicas que deveriam defender as populações contra as enchentes, fornecendo moradias dignas e políticas habitacionais, fora das áreas de risco (BRACK, 2024, s.p.).

4.3.1 O ecocídio como crime ambiental e sua aplicabilidade no contexto do RS

Ao analisarmos cuidadosamente a tragédia socioambiental e econômica do Rio Grande do Sul, vemos que foram várias as ações políticas que agravaram o problema e levaram a morte de centenas de pessoas. Podemos considerar o desmonte de leis ambientais, para acabar com o licenciamento ambiental, a especulação imobiliária para ocupar bairros inteiros que tinham histórico de alagamentos, como no caso do bairro Matias Velho, em Canoas, que ficou totalmente abaixo d' água,

sendo que era uma ex-fazenda onde se plantava arroz (CASAGRANDE JR, 2024, s.p.).

Sob a análise do Ecocídio podemos ir mais além e mencionar o desmatamento e as queimadas que ocorrem nas regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil para a pecuária e o plantio de soja, inclusive, muitos gaúchos. A ciência vem mostrando há anos o impacto destas ações no clima do Brasil como um todo. Imagens de satélites, artigos científicos publicados, alertas de cientistas publicitados, são todas provas contundentes de um crime doloso, isto é, quando alguém comete um crime que essa pessoa quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo (CASAGRANDE JR, 2024, s.p.).

4.3.2 Mudanças climáticas: da ampliação da vulnerabilidade socioambiental aos desafios e perspectivas para a responsabilização e prevenção do ecocídio

A intensificação dos eventos extremos tem provocado um número crescente de deslocamentos forçados, superando, inclusive, os deslocamentos associados a conflitos e violência, como pode ser observado. Dinâmica que impõe novos desafios à capacidade do Estado de enfrentar crises humanitárias contemporâneas, na resposta emergencial e também na reconstrução de comunidades e na garantia de direitos fundamentais, como o acesso à moradia, ao trabalho e a serviços básicos. Diante desse cenário, a mobilidade humana induzida pelas mudanças climáticas requer políticas jurídicas específicas, alinhadas à promoção da justiça socioambiental (REHBEIN e ALVES, 2025, p. 12)

As enxurradas e enchentes, registradas em maio de 2024, correspondem à maior calamidade socioambiental que o Rio Grande do Sul já viveu. Os eventos extremos que ocorreram na bacia do Guaíba estão ligados a uma problemática multidimensional que tem como pano de fundo as mudanças climáticas e o resultado da economia neoliberal predominante que degrada a natureza. Ou seja, os componentes antrópicos incluem fatores ecológicos e políticos, em especial o modelo de ocupação e uso do solo que degrada ecossistemas e fragiliza as áreas de vida de centenas de milhares de pessoas, no que toca à região atingida (BRACK, 2024, s.p.).

Estes eventos climáticos extremos não são mais novidade, apesar do negacionismo de muitos políticos e governantes, e se acentuam segundo demonstra a ciência, estando associados à liberação excessiva de gases de efeito estufa (GEE), principalmente em economias baseadas em combustíveis fósseis. Por trás desta elevação, existe um modelo de crescimento econômico e concentração sem limites, em um Planeta finito, destruindo os processos ecológicos e ao mesmo tempo gerando desigualdade e miséria (BRACK, 2024, s.p.).

O processo de sucateamento dos serviços públicos trouxe a maior fragilização dos órgãos de meio ambiente, dos comitês de bacias e da estrutura de estado, como exemplo cita-se a extinção das fundações estaduais de saúde, biodiversidade e economia, o que resulta na desproteção da saúde, da vida e das políticas socioeconômicas, principalmente das camadas da sociedade que vivem em situação de precariedade, muitas vezes extrema, em decorrência do modelo que atende os mais privilegiados e gera ainda mais desigualdade (BRACK, 2024, s.p.).

A despeito do agravamento dos problemas socioambientais, persiste a continuada política governamental de incentivo à monocultura de grãos, principalmente nos Campos de Altitude, protegidos pela Lei

da Mata Atlântica, a mineração, o avanço na destruição do bioma pampa, a autorização para a construção de barragens e outras obras em áreas protegidas que representam ainda maior risco de aumento da dimensão de tragédias que testemunhamos hoje. E, como já se viu nas reações do governo, o caminho de “resgate” ou “retomada” da estrutura socioeconômica do Estado, dar-se-ia por intermédio de iniciativas de setores empresariais que foram, no fundo, os mesmos que flexibilizam as leis ambientais, causaram a maior parte da degradação e combatem o sistema público que atende as maiores demandas da população (BRACK, 2024, s.p.).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crise ecológica que afeta o planeta nos dias atuais, resultou da exploração excessiva dos recursos naturais. O uso indiscriminado de combustíveis fósseis impulsionou o aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas tornaram-se a manifestação mais evidente desse desequilíbrio, comprovada pelo aumento de desastres provocados por fatores climáticos. Observamos eventos extremos como estiagens prolongadas, chuvas excessivas, tornados e furacões com alto potencial de destruição.

Embora a crise ambiental seja uma preocupação global, em uma sociedade que visa o lucro e desenvolvimento econômico a qualquer custo, governos e corporações apresentam resistência em assumir responsabilidades efetivas pela preservação ambiental. Em vários aspectos a destruição ambiental apresenta traços irreversíveis que podem ser observados na perda de biodiversidade, na contaminação dos mares, no avanço do desmatamento, na poluição atmosférica e hídrica, na devastação de florestas e na esterilização de solos, comprometendo assim a sustentabilidade da Terra e a continuidade da vida.

De modo geral, tanto pessoas físicas como jurídicas, enfrentam punições brandas ao cometerem infrações contra o meio ambiente. Em países menos desenvolvidos, onde a legislação ambiental é mais branda, as empresas concluíram, inclusive, que é financeiramente mais conveniente infringir a legislação e arcar com possíveis compensações do que adotar medidas preventivas para evitar prejuízos ecológicos.

A crise ecológica atual é um dos maiores desafios da sociedade moderna. O modelo socioeconômico que rege a sociedade, baseado na industrialização, concentração de riquezas, urbanização descontrolada, exploração indiscriminada da terra e utilização de energias não renováveis já se mostrou como o inviável e a degradação do ambiente já ameaça a própria existência da vida humana. Os eventos extremos passam a ocorrer de forma mais frequente e intensa. O Rio Grande do Sul, possui um histórico de cheias e alagamentos, pontua-se a cheia de 1941, uma das maiores registradas no Estado, porém, nos últimos oito anos, ocorreram quatro das cinco maiores cheias.

A enchente de 2024 que atingiu o Rio Grande do Sul não constitui um fato isolado, mas uma consequência direta da degradação ambiental em níveis local e global. No âmbito local, destacam-se fatores como o processo de urbanização desordenada voltado para atender interesses especulativos, a remoção da cobertura vegetal para a expansão da pecuária e da agricultura, bem como a supressão das matas ciliares, elementos que comprometem a capacidade natural do solo de absorver a água e agravam os impactos dos eventos climáticos extremos. A nível Global podemos citar, a queima de combustíveis fósseis, derrubada de florestas tropicais e o modelo econômico consumo intensivo de recursos naturais, e a produção e transporte de bens em escala mundial.

Embora a tragédia climática de 2024 tenha tirado a vida de mais de uma centena de cidadãos Gaúchos, provocado danos ambientais, econômicos e sociais imensuráveis, até o momento ninguém sentou

no banco dos réus para ser julgado. O reconhecimento do ecocídio pelo Estatuto de Roma e julgado pelo Tribunal Penal Internacional, é uma ferramenta para que crimes ambientais como os que causam tragédias ambientais não passem impunes.

REFERÊNCIAS

BOLDT, Raphael, **Ecocídio e Responsabilidade Empresarial nos Crimes Ambientais**. Disponível em: <https://ibdpe.com.br/wp-content/uploads/2020/09/10-ECOCIDIO-E-/RESPONSABILIDADE-EMPRESARIAL-NOS-CRIMS-AMBIENTAIS.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2025.

BORGES, Orlindo Francisco, **Ecocídio: Um Crime Ambiental Internacional ou Um Crime Internacional Maquiado de Verde**. Ano 2 (2013), nº 7, 6457-6495 / <http://www.idb-fdul.com/> ISSN: 2182-7567. Disponível em: https://www.cidp.pt/revistas/ridb/2013/07/2013_07_06457_06495.pdf. Acesso em: 26 jul. 2025

CALIXTO, Yago Teodoro Aiub, **Considerações Socio-Ecológicas Entre A Ilha de Páscoa e a Sociedade Atual**: Baseado no Livro “Colapso” De Jared Diamond, Akropolis - Revista de Ciências Humanas da UNIPAR, Umuarama, v.31, n.1, p. 75-87, 2023. ISSN 1982-1093. Disponível em: <https://revistas.unipar.br/index.php/akropolis/article/download/10208/4931/33548>. Acesso em: 24 ago. 2025

CASAGRANDE, JR Eloy, **Ecocídio no Rio Grande do Sul: uma catástrofe ambiental ou política?** Disponível em: <https://ihu.unisinos.br/categorias/639473-ecocidio-no-rio-grande-do-sul-uma-catastrofe-ambiental-ou-politica-artigo-de-eloy-casagrande-jr>. Acesso em 18 out. 2025.

DUPUY, Jean-Pierre, **A catástrofe de Chernobyl vinte anos depois**, ESTUDOS AVANÇADOS 21 59), 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/JtxTFVmCfLWJrJBXKFRQxdt/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 10 ago. 2025

Ecocídio das Serras do Sertão: volume 1. [recurso eletrônico]. /Juracy Marques, Alfredo Wagner Berno de Almeida (organizadores). – Paulo Afonso, BA: SABEH, 2021.

EGGER, Daniela da Silva, RIGOTTO, Raquel Maria, LIMA, Franco Antonio Neri de Souza e, COSTA André Monteiro, AGUIAR, Ada Cristina Pontes. **Ecocídio nos Cerrados: agronegócio, espoliação das águas e contaminação por agrotóxicos. Edição especial - Agronegócio em tempos de colapso planetário: abordagens críticas**. Vol. 57, p. 16-54, jun. 2021. DOI: 10.5380/dma.v56i0.76212. e-ISSN 2176-9109. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/made/article/view/76212>. Acesso em: 05 out. 2025

FARIA, Neice Muller Xavier, SKAMVETSAKISC, Adriana, **Eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul e os impactos na Saúde dos Trabalhadores**. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 2025, p. 2. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbso/a/xgT79nxP-jstmpWWFpQKXZth/>. Acesso em: 04 out. 2025.

FIGUEIREDO, Marcelo Gonçalves, ALVAREZ, Denise, ROTENBERG, Lúcia e ADAMS, Ricardo Nunes, **O acidente da plataforma de petróleo Deepwater Horizon após 12 anos: análise com foco na dimensão coletiva do trabalho e nos fatores organizacionais**. Cad. Saúde Pública 2022; 38(12):e00222621. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/rnfrxmgLSkCNdnzH5fn4cLs/>. Acesso em: 10 ago. 2025

FONSECA, Ana Silvia Andreu da, **Guerras Narrativas: O Negacionismo Climático e a Emergência da Eco-Comunicação**. Trab. Ling. Aplic., Campinas, v. 64: e025026, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tla/a/GmcvQG5FjspMYbY4fhJRMCS/>. Acesso em: 05 out. 2025

FONSECA, Eliana Lima da, WEBER Eliseu José Heinrich Hasenack, SILVA, Wallace, MESQUITA, Vinícius, MARTIN, Eduardo Vélez, SCHIRMBECK, Juliano, SIQUEIRA, João, FERREIRA, Bruno, TEIXEIRA JR, Paulo, AZEVEDO, Tasso, SHIMBO, Julia, **Os impactos do evento climático de maio de 2024 sobre a cobertura e o uso da terra no Rio Grande do Sul**. Disponível em https://brasil.map-biomas.org/wp-content/uploads/sites/4/2024/06/NT_Evento_climatico_extremo_RS_maio_2024_Final.pptx.pdf. Acesso em 18 out. 2025.

GORDILHO, Heron José de Santana e RAVAZZANO, Fernanda. **Ecocídio e o tribunal penal internacional**. JUSTIÇA DO DIREITO v. 31, n. 3, p. 688-704, set./dez. 2017, p 690. Disponível em: <https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/50668>. Acesso em: 28 set. 2025.

JACOBI, Pedro Roberto, RODRIGUEZ, Zenaida Luisa Lauda-, MILZ, Beatriz, **Natureza em declínio: a advertência do relatório IPBES sobre extinção de espécies**. Ambiente & Sociedade São Paulo. Vol. 22, 2019 Editorial 2019;22:e00003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/JngJdtqqpLGNLhDs7YQfWYF/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 05 out. 2025

KOWALSKA, Samanta. **Ecocídio: Uma Ameaça ao Tecido Biológico e à Segurança Ecológica**. Veredas do Direito, v.20, e202416 – 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/vd/a/8TKxx3NwXgtH-FD7LTdkb6rb/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 05 out. 2025.

LAZARO, Lira Luz Benites, JACOBI, Pedro Roberto, TEIXEIRA, Rylanneive Leonardo Pontes. **A Crise das Queimadas na Amazônia: A Catástrofe Ecológica da América do Sul e o Chamado para Ação**. Ambiente e Sociedade. São Paulo. Vol. 27, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/qmpvSGftjMdSG7YTJvvScfh/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 19 out. 2025.

MANNA, Nuno e LAGE, Igor, **Uma “catástrofe do tempo”: narrativa e historicidade pelas Vozes de Tchernóbil**. Galeria (São Paulo, online), ISSN 1982-2553, Especial 1 - Comunicação e Historicidades, 2019, p. 34-46. <http://dx.doi.org/10.1590/1982-25542019441740>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/gal/a/mqNCdbnm6YXykr87HJdr45c/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 ago. 2025

RAMOS, A. M.; VICTRAL, D. M.; REZENDE, S. **Participação e controle social em saneamento no contexto da reparação de danos dos desastres em Mariana e Brumadinho, Minas Gerais, Brasil**. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbeur/a/thXSPphK5f-359tRXw46cfWG/>. Acesso em: 05 out. 2025.

PEREIRA, Flávio de Leão Bastos. **Desenvolvimentismo e ecocídio: causa e (possível) consequência no contexto de ruptura das bases existenciais dos povos originários no Brasil**. Boletim Científico ESMPU, Brasília, a. 17 – n. 51, p. 257-281 – jan./jun. 2018. Disponível em: <https://escola.mpu.mp.br/publicacoesscientificas/index.php/boletim/article/view/527>. Acesso em: 04 out. 2025.

SANTOS, Antonio Marcos Nunes dos, BARBOSA, Ryan Conrado, BEZERRA, Sarah Marcela Ribeiro, JUNIOR, Antônio da Silva Sobrinho. **A INDÚSTRIA PESQUEIRA COMO AGENTE DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL**. Revista Intercientia, Vol.10, N2, Nov2022- Dez2023. Disponível em: <https://periodicos.unipe.br/index.php/intercientia/article/view/1586/839>. Acesso em: 05 out. 2025.

WILLIAMS, Juliette, **A Secagem de um Mar: Como o Algodão deixou o Aral sem Água e Sem Pessoas, Ecologia Política**. Disponível em: <https://id.scribd.com/document/551206545/Dialnet-LaDe-secacionDeUnMar-2316508>. Acesso em: 10 ago. 2025.

ANÁLISE COMPARATIVA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) EM EMPRESAS METALMECÂNICAS NO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL

Simone Terezinha Cislevski ¹

Chirley Rigon ²

RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise comparativa do Sistema de Gestão Ambiental em empresas de pequeno e grande porte do setor metalmeccânico do norte do Rio Grande do Sul, destacando as diferenças e semelhanças nos desafios e oportunidades enfrentados pelas empresas. Como metodologia de desenvolvimento foi utilizada a descritiva e explicativa, bibliográfica, documental, e análise qualitativa com a avaliação de aspectos importantes para a implantação e manutenção do SGA. A pesquisa apresenta os principais referenciais teóricos e legais que sustentam o tema, fornecendo uma base sólida para a análise e discussão dos resultados deste estudo. Neste contexto, explorou-se a evolução, os conceitos e abordagens relacionados ao Sistema de Gestão Ambiental (SGA), com destaque para as diretrizes estabelecidas pela norma ISO 14001. Os resultados mostram que grandes empresas possuem maior capacidade financeira e tecnológica para implementar

¹ Bacharel em Administração (URI) e acadêmica do curso de Especialização em Gestão Ambiental para Indústria Metal Mecânica da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) – Unidade em Erechim. E-mail: cislevski@bol.com.br

² Docente Convidada da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) – Unidade em Erechim. Bacharel em Direito pela Universidade Regional Integrada – URI Campus Erechim; Especialista em Direito Público com Ênfase em Gestão Pública pela Faculdade Damásio; Mestra em Educação pela Universidade do Oeste do Paraná - UNIOESTE. E-mail: adm@belaarte.srv.br.

e manter o SGA, enquanto pequenas empresas se destacam pela agilidade e engajamento direto dos colaboradores. Conclui-se que, apesar das diferenças, ambas podem alcançar resultados significativos ao adaptar práticas sustentáveis às suas realidades. O estudo reforça a importância do SGA como ferramenta estratégica para competitividade e sustentabilidade no setor.

Palavras-chave: desenvolvimento sustentável; impacto ambiental; ISO 14.000; metalmecânico; sistema de gestão ambiental.

INTRODUÇÃO

Com o aumento das preocupações e responsabilidades ambientais globais, as organizações enfrentam a necessidade de adotar práticas que minimizem seus impactos no meio ambiente, mantendo sua rentabilidade. Nesse contexto, o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) surge como uma ferramenta essencial para alinhar desenvolvimento econômico e sustentabilidade. O SGA é um conjunto de práticas e processos que permite às empresas identificar, avaliar e gerenciar seus impactos e riscos ambientais, otimizando recursos, promovendo a melhoria contínua e o cumprimento de requisitos legais (ABNT, 2004). Essa preocupação teve início na década de 1950 e continua até hoje, sendo que o conceito de SGA ganhou força com a criação da norma ISO 14.001, que estabeleceu as diretrizes para a gestão ambiental. Desde então, sua aplicação vem se expandindo, impulsionada por exigências legais e pela busca por competitividade sustentável.

Segundo Barbieri (2016), embora o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) seja amplamente reconhecido como uma ferramenta eficaz para a sustentabilidade, ainda existem desafios significativos na sua implementação, especialmente em empresas de diferentes portes. Pequenas empresas enfrentam limitações financeiras e técnicas,

enquanto grandes empresas lidam com a complexidade de suas operações.

A crescente problemática com os impactos ambientais das atividades industriais tem levado os gestores das empresas à conscientização sobre a importância da sustentabilidade e tem impulsionado a adoção de práticas e sistemas de gestão ambiental em diversos setores industriais. O setor metalmeccânico, por suas características e processos produtivos potencialmente poluentes, enfrenta desafios relacionados à geração e destinação final de resíduos, eficiência energética, gestão de recursos hídricos, controle de emissões atmosféricas, conformidade com a legislação ambiental, adaptação às mudanças climáticas, uso de matérias-primas não renováveis, competitividade no mercado e uma certa pressão por certificações ambientais (CENTRO DE INFORMAÇÃO METAL MECÂNICA, 2012).

Este trabalho objetiva analisar de forma comparativa a aplicação e implementação do SGA em empresas de pequeno e grande porte do setor metalmeccânico do Norte do Rio Grande do Sul, identificando boas práticas e desafios específicos, destacando as diferenças, e oportunidades observados na realidade de cada uma delas, além de, através dos resultados, orientar os gestores na adoção de estratégias mais eficazes e sustentáveis, mantendo a competitividade empresarial. A pesquisa buscou responder a seguinte questão: Como empresas de portes diferentes do setor metalmeccânico aplicam e implementam o SGA, considerando suas particularidades e desafios?

Em termos práticos, este estudo oferece subsídios para que empresários e gestores de empresas de diferentes portes aprimorem suas práticas de gestão ambiental, contribuindo para a redução de impactos ambientais e para o cumprimento de legislações ambientais. Em termos teóricos, a pesquisa contribui para a literatura ao explorar

comparativamente a implementação do SGA em empresas de diferentes portes, um tema ainda pouco abordado, mas essencial para o avanço da sustentabilidade corporativa.

Este trabalho está estruturado em cinco seções. Na primeira seção, apresenta-se a introdução, com o problema da pesquisa, objetivos, justificativa e relevância do estudo. A segunda seção aborda o referencial teórico, discutindo os principais conceitos e estudos relacionados ao tema SGA. A terceira seção trata dos aspectos metodológicos que orientaram o estudo. A quarta seção apresenta os resultados e discussões, analisando os dados obtidos nas respectivas empresas do setor metalmeccânico, seus desafios e oportunidades, semelhanças e diferenças. Por fim, a quinta seção traz as considerações finais, com as conclusões, limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para melhor compreensão sobre a temática de gestão ambiental, é necessário iniciar por meio dos conceitos e definições. O conceito de gestão ambiental vem se aprimorando com o passar do tempo de maneira a buscar cada vez mais a melhoria contínua nas práticas que dizem respeito a esse assunto, contribuindo de forma mais ampla para minimizar, prevenir e compensar os impactos ambientais gerados pela atividade industrial, como também na busca de resultados positivos para as organizações.

Para Barbieri (2016, p. 121), a gestão ambiental compreende,

[...] as diretrizes e as atividades administrativas realizadas por uma organização para alcançar efeitos

positivos sobre o meio ambiente, ou seja, para reduzir, eliminar ou compensar os problemas ambientais decorrentes da sua atuação e evitar que outros ocorram no futuro.

Já segundo Miranda *et al.* (2019, p.5), a gestão ambiental é:

Um sistema de administração empresarial que dá ênfase na sustentabilidade. Desta forma, a gestão ambiental visa o uso de práticas e métodos administrativos que reduzem ao máximo o impacto ambiental das atividades econômicas nos recursos da natureza.

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA GESTÃO AMBIENTAL

A preocupação com os efeitos dos impactos ambientais, decorrentes da ação humana na natureza, passou a receber maior atenção a partir da década de 1950 motivada pela queda da qualidade de vida em algumas regiões do planeta. A contaminação de ambientes naturais e de seres humanos, resultante de atividades industriais, chamou a atenção da comunidade científica. Nessa época, surgiram movimentos ambientalistas, entidades governamentais sem fins lucrativos e agências governamentais voltadas para a proteção ambiental (CMMAD, 1991).

O debate iniciou-se com a publicação do livro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, em 1962, na época com câncer, que trouxe um alerta sobre a utilização de pesticidas na agricultura. Isso despertou a necessidade de regulamentações ambientais para reduzir o impacto das atividades antrópicas (são todas as ações realizadas pelo ser humano que transformam ou impactam o meio ambiente, sejam elas positivas ou negativas) no meio ambiente. O livro impulsionou uma inversão na

política nacional sobre os pesticidas levando a uma proibição nacional destes produtos, principalmente do DDT³ (CARSON, 1962).

A década de 1970 ficou conhecida como a da regulamentação e do controle ambiental. Após a conferência do Meio Ambiente Humano de Estocolmo (primeira conferência internacional a discutir o meio ambiente), realizada na Suécia, e que estabeleceu as bases para a agenda ambiental global, resultando na criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e na Declaração de Estocolmo, as nações começaram a estruturar seus órgãos ambientais e estabelecer suas legislações. Foi o marco inicial da gestão ambiental em nível global. Nessa conferência, discutiu-se a relação entre o desenvolvimento econômico e preservação ambiental, surgindo o conceito de “Desenvolvimento Sustentável”. A definição contida no Relatório Brundtland (CMMAD, 1987), elaborado pela citada comissão, estava assim explicitada: “desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas próprias necessidades”. Na Europa, além da Suécia, a Alemanha, Grã Bretanha e França também contemplaram aspectos relacionados à questão ambiental em sua legislação. Já na Ásia, apenas o Japão o fez.

Enquanto na Conferência das Nações Unidas, em 1972, eram discutidos problemas ambientais, a posição apresentada pelo representante brasileiro era de que as tecnologias que os países desenvolvidos entendiam como obsoletas e não apropriadas para o processo industrial poderiam ser aceitas no Brasil. Essa posição trouxe uma série de manifestações nacionais desfavoráveis, bem como reflexos negativos em âmbito internacional (CMMAD, 1987).

³ DDT - sigla de diclorodifeniltricloroetano, um inseticida barato e altamente eficiente a curto prazo, mas a longo prazo tem efeitos prejudiciais à saúde humana podendo ocasionar câncer em seres humanos e interferindo na vida animal, causando o aumento de mortalidade entre os pássaros (CARSON, 1962).

O controle da poluição no Brasil começou de forma marginal, focado em grandes centros urbanos e industriais como São Paulo. Com o tempo, essa visão mudou, e o Sistema de Licenciamento Ambiental (SLAM) foi criado. A partir dos anos 70, com a criação de órgãos ambientais federais (como o Ibama) e estaduais (como a SEMA-RS), a legislação se tornou mais específica para controlar a instalação de indústrias e exigir adequações. Nos anos 80, a visão empresarial sobre o tema evoluiu, o controle ambiental passou a ser visto não apenas como um custo, mas como uma forma de reduzir desperdícios e melhorar a imagem da empresa.

A década de 90 foi marcada por uma consciência coletiva global, impulsionada pela Cúpula da Terra (Rio 92). A partir daí, o foco mudou para a otimização de processos e a redução de impactos. O conceito de sustentabilidade ganhou força e as empresas passaram a adotar a Gestão Ambiental por meio de normas como a série ISO 14000. Nos anos seguintes, diversas conferências da ONU, como a Rio+10 e a Rio+20, reafirmaram o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a difusão de tecnologias mais limpas. O desenvolvimento sustentável procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades.

Mais recentemente, a partir de 2015, marcos como o Acordo de Paris e a ascensão do conceito de ESG (Ambiental, Social e Governança) impulsionaram ações mais concretas. A gestão ambiental tornou-se uma prioridade estratégica, com empresas e governos implementando metas de carbono neutro e investindo em tecnologias limpas, reforçando a importância da inovação e da sustentabilidade.

2.2 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL – SGA

Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), segundo Curi (2012, p 58), “é um conjunto de funções em uma empresa que tem o objetivo de diminuir o impacto negativo de suas atividades sobre os recursos naturais”. Conforme Fortunski (2008), o SGA é definido como um método de gestão estruturado que projeta, implementa e gerencia a política ambiental. Para determinar seus objetivos e políticas, são inseridas medidas como: divisão de responsabilidades, planejamento de práticas e procedimentos.

Borges e Mourão (2013) assim definem:

O SGA constitui-se em uma estratégia organizacional para a identificação, por meio de planos e programas de caráter preventivo, das possíveis melhorias a serem realizadas na gestão ambiental, com o intuito de conciliar definitivamente a lucratividade empresarial com a proteção ao meio, versando tanto os produtos como os processos industriais (p.188).

Inúmeros motivos fazem com que as empresas queiram implantar um SGA, que inicia com a conscientização sobre a finitude dos recursos naturais até a importância que o meio ambiente tem para a vida humana e para a sociedade. Mas para que seja bem sucedido é preciso monitorar todas as ações, mudanças e comportamentos dos envolvidos. As empresas têm que estabelecer formas de gestão com objetivos explícitos de controle da poluição e de redução das taxas de efluentes, controlando e/ou minimizando os impactos ambientais, como também otimizando o uso de recursos naturais, como o controle de uso da água, energia e outros insumos (ABNT, 2022). Uma das formas de gerenciamento ambiental de maior adoção pelas empresas tem sido a implementação de um sistema de gestão ambiental, segundo

as normas internacionais Série ISO 14000, visando a obtenção de uma certificação.

São dois os sistemas de gestão ambiental utilizados pelas empresas no Brasil: a NBR Série ISO 14001 e o Programa de Ação Responsável (ABNT, 2015; ABIQUIM, 1992). O mais difundido é o baseado na norma NBR Série ISO 14001; o segundo, é o Programa de Atuação Responsável, patrocinado pela Associação Brasileira de Indústrias Químicas (Silva *et al.*, 2003).

Os elementos-chave, ou os princípios definidores de um Sistema de Gestão Ambiental baseados na NBR Série ISO 14001, através dos quais podem ser verificados os avanços de uma empresa em termos de sua relação com o meio ambiente, são: (1) Política ambiental; (2) Planejamento; (3) Implementação e operação; (4) Verificação e ação corretiva; (5) Análise crítica.

Para ter um SGA de verdade, a empresa deve envolver todos os seus funcionários na missão de melhorar sua relação com o meio ambiente. O objetivo do SGA é aumentar a produtividade sem abrir mão da eficiência. É a ideia de fazer mais com menos e gerar lucros maiores. Por isso, o SGA não funciona sem a ajuda de outros sistemas, como a gestão da qualidade e a segurança no trabalho. Afinal, ninguém é eficiente e produtivo sem qualidade e segurança (Curi, 2012, p. 58).

O sistema de gestão ambiental é de suma importância, pois além de preservar o meio ambiente adotando os sistemas de redução, reutilização e reciclagem de materiais, tornam positiva a imagem da empresa como também contribui para a excelência de produtos com mais qualidade no mercado (ABNT, 2022).

Dessa forma, a empresa investe e contribui com questões pertinentes ao SGA, mas com vistas também ao seu crescimento no mercado e a preocupação com a lucratividade.

A incorporação da variável ambiental na gestão geral de uma empresa levou à implementação do Sistema de Gestão Ambiental como estratégia de negócio. Diante das novas exigências mundiais, as empresas devem se comprometer e estabelecer metas ambientais, adotando procedimentos para a reciclagem, garantia de ciclo de vida dos produtos, redução de CO₂ e de efluentes nos seus processos (Zanatta, 2017, p. 297).

A implementação do sistema de Gestão Ambiental tem por objetivo minimizar e eliminar os impactos ambientais através de ações preventivas e sustentáveis.

A implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) permite que a organização atinja o nível de desempenho ambiental por ela determinado e promova sua melhoria contínua ao longo do tempo. Esse sistema consiste em um planejamento de atividades, visando à eliminação ou minimização dos impactos ao meio ambiente, por meio de ações preventivas. Também possibilita uma abordagem estruturada para estabelecer e atingir objetivos e metas, além de estabelecer procedimentos, instruções de trabalho e controle, assegurando que a execução da política possa se transformar em realidade (MORAES *et al.*, 2014, p.1).

O SGA oferece diversas vantagens para as empresas e para a sociedade. Ele auxilia na redução de impactos ambientais, garante a conformidade com a legislação e melhora a reputação da empresa. Além disso, o SGA promove a eficiência operacional ao diminuir

custos e desperdícios, estimula a inovação tecnológica e aumenta a conscientização dos funcionários.

2.3 SUSTENTABILIDADE: RELAÇÕES DO SISTEMA ECONÔMICO COM O MEIO AMBIENTE

As palavras, ecologia e economia, derivam do grego *oikos* no sentido de casa. A palavra *logos* significa estudo e *nomia* significa manejo ou gerenciamento. Portanto, ecologia, pode ser entendida, de maneira geral, como o estudo do “lugar onde se vive”, ou das relações dos organismos entre si e com seu ambiente. E, economia, entende-se como o manejo da casa. Economia e ecologia são disciplinas complementares, porém a integração entre elas só passa a ser percebida a partir da segunda metade do século XX (ONU,1972).

A atuação do sistema econômico é baseada no sistema natural que lhe sustenta, visto que ele interage com o meio ambiente, utilizando recursos naturais e devolvendo resíduos. Por sua vez, o meio ambiente interage com a economia, sendo fornecedor de insumos e receptor de dejetos/resíduos resultantes dos processos de produção e consumo.

O desafio de equilibrar o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental é um dos mais urgentes e complexos do nosso tempo. Por muito tempo, a visão predominante era de que esses dois conceitos eram opostos: para crescer economicamente, era preciso explorar os recursos naturais, e para proteger o meio ambiente, o crescimento deveria ser limitado. No entanto, essa mentalidade está mudando. A nova abordagem, baseada no desenvolvimento sustentável, mostra que é possível e necessário conciliar ambos. Portanto,

É importante compreender que apesar de ser considerada uma ideologia normativa, o

Desenvolvimento Sustentável se estabeleceu como base para conscientização da população, como paradigma para exigir o enquadramento das indústrias e como ferramenta para que os governos estabeleçam suas políticas voltadas a essa área. Nesse sentido, vamos exemplificar Desenvolvimento Sustentável como o princípio fundamental para se construir um ambiente mais equilibrado e justo ambiental, social e economicamente (ALVES et al., 2019, p.18).

Isso significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os *habitats* naturais.

A análise dos pilares do desenvolvimento sustentável em 2025 revela um cenário de crescente interconexão entre as três dimensões – econômica, social e ambiental. A sustentabilidade deixou de ser um tema periférico e se tornou um imperativo estratégico para governos, empresas e a sociedade. A interligação dos sistemas cria um tripé que apoia o desenvolvimento sustentável, adotando medidas que envolvam o poder público, a iniciativa privada e a sociedade (ABNT, 2022).

O conceito de desenvolvimento sustentável deve ser assimilado pelas lideranças de uma empresa como uma nova forma de produzir sem degradar o meio ambiente, estendendo essa cultura a todos os níveis da organização. Deve-se formalizar um processo de identificação do impacto da produção da empresa no meio ambiente resultando em um projeto que alia produção e preservação ambiental, com uso de tecnologia adaptada a esse preceito.

As medidas para a implantação de um programa minimamente adequado de desenvolvimento sustentável são: uso de novos materiais na construção; reestruturação da distribuição de zonas residenciais e industriais; aproveitamento e consumo de fontes alternativas de energia,

como a solar, a eólica e a geotérmica; reciclagem de materiais reaproveitáveis; consumo racional de água e de alimentos; redução do uso de produtos químicos prejudiciais à saúde na produção de alimentos (ABNT, 2022).

2.4 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

A busca da melhoria na gestão dos processos visa minimizar os impactos sobre o meio ambiente. A avaliação dos impactos também é um item fundamental para as empresas que buscam a certificação da série ISO 14001 para seu sistema de gestão ambiental. O levantamento dos aspectos e impactos ambientais das atividades da empresa é uma etapa necessária para a melhoria dos processos, assim como, para a certificação ambiental.

Aspecto ambiental é definido pela NBR ISO 14001 como elemento das atividades, produtos e serviços de uma organização, que possam interagir com o meio ambiente. O aspecto pode estar relacionado a uma máquina ou equipamento, assim como a uma atividade executada por ela ou por alguém que produza ou apresente a possibilidade de produzir algum efeito sobre o meio ambiente. A NBR ISO 14001 prioriza o levantamento dos aspectos ambientais significativos, já que os aspectos envolvidos em um processo são muitos. Aspecto ambiental significativo é aquele que tem um impacto ambiental significativo (ABNT, 2004).

Dessa forma, impacto ambiental é qualquer mudança no meio ambiente, tanto positiva quanto negativa, total ou parcial, resultado das atividades, produto ou serviços da organização (ABNT, 2004) e, muitas vezes, não estão vinculados somente a fluxos energéticos e de materiais, mas podem também estar associados a fatores de ordem social ou cultural.

Vários são os tipos previstos de avaliações de impactos na legislação brasileira, podendo-se destacar os seguintes: Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) – Resolução Conama n. 1/86 e n. 237/97; Relatório Ambiental Preliminar (RAP) – Resolução SMA-SP n. 42/95; Relatório Ambiental Simplificado (RAS) – Resolução Conama n. 279/01; Análise de Risco (AR); Relatório de Avaliação Ambiental (RAA) – Resolução Conama n. 23/94; Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) – Resolução Conama n. 23/94.

2.5. NORMAS DA SÉRIE ISO 14.000

As normas da Série ISO 14000 foram desenvolvidas pelo Comitê Técnico 207 (TC 207) da *International Organization for Standardization* (ISO). Trata-se de um grupo de normas que fornece ferramentas e estabelece um padrão de Sistema de Gestão Ambiental, abrangendo seis áreas bem definidas: SGA, Auditorias Ambientais, Rotulagem Ambiental, Avaliação de Desempenho Ambiental, Avaliação do Ciclo de Vida do Produto e Termos e Definições. Essa série de normas foi criada em resposta à crescente preocupação global com questões ambientais e à necessidade de padronizar práticas sustentáveis em empresas e instituições.

A Norma NBR Série ISO 14001 especifica as principais exigências para a implantação e adoção de um sistema de gestão ambiental, orientando a empresa na elaboração da política ambiental e no estabelecimento de estratégias, objetivos e metas, levando em consideração os impactos ambientais significativos e a legislação ambiental em vigor no país (ISO,1996a).

Em suma, as normas contidas na Série ISO 14000 são dirigidas para a organização e para o produto. As normas dirigidas para o produto dizem respeito a determinação dos impactos ambientais de produtos e

serviços sobre o seu ciclo de vida, rotulagem e declarações ambientais. As normas dirigidas para a organização proporcionam um abrangente guia para o estabelecimento, manutenção e avaliação de um sistema de gestão ambiental (Meystre, 2003). Seu principal objetivo é fornecer diretrizes para a implementação de sistemas de gestão ambiental (SGA) nas organizações.

A norma ISO 14001:2015 é a principal referência para a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em qualquer tipo de organização. Ela segue uma estrutura de alto nível (HLS), comum a outras normas da ISO, o que facilita sua integração com outros sistemas de gestão, como a ISO 9001 (qualidade).

O assunto não se esgota apenas com a implantação do SGA, pois para que o SGA seja efetivo, a documentação é fundamental e, se a empresa pensa em conquistar as certificações, passará então por sistemas de auditorias ambientais. A norma ISO 14001 exige a elaboração de documentos-chave, como a Política Ambiental, o registro de Aspectos e Impactos Ambientais e os Objetivos e Metas da empresa. Essa documentação, que inclui também planos de ação, procedimentos operacionais e registros de auditoria e monitoramento, assegura a padronização das práticas e facilita a tomada de decisões e a melhoria contínua do sistema.

2.6 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E DO RIO GRANDE DO SUL

No que se refere à dimensão legal, sob o ponto de vista constitucional, pode-se afirmar que a proteção ambiental no Brasil se encontra plenamente contemplada e caracterizada no Art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988, determinando que:

Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).

A norma vincula meio, ecologia e equilíbrio. Sendo o equilíbrio ambiental de domínio comum do povo, voltado para o ser humano, dele beneficiário. A Constituição é sábia, permite entendimento flexível, factível e aplicável do conceito de equilíbrio, e a noção de equilíbrio ambiental varia de acordo com as demandas relacionadas ao avanço da economia, à participação popular, à autonomia das comunidades ou à necessidade de inclusão tecnológica e social.

As principais leis que instituem diretrizes gerais ambientais são as leis do tipo ordinária (a título de exemplificação, a Lei n. 6.938, de 31.08.1981, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – LPNMA; a Lei n. 9.605, de 12.02.1998, Lei de Crimes Ambientais – LCA). Essas leis infraconstitucionais são regulamentadas por decretos (como o Decreto n. 99.274, de 06.06.1990, que dispõe sobre a LPNMA; e o Decreto n. 3.179, de 21.09.1999, que regulamenta a LCA).

A legislação sobre gestão ambiental no Brasil tem como pilar a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), que estabelece diretrizes e princípios para a proteção ambiental no país, incluindo o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998).

A relação das normais legais não se esgota com as supracitadas, insta consultar outras tais como: a. Resoluções do CONAMA: Resolução nº 001/1986; Resolução nº 313/2002; Resolução nº 358/2005: Regula o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. b. ISO 14000 (1996b); c. Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010); d. Decreto

Federal nº 11.413/2023; e. ISO 14064 (2006 e atualizações); f. Outras Normas Relacionadas: ISO 14004; ISO 14031; e ISO 50001: Gestão de energia, que complementa o SGA.

No Estado do Rio Grande do Sul, dentre a fundamentação legal para Gestão Ambiental, cita-se três: Lei nº 15.434/2020 (Código Estadual do Meio Ambiente), sendo essa a principal legislação ambiental do estado, que atualizou o Código de 2000 e alterou substancialmente a política ambiental do estado; Lei nº 10.330/1994, que instituiu o Sistema Estadual de Proteção Ambiental e a política ambiental do estado; Lei nº 13.594/2010, que trata da Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas, estabelecendo diretrizes para pesquisa, prevenção e adaptação.

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo exploratório, descritivo e explicativo, com abordagem qualitativa, fundamentado em pesquisa bibliográfica e documental, complementada com reuniões e conversas informais com gestores e colaboradores de empresas de portes distintos do setor metalmecânico. A escolha por uma abordagem qualitativa justifica-se pela necessidade de compreender em profundidade as práticas, desafios e resultados relacionados à implementação e manutenção do SGA nas organizações analisadas. Essa abordagem permitiu interpretar os fenômenos observados considerando o contexto específico de cada empresa, bem como suas particularidades estruturais e operacionais.

A etapa inicial consistiu em uma revisão de literatura em livros, artigos científicos e documentos institucionais relacionados aos temas Sistema de Gestão Ambiental, ISO 14001, sustentabilidade empresarial e gestão ambiental. Essa etapa teve como objetivo fundamentar

teoricamente a análise e estabelecer os critérios comparativos utilizados no estudo.

Para a coleta de dados, foram selecionadas duas empresas representativas do setor metalmeccânico situadas na região norte do estado do Rio Grande do Sul, sendo uma de pequeno porte e outra de grande porte. A etapa empírica envolveu a análise de documentos e registros internos relacionados à gestão ambiental, além da realização de reuniões e conversas informais com gestores e colaboradores, com o propósito de identificar práticas adotadas, desafios enfrentados e resultados obtidos no âmbito da gestão ambiental.

Os dados foram organizados, categorizados e submetidos a uma análise comparativa, buscando identificar semelhanças, diferenças e fatores determinantes para o desempenho ambiental em empresas de diferentes dimensões. Essa etapa possibilitou compreender como o porte empresarial influencia a aplicação e a efetividade das práticas de gestão ambiental, contribuindo para o entendimento das particularidades e dos desafios enfrentados por organizações do setor metalmeccânico no contexto regional estudado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. O CASO DA PEQUENA EMPRESA METALMECÂNICA (EMPRESA A)

A empresa A é uma empresa de pequeno porte que atua há 12 anos no segmento metal mecânico na região norte do RS e possui 30 colaboradores entre diretos e indiretos. Sua atuação se dá no mercado

interno e externo e seus principais produtos são: carrocerias metálicas, plataformas e tanques de água.

Foi identificado que a empresa está em fase de implantação do sistema de gestão ambiental e já apresenta a documentação necessária conforme a legislação vigente. Atualmente, está buscando adotar medidas para cumprir essa legislação, ação esta que está sendo realizada por profissional de consultoria externa, sendo que também realiza apontamentos das questões ambientais para futuras auditorias.

A coleta dos resíduos é efetuada pelos funcionários no setor produtivo, os quais levam os resíduos para um local específico na fábrica onde estão disponibilizados coletores identificados, porém esta identificação não contempla a totalidade dos resíduos gerados. Os resíduos então são levados e armazenados numa Central e colocados em *Bags*⁴ e tambores metálicos de 200L, por tipos (Classe I e Classe II) e, após, uma empresa terceirizada faz a coleta, dando o destino conforme o tipo de resíduo.

Foi observado que os papéis e plásticos contaminados e recicláveis não estão sendo separados de forma adequada, pois os mesmos são misturados, não sendo possível fazer a reciclagem. Os resíduos gerados pela empresa são principalmente: sucatas de aço e alumínio, papel, papelão e plásticos contaminados e recicláveis, borra de tinta, varrição, abrasivos EPIs, material contaminado.

A empresa terceirizada que coleta os resíduos faz a sua destinação da seguinte forma: resíduos contaminados (Classe I), em sua maioria são destinados para aterro Classe I devidamente licenciado pela Fepam. Não há resíduos contaminados que passem por processo de reciclagem e/ou reutilização. Já resíduos não contaminados (Classe II) se dividem em duas categorias: Recicláveis e Não Recicláveis: Os recicláveis, tipo papel e plástico, são misturados com os contaminados, de forma que não

⁴ Bags - bolsa ou saco

é possível fazer a devida reciclagem. Os não recicláveis são destinados para aterro licenciado pela Fepam. As sucatas de aço e alumínio que tem valor comercial são vendidas, já as sucatas contaminadas são encaminhadas para aterro Classe I. A empresa não consegue realizar a logística reversa de nenhum tipo de resíduo gerado.

Em relação ao controle sobre a geração de resíduos, a empresa terceirizada envia um relatório de controle mensal com os comprovantes de resíduos gerados e todas as informações da coleta por tipo e quantidade de resíduo, porém estas informações não são utilizadas pela empresa, de forma que não efetua nenhum controle interno dos resíduos gerados. Não existem programas de redução, reutilização e reciclagem de resíduos no momento.

Em relação aos recursos hídricos, a empresa utiliza-se de poço artesiano da comunidade local para captação de água que é utilizada para a higienização e preparação dos equipamentos antes do processo de pintura. O tratamento de efluentes está em fase de implantação. Não estão sendo adotadas medidas para a redução do consumo de água. A captação da água da chuva é realizada para utilização somente nos hidrantes.

A empresa utiliza energia elétrica em seus processos produtivos e o controle sobre o consumo de energia é através de medidor e planilhas de controle das contas. As medidas para a redução do consumo de energia se dão através de contrato de Energia Livre e conscientização dos funcionários. São utilizados tecnologias e equipamentos com maior eficiência energética com máquinas de soldas e plasmas que reduzem o consumo de energia e a substituição de máquinas antigas por modernas de maior eficiência e o dimensionamento correto para a aplicação. Este processo está sendo realizado de forma gradual na empresa, pois são estratégias eficazes para reduzir custos e o impacto ambiental (ABNT, 2022). A realização da manutenção periódica preventiva e corretiva dos

equipamentos também garante a eficiência energética. Atualmente não utiliza fontes de energia renovável.

Para compreender as implicações ambientais e os desafios na implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) na Empresa A, é fundamental identificar e analisar detalhadamente seus processos produtivos e os fluxos de materiais. Nesse sentido, o Quadro 1 apresenta uma síntese dos principais insumos (Entradas) utilizados, as etapas de transformação (Processo) e os subprodutos ou resíduos (Saídas) gerados nas operações da Empresa A. Conforme demonstrado, o processo de industrialização, que envolve solda e montagem, utiliza uma vasta gama de materiais, desde ligas metálicas (Aço carbono, Aço Inox, Alumínio) e consumíveis (Óleo hidráulico, Tintas, Solventes) até recursos energéticos. A análise das Saídas revela a geração de diversos tipos de resíduos sólidos (sucatas metálicas, papel, papelão e plásticos), além de resíduos contaminados (óleo solúvel, panos contaminados e filtros), e emissões atmosféricas, os quais exigem um controle rigoroso por parte do SGA.

Quadro 1 - Processos Produtivos da Empresa A

ENTRADAS	PROCESSO	SAÍDAS
Aço carbono, Aço Inox, Alumínio, Mangueiras, Borrachas, Plásticos, Óleo hidráulico, Tintas, Solventes, Catalisador, Energia elétrica, Água, Gás Argônio, EPIs, Panos, Vidro, Abrasivos, Cobre.	Industrialização através de solda e montagem, Inspeção de qualidade, Higienização e pintura, Acabamento, Expedição.	Lentes de solda, Lixas de discos e lixas, Papel, papelão e plásticos contaminados, Óleo solúvel, Panos contaminados, EPIs, Varrição, Papel, papelão e plásticos recicláveis, Fios de cobre, Sucatas metálicas, Sucatas de Inox, Sucatas metálicas contaminadas, Emissões atmosféricas, Filtros contaminados.

Fonte: Autoras (2025)

Os principais impactos ambientais gerados durante o processo de produção dos equipamentos incluem a geração de resíduos e sucatas, bem como as emissões atmosféricas provenientes das etapas de pintura e jateamento. Essas emissões resultam da liberação de compostos orgânicos voláteis (VOCs) – substâncias químicas presentes em tintas e solventes que se evaporam no ar – e de outras partículas poluentes lançadas na atmosfera. Caso não sejam devidamente controladas, essas substâncias podem causar problemas respiratórios e danos ao meio ambiente.

Para mitigar estas emissões, são utilizados sistemas de exaustão com filtros, bem como a otimização do processo e a substituição por tintas com baixo teor de VOCs. Essas medidas permitem que o ar contaminado fique limpo antes de ser liberado na atmosfera, bem como garante o descarte adequado dos resíduos gerados. Não é realizado o controle e monitoramento dos resíduos gerados. As medidas adotadas para minimizar os impactos ambientais são: sistema de filtragem das cabines de pintura, monitoramento da saída das chaminés, materiais químicos, pintura a pó e jato de granalha, e a substituição dos filtros corretamente. Já em relação a geração dos resíduos, como está em fase de implantação, as medidas não foram avaliadas.

Os funcionários da empresa recebem informações sobre a importância da gestão ambiental somente através de realização do Diálogo Semanal de Segurança (DSS). A empresa estabeleceu a política do PPR (Programa de Participação de Resultados), onde a redução de resíduos gerados é um dos quesitos que está diretamente atrelado aos resultados do bônus anual, sendo que, neste planejamento, a empresa faz um acompanhamento, estabelece metas e reconhece as metas e avanços atingidos.

4.1.1 Oportunidades e Desafios para a Empresa A

As oportunidades do Sistema de Gestão Ambiental podem variar dependendo do porte da empresa, do setor de atuação e do nível de maturidade ambiental da organização. Em relação a pequena empresa, uma das principais oportunidades é a redução de custos operacionais, pelo fato de terem uma estrutura mais enxuta e maior facilidade na identificação e eliminação de desperdícios, principalmente em relação a matérias-primas, água e energia, como também possibilita e favorece a implementação do SGA. Outra oportunidade é o desenvolvimento de programas de redução, reciclagem e reaproveitamento dos resíduos metálicos, gerando economia e oportunizando novas fontes de receita.

A melhoria na reputação local da empresa e diferenciação no mercado também se sobressai, possibilitando um diferencial e destaque competitivo em relação à sustentabilidade, fortalecendo o relacionamento com a sua comunidade e parceiros e atraindo clientes que valorizam essas práticas ambientais, como também abrindo caminho para novos mercados. Não menos importante, é a conformidade legal, ou seja, o cumprimento das exigências legais ambientais, que evita penalidades como sanções e multas.

Para pequenas empresas, implementar um Sistema de Gestão Ambiental envolve desafios significativos, como a limitação de recursos financeiros, a falta de conhecimento técnico e a dificuldade em atender às exigências legais e normativas. Na empresa analisada, há necessidade de definir melhor o local para a coleta de resíduos no processo fabril, disponibilizar coletores identificados para todos os resíduos gerados e realizar a separação de forma adequada, além de implementar e divulgar as regras em relação aos resíduos, através de treinamento, qualificação e conscientização dos funcionários. Também é necessário desenvolver e implementar o controle sobre a geração dos resíduos gerados para

minimizar os impactos ambientais, utilizando os dados e informações recebidos da consultoria externa.

Além disso, é preciso ainda: elaborar e implementar programas de redução, reutilização e reciclagem de resíduos; fazer melhorias na central de resíduos que está em fase de implantação; ampliar a captação de água da chuva para utilização no processo de higienização e preparação dos equipamentos antes do processo de pintura; realizar controle e monitoramento das emissões atmosféricas no processo de pintura e jateamento, para minimizar os impactos ambientais; realizar treinamentos de orientação e conscientização para os colaboradores sobre o SGA que está sendo implantado na empresa, de forma a buscar o engajamento e comprometimento dos mesmos e também orientar os colaboradores e dar maior ênfase no critério de redução de geração de resíduos no que diz respeito à política do PPR (Programa de Participação nos Resultados).

4.2 O CASO DA GRANDE EMPRESA METALMECÂNICA (EMPRESA B)

A empresa B é uma empresa de grande porte que atua há 41 anos no segmento metal mecânico na região norte do RS, possui em torno de 400 colaboradores entre diretos e indiretos, atua no mercado interno e externo. Seus principais produtos são: silos e carrocerias de aço e alumínio, tanques e equipamentos especiais.

Foi identificado que a empresa possui sistema de gestão ambiental, apresenta a documentação necessária conforme a legislação vigente, adota medidas para cumprir essa legislação, mas não possui internamente profissional técnico para as questões ambientais, somente profissional de empresa de consultoria externa, que auxilia

na implementação e auditorias do SGA. Essas auditorias ambientais são periódicas e realizadas pela Fepam, além da empresa de consultoria terceirizada. Atualmente, possui somente a certificação ISO 9001, não possuindo a certificação ambiental ISO 14.000 devido aos custos altos e não existência de obrigatoriedade.

A coleta e separação dos resíduos é realizada pelos funcionários nos setores produtivos em coletores identificados por tipos, Classe I e Classe II e encaminhados e armazenados numa central de resíduos, sendo colocados em *Bags* e tambores metálicos de 200L também identificados. Após, uma empresa terceirizada faz a coleta, dando o devido destino conforme o tipo de resíduo. Os resíduos gerados pela empresa são principalmente: sucatas de aço e alumínio, papel, papelão e plásticos contaminados e recicláveis, borra de tinta, varrição, abrasivos, EPIs, material contaminado, vidros de solda, mangueiras e borrachas, fios de cobre, pneus.

A empresa terceirizada que realiza a coleta dos resíduos faz a destinação dos mesmos da seguinte forma: os resíduos contaminados (Classe I), em sua maioria, são destinados para aterro Classe I devidamente licenciado pela Fepam. Há poucos resíduos contaminados que passam por processo de reciclagem e/ou reutilização, como, por exemplo, *thiner* usado. Já os resíduos não contaminados (Classe II) se dividem em duas categorias: Recicláveis e Não Recicláveis: Os recicláveis, tipo papel e plástico, passam por um processo industrial, voltando para o mercado em diversas formas e com valor agregado para novas aplicações. Os não recicláveis, tipo sucatas de aço e alumínio contaminadas e outros, são destinados para aterro licenciado pela Fepam. As sucatas de aço e alumínio que tem valor comercial são vendidas e as contaminadas são encaminhadas para aterro Classe I. No momento, essas sucatas geradas em relação ao montante processado

é de 10,47%. A empresa não consegue realizar a logística reversa de nenhum tipo de resíduo gerado.

Para o controle da geração de resíduos, a empresa terceirizada envia para a empresa em análise um relatório mensal com os comprovantes de resíduos gerados e todas as informações, da coleta por tipo e quantidade de resíduos de cada processo, sendo estas informações incluídas e transferidas para uma planilha de controle interno, onde é realizada avaliação mensal por um engenheiro de segurança do trabalho terceirizado.

A empresa mantém programas de redução, reutilização e reciclagem de resíduos da seguinte forma:

a) Redução: Há ações de conscientização interna voltadas aos colaboradores, como também de uma equipe de melhoria contínua responsável por revisar os descartes de resíduos e atuando principalmente junto à Engenharia para que as peças dos equipamentos sejam projetadas e alinhadas de forma a reduzir a geração de sucata de aço e alumínio. Também é aplicado o Programa de 5S, que inclui premiações para os setores que atingem suas metas.

b) Reutilização: No setor de pintura, o *thiner* usado é processado em um sistema evaporativo seguido de condensação para sua purificação e posterior reutilização. Esse processo gera uma borra que é destinada para aterro classe I.

c) Reciclagem: Os resíduos recicláveis, como papel e plástico, são separados e encaminhados para uma empresa terceirizada especializada.

Em relação aos recursos hídricos, a empresa utiliza um poço artesiano próprio para captação de água usada para a higienização e preparação dos equipamentos antes do processo de pintura. O tratamento de efluentes é realizado por meio da captação em tanque coletor e de processos físico/químico. Para a redução do consumo de água, a empresa adota ações de conscientização dos colaboradores e

utiliza lavadoras de alta pressão, que reduzem significativamente o gasto hídrico. Além disso, a empresa utiliza a lavagem com água quente, o que aumenta a eficiência do processo, reduzindo tanto o consumo de água quanto o uso de produtos químicos. A empresa também está implementando um sistema de captação de água da chuva para utilização nos processos de higienização e preparação dos equipamentos.

Já em relação ao uso de energia, a empresa utiliza energia elétrica em seus processos produtivos, sendo que o controle do consumo de energia é feito por meio de um medidor e planilhas de controle das contas. As medidas para a redução do consumo de energia são operacionalizadas por meio de contrato de Energia Livre e ações de conscientização dos colaboradores. A empresa utiliza tecnologias e equipamentos com maior eficiência energética, através da compra de motores elétricos que reduzem o consumo de energia através de maior eficiência com design aprimorado (mais cobre, rolamentos mais eficientes, refrigeração otimizada), uso de materiais avançados e nanotecnologia, além do controle de acionamento via inversores de frequência.

A substituição de motores antigos por modernos de alta eficiência e o dimensionamento correto para a aplicação estão sendo realizados de forma gradual na empresa, pois são estratégias eficazes para reduzir custos e o impacto ambiental (ABNT, 2022). A realização da manutenção periódica preventiva e corretiva dos equipamentos também garante a eficiência energética, porém, no momento, a empresa não utiliza fontes de energia renovável.

A análise da Empresa B segue a mesma metodologia utilizada para avaliar a Empresa A, com seus processos produtivos e fluxos de materiais detalhados no Quadro 2.

Quadro 2 - Processos Produtivos da Empresa B

ENTRADAS	PROCESSO	SAÍDAS
Aço carbono, Aço Inox, Alumínio, Mangueiras, Borrachas, Plásticos, Óleo hidráulico, Tintas, Solventes, Catalisador, Energia elétrica, Água, Gás Argônio, EPIs, Panos, Vidro, Abrasivos, Cobre.	Fabricação de componentes e sub-conjuntos, Solda e montagem, Inspeção de qualidade, Higienização e pintura, Acabamento, Expedição.	Lentes de solda, Vidros, Borrachas, Câmera de pneus, Pneus, Lixas de discos, Papel, papelão e plásticos contaminados, Óleo solúvel, Panos contaminados, EPIs, Varrição, Papel, papelão e plásticos recicláveis, Fios de cobre, Sucatas metálicas, Sucatas de Inox, Sucatas metálicas contaminadas, Emissões atmosféricas, Filtros contaminados, Efluente bruto, Efluente tratado.

Fonte: Autoras (2025)

Observa-se que as entradas da Empresa B são bastante semelhantes às da Empresa A, abrangendo uma vasta lista de insumos, como aços, óleos, tintas, solventes e recursos essenciais (energia elétrica e água), indicando operações de natureza similar, com foco em fabricação de componentes, solda e montagem. Contudo, o que distingue a Empresa B reside nas saídas de seus processos. Além de gerar os resíduos sólidos contaminados e não contaminados já identificados, como sucatas metálicas e panos contaminados, a Empresa B apresenta um controle adicional sobre a gestão hídrica, com a menção explícita de efluente bruto e efluente tratado. Essa característica sugere uma complexidade maior ou um nível de controle mais avançado no seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em relação aos recursos hídricos e ao tratamento de água, aspecto crucial para a comparação entre as duas empresas.

Quanto aos impactos ambientais da empresa B, durante o processo de produção dos componentes e dos equipamentos, ocorre a geração de resíduos e sucatas. Já, no processo de pintura e jateamento dos equipamentos, ocorrem emissões atmosféricas, que resultam da liberação de compostos orgânicos voláteis (VOCs). Para mitigar estas

emissões, a empresa utiliza sistemas de exaustão com filtros, bem como a otimização do processo e a substituição por tintas com baixo teor de VOCs. Essas medidas possibilitam que o ar contaminado fique limpo antes de ser liberado na atmosfera, além de garantir o descarte correto de resíduos gerados. A empresa realiza o controle e o monitoramento dos resíduos gerados por meio de planilhas específicas.

No processo de higienização, preparação e lavagem dos equipamentos, pode haver a geração de efluente líquido que, se não for tratado adequadamente, podem contaminar rios, lagos e solo, causando impactos ambientais negativos e riscos à saúde. Para evitar esses problemas, são adotadas práticas de limpeza com produtos adequados e biodegradáveis, além do tratamento adequado dos efluentes líquidos por meio de tanque coletor e processos químicos específicos.

As medidas adotadas para minimizar os impactos ambientais são: sistema de filtragem das cabines de pintura, monitoramento da saída das chaminés, químicos, pintura a pó e jato de granalha e também a operação correta e eficiente da estação de tratamento de efluentes ETE.

A empresa conta com programas de avaliação de impacto ambiental e, a cada dois anos, realiza uma vistoria completa de todos os seus processos por meio de auditoria independente. Os processos produtivos são periodicamente revisados para identificar e corrigir desperdícios, utilizando controles por planilhas. Além disso, são estabelecidas metas de redução para todos os tipos de resíduos gerados em todos os processos da fábrica.

A empresa mantém uma busca constante por inovação em seus processos produtivos, visando reduzir o impacto ambiental, diminuir a geração de resíduos e aprimorar o descarte por meio da utilização de matérias-primas menos poluentes e de novas formas de sustentabilidade. Atualmente, a empresa está analisando e avaliando a

possibilidade de implantar o Programa Descarte Zero, em parceria com uma empresa terceirizada que realiza o processo de Briquetagem, um processo industrial que transforma resíduos, como biomassa agrícola e finos de minério, em blocos compactos e uniformes, chamados briquetes, utilizando alta pressão e, por vezes, aglutinantes. Este processo aumenta a densidade energética, facilita o armazenamento e transporte e permite a recuperação de materiais que seriam descartados, transformando-os em combustíveis sólidos ou matérias-primas para outras indústrias.

Os funcionários da empresa são conscientizados sobre a importância da gestão ambiental por meio de palestras realizadas pela consultoria externa, bem como pela realização de Diálogo Semanal de Segurança (DSS), integração de novos funcionários e o Programa 5S. A empresa também oferece, por meio de empresa terceirizada, treinamentos trimestrais sobre práticas ambientais para os líderes e encarregados de setor da fábrica. Na política de sustentabilidade aprovada pela direção, está o PPR, onde a redução de resíduos gerados é um dos quesitos que está diretamente atrelado aos resultados do bônus anual, sendo que neste planejamento a direção faz um acompanhamento, estabelece metas e reconhece as metas e avanços atingidos. Essa é uma forma de incentivo à participação dos funcionários em ações ambientais, pois o programa está atrelado a metas em relação a geração de sucatas.

4.2.1 Oportunidades e Desafios para a Empresa B

Grandes empresas têm uma série de vantagens na gestão ambiental. Devido a sua capacidade de investimento e estrutura, podem investir em tecnologias avançadas, contratar equipes especializadas e otimizar processos em larga escala. A adoção de práticas sustentáveis

oferece diversas oportunidades estratégicas. A gestão ambiental resulta em redução de custos operacionais e cria novas fontes de receita através da economia circular, com a reciclagem e o reaproveitamento de materiais, a certificação ISO 14001, que fortalece a imagem da marca, melhora a reputação e facilita o acesso a novos mercados. Há também o potencial de inovação, como a análise e implantação do Programa Descarte Zero, que transforma resíduos em novos produtos. O estudo e a instalação de fontes de energia renovável, como a energia solar, e o aprimoramento da gestão de recursos hídricos também são oportunidades que promovem a sustentabilidade e a eficiência a longo prazo. Outras oportunidades dizem respeito a estruturação de um setor ambiental que conste no organograma da empresa e o aperfeiçoamento dos controles do SGA, principalmente relacionado aos resíduos, de forma a desenvolver e monitorar indicadores de desempenho e gráficos.

No entanto, a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) apresenta desafios específicos para grandes empresas, como por exemplo, a rigidez organizacional e a burocracia interna podem dificultar o engajamento de todos os departamentos, tornando o processo lento e custoso, tanto na fase de implementação quanto na de manutenção. A gestão de grandes volumes de resíduos e efluentes exige um planejamento mais complexo. Já a cultura organizacional é um obstáculo significativo, pois a falta de conscientização dos funcionários pode levar a práticas inadequadas, como a mistura de resíduos, impactando a reciclagem, reaproveitamento e a redução dos resíduos. Outro desafio importante é a redução do consumo de matérias-primas não renováveis, como metais, pois a dependência desses recursos exige que a empresa busque continuamente por alternativas sustentáveis e otimizações em seus projetos de engenharia para minimizar o desperdício. Por fim, a obtenção de certificações como a ISO 14001 pode ser um processo oneroso e complexo, demandando um estudo aprofundado para avaliar sua viabilidade.

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS EMPRESAS A E B

A análise comparativa entre as empresas de pequeno e grande porte permite identificar semelhanças e diferenças em suas estratégias, operações e impactos no mercado. O Quadro 3 abaixo destaca os pontos de convergência, divergência e os desafios específicos de cada modelo organizacional:

Quadro 3 – Semelhanças e diferenças entre as empresas A e B

SEMELHANÇAS	DIFERENÇAS
PROCESSO PRODUTIVO	ESTRUTURA
CULTURA ORGANIZACIONAL: FALTA DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	FASE DO SGA
NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL	CAPACIDADE FINANCEIRA, TÉCNICA E ESTRUTURAL
CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO	AValiação, CONTROLES E MONITORAMENTO DO SGA
TERCEIRIZAÇÃO DA COLETA DOS RESÍDUOS	PROGRAMAS DE REDUÇÃO, RECICLAGEM E APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS
ASSESSORIA NO SGA, NÃO TEM SETOR ESPECÍFICO NO ORGANOGRAMA DA EMPRESA	VOLUME DE RESÍDUOS GERADOS
IMPACTOS AMBIENTAIS	INOVAÇÃO
NÃO UTILIZAM FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL	BUROCRÁCIA
NÃO FAZEM LOGÍSTICA REVERSA	FLEXIBILIDADE

Fonte: Autoras (2025)

Com base nas informações citadas, é possível observar que embora as empresas apresentem diferenças significativas em termos de recursos, estrutura e alcance, ambas compartilham desafios e oportunidades no mercado. Essa comparação evidencia que o sucesso

organizacional não está relacionado apenas ao porte, mas à capacidade de adaptação, gestão eficiente e alinhamento ao mercado. De acordo com Gerber (1995), o importante é promover estratégias que potencializem os pontos fortes de cada modelo empresarial.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho de pesquisa foi guiado pela questão central: Como empresas de portes diferentes do setor metalmeccânico aplicam e implementam o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), considerando suas particularidades e desafios? Para responder a esse questionamento, adotou-se uma metodologia de análise comparativa, abrangendo uma empresa de pequeno porte (Empresa A) e uma de grande porte (Empresa B), ambas pertencentes ao setor metalmeccânico e localizadas no Norte do Rio Grande do Sul. A investigação envolveu a catalogação e a análise detalhada de documentos e informações internas, complementada pela realização de reuniões com gestores e colaboradores. Este método permitiu a identificação e a avaliação aprofundada das práticas, dos desafios e dos resultados obtidos por cada organização em relação ao seu SGA.

Verificou-se que a Empresa A, de pequeno porte, adota o SGA de forma mais pragmática e reativa, focando no cumprimento de requisitos legais imediatos para evitar sanções, e no momento, o SGA ainda está em processo de implantação. O principal desafio é a escassez de recursos, que inviabiliza a capacitação técnica, mas ao mesmo tempo demonstra potencial para adotar práticas ambientais mais simples e de baixo custo, que podem gerar impactos positivos tanto no desempenho ambiental quanto na sua competitividade. Já a principal oportunidade é a agilidade que facilita a adaptação e implementação do SGA, e o

favorecimento no treinamento, qualificação e conscientização dos colaboradores em função de seu porte.

Já a Empresa B, de grande porte, tem uma abordagem mais estratégica e proativa, utilizando o SGA como uma ferramenta para aprimorar a competitividade e a reputação. O maior desafio é a complexidade e a escala de produção, como também a redução do consumo de matérias-primas não renováveis, como os metais, que exige a busca contínua por alternativas sustentáveis e otimizações em seus projetos de engenharia para minimizar o desperdício e os resíduos de sucatas de aço e alumínio. Enquanto a maior oportunidade é o potencial de inovação e liderança no mercado, integrando o SGA de forma mais abrangente a toda cadeia produtiva, e a estruturação de um setor ambiental que conste no organograma da empresa, como também transformar as informações do SGA em indicadores.

O estudo comparativo mostrou que pequenas e grandes empresas do setor metalmeccânico enfrentam desafios distintos na implementação do SGA, mas ambas podem alcançar resultados significativos ao adotar estratégias adequadas às suas realidades, embora os objetivos do SGA sejam os mesmos.

As implicações deste estudo destacam a importância de adaptar estratégias de SGA, pois o porte da empresa influencia diretamente na sua complexidade e eficácia, sendo que ambas podem se beneficiar de estratégias adaptadas às suas realidades e, em ambos os casos, o engajamento da liderança e a conscientização dos funcionários são fatores importantes de sucesso para a eficiência do SGA, a sustentabilidade e a competitividade no mercado. Informações mais detalhadas e gerenciadas podem transformar resíduos em oportunidades como a economia circular e inovação sustentável e o investimento em tecnologias renováveis. Além disso, a decisão pela certificação ISO 14.000 é uma estratégia a ser considerada.

Teoricamente, o trabalho amplia a compreensão sobre desafios e oportunidades enfrentados por pequenas e grandes empresas do setor metalmeccânico, mostrando que ambos estão interligados e podem se transformar, dependendo de como são gerenciados, ou seja, oportunidades que viram desafios e vice-versa. Na prática, oferece subsídios aos gestores implementarem soluções sustentáveis alinhadas às suas capacidades e necessidades. A chave está em como a empresa visualiza e administra as situações, de forma que tudo pode ser transformado em aprendizado e crescimento sustentável.

Entre as limitações desta pesquisa, destaca-se a restrição geográfica e quantitativa, que limitou a análise a somente algumas empresas de uma região específica, e o acesso limitado a dados mais detalhados das empresas analisadas. Além disso, o estudo foi realizado em um período específico, o que pode não refletir mudanças futuras nas práticas de SGA.

Para pesquisas futuras, sugere-se explorar a aplicação do SGA em maior número de empresas de diferentes portes e também ampliar para outros setores da economia, abrangendo uma região maior do que a pesquisada, como também utilizar na metodologia a aplicação de questionários ou entrevistas direcionados a analisar os impactos de novas tecnologias na gestão ambiental e investigar também como políticas públicas podem influenciar a adoção do SGA em empresas de diferentes portes, setores e regiões.

REFERÊNCIAS

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR ISO 14001**. Sistemas da gestão ambiental Requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro, 2004

ABNT. NBR ISO 14001:2015 - Sistemas de gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2015.

ABIQUIM. Programa Atuação Responsável - Guia de Implementação. Associação Brasileira da Indústria Química, 1992

AMATO NETO, J. (Org.). **Sustentabilidade e produção**: teoria e prática para uma gestão sustentável. São Paulo: Atlas, 2011.

ALVES, Aline da Silva LEÃO, Maurício de Souza. Análise do sistema de gestão ambiental empresarial para o desenvolvimento sustentável. Trabalho de Conclusão de Curso. Niterói, 2019, 81f. Disponível em: <<https://app.uff.br/riuff/handle/1/11351>>.

BARBIERI, José Carlos. **Gestão ambiental empresarial**: conceitos, modelos e instrumentos. – 4. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016.

BRASIL. **Lei nº 12.651, de 2012**. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Presidência da República. Brasília. DF Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112651.htm Acesso em 18 set. 2025

BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Presidência da República. Brasília. DF Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm Acesso em 20 set. 2025

BRASIL. **Lei nº 9.605, de 1998.** Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Presidência da República. Brasília. DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19605.htm Acesso em 18 set. 2025

BRASIL. **Lei nº 6.938, de 1981.** Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Presidência da República. Brasília. DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/16938.htm Acesso em 15 set. 2025

BRASIL. **Decreto nº 99.274, de 1990.** Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília. DF. Disponível em: <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:decreto:1990:99274>. Acesso em 15 set. 2025

BRASIL. **Decreto nº 11.413, de 2023.** Institui o Certificado de Crédito de Reciclagem de Logística Reversa, o Certificado de Estruturação e Reciclagem de Embalagens em Geral e o Certificado de Crédito de Massa Futura, no âmbito dos sistemas de logística reversa de que trata o art. 33 da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Diário Oficial da União. Brasília. DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11413.htm Acesso em 18 set. 2025

BRASIL. **Decreto nº 3.179, de 1999.** Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília. DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3179.htm Acesso em 18 set. 2025

BORGES, L. O.; MOURÃO, L. **O Trabalho e as Organizações:** atuações a partir da psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2013.

BRITO, F. R. de.; BRITO, M. L. de A. Impacto do ciclo PDCA no processo de atendimento aos clientes em empresa de aviamentos. **E-Acadêmica**, [S. l.], v. 1, n.3,p.e10,2020.

CENTRO DE INFORMAÇÃO METAL MECÂNICA. Tipos de resíduos na indústria metal mecânica. 2012. <https://www.cimm.com.br/> Acesso em 18 set. 2025

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, liderada por Gro Harlem Brundtland, em seu relatório “Nosso Futuro Comum”, 1987

[CMMAD] COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. *Nosso futuro comum*. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991.

CURI, Denise (org.). **Gestão Ambiental**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012.

FORTUNSKI, B. Does the environmental management standard ISO 14001

stimulate sustainable development? An example from the energy sector in Poland. **Management of Environmental Quality: An International Journal**, v. 19, n. 2, p. 204-212, 2008.

GERBER, Michael E. *The E-Myth Revisited: Why Most Small Businesses Don't Work and What to Do About It*. New York: Harper Business, 1995.

ISO. International Organization for Standardization. **NBR ISO 14001: Sistemas de gestão ambiental – Diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio**. Rio de Janeiro: ABNT, 1996a.

ISO. International Organization for Standardization. **NBR ISO 14.001: Sistemas de gestão ambiental – Especificação e diretrizes para uso.** Rio de Janeiro: ABNT, 1996b.

MEYSTRE, J. de A. Acompanhamento de Implementação da Certificação Ambiental pela Norma NBR ISO 14001/96 em uma Micro-Empresa de Consultoria Ambiental. In: SEMINÁRIO ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE, 3., 2003, Campinas. **Regulação estatal e auto-regulação empresarial para o desenvolvimento sustentável.** Campinas: Instituto de Economia, UNICAMP, 2003. GA-06. CD-ROM.

MIRANDA, Bruno; MORETTO, Isabela; MORETTO, Rafael. **Gestão Ambiental nas Empresas.** Programa de Pós-Graduação em Administração e Programa de Pós-Graduação em Economia FEA/PUC-SP. 2019. 71f.

MMA. Ministério do Meio Ambiente. **Agenda 21.** [20--]. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21>>. Acesso em: 12 set. 2025.

NBR ISO 14.001, versão 2015 – **Manual de Gestão Ambiental**

Oliveira, A.I.A. **O licenciamento ambiental.** São Paulo: Iglu, 1999. Introdução à Legislação Ambiental Brasileira e Licenciamento Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

ONU. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Estocolmo, 1972

PERIARD, Gustavo <http://www.sobreadministracao.com/o-ciclo-pd-ca-deming-e-a-melhoriacontinua>, 2011

PERUZZO, Liéven. Análise da implantação de um sistema de gestão ambiental, embasado da norma ISO 14001: 2015 em uma indústria de fabricação de artefatos plásticos. **Repositório Institucional UERGS**. 2022. 24f.

RIO GRANDE DO SUL. **Lei nº 15.434, de 2020**. Institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Diário Oficial do Estado. Porto Alegre. RS. Disponível em: <https://www.leisestaduais.com.br> Acesso em 15 set. 2025

RIO GRANDE DO SUL. **Lei nº 13.594, de 2010**. Instituiu a Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas (PGMC). Diário Oficial do Estado. Porto Alegre. RS. Disponível em: <https://www.leisestaduais.com.br> Acesso em 15 set. 2025

RIO GRANDE DO SUL. **Lei nº 10.330, de 1994**. Dispõe sobre a organização do sistema estadual de proteção ambiental, a elaboração, implementação e controle da política ambiental do estado e dá outras providências. Diário Oficial do Estado. Porto Alegre. RS. Disponível em: <https://www.leisestaduais.com.br> Acesso em 15 set. 2025

SEIFFERT, M. E. B. **ISO 14001 Sistemas de gestão ambiental**: implantação objetiva e econômica. São Paulo: Atlas, 2011.

SILVA, V. A. R.; ALARCÓN, O. Q.; SILVA JR., H. S.; VIEIRA FILHO, O. Aproximando ISO 14001 aos objetivos ambientais públicos. In: SEMINÁRIO ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE, 3., 2003, Campinas. **Regulação estatal e auto-regulação empresarial para o desenvolvimento sustentável**. Campinas: Instituto de Economia, UNICAMP, 2003. E112. CD-ROM.

ZANATTA, P. Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. **Revista Gestão e Sustentabilidade Ambiental**, Florianópolis, v.6, n.3, p. 296-312, out./dez. 2017.

STARTUP DE IMPACTO SOCIAL: UM ESTUDO NA DIOSA - MÃO DE OBRA FEMININA

Rafael Leite Araújo¹

Zenicleia Angelita Deggerone²

Cibele LúciaBombardelli³

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, em decorrência do agravamento de problemáticas sociais e ambientais, observa-se o surgimento de novos empreendimentos orientados à geração de renda, à promoção da qualidade de vida, à ampliação da empregabilidade e à mitigação de desigualdades, como a de gênero. Nesse contexto, a criação de novos negócios tem contribuído para o enfrentamento de tais desafios socioambientais (Genú, 2018; Duarte e Madruga, 2018).

Diante das transformações contínuas no ambiente organizacional e na sociedade, emergem empreendimentos voltados à resolução de problemas sociais e/ou ambientais. Inserem-se nesse cenário os negócios de impacto social, os quais, conforme o Pipe Social (2019), caracterizam-se por buscar a solução de demandas socioambientais por meio de sua atividade principal, conciliando a geração de retorno financeiro com o compromisso de mensuração do impacto social produzido.

¹ Bacharel em Administração – UERGS. E-mail: rafael-araujo@uergs.edu.br

² Doutora em Desenvolvimento Rural – UFRGS; Docente Adjunta na UERGS - Unidade Universitária de Erechim/RS. E-mail: zenicleia-deggerone@uergs.edu.br

³ Mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental – UFFS. E-mail: cibelebombardelli@yahoo.com.br

Nesse sentido, Freire e Sousa (2020) afirmam que as startups se configuram como uma possibilidade de reduzir as desigualdades sociais e, conseqüentemente, promover maior inclusão social. De modo complementar, Caetano e Paro (2020) destacam as grandes transformações da humanidade estiveram vinculadas a empreendedores que criaram novos conceitos, capazes de redefinir as formas de interação social e impulsionar o progresso da sociedade.

Sob essa perspectiva, entende-se que o empreendedor social atua como um agente intermediador econômico e social, promovendo ações junto a populações frequentemente não atendidas pelo Estado, contribuindo, assim, para o desenvolvimento local (Aveni, 2014). Corroborando essa discussão, pesquisa realizada por Limeira (2018) identificou 579 negócios de impacto social no Brasil, dos quais 70% encontram-se formalizados. As regiões Sudeste (63%) e Sul (20%) concentram a maior parte desses empreendimentos. Ademais, observa-se que 58% das *startups* foram idealizadas por homens, enquanto 20% foram criadas por mulheres.

Diante da relevância dos negócios de impacto social para o desenvolvimento socioeconômico, o presente estudo tem como objeto de análise a *startup* DIOSA – Mão de Obra Feminina, cuja atuação é voltada à redução das desigualdades de gênero, por meio da inserção de mulheres no setor da construção civil.

A DIOSA consiste em uma plataforma digital que reúne uma rede de colaboradoras especializadas na prestação de serviços como instalações elétricas e hidráulicas, pintura e decoração, atendendo tanto residências quanto ambientes corporativos. Nos últimos anos, a organização tem investido na qualificação de suas colaboradoras, promovendo ações voltadas não apenas ao desenvolvimento de competências técnicas, mas também ao fortalecimento de habilidades comportamentais, atitudes proativas e inserção no mercado de trabalho.

Nesse contexto, a questão norteadora desta pesquisa consiste em identificar quais são as ações e atividades de impacto social desenvolvidas pela *startup* DIOSA – Mão de Obra Feminina. Para tal, o objetivo geral do estudo é analisar o impacto social gerado por essa organização na região metropolitana de Porto Alegre (RS). Para atender a essa proposição, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: (i) compreender o histórico da *startup* e sua relevância para seus *stakeholders*; (ii) analisar as principais limitações enfrentadas pela organização; e (iii) identificar os benefícios sociais gerados no segmento em que a organização atua.

A justificativa para a realização deste estudo fundamenta-se em duas dimensões: social e acadêmica. Do ponto de vista social, destaca-se a relevância da atuação da *startup* na mitigação das desigualdades de gênero, por meio da oferta de capacitação técnica, desenvolvimento profissional, ampliação de visibilidade, fortalecimento de redes de apoio e promoção da inserção de mulheres no mercado de trabalho, especialmente em um setor historicamente masculinizado.

No âmbito acadêmico, a pesquisa justifica-se pela, ainda limitada, produção científica nacional sobre *startups* de impacto social. Estudos como os de Genú (2018), Miguel Júnior (2019) e Gaiotto (2016) evidenciam que as investigações sobre empreendedorismo social no Brasil ainda se encontram em estágio inicial, quando comparadas à literatura internacional.

Por fim, ressalta-se a contribuição institucional para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, evidenciando a importância da formação acadêmica na qualificação de recursos humanos capazes de atuar de forma crítica e propositiva, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e cultural das diferentes regiões do estado.

CONCEITUANDO O EMPREENDEDORISMO

O empreendedorismo pode ser compreendido como a capacidade de transformar ideias em realizações concretas por meio da criatividade, motivação e busca por resultados significativos. Envolve a execução de projetos pessoais ou organizacionais pautados na inovação, no aproveitamento de oportunidades e na gestão de riscos, bem como no desenvolvimento contínuo do autoconhecimento, em um processo de aprendizagem permanente e abertura a novas experiências e paradigmas (Baggio e Baggio, 2015; Caetano e Paro, 2020).

Nessa perspectiva, Velho e Giacomelli (2017) definem o empreendedor como aquele que inicia algo novo, identifica oportunidades não percebidas por outros e transforma ideias em ação. De modo complementar, Schumpeter (1952, *apud* Silveira, Passos e Martins, 2017) apresenta uma definição clássica ao afirmar que empreender consiste em reformar ou revolucionar os padrões de produção, por meio da exploração de inovações, pela introdução de novos bens, pela adoção de novos métodos produtivos, pela abertura de novos mercados ou pela reorganização de setores econômicos.

A partir dessas abordagens, o empreendedorismo pode ser entendido como a identificação de lacunas no mercado ou oportunidades de inovação, aliadas à capacidade de transformar ideias em realidade. Nesse processo, diversos fatores influenciam a decisão de empreender. Dornelas (2018) distingue dois principais tipos de empreendedorismo: por necessidade e por oportunidade. O empreendedorismo por necessidade ocorre quando o indivíduo inicia uma atividade empreendedora em função de condições adversas, como a ausência de emprego formal, insuficiência de renda, escassez de recursos para subsistência ou situações de desemprego.

Por outro lado, o empreendedorismo por oportunidade está associado à busca por melhores condições de vida e ao aproveitamento de nichos de mercado promissores. Nesse caso, os empreendedores tendem a adotar uma postura mais planejada, realizando estudos de mercado, análises de viabilidade econômica e investindo em inovação, com vistas à criação de novos produtos ou serviços.

Adicionalmente, os empreendimentos podem ser classificados segundo diferentes critérios. Um dos mais recorrentes refere-se à finalidade lucrativa (Salim e Silva, 2009), uma vez que, historicamente, o empreendedorismo foi associado à criação de negócios com foco na obtenção de lucro. Entretanto, com a evolução do conceito, observa-se uma ampliação dessa perspectiva, passando a incluir iniciativas voltadas também à geração de valor social e ao bem comum (Dornelas, 2018).

Nesse sentido, Salim e Silva (2009) propõem a classificação do empreendedorismo em diferentes categorias: a) empreendedorismos empresariais; b) internos à corporação (intraempreendedoríssimo; c) com fins sociais; d) para o desenvolvimento local; e) objetivo cultural; e, f) para desenvolvimento de comunidades. Complementarmente, Dornelas (2018) destaca que, com a disseminação do empreendedorismo, emergiram diversas tipologias, sendo as mais recorrentes apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Principais perfis de empreendedores

Perfis de empreendedor	Características
Empreendedor informal	São os que vendem seus produtos ou serviços nas esquinas nas ruas, sem legalização;
Empreendedores cooperados	São grupos de pessoas que atuam no mesmo ramo se unem para ganhar visibilidade, mercado para comercialização de seus produtos;

Empreendedor individual	Este muitas vezes é o empreendedor informal que se legalizou;
Empreendedor franqueado	É aquele que inicia sua empresa a partir de uma marca já existente e consolidada;
Empreendedor corporativo	São os colaboradores que atuam nas empresas que apresentam ideias e projetos que visam o desenvolvimento da organização;
Empreendedorismo feminino	Mulheres ganhando espaço no mercado que antigamente era dominado por homens e constituindo seu próprio negócio;
Empreendedor social	Tem como intuito equalizar e minimizar a desigualdade na sociedade.

Fonte: Adaptado de Dornelas (2018).

Em consonância com o exposto no Quadro anterior, tais categorias representam as tipologias mais recorrentes de empreendedorismo. Entretanto, o presente estudo delimita-se à análise do empreendedorismo social, o qual será aprofundado na seção subsequente.

EMPREENDEDORISMO SOCIAL

O empreendedor social pode ser caracterizado como um agente inovador, visionário e pragmático, capaz de superar desafios e promover transformações sociais significativas e sistêmicas (Salim e Silva, 2009). Nessa mesma perspectiva, Silva et al. (2019) afirmam que esses empreendedores avaliam problemas como oportunidades, demonstrando persistência, capacidade inovadora e desenvolvimento de modelos e abordagens pioneiras.

O empreendedorismo social, por sua vez, refere-se à utilização de práticas inovadoras para a alocação eficiente de recursos, com o

objetivo de atender às necessidades humanas e promover mudanças sociais sustentáveis (Silva et al., 2019). Trata-se de um campo de conhecimento e de atuação que ganhou maior sistematização a partir da década de 1980, embora suas práticas já existissem anteriormente, sobretudo por meio de iniciativas promovidas por organizações religiosas e outras entidades voltadas ao bem comum (Silva et al., 2019).

De acordo com Dornelas (2021), tradicionalmente o empreendedor social não tinha como objetivo principal a obtenção de lucro. Contudo, observa-se, contemporaneamente, o surgimento de modelos híbridos, nos quais a geração de impacto social está associada à sustentabilidade financeira do empreendimento.

Nesse contexto, Anastácio, Cruz Filho e Marins (2018 *apud* Silva et al., 2019) destacam que, diante da complexidade do mercado, emergem organizações situadas na interseção entre o segundo e o terceiro setor, denominadas setor 2.5 ou híbrido. Tais organizações combinam objetivos lucrativos com propósitos sociais e ambientais, abrangendo categorias como negócios sociais e negócios de impacto.

Corroborando essa perspectiva, Barki (2014) define os negócios de impacto como organizações híbridas que integram competências do setor privado às práticas de gestão do terceiro setor. Para Barki (2015), esses empreendedores buscam, além da geração de renda, a promoção do bem-estar social, conciliando propósito e sustentabilidade econômica.

NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL

No contexto brasileiro, o Decreto nº 9.977, de 19 de agosto de 2019 (Brasil, 2019), define negócios de impacto como empreendimentos que têm por finalidade gerar impacto socioambiental positivo aliado à obtenção de resultados financeiros sustentáveis. De acordo com Barki

(2014), os negócios de impacto social consistem em organizações que buscam solucionar problemas sociais por meio de mecanismos de mercado, ultrapassando a lógica exclusiva do lucro e adotando uma abordagem orientada a um capitalismo mais inclusivo. Trata-se de um campo relativamente recente, mas em expansão, impulsionado por atores como empresas, aceleradoras e investidores comprometidos com essa agenda.

Por fim, conforme apresentado no Quadro 2, a caracterização de um negócio de impacto social requer o atendimento simultâneo de quatro critérios fundamentais. Esses critérios não são independentes, mas interdependentes, constituindo um conjunto integrado de requisitos que os empreendimentos devem cumprir para serem reconhecidos como negócios de impacto (Pipe Social, 2019).

Quadro 2 – Características que definem negócios de impacto social

Ordem dos critérios	Critérios
1º Critério	O negócio e os empreendedores especificam sua intenção de impactar de maneira clara em sua comunicação institucional interna e externa.
2º Critério	A empresa resolve diariamente um problema socioambiental sendo o motivo que justifica sua existência, tendo como atividade central do negócio o seu produto/serviço e/ou sua forma de operação, em que resolva de fato um problema socioambiental real.
3º Critério	A organização tem compromisso com o monitoramento do impacto socioambiental que gera na sociedade, possuindo clareza na transformação que pretende alcançar e possui indicadores que auxiliam no monitoramento para medir seu impacto.

4º Critério	O empreendimento trabalha conforme a lógica de mercado buscando retorno financeiro, ou seja, gera receita própria por meio da venda de produtos e/ou serviços, independentemente do seu formato jurídico. Não depende de subsídios, ainda que possa recebê-los em diferentes etapas de sua jornada como ajudas pontuais.
-------------	--

Fonte: Adaptado do Pipe Social (2019).

Conforme o Sebrae (2019) o diferencial competitivo da *startup* é com o seu propósito mensurado pelo seu impacto causado na comunidade. Quanto mais a empresa causar impacto positivo, maior será a geração de bem-estar social alcançada pelo sucesso do negócio.

STARTUP SOCIAL

A definição de startup, segundo a Associação Brasileira de *Startups* – ABStartups (2017), refere-se a uma organização que emerge a partir de um modelo de negócio ágil e enxuto, orientado à geração de valor ao cliente por meio da resolução de problemas reais. Caracteriza-se, ainda, pela oferta de soluções escaláveis ao mercado, tendo a tecnologia como principal vetor de desenvolvimento.

No âmbito jurídico, observa-se que, em abril de 2019, a Lei Complementar nº 167/2019 alterou a redação da Lei Complementar nº 123/2006, especialmente ao incluir os §§ 1º e 2º do art. 65-A, passando a estabelecer, de forma normativa, uma definição legal para *startups* no ordenamento brasileiro.

De acordo com Caminha e Coelho (2020), as startups configuram-se como importantes precursoras da economia contemporânea. Impulsionadas pelo avanço tecnológico, tais organizações têm desempenhado papel relevante desde a década de 1980 em economias

como as dos Estados Unidos, China e países europeus. Ademais, conforme o Sebrae (2020), muitas *startups* são também motivadas pela geração de impacto social positivo. Ainda que apresentem características específicas, essas organizações mantêm a lógica empresarial tradicional, ao atenderem necessidades humanas por meio da comercialização de produtos e serviços, buscando a maximização de lucros e o retorno aos investidores (Longen *et al.*, 2019).

Nesse contexto, Genú (2018) destaca que o ambiente de incerteza, no qual as *startups* estão inseridas, demanda a construção de redes de relacionamento sólidas, sendo a cooperação e a busca por soluções coletivas elementos determinantes para sua sustentabilidade e crescimento, especialmente no caso de *startups* de cunho social.

Adicionalmente, conforme Lemos *et al.* (2020), as *startups* constituem um modelo de negócio com particularidades próprias e, para alcançar seus objetivos e consolidar-se no mercado, frequentemente recorrem ao suporte de aceleradoras e incubadoras, que oferecem apoio financeiro e intelectual.

Por fim, segundo Caminha e Coelho (2020), as *startups* apresentam dinâmicas distintas no que se refere à captação de recursos, sendo o estágio de desenvolvimento um fator determinante: quanto mais avançada a empresa, maior tende a ser sua demanda por capital. Com base nesses autores, as *startups* podem ser classificadas em quatro estágios de desenvolvimento, conforme apresentado no Quadro 3.

Quadro 3 - Estágios das *startups*

Estágios	Características
Estágio embrionário (<i>seed stage</i>)	Consiste na fase pré-operacional para o desenvolvimento de uma ideia, projeto e/ou produto, incluindo <i>brainstormings</i> e testes iniciais de mercado. Nesta fase, o risco de receber investimento é relativamente baixo, pois o sucesso é incerto.

Estágios	Características
Estágio inicial (<i>early stage</i>)	Neste estágio, via de regra, a <i>startup</i> já apresenta um conceito estável de produto, uma estratégia de marketing e uma administração consolidada. Podendo estar lançando seu produto no mercado ou já estar inserida há três anos ou menos. Provavelmente irá necessitar de mais investimentos para iniciar ou para manutenção de atividades operacionais.
Estágio de expansão (<i>expansion stage</i>)	Conceitualmente, o estágio de expansão começa quando a <i>startup</i> possui uma estrutura interna razoável e pronta para alcançar outros mercados geograficamente e/ou público-alvo. Suas receitas e estoques estão em ascensão, a comercialização de seus produtos ou serviços está razoável, mas, contudo, não está gerando renda suficiente para cobrir suas despesas. Provavelmente o investimento nesta etapa será para desenvolver um novo produto, contratações, marketing ou uma nova planta de produção, entre outras.
Estágio avançado (<i>later stage</i>)	Nesta última etapa a <i>startup</i> já está com seu conceito aprovado, já conseguiu renda necessária, está próxima ou já chegou a <i>breakeven</i> (seu ponto de equilíbrio), ou seja, não está gerando prejuízo, mas também não está gerando lucro.

Fonte: Adaptado de Caminha e Coelho (2020).

Segundo Caminha e Coelho (2020), a identificação do estágio de desenvolvimento em que a *startup* se encontra constitui um elemento fundamental para a definição de estratégias mais coerentes de captação de recursos, uma vez que possibilita alinhar as necessidades da organização às fontes de financiamento mais adequadas a cada etapa.

METODOLOGIA

A presente pesquisa classifica-se como exploratório-descritiva, uma vez que, conforme Lakatos e Marconi (2017), esse tipo de investigação visa o levantamento bibliográfico e à descrição das características de determinada população, objeto ou fenômeno.

No que se refere aos procedimentos técnicos, adotou-se o método de estudo de caso, conforme proposto por Yin (2005), por possibilitar a obtenção de um amplo conjunto de informações detalhadas, a partir da utilização de diferentes técnicas de coleta de dados. Nesse sentido, a pesquisa concentrou-se na análise da *startup* Diosa – Mão de Obra Feminina, localizada na cidade de Porto Alegre, no período compreendido entre abril e agosto de 2021.

A coleta de dados foi realizada por meio de técnicas qualitativas que, segundo Stake (2011), buscam descrever narrativas, bem como transcrever entrevistas e registros provenientes de observações livres ou diários de campo. Dessa forma, foram utilizadas fontes primárias, por meio de entrevistas semiestruturadas e fontes secundárias, obtidas a partir da análise documental de manuais de procedimentos, planilhas, relatórios gerenciais, *feedbacks* de clientes, entre outros materiais.

Ainda, recorreu-se à pesquisa bibliográfica, fundamentada em referências teóricas previamente analisadas e publicadas em meios escritos e eletrônicos, tais como livros, artigos científicos e páginas de *websites*.

A análise dos dados foi conduzida por meio da técnica de análise de conteúdo, a qual, segundo Farias Filho e Arruda Filho (2015), tem como finalidade descrever e interpretar o conteúdo das mensagens. Para a sistematização e interpretação dos dados, adotou-se o procedimento proposto por Bardin (2006), estruturado em três etapas: (i) pré-análise; (ii) exploração do material; e (iii) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.

STARTUP DIOSA – MÃO DE OBRA FEMININA

A startup Diosa – Mão de Obra Feminina surgiu a partir da percepção de uma de suas idealizadoras quanto à dificuldade de

contratação de prestadores de serviços, associada ao sentimento de insegurança em receber profissionais do gênero masculino em sua residência.

A partir dessa experiência, a fundadora e CEO da empresa identificou, por meio da rede social *Facebook*, a existência de uma profissional do sexo feminino que atuava na prestação de serviços de manutenção e reformas residenciais na cidade de São Paulo. Tal constatação suscitou a reflexão acerca da viabilidade de um modelo semelhante na cidade de Porto Alegre, evidenciando uma oportunidade de negócio associada à segurança e à representatividade feminina no setor.

Posteriormente, foi realizada uma investigação sobre a existência de iniciativas similares em Porto Alegre, não sendo identificadas empresas com proposta equivalente. Contudo, constatou-se a presença de ações promovidas por organizações não governamentais e pelo governo federal voltadas à capacitação de mulheres na área da construção civil.

Assim, emergiu a ideia de criação de uma plataforma digital que possibilitasse o cadastramento de mulheres interessadas em oferecer serviços de reparos residenciais e prediais. Identificada a oportunidade, a *startup* Diosa – Mão de Obra Feminina foi fundada em 2015, na cidade de Porto Alegre/RS, por cinco sócias.

Em sua fase inicial, a *startup* foi incubada na Escola Superior de Propaganda e Marketing por um período de um ano. Posteriormente, recebeu apoio do Sebrae e da Artemisia, esta última reconhecida como uma organização sem fins lucrativos, pioneira na promoção de negócios de impacto social no Brasil, com sede em São Paulo.

No ano de 2017, a *startup* participou do programa *Young Leaders of the Americas Initiative*, promovido pelo governo dos Estados Unidos, no qual obteve a segunda colocação geral e recebeu uma premiação

de US\$ 5.000, além de mentorias especializadas, contribuindo significativamente para o seu desenvolvimento.

Em 2020, a empresa recebeu investimento do tipo anjo, o que possibilitou a estruturação de sua equipe, a atualização de sua identidade de marca e a implementação de melhorias em sua plataforma digital, promovendo maior centralização e automatização dos serviços ofertados.

Figura 1 - Plataforma da Rede Diosa



Fonte: Startup Diosa (2021).

A startup Diosa – Mão de Obra Feminina tem como missão: contribuir para a redução das desigualdades de gênero, promovendo transformações no mercado de prestação de serviços voltados a consertos e reformas residenciais. Ademais, busca oferecer serviços pautados na qualidade, segurança e preços justos, de modo a fomentar o desenvolvimento econômico e a inclusão social (Startup Diosa, 2021).

No contexto do Rio Grande do Sul, a *Startup Diosa* destacava-se, à época da pesquisa, como a única rede a operar por meio de uma plataforma digital composta exclusivamente por mão de obra feminina.

A rede era constituída por 73 profissionais atuantes na prestação de serviços de manutenção e reformas em ambientes residenciais e prediais.

Entretanto, a organização passou por um período de reestruturação, o que resultou, em julho de 2021, na desativação temporária de sua plataforma digital. Tal medida integrou uma estratégia de redução de custos operacionais, visando à manutenção de suas atividades. Nesse cenário, as demandas por serviços passaram a ser intermediadas por meio de redes sociais e do aplicativo *WhatsApp*.

IMPACTO SOCIAL DA STARTUP DIOSA

O impacto social de organizações orientadas por propósito não se restringe à obtenção de lucro. Embora a sustentabilidade financeira seja um elemento essencial, Caetano e Paro (2020) argumentam que ela não constitui o único, nem necessariamente o principal, objetivo dessas organizações, que se orientam, sobretudo, por sua missão social.

No início de suas atividades, a *startup* enfrentou dificuldades relacionadas à compreensão de seu modelo de negócio por parte do mercado, uma vez que sua proposta foi, por vezes, interpretada como de natureza não lucrativa, semelhante à de organizações não governamentais. Tal percepção desconsidera a natureza híbrida desses empreendimentos, que conciliam objetivos econômicos e sociais.

Nesse sentido, Silva *et al.* (2019) destacam que negócios classificados como pertencentes ao setor 2.5 podem apresentar elevada lucratividade; contudo, quando alcançam resultados financeiros positivos, tendem a reinvestir seus lucros em sua missão social, ampliando sua sustentabilidade e potencial de impacto.

A atuação da Diosa concentra-se na mitigação de um problema social relevante, relacionado à sensação de insegurança vivenciada

por mulheres ao receberem prestadores de serviços desconhecidos em suas residências. Tal problemática encontra respaldo em estudos que evidenciam elevados índices de assédio enfrentados por este público em diferentes contextos sociais.

Diante disso, a Diosa propõe-se a minimizar essa questão por meio da oferta de serviços realizados exclusivamente por mão de obra feminina. Em situações específicas que demandem profissionais do sexo masculino, a contratação é previamente comunicada e condicionada à aprovação do cliente, garantindo transparência e respeito às preferências individuais.

O público-alvo da *startup* é composto, predominantemente, por mulheres que residem sozinhas, bem como por indivíduos que se identificam com a causa e necessitam dos serviços ofertados. Nesse contexto, a atuação da Diosa contribui para a promoção de transformações sociais, ao incentivar a inserção de mulheres em um setor historicamente masculinizado.

Por fim, as características e critérios que definem negócios de impacto, conforme proposto pela Pipe Social (2019), quando comparados às práticas adotadas pela *startup* Diosa, são apresentados no Quadro 4.

Quadro 4 - Características que definem negócios de impacto social

Ordem dos critérios	Características da <i>Startup</i> Diosa
Critério 1º - Resolução de um problema social e/ou ambiental.	Reduzir a desigualdade de gênero, transformando o mercado de prestação de serviços na área de consertos e reformas residenciais/prediais e transmitindo segurança aos seus clientes.
Critério 2º - Solução de impacto é atividade principal do negócio.	Inserção de mulheres no mercado da área da construção civil, conexão das mesmas com clientes, cursos de qualificação profissional.

Ordem dos critérios	Características da <i>Startup</i> Diosa
Critério 3º - Compromisso com o monitoramento gerado impacto gerado.	A cada contratação a Diosa realiza pesquisas de satisfação com o cliente, possibilitando acompanhar o desenvolvimento profissional de cada uma e também monitorar sua evolução no número de serviços prestados pela rede consequentemente acompanhando os valores recebidos mensalmente por elas.
Critério 4º - Trabalha operando pela lógica do mercado.	A Diosa recebe um percentual sobre o valor de serviço da prestadora que foram contratados através da rede.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados da pesquisa (2021).

Com base no Quadro 4, verifica-se que a *startup* Diosa atende aos quatro requisitos essenciais para sua caracterização como um negócio de impacto social. Em consonância com o relato de sua diretoria financeira, empresas dessa natureza não se limitam à realização de ações sociais pontuais, mas estruturam integralmente seu modelo de negócio a partir da geração de impacto.

Nesse sentido, conforme Szegedi, Fülöp e Bereczk *apud* Miguel Júnior (2019), as *startups* sociais incorporam a responsabilidade social em sua estratégia organizacional, sendo concebidas com uma missão social e fundamentadas em processos de inovação social. Para que tal inovação seja caracterizada, faz-se necessário que ela promova valor social, seja por meio do desenvolvimento de novos produtos e serviços, da otimização de processos ou da inserção em novos segmentos de mercado.

De acordo com Limeira (2018), o propósito social constitui o principal direcionador dos negócios de impacto, orientando a criação de soluções inovadoras voltadas à superação dos desafios enfrentados pelo público-alvo. Em consonância com os dados obtidos na pesquisa, identificou-se que os *stakeholders* primários da Diosa são as mulheres

atuantes na construção civil, enquanto os *stakeholders* secundários incluem clientes e parceiros institucionais responsáveis por viabilizar ações de capacitação. Ademais, a rede oferece incentivos às suas prestadoras de serviços, tais como capacitação técnica, rede de apoio, educação social, suporte jurídico e visibilidade no mercado.

IMPORTÂNCIA DA STARTUP DIOSA PARA SEUS STAKEHOLDERS

Segundo informações fornecidas pela diretoria financeira da *startup*, aproximadamente 80% das estratégias, decisões e ações organizacionais estão voltadas ao impacto gerado nas condições de trabalho das profissionais, enquanto os demais 20% concentram-se nas demandas dos clientes.

Assim, a capacitação e a inserção das mulheres no mercado de trabalho configuram-se como objetivos centrais da organização. Para tanto, a Diosa desenvolve ações relacionadas à formação técnica, intermediação de serviços, apoio jurídico, estratégias de marketing, captação de clientes e acompanhamento pós-venda. Paralelamente, incentiva o desenvolvimento pessoal e profissional de suas colaboradoras, promovendo o empoderamento financeiro e a educação social voltada às questões de gênero e mercado.

Corroborando tais achados, Dias (2019) destaca que a Diosa investe na capacitação técnica, no apoio psicológico e na promoção de discussões relacionadas ao feminismo entre as mulheres participantes da rede. Para viabilizar tais iniciativas, a *startup* estabelece parcerias com instituições de ensino e empresas privadas, como IMED, Amanco, Tigre, Coral, Renner, Bosch e Santa Luzia, entre outras. Tais parcerias

contribuem para a qualificação das profissionais, ampliação da rede de contatos e redução dos custos operacionais relacionados à capacitação.

Adicionalmente, relatos de prestadoras de serviços evidenciam a relevância da rede em suas trajetórias profissionais e pessoais, destacando aspectos como valorização do trabalho, apoio institucional e desenvolvimento de competências. Esses depoimentos reforçam os achados de Dias (2019), ao indicar que iniciativas como a Diosa, em conjunto com organizações da sociedade civil, contribuem para o empoderamento de mulheres em situação de vulnerabilidade por meio da qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

LIMITAÇÕES ENFRENTADAS PELA STARTUP DIOSA

As limitações enfrentadas pela Diosa, identificadas por meio de entrevistas e análise documental, refletem desafios recorrentes no contexto das *startups* sociais no Brasil, conforme apontado por Genú (2018), Miguel Júnior (2019) e Sousa (2019). Entre os principais desafios, destaca-se a gestão de pessoas, frequentemente negligenciada em função da dinamicidade desses empreendimentos. Conforme Tozetto *apud* Sousa (2019), limitações como ausência de políticas estruturadas de recursos humanos, fragilidade na cultura organizacional, inexistência de métricas de desempenho e processos inadequados de recrutamento e seleção são recorrentes nesse contexto.

Adicionalmente, conforme Mylius *apud* Nascimento (2017), nas fases iniciais das *startups*, a gestão de pessoas tende a ser conduzida pelos próprios sócios, priorizando-se aspectos operacionais e financeiros. Tal cenário pode comprometer a adoção de práticas especializadas de recursos humanos, impactando processos de recrutamento, seleção e capacitação.

No caso específico da Diosa, identificaram-se as seguintes limitações: (i) dificuldade de recrutamento de mulheres qualificadas na área da construção civil, devido à baixa oferta no mercado; (ii) desafios na mensuração quantitativa do impacto social gerado; (iii) restrições na ampliação da oferta de serviços em função da escassez de mão de obra qualificada; e (iv) limitação de acesso a investimentos externos, necessários para expansão e aprimoramento dos processos organizacionais.

Tais desafios evidenciam a complexidade do modelo de atuação da *startup*, que, além de intermediar serviços, assume o papel de qualificação e inserção das profissionais no mercado de trabalho. Conforme Dias (2019), essa realidade pode limitar a capacidade de atendimento da empresa, mesmo em um contexto de demanda crescente.

Ademais, a dificuldade de equilibrar missão social e sustentabilidade financeira, conforme discutido por Silva *et al.* (2019), evidencia a necessidade de captação de investimentos externos. Esse desafio foi intensificado pelo contexto da pandemia de COVID-19, que impactou negativamente a demanda por serviços e aumentou a incerteza entre investidores.

Nesse cenário, a Diosa passou por um processo de reestruturação organizacional, reduzindo sua equipe e concentrando suas atividades em serviços de maior rentabilidade, além de manter ações de capacitação em parceria com instituições. Tal contexto evidencia a necessidade de adaptação estratégica diante de restrições financeiras e operacionais.

Conforme Miguel Júnior (2019), entre os principais desafios enfrentados por *startups* destacam-se a sustentabilidade financeira, a atração de investimentos, a consolidação de equipes qualificadas e a validação do modelo de negócio. De forma complementar, Genú (2018)

aponta dificuldades relacionadas à gestão, inovação, mensuração de impacto, alinhamento estratégico e apoio governamental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que a startup Diosa – Mão de Obra Feminina desempenha um papel relevante no contexto social de Porto Alegre e região metropolitana, ao promover ações voltadas à redução das desigualdades de gênero. Destacam-se, nesse sentido, iniciativas de capacitação técnica e inserção de mulheres no mercado de trabalho da construção civil, historicamente marcado pela predominância masculina.

Adicionalmente, o estudo permitiu caracterizar a Diosa como um negócio de impacto social, em conformidade com os critérios estabelecidos pela Pipe Social (2019), evidenciando sua atuação na resolução de problemas sociais, centralidade da missão de impacto, compromisso com a mensuração de resultados e adoção de lógica de mercado.

Verificou-se, ainda, a relevância da *startup* para seus *stakeholders*, especialmente no que se refere à promoção de capacitação técnica, desenvolvimento pessoal e profissional, apoio jurídico, visibilidade e empoderamento financeiro das mulheres participantes da rede. Por outro lado, o estudo também evidenciou limitações significativas, tais como a dificuldade de mensuração do impacto social, a escassez de mão de obra qualificada e a limitação de investimentos externos, fatores que restringem a expansão e sustentabilidade do negócio.

Por fim, a pesquisa permitiu responder ao problema proposto, ao identificar as principais ações e atividades de impacto social desenvolvidas pela *startup* Diosa, destacando sua contribuição para a

promoção da equidade de gênero, por meio da capacitação, inserção profissional, educação social e fortalecimento de redes de apoio.

REFERÊNCIAS

ABSTARTUPS. **O que é uma startup? Tudo o que você precisa saber**. 2017. Disponível em: <https://abstartups.com.br/o-que-e-uma-startup/>. Acesso em: 18 out. 2021.

AVENI, Alessandro. **Empreendedorismo contemporâneo**: teorias e tipologias. São Paulo: Atlas, 2014.

BAGGIO, Adelar Francisco; BAGGIO, Daniel Knebel. Empreendedorismo: Conceitos e definições. **Revista de empreendedorismo, inovação e tecnologia**, Passo Fundo, p. 25-38, 2015.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2006.

BARKI, Edgard. Negócios com impacto social. **Revista de Administração de Empresas**, v. 54, n. 5, p. 594, 2014.

BARKI, Edgard. Negócios de impacto: tendência ou modismo? **GV executivo**, v. 14, n. 1, p. 14-17, 2015.

BRASIL. Casa Civil. Lei complementar nº 167, de 24 de abril de 2019. Dispõe sobre a Empresa Simples de Crédito (ESC) e altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro), a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Lei do Simples Nacional), para regulamentar a ESC e instituir o Inova Simples. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 24 de abr. de 2019. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-complementar-n%C2%BA-167-de-24-de-abril-de-2019-85051233>. Acesso em: 18 out. 2021.

BRASIL. Secretaria Geral. Decreto Nº 9.977, de 19 de agosto de 2019. Dispõe sobre a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto e o Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 19 de ago. 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9977.htm. Acesso em: 18 out. 2021.

CAETANO, Rodrigo; PARO, Pedro. **Empreendedorismo Consciente: Como melhorar o mundo e ganhar dinheiro**. Rio de Janeiro: Altas Book, 2020.

CAMINHA, Lucas; COELHO, Gustavo, Flausino. **Captação de recursos por startups**. São Paulo: Almedina, 2020.

DIAS, Mariana Weber. **As mulheres dão conta do recado**: empoderamento das mulheres através da construção civil. 2019. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Porto Alegre, 2019.

DORNELAS, José Carlos Assis. **Introdução ao Empreendedorismo: Desenvolvendo habilidades para fazer acontecer**. São Paulo: Empreende, 2018.

DORNELAS, José. **Empreendedorismo, transformando ideias em negócios**. 8. ed. São Paulo: Empreende, 2021.

DUARTE, Tatiane Lopes; MADRUGA, Lúcia Rejane da Rosa. Empreendedorismo social e economia criativa: o caso do projeto NEOJIBA. **Desenvolve Revista de Gestão do Unilasalle**, v. 7, n. 1, p. 85-101, 2018.

FARIAS FILHO, Milton Cordeiro; ARRUDA FILHO, Emilio José Monteiro. **Planejamento da pesquisa científica**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

FREIRE, João Mateus Silva Pinheiro; SOUSA, Vanessa de Lima Marques Santiago. Inclusão social através das *startups* e sua regulamentação no direito brasileiro. **Revista Controle-Doutrina e Artigos**, v. 18, n. 2, p. 384-405, 2020.

GAIOTTO, Sergio Augusto Vallim. Empreendedorismo Social: um estudo bibliométrico sobre a produção nacional e internacional. **REGPE - Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas**, v. 5, n. 2, p. 101-123, 2016.

GENÚ, Jéssica Moliterno. É difícil ser uma *startup* social? a visão dos empreendedores sociais. 2018. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Ciências Administrativas Programa de Pós-Graduação em Administração, Recife, 2018.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LE MOS, Letícia Weber *et al.* **A Relevância da Informação Contábil para Startups de Impacto Social**. 2020. Disponível em: https://anpcont.org.br/pdf/2020_CFF67.pdf. Acesso em: jun. 2021.

LIMEIRA, Tania Maria Vidigal. **Negócios de impacto social**. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

LONGEN, João Victor de Pauli *et al.* Viabilidade de uma Startup baseada em Economia Colaborativa. **Revista Gestão & Conexões**, v. 8, n. 1, p. 24-42, 2019.

MIGUEL JÚNIOR, Patrícia Juliana. **A responsabilidade social na estratégia das empresas: o caso das startups** sociais. 2019. Tese (Doutorado) - Instituto de Contabilidade e Administração de Lisboa, Lisboa, 2019.

NASCIMENTO, Nathália Rocha do. **Gestão Nas Startups: Um Jeito Diferente De Lidar Com Pessoas**. Curitiba, 2017. Disponível em: <https://www.acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/55720/R%20-%20E%20-%20NATHALIA%20ROCHA%20DO%20NASCIMENTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 28 maio 2021.

PIPE SOCIAL. **O que são negócios de impacto: características que definem empreendimento como negócios de impacto**. São Paulo: ICE, 2019.

SALIM, Cesar, Simões; SILVA, Nelson, Caldas. **Introdução ao Empreendedorismo**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2009.

SEBRAE. **Mudar o mundo é a alma do negócio**. 2019. Disponível em: <http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/mudar-o-mundo-e-a-alma-do-negocio,5058d1159cbfe610VgnVCM-1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 14 jun. 2021.

SEBRAE. **A recuperação da economia passa pelo incentivo aos pequenos negócios**. 2020. Disponível em: <http://www.agencia-sebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/a-recuperacao-da-economia-passa-pelo-incentivo-aos-pequenos-negocios,38f982b3df9f4710VgnVCM-1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 14 jun. 2021.

SILVA, Ricardo da Silva e. *et al.* **Empreendedorismo social**. Porto Alegre: Grupo A, 2019.

SILVEIRA, Thayane Santos; PASSOS, Dante Flávio Oliveira; MARTINS, Igor. Empreendedorismo X *Startup*. **REMIPE: Revista de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo da Fatec**. Osasco, v. 3, n. 2, p. 304-322, 2017.

SOUSA, João Paulo Nascimento Evangelista de. **Práticas organizacionais de gestão de pessoas em startups situadas no Distrito Federal**. 2019, Monografia (graduação) - Universidade de Brasília, Faculdade de Economia Administração e Contabilidade, Departamento de Administração, Curso de Graduação em Administração, Brasília, 2019.

STAKE, Robert E. **Pesquisa qualitativa: estudando como as coisas funcionam**. Porto Alegre: Penso, 2011.

STARTUP DIOSA. **Perfil no Instagram**. Comunidade voltada à promoção da mão de obra feminina na área de consertos e reformas, com divulgação de serviços, capacitações e impacto social. Disponível em: <https://www.instagram.com/diosacomunidade/>. Acesso em: 28 mar. 2026.

VELHO, Adriana Galli; GIACOMELLI, Giancarlo. **Empreendedorismo**. 3. ed. Porto Alegre: SAGAH, 2017.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. Porto Alegre: Bookman, 2005.